

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**  
**FACULTAD DE DERECHO**



**TESIS DOCTORAL**

**Las medidas de seguridad : (trabajo de derecho comparado  
sobre las medidas de seguridad en la legislación española y en  
la República de Venezuela)**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR  
PRESENTADA POR

**José Eleazar Méndez Herrera**

**Madrid, 2015**

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE DERECHO PENAL

TE

493

"LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD"

(Trabajo de Derecho Comparado sobre Las Medidas  
de Seguridad en la Legislación Española y en  
la de la República de Venezuela)

JOSE ELEAZAR MENDEZ HERRERA  
Trabajo realizado bajo la direc-  
ción del Dr. José Antón Oneca, Ca-  
tedrático de la Universidad Com-  
plutense, para optar al Título de  
Doctor.

Madrid, 1.975.

- A mi Padre
- A mi Esposa
- A mis Hijos, muy cariñosamente.

Muy sinceramente testimonio mi más expresivo agradecimiento:

- Al Eminente Catedrático Dr. Don José Anton Oneca, quien primero, con sus clases magistrales incentivó la idea de incursionar en este polémico tema y posteriormente, se dignó aceptar la dirección del mismo.

- Al Profesor Don Francisco Bueno Arús, cuya oportuna colaboración contribuyó en mucho a la realización de este modesto trabajo.

- A La Guardia Nacional Venezolana y a La Embajada de Venezuela en España, las cuales con su valioso apoyo material y moral contribuyeron amplia y generosamente al logro de mis aspiraciones.

- Al Departamento de Derecho Penal de esta Honorable Universidad, por sus orientaciones y facilidades para la consulta de su rica bibliografía.

## A B R E V I A T U R A S

A.D.P.	Anuario de Derecho Penal Español
A.E.J.	Anuario de la Escuela Judicial
Art.	Artículo
B.O.E.	Boletín Oficial del Estado
Cap.	Capítulo
Cit.	Citada
C.N.	Constitución Nacional
C.P.E.	Código Penal Español
C.P.V.	Código Penal Venezolano
C.T.P.J.	Cuerpo Técnico de la Policía Judicial
E.M.	Estatuto de Menores
F.T.S.	Fiscalía del Tribunal Supremo
I.C.J.	Instituto de Codificación y Jurisprudencia
L.P.R.S.	Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social
L.T.T.M.	Ley de Tribunales Tutelares de Menores
L.U.Z.	La Universidad del Zulia
L.V.M.E.	Ley de Vagos y Maleantes Española
L.V.M.V.	Ley sobre Vagos y Maleantes Venezolana
Ob.	Obra
R.E.P.	Revista de Estudios Penitenciarios

## I N D I C E

	<u>Página</u>
Dedicatoria	I
Agradecimiento	II
Abreviaturas	III

## INTRODUCCION

Planteamiento del Problema.

I. La moderna orientación de la Política

Criminal y las medidas de seguridad . 1

II. Problemática y Justificación de las  
medidas de seguridad.

1- Problemática 16

2- Justificación 23

## CAPITULO I

### Página

Presupuestos de las medidas de seguridad.	27
I- La Peligrosidad	
a- Contornos conceptuales	31
b- Elementos de la peligrosidad	34
II- El Estado Peligroso	
a- Contornos conceptuales	42
b- Evolución científica de las apreciaciones sobre el estado peligroso.	44
c- La personalidad del peligroso.	45

## CAPITULO II

De Las Medidas de Seguridad	
I- Orígen de las medidas de seguridad.	62
Principales Doctrinas.	
1.- Doctrina Dualista	66
2.- Doctrina Monista	80
3.- Sistemas dentro del dualismo	86

II- Contornos Conceptuales

1.- Concepto 94

2.- Semejanzas y Diferencias entre Pe-  
nas y Medidas de Seguridad. 97

III- Clasificación de las Medidas de Segu-  
ridad. 100

CAPITULO III

De las Medidas de Seguridad en España. 112

1- Las Medidas de Seguridad en los Códigos  
Penales Españoles. 113

2- Ley de Vagos y Maleantes de 1.933. 122

a- Reglamento del 3 de mayo de 1.935. 167

b- Principales objeciones hechas a La  
Ley de Vagos y Maleantes de 1.933 y  
a su Reglamento. 173

3- Ley de Peligrosidad y Rehabilitación So-  
cial de 4 de agosto de 1.970. 177

a- Reformas 232

b- Reglamento de La Ley de Peligrosidad y  
Rehabilitación Social 234



4- Ley de Tribunales Tutelares de Menores. Reglamento para su Ejecución y Estatuto de La Unión Nacional de Dichos Tribuna- les.	250
--	-----

CAPITULO IV

De Las Medidas de Seguridad en la Repúbli- ca de Venezuela.	262
1.- Las Medidas de Seguridad en el Código Penal Venezolano.	272
a. Las medidas de seguridad en algunos proyectos posteriores de códigos.	280
b. Las medidas de seguridad en el pro- yecto elaborado por el Instituto de Codificación y Jurisprudencia de la República.	283
2.- Ley sobre Vagos y Maleantes.	293
3.- Estatuto de Menores	322
CONCLUSIONES	330
BIBLIOGRAFIA	341
ANEXOS	353

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

### I.- LA MODERNA ORIENTACION DE LA POLITICA CRIMINAL Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

En la lucha que la sociedad ha venido sosteniendo contra el delito, se aprecia que hasta finales del pasado siglo, la pena se constituyó en instrumento fundamental de defensa social, aún cuando existieron medidas adicionales que trataron de complementarla. La razón de esta orientación estriba en el concepto que se tenía del delincuente, a quien se le considera como único y exclusivo responsable de sus actos delictuosos y en quien debe recaer la correspondiente pena como sanción que le impone el Estado, tutor y representante de la sociedad, y la cual ha de servir además de intimidación o de advertencia para sus semejantes.

La paternidad de la construcción y sistematización de toda una teoría del delito y de la pena fundamentada en la responsabilidad e imputabilidad del individuo como sujeto del delito se le atribuye a las llamadas Doctrinas Clásicas.

Frente a aquellos sujetos cuya conducta los hiciera aparecer como perturbadores de la paz social, el Estado adolecía de instrumentos legales de defensa; sólo es

a partir de las postrimerías del siglo XIX cuando cambia radicalmente la política de la lucha contra el crimen, cobrando especial relevancia las consideraciones en torno a la peligrosidad y al estado peligroso. Es la Escuela Positiva del Derecho Penal la que introduce en los sistemas penales los principios preventivos e individualizadores de una moderna defensa social basada en la peligrosidad criminal como situación individual del delincuente. El Sociólogo Enrico Ferri, en su tratado de "Sociología Criminal" (1) escribe que: "la escuela clásica no conoce al delincuente, que, sin embargo, es el término inicial y final a la vez de la función de defensa social contra la criminalidad; de la propia manera la medicina antigua no conocía más que tres asuntos dignos de sus estudios: la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento; ella olvidaba el término inicial, el enfermo. Fuera de ciertas circunstancias excepcionales muy aparentes y por esta razón catalogadas en los Códigos (minoría, sordomudez, locura evidente, embriaguez y arrebatos pasionales), ni las leyes ni los jueces se ocupan de la personalidad bio-psíquica y social del procesado, y, no obstante, en ella reside y actúa el determinismo natural del delito; allí es, por lo tanto, donde se encuentra el criterio que permite impedir su repetición por el mismo individuo y adaptar de nuevo éste

---

(1) Enrico Ferri. Sociología Criminal. Tomo II. Editorial Góngora. Madrid. Página 207.

a la vida social, si tal aspiración es posible.

Actualmente el individuo justiciable no es más que un maniquí viviente, sobre el cual el juez pega el número de un artículo del Código penal, preocupándose únicamente de una dosimetría penal que debería ser proporcionada a la falta moral, según se pretende haberla pesado en la persona del inculpado. Durante la ejecución de su pena llega a ser otro ató ma ta numerado, presentando así el contraste absurdo y desmoralizador de una persona que vive, respira y siente, perdida y sumergida en la masa anónima de una penitenciaría cualquiera.

De aquí el problema de lo que se llama la indiv idua lización -legislativa, judicial y administrativa- de la pena, que, en una reacción excesiva contra esta impersonalidad de la justicia penal actual, representa una idea irrealizable -en tanto que toda la orientación de la defensa social contra el delito no sea radicalmente cambiada, aun cuando señale cier ta me nte -como el tratamiento individual para el enfermo o lo co o r d i n a r i a r i o - el fin que debe uno esforzarse en alcanzar, gra cia s a la clasificación antropológica de los diversos tipos de delincuentes."

Actualmente con un criterio amplio, se concede enor me importancia a la prevención de los delitos y por eso, hay

autores que afirman que ésta constituye el fin primario, esencial y general de la pena.

Este criterio es sustentado por criminólogos y pen<sup>u</sup>listas que ven en la prevención la primordial, si no la prin<sup>u</sup>cipal forma de lucha contra el crimen. De ahí su enorme tras<sup>u</sup>cendencia; de ahí el señaladísimo papel que hoy día se le asigna en el campo criminológico y también en el campo penal.

Es criterio generalmente admitido que existe en las sociedades humanas una tendencia general hacia el delito; y en este sentido decía Mezger que "la base criminal es un fenómeno común a todas las personas". Esta tesis ha hecho sur<sup>u</sup>gir la denominada prevención general, que como su nombre lo indica, tiende a combatir en los grupos humanos aquella gene<sup>u</sup>ral, inmanente inclinación al delito.

En cambio, la prevención especial, actúa sobre el individuo aisladamente considerado. Tiende a evitar que el delincuente, en el futuro, vuelva a cometer nuevos hechos de<sup>u</sup>lictuosos y a convertirle en un ser útil para la sociedad , mediante la intimidación y mejor por medio de su corrección.

Las modernas corrientes criminológicas estiman que la pena no realiza cabalmente el fin de prevención del delito porque la tendencia actual de la política criminal sostie<sup>u</sup>e

ne el criterio de que el concepto de pena-castigo, ha sido superado y hoy se dice que a los delincuentes debe serles a plicado un especial régimen que tenga en cuenta sus caracteres biológicos, psíquicos y sociales.

Esta tendencia ha surgido por virtud del fracaso - de la pena como medio de combatir la delincuencia. La pena ha fracasado, en cierto modo, porque élla ataca el delito en sus efectos y no en sus causas.

Beccaria (1) afirma:"es mejor prevenir los delitos que punirlos; este es el fin principal de toda buena legislación, arte de conducir a los hombres al máximo de felicidad, o al mínimo de infelicidad posible, por hablar según todos los cálculos de los bienes y de los males de la vida. Pero los medios empleados hasta ahora son generalmente falsos y opuestos al fin propuesto. No es posible reducir la turbulenta actividad de los hombres a un orden geométrico, sin irrregularidad y confusión. Así como las constantes y simplicisimas leyes de la naturaleza no impiden que los planetas se perturben en sus movimientos, del mismo modo las leyes humanas no pueden impedir las perturbaciones y el desorden en las infinitas y muy opuestas atracciones del placer y del dolor. Y, sin embargo, esta es la quimera de los limitados hombres, cuando tienen el poder en la mano. Prohibir una mul

---

(1) Cesare Beccaria - De los delitos y de las penas. Aguilar S.A. de Ediciones. Madrid 1.969. Página 180.

titud de acciones indiferentes no es prevenir los delitos que de ellas puedan nacer, sino crear otros nuevos: es definir caprichosamente la virtud y el vicio, que nos han sido predicados como eternos e inmutables. Y se pregunta el autor ¿ A qué seríamos reducidos si hubiese de prohibírse nos todo lo que puede inducirnos al delito? Sería preciso privar al hombre del uso de sus sentidos. Por cada motivo que impulsa a los hombres a cometer un verdadero delito, hay mil que nos impulsan a cometer aquellas acciones indiferentes - que son definidas como delitos por las malas legislaciones; y si la probabilidad de los delitos es proporcional al número de los motivos, ampliar la esfera de los delitos equivale a aumentar la probabilidad de que se cometan. La mayor parte de las leyes no son más que privilegios, es decir, un tributo de todos a la comodidad de unos pocos.

Por prevención de la delincuencia podemos entender el apartar oportunamente a los delincuentes en potencia antes de que puedan realizar actos delictuosos, utilizando medios de una política de conjunto que tienda a suprimir, o, por lo menos, reducir los factores delincuenciales, ya sean estos endógenos o exógenos.

La lucha contra el crimen ha de tomar muy en cuenta no sólo las causas generales sino también las causas orgáni

cas que integran la personalidad del delincuente señaladas por la Sociología y por la Antropología Criminales. Este punto de vista de la prevención constituye uno de los principales objetivos de las modernas corrientes criminológicas.

Dentro de este orden de ideas, Marc Ancel (1) ocupa sitio preponderante como abanderado de las corrientes penales contemporáneas, sosteniendo que "la consideración de la personalidad del delincuente constituye el primer rasgo de esta nueva actitud hacia el delincuente que continúa siendo lo esencial de la moderna defensa social. Por él, la Nueva Defensa Social se enlaza con el positivismo, pero al mismo tiempo se une a ese movimiento más amplio que ha consistido, como lo ha recordado justamente M. Paul Cornil, en la apertura de un ciclo de estudios consagrados precisamente al examen científico del delincuente, en la irrupción de la personalidad del criminal en el derecho penal. Poco a poco la consideración de esa personalidad se ha desligado del biologismo lombrosiano, no sólo porque tiende ahora a aprehender al hombre como individuo en la sociedad y a tomarlo en su medio con todas las influencias y todas las deformaciones que de él recibe, sino porque más allá del ser

---

(1) Marc Ancel. La Nueva Defensa Social.  
(Un movimiento de política criminal humanista). Página 130 y sig.



biológico e incluso del ser moral, pretende encontrar al ser humano considerado no solamente como objeto del estudio científico, sino como sujeto de derecho. Porque precisamente esta naturaleza de hombre, vuelta a colocar en su complexióso ciológica, supone para su estudio una referencia deliberada a valores morales, a los que la Defensa social va a atribuir una importancia creciente y sobre los cuales ella va a fundar, de modo cada vez más claro, su política de "resocialización".

Tratemos, pues, de precisar lo que significa, desde el punto de vista de la política criminal, esta consideración de la personalidad del delincuente. Para proceder esquemáticamente y resistir a la tentación de planteos demasiado fáciles, se nos excusará que nos entreguemos aquí a una enumeración simple y escueta. La consideración de la personalidad del delincuente en la nueva política criminal se traducirá manifiestamente en los elementos siguientes:

1º. El delincuente va a ser integrado en el proceso penal que hasta entonces era solamente el juzgamiento de un acto. Es inútil insistir sobre esta consecuencia bien conocida. Cuanto más será necesario tener cuidado de comprender que, en el nuevo proceso de Defensa social, no se trata o no se trata más, como quisieron hacerlo algunos positivistas de la

primera época, de pretender que el acto no será tomado en - consideración o no tendrá otra importancia que la de un signo contingente, y tal vez incluso despreciable, de una peligrosidad que, sola, sería sometida al examen del juez. El juez continuará juzgando el acto calificado de infracción , pero lo juzgará no solo siguiendo el criterio objetivo de la ley, sino en función de los elementos subjetivos de la personalidad de su autor.

2º. El juez penal deberá, por lo tanto, conocer al delincuente, pero ese conocimiento no será más el solo conocimiento judicial que se esforzaba por realizar en el siglo pasado, el primer movimiento de individualización de la pena. No se trata ya solamente de las circunstancias exteriores del acto, ni de los antecedentes legales del detenido . Se trata de su constitución biológica, de sus reacciones - psicológicas, de su situación social, y de tal modo aparece en el proceso de defensa social la necesidad del examen científico del delincuente. Es significativo que sucesivamente el XII Congreso Penal y Penitenciario de La Haya en 1.950 , el ciclo de estudios de las Naciones Unidas de Bruselas en 1.951, el Curso Internacional de Criminología de 1.952 se hayan preocupado por esa cuestión fundamental. No es éste el lugar de examinar esos trabajos, pero debe subrayarse su correlación y su coincidencia; no puede menos que admirarse -

la forma en que, casi necesariamente, todos los que se interesan por el desarrollo del derecho penal, de la justicia criminal y de la acción penitenciaria, hayan sido llevados a examinar el mismo problema, cualesquiera que sean, por lo demás, sus reacciones particulares y las diferencias que puedan separar esas diversas manifestaciones. También es significativo que al mismo tiempo la necesidad de la investigación social, que no se discute más en el derecho de la infancia delincuente, se haga sentir cada vez más fuertemente en el derecho de los mayores y que en Bélgica sobre todo se registre un movimiento de interés considerable, principalmente de origen judicial, en favor de la constitución del legajo de personalidad. Existe en todas estas manifestaciones un elemento común, la conciencia de una nueva necesidad de la justicia penal: la de conocer científicamente al delincuente. Esta necesidad es la que afirma precisamente la política criminal - de la nueva defensa social.

3º. No basta afirmar que es necesario el conocimiento científico del delincuente. Hace falta además, y es un problema técnico que no debería descuidar la moderna política criminal, preguntarse cómo ese examen científico será integrado en el proceso penal. Sobre este punto existen dificultades reales que no tenemos que examinar aquí detalladamente, pero que han contraído particularmente la atención del ciclo

européico de estudios de las Naciones Unidas de Bruselas, en 1.951. Se trata de saber, en efecto, qué delincuentes serán sometidos a la observación, cuándo tendrá lugar esa observación y por qué medios será realizada. Y esos problemas técnicos permiten una vez más a los neoclásicos o a los eclécticos, inquietos por las transformaciones de la justicia penal moderna, convertirse, en nombre de la práctica corriente o en nombre de un buen sentido aparente, en los defensores de la inmovilidad legislativa o judicial. No es posible, se afirma, examinar en la práctica a todos los delincuentes y, además, si todo autor de una infracción, aún mínima, ya fuese una simple contravención policial, pudiera ser sometido a la observación científica, ¿no sería la lógica someter, por adelantado y preventivamente, a esta operación a los delincuentes virtuales que constituyen en cierta medida, o que pueden constituir todos aquellos que todavía no han cometido una infracción? Así toda la población debería ser sometida a la observación científica. Bastará responder sobre ese punto que nunca es una forma válida de discutir una tesis llevarla sistemáticamente al absurdo. La Defensa social no pretende en forma alguna dar al psiquiatra o al psicoanalista un derecho incontrolado de investigación de todos los ciudadanos que se encuentran en libertad. Los que razonan así para minimizar la admisión generalizada de una

observación científica que presienten inevitable, olvidan a demás - y algunos lo olvidan voluntariamente - que la Nueva Defensa Social, ya lo hemos dicho, al consagrar los derechos del individuo y la regla nulla poena sine lege, continúa exigiendo la comisión de una infracción, es decir de un acto calificado como tal por la ley penal, para que un individuo pueda ser llevado ante la justicia criminal".

Don Luis Jimenez de Asúa (1) escribía: "en la lucha entablada entre los transgresores y los reintegrados de la norma; entre las dos grandes masas de hombres: los criminales y los honrados, no se ha adelantado un paso".

En realidad observamos que aunque son múltiples los esfuerzos, el fenómeno criminal aumenta universal y considerablemente. Exteriorizando la inquietud frente al fenómeno de la criminalidad los seguidores de la Escuela Positiva consideran preciso el recurrir a otro instrumento legal, que junto a la pena, ayude a combatir de manera inmediata y directa el crimen, como mal que afecta a toda la sociedad. Son muchos los humanistas y científicos insignes de los

---

(1) Luis Jimenez de Asúa - La Sentencia Indeterminada. Editorial Hijos de Reus, Madrid 1.913. Página 1.

últimos tiempos que en su afán por hacer conocer la palpitante necesidad de reconocer que el delincuente, antes que delincuente es un ser humano, un individuo, una persona y que como tal debe ser objeto de la más alta consideración, procuran conocer su personalidad y las causas que lo han llevado a delinquir o que lo coloquen en una situación de peligro de cometer futuros hechos que perturben o puedan perturbar la tranquilidad social. Es por ello, que muchos tratadistas y científicos se han interesado y continúan interesándose, con gran vocación altruista, desde los más diversos enfoques del saber humano, en pos del logro de una ex-plicación científica de las causas del delito.

El maestro español , brillante criminólogo Don Juan Del Rosal en la introducción de su obra "Política Criminal" (1) escribe que "no media más que un pequeño salto desde el año de 1.870 en que, por obra de Lombroso, se intenta dar una explicación científico-causal del delito, si bien solo sea desde la confusa y siempre descarnada orilla de lo empírico, hasta ramificaciones más agudas y más penetrantes con que se recarga nuestra ciencia en sus más diversas manifes-

---

(1) Juan Del Rosal - "Política Criminal" - Editorial Bosch. Barcelona 1.944. Página 15.

taciones de puro positivismo, ora sea naturalista, ora sea sociológico o jurídico y con cuyo lastre se agrieta la auténtica reciedumbre de la casa solariega de nuestro Derecho".

Son tareas de la prevención, y muy especialmente de la prevención especial, investigar, descubrir y luchar contra los factores exógenos y endógenos que generan los delitos combatiendo las causas que, de una u otra forma favorecen o pueden favorecer la desencadenación de la delincuencia, sentando los soportes necesarios con miras a evitar o por lo menos a disminuir sensiblemente los fenómenos de reincidencia y multireincidencia. Una eficiente estructuración y adecuada aplicación de un sistema de medidas de seguridad ayudará a la defensa de la sociedad contra el fenómeno de la delincuencia.

Estamos conscientes de que el tema de las medidas de seguridad, a pesar de haber sido amplia y reiteradamente considerado, continúa siendo objeto de las más acaloradas y contradictorias polémicas; pues los especialistas no han logrado todavía superar los principales problemas que ellas presentan, existiendo actualmente un verdadero movimiento encaminado a enjuiciar su naturaleza jurídica, su denominación, sus clases y sobre todo su justificación y sus efectos, por el riesgo que se corre al pretender pronosticar el comporta-

miento futuro de una persona señalándola como potencialmente delincuente.

Por otra parte, en la aplicación de los sistemas de medidas de seguridad existe riesgo inminente de lesionar el fundamental y universal principio de legalidad.

Sin embargo, nos ha animado el propósito de hacer - algunas consideraciones en torno a las medidas de seguridad, referidas especialmente a las Legislaciones española y venezolana, movidos por el hecho de que España ocupa primeros pues tos entre los países que se han abocado a su estudio y siste matización, casi desde el mismo momento en que estas hacen su aparición en las modernas legislaciones; y en atención , también, a la gran influencia que en Venezuela ha tenido la legislación española; con la esperanza de que las últimas in novaciones introducidas en su política criminal, materializa das en recientes instrumentos legales, que recogen todo un sistema de medidas de seguridad, podrán ser de gran utilidad para la política criminal venezolana.



## II.- PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.

### 1.- Problemática.

La forma peculiar en que han surgido las medidas de seguridad en diversas legislaciones y la escasa existencia de suficientes estudios doctrinales y sistemáticos en torno a las mismas, hacen que continúe teniendo vigencia la declaración del Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Penal que en la ciudad de Palermo tuvo lugar en el año de 1.933, y según la cual: "en lo relativo a las medidas en el Derecho Penal y Penitenciario, se encuentra aún en fase de elaboración". Rodríguez Mourullo afirma que: "con la implantación de las medidas de seguridad en el Derecho Penal Contemporáneo, necesitan un replantamiento el concepto y el significado de Ley penal, limitación especial de la Ley penal, sanción penal, irrectroactividad, extradición, condena, prescripción, sentencia firme, irrevocabilidad, jurisdicción penal, antecedentes penales, rehabilitación y otros más" (1). Hoy por hoy se le dá gran importancia a la personalidad del delincuente, como miembro de la

---

(1) Gonzalo Rodríguez Mourullo - "Cara y cruz de las sanciones penales - Cuadernos para el Diálogo No. XXVIII. Diciembre 1.971 - Página 46 y sigs.

comunidad social y la naturaleza de las medidas de seguridad es la de medidas jurídicas de defensa social, que se basan en las concepciones de peligrosidad y de estados peligrosos, independientemente de los principios tradicionales de culpabilidad e imputabilidad.

Marc Ancel (1) considera que los orígenes de las medidas de seguridad," pueden remontarse hasta Platón o hasta el Derecho Chino del siglo X antes de nuestra Era; y, más concretamente, a ciertas instituciones del Antiguo Derecho Europeo especialmente a las disposiciones de La Carolina - de 1.532, a la "cláusula de retención" del Derecho Español y a los "establecimientos de trabajo" instituídos por los Holandeses en Amsterdam en el siglo XVI; su origen directo está en los finales del siglo XIX, con la corriente positivista, surgida contra la insuficiencia del Derecho Penal Clásico, y la cual, como valioso aporte, dió lugar a la teoría de la peligrosidad del delincuente y al estableci - miento de nuevos medios destinados a la lucha contra esta situación de peligro."

---

(1) Marc Ancel: conferencia leída en el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos de París, el 17 de mayo de 1.956 y traducida al español por Diego Mosquete.- Anuario de Derecho Penal Español. Año 1.956. Página 444.

El momento trascendental en que el legislador se decide a otorgar consagración oficial a la medida de seguridad, coincide con el período comprendido dentro de las dos guerras mundiales; el primer congreso celebrado por la Asociación Internacional de Derecho Penal en Bruselas, en el año de 1.926, había planteado claramente la necesidad de ventilar si la medida de seguridad debía reemplazar a la pena o únicamente debía completarla; existía un consentimiento casi unánime en reconocer la coexistencia de la pena y de la medida de seguridad. Las reivindicaciones positivistas reclaman la supre-sión de las penas en provecho de un sistema nuevo de medidas de defensa social y de Escuela Técnico-Jurídica se esfuerza en organizar una participación entre la pena tradicional y la joven medida de seguridad que fué acogida por todos los códigos; la medida de seguridad viene a ser la sanción apli-cable al individuo no imputable para curarle de su peligrosidad, y, si la curación es improbable, para neutralizar sus efectos.

En la problemática de las penas y de las medidas de seguridad en Derecho Positivo han de distinguirse tres pun-tos de vista; pues, afirma el penalista francés, "que a veces la injusticia llega a confundirse con la ignorancia. El pri-mer punto de vista es el teórico o científico puro, como en sus orígenes pero les queda un camino largo por recorrer a

los teorisantes del derecho; también, durante mucho tiempo, le han dedicado su atención representantes de otras ciencias para el conocimiento del hombre, particularmente, los criminólogos. Desde este punto de vista, penas y medidas de seguridad se oponen simultáneamente y tienden normalmente a combatirse o a ignorarse. La pena es, para muchos criminalis - tas teorisantes el procedimiento por el cual se puede restablecer el orden jurídico perturbado por la infracción; la medida de seguridad por el contrario, tiene por objeto ex - clusivo la prevención social y reacciona contra una cierta peligrosidad del agente.

El segundo punto de vista es el de la práctica penitenciaría; no se quieren impedimentos y confusiones a base de distinciones teóricas y se prescinde de interrogar sobre el fundamento, la naturaleza o el funcionamiento de la sanción penal; basta con comprobar únicamente que la san - ción existe, que es preciso aplicarla, y que la misma se encuentra siempre con los mismos problemas y se busca el modo de aplicar las mismas soluciones. Se consigue entonces una fusión completa de la pena y de la medida de seguridad.

El tercer punto de vista está encuadrado en la política criminal conduciendo este en sentido contrario al punto anterior, ya que la pena y la medida de seguridad se

presentan con las diferencias consiguientes, en todo, o al menos con coloraciones altamente diferenciales; pero, por el contrario, el punto de vista de los teorisantes puros — lleva a estimar que esos medios de reacción social contra el fenómeno criminal son, por su misma naturaleza de función esencialmente opuesta. Una Política Criminal Racional, afirma el penalista, debe saber utilizar uno por uno los me di os relativos a la concurrencia o acumulación de penas y medidas de seguridad."

Al referirse al polémico tema de la problemática de las medidas de seguridad, un preclaro jurista español, el Dr. Manuel Cobo Del Rosal, actual Director del Instituto de Criminología de esta honorable Universidad escribe que "las medidas de seguridad constituyen uno de los más delicados - temas que tiene planteados en la actualidad la ciencia del Derecho Penal" (1). Otro insigne penalista español el Sacerdote Jesuíta Antonio Beristain (2) escribe que "desde el año 1.893 con el anteproyecto del código penal suizo del Profesor Carl Stoos, las llamadas medidas de seguridad, han venien

---

(1) Manuel Cobo Del Rosal - Atenuante de minoría de edad y sustitución de la pena por medida en el Art. 65 del Código Penal Español - Problemas actuales de las ciencias penales y de la Filosofía del Derecho en homenaje al profesor Luis Jiménez de Asúa - Buenos Aires - 1.960. Página 441

(2) Antonio Beristain, S.J.- Medidas penales en Derecho Con tempóraneo. (Teoría, Legislación positiva y realización práctica). Editorial Reus. Madrid 1.974. Página 27 y sigs.

do produciendo en el Derecho Penal transformaciones trascendentales, teniendo aún vigencia las afirmaciones de Dorado Montero, quien en 1.911 escribió: "el problema penal entero se reduce hoy, puede decirse, en el pensamiento de los doctos que lo estudian reflexivamente a esta disyuntiva: ¿pena o medida? todas las demás cuestiones que los mismos discuten vienen al cabo a subsumirse del anterior, y la manera como esta se resuelva dará la clave para encontrar solución a la restante".

Sostiene el Sacerdote Jesuíta, que "las medidas de seguridad inciden cada día con más frecuencia y profundidad en los derechos elementales del hombre y en los puntos claves del Derecho Penal. Sin embargo, la teoría y la legislación de las medidas de seguridad no alcanzan todavía un nivel científico suficiente presentando abundantes lagunas , problemas y contradicciones. Quienes llevan a cabo la aplicación práctica de las medidas carecen, a veces, de los medios indispensables y por ello producen resultados negativos. Los códigos más recientes amplían notablemente el campo de las medidas; algunos teóricos llegan hasta sostener - que las penas deben desaparecer y ser sustituidas por las medidas, lo cual es aceptado por muy pocas legislaciones penales. El Derecho Penal Contemporáneo aplica preferentemente las medidas a los delincuentes juveniles, a los delin -

cuentas profesionales, a los habituales, y a los semiimputables, aunque el problema económico incide poderosamente en la escasez de establecimientos especiales y de personal idóneo, lo cual suele frenar los deseos de jueces, magistrados y directivos de instituciones penitenciarias."

Podemos afirmar que las primeras medidas de seguridad fueron las adoptadas en relación con los menores y con los dementes y que su verdadero concepto moderno nace y se difunde cuando aparece la escuela positiva, pues las medidas de seguridad propiamente dichas son fruto de la doctrina y de las legislaciones penales, modernas y contemporáneas.

Hoy por hoy, podemos concluir afirmando que los principales problemas con los que tropieza el tan debatido tema de las medidas de seguridad pueden concretarse en dos grandes campos concretos: 1º) la flagrante lesión del principio de legalidad que constituye la aplicación de las medidas predelictuales la cual en forma abierta unas veces, y otras en forma simulada colide con los principios elementales del ordenamiento jurídico penal vigente y 2º) la carencia de suficientes establecimientos adecuados para que las medidas puedan cumplir sus objetivos de reeducación y resosalización, así como las insuficiencias de personal especializado para el cumplimiento de tan delicadas funciones.

## 2.- Justificación.

El tema de las medidas de seguridad ha sido y continúa siendo objeto de las más encarnizadas polémicas.

Los partidarios de las Escuelas Clásicas las ata - can duramente esgrimiendo el postulado de que la vigencia de la pena está por encima de cualquiera otra consideración. Para quienes siguen la doctrina de la Escuela Positiva, las medas de seguridad han venido a suplir lo que ellos califi- can como decaimiento e ineficacia de la pena.

No faltan quienes, con amplio conocimiento de éstas y con sabia discreción, adoptan una posición eclética, considerando y aceptando que estas ocupan un lugar importante junto a la pena.

La vida social se centra en dos términos fundamentales: desarrollo y defensa (1). Para el logro de estos dos objetivos es elemento indispensable El Derecho. El ordenamien- to jurídico organiza, clasifica, promueve y señala faculta - des y deberes; planifica, determina y defiende fijando fines y medios. La defensa de la sociedad se encomienda de modo específico a esa importante rama que es el Derecho Penal. El

---

(1) Francisco Bueno Arús - La peligrosidad social y la legislación española - Revista "Razón y Fé". No. 880. Marzo - 1.971. Madrid. Pág. 487.



fundamento de este derecho y su necesidad no escapan a la comprensión de ningún ciudadano normal, pero es más problemático que sea del dominio común la conciencia de que no solamente se protege a la sociedad imponiendo pena a los delincuentes sino también aplicando medidas de seguridad a los peligrosos sociales.

Antonio Beristain (1) al abordar el tema lo hace escribiendo que entre los autores partidarios de las teorías justificativas, sostienen unos que se hace necesario una justificación ético-moral permitiendo únicamente aquellas medidas que privan de sus derechos a quienes no pueden o no saben ejercerlos con libertad interior o a quienes esa privación de derechos resulte en conjunto provechosa; rechazando categóricamente todas las medidas que atenten contra la dignidad de la persona.

Otros seguidores de la Doctrina Positivista justifican las medidas sosteniendo que la pena resulta insuficiente para alcanzar las metas del Derecho Penal Contemporáneo. Sin embargo no dejan de reconocer que su aplicación, en determinados casos, puede producir grandes males pudiendo caerse en una excesiva politización del Derecho Penal.

---

(1) Antonio Beristain. S. J. - Obra citada. Pág. 92.

Este penalista, considerado como uno de los autores más preocupados por el tema en la época contemporánea, arriba a las conclusiones siguientes: "1ª) La justificación última de las medidas de seguridad es la necesidad del individuo y la necesidad de la sociedad. 2ª) La mera utilidad no justifica la imposición de medida alguna; quien aceptare el criterio de la mera utilidad violaría el patrimonio sagrado de los derechos individuales, convirtiendo al individuo, en mero instrumento del estado. 3ª) La diferenciación entre justicia y utilidad no debe exagerarse, pues no media escisión ni oposición entre el campo naturalístico de la peligrosidad y el normativo de los valores; no hay solución de continuidad entre la científica valoración naturalista de la peligrosidad y la valoración ética y normativa de la justicia social. 4ª) La dificultad principal respecto a la justificación de las medidas, más que en la formulación de principios teóricos, radica en la diversa interpretación y aplicación de estos principios. El problema básico para justificar rectamente en la práctica la imposición de las medidas de seguridad, consiste en determinar qué se entiende por necesidad, qué <sup>por</sup> utilidad y qué por dignidad humana y también en concretar o formular como impedir o reducir las negligencias y los abusos de la autoridad en el momento de dictar y de aplicar las medidas".

Desde el momento mismo en que las medidas de seguridad hacen su aparición en el Derecho Contemporáneo surgen las más diversas polémicas; polémicas éstas que en muchos de los casos resultan lógicas, si consideramos que el objeto de las medidas de seguridad es, nada menos, que la voluntad humana, la cual es inaccesible al intelecto humano, a no ser que se quiera correr el grave riesgo de caer en apreciaciones y predicciones futuristas falsas que, aunque estén preñadas de la más sana y humanitaria intención, no por eso dejarán de producir las más injustas consecuencias.

Ante la polémica suscitada entre los autores que, quizás alegremente aceptan las medidas de seguridad como un gran avance en la lucha contra el crimen y los que niegan rotundamente su eficacia o los que aceptan las medidas con algunas reservas, optamos por considerar que si bien es verdad que estas no han logrado conseguir, en grado suficiente, el fin propuesto, no se pueden negar que ayudan ampliamente a combatir el delito, abriéndose paso en muchas legislaciones contemporáneas que le merecen especial atención muy especialmente las medidas posdelictuales que son las medidas de seguridad propiamente dichas. Aunque su eficacia deja mucho que desear, su ubicación junto a la pena coopera en la batalla contra el delito.

## CAPITULO I

### PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Si atendemos al elemental principio de causalidad, encontraremos lógico que así como para la aplicación de la pena se requiere previamente la existencia de un hecho considerado como delito y de un autor responsable de ese acto punible, así, para la determinación y aplicación de medidas de seguridad propiamente dichas se requiere que exista una persona a quien, por encontrarse en circunstancias muy especiales, se le considere como posible sujeto de un futuro acto delictuoso; estas circunstancias especiales del sujeto no son otra cosa que la existencia de una especial personalidad debida a condiciones constitucionales, psíquicas, sociales o morales no transitorias, y que se conocen en la doctrina, unas veces, como peligrosidad social o como peligrosidad criminal o simplemente como peligrosidad y otras, como estado peligroso.

La admisión del estado peligroso y puesta en vigor de medidas de seguridad aplicables a los individuos en razón y en la medida de su peligrosidad individual, según Marc Ancel (1)"sería el significado propio del término de defen-

---

(1) Marc Ancel - Obra citada. Pag. 19

sa social; considerando este autor que las medidas de seguridad han cristalizado poco a poco en el derecho positivo en torno a esos dos polos de atracción que son los delincuentes habituales y los delincuentes anormales, el contenido del término defensa social hallaríase al par precisado y limitado por ambos órdenes de medidas. Así lo entendió por otra parte, la célebre ley belga del 9 de abril de 1.930, llamada ley de defensa social, y así lo entiende aun un autor tan lúcido como Pinatel, quien no duda, ya que se trata de un modo de tratamiento post-judicial, en anexar la defensa social a la ciencia penitenciaria.

Partiendo de esta idea del estado peligroso, estos autores tienden a atribuir a la palabra "defensa social" otro significado o más exactamente tal vez una coloración diversa. De Greef señala así que el término "temibilidad" expresa una idea útil y nueva: "en una Sociedad en la que se quiere prever antes que limitarse a pensar y proteger antes que vengar, ella instaura una actitud que expresa la voluntad de despojar a la justicia de un elemento indeseable de venganza, afirmando no intervenir sino en el límite de lo indispensable. Pero, siendo el criterio de la peligrosidad naturalmente distinto del de la responsabilidad moral, algunos se preguntan si el término de defensa social no encubre una teoría según la cual sólo se buscaría al delincuente en

razón de esa temibilidad por sí sola. El Procurador General Cornil hizo así a veces a la Defensa social el reproche de pretender considerar a todos los delincuentes como enfermos irresponsables, respecto a los cuales pretenderíase no tomar más que medidas puramente curativas. Así, mientras que unos en el ayer inmediato y en su más estrecho significado, reprochaban a la defensa social sacrificar el individuo al Estado y la libertad de la persona al rigor de la represión; mientras que, hoy todavía, algunos pretenden incluso no tomar en cuenta ante todo la defensa social sino la pretendida instauración de un sistema general y discrecional de medidas de seguridad ante delictum, otros, como se vé (y que alguna vez son los mismos), la acusan de sacrificar la represión, la intimidación colectiva y la protección de las gentes honradas a la toma en consideración de las enfermedades y necesidades del criminal. Esta reacción no es por otra parte nueva, pues en el Congreso de Grenoble en 1.912, el Procurador General Loubat se alzaba contra esas concepciones "nuevas" conducentes a lo que ya entonces se llamaba la "crisis de la represión".

Llegamos así a nuevos significados, o mejor a nuevos empleos del término "defensa social". Va a emplearse la expresión no sólo por la noción que ella comporta en sí, más o menos distintamente, de "protección de la Sociedad", sino

que va a imponérsele un dinamismo propio; y ella va a evocar así la idea de ciertas oposiciones a lo que es, o de ciertas posiciones en orden a lo que debería ser.

Para ciertos autores, en efecto, la defensa social situaríase resueltamente en una reacción contra el derecho - penal represivo. Gramatica emprendió valientemente lo que él mismo llamara la lucha contra la pena. Quisiera que ya no se hablase más no sólo de "derecho penal" y "pena", sino de "delincente" y "delito", ni tampoco de "peligrosidad". La defensa social sería la toma en consideración de una antisocialidad que sobrepasaría el estado peligroso de los positivistas en tanto que ella supone un ser consciente, capaz de aprovechar de la medida de protección tomada a su respecto; esta defensa social impondría al Estado el deber de suprimir la antisocialidad mediante una legislación y medidas extrapenales, a fin de que todos los miembros de la Sociedad puedan ser en adelante naturalmente "sociales". Los medios de defensa social serían así científicamente individualizados y aplicados a cada persona conforme a las exigencias de esa misma persona, que tendría derecho al tratamiento de su antisocialidad. La defensa social aproximaría de tal modo a la criminología, puesto que supondría el estudio previo de las causas del crimen y del comportamiento antisocial; pero su misión propia consistiría en establecer un sistema de remedios

escogidos para alcanzar la armonía social."

Para unos autores peligrosidad y estado peligroso son simplemente términos sinónimos; para otros, por el contrario se establecen grandes y específicas diferencias; nosotros nos inclinaremos por sostener que son acepciones diferentes considerando que la peligrosidad es causa de la criminogenesis y que el estado peligroso constituye el condicionamiento para la criminodinámica.

#### I.- La Peligrosidad.-

##### a) Contornos conceptuales.

1.- Peligro.- Peligro es la posibilidad o probabilidad de un daño material o moral más o menos inminente.

2.- Peligroso.- Peligroso es aquel individuo de quien parece posible o probable la realización de un daño.

3.- Peligroso social.- Peligroso social es aquel individuo de quien se teme con marcada probabilidad la comisión de actos delictuosos.

4.- Peligrosidad.- Para Garofalo peligrosidad es la perversidad constante y activa comprendida bajo el término "temibilita" .



- Crispigni considera la peligrosidad como "la capacidad de una persona para devenir probablemente autora de un delito: es la pericosolita."

- Olesa Muñido dice que "la peligrosidad social es "la situación de una persona adecuada para que realice con probabilidad actos que constituyen infracciones a la ley penal."

- Para Barbero peligrosidad es "el conjunto de condiciones objetivas y subjetivas por las que una persona probablemente llegará a ser autora de un delito, con libertad en unos casos, y, sin ella en otros."

- Sebastián Soler escribe que "peligrosidad es un concepto abstracto, erróneamente transportado al Derecho Penal y que en realidad sólo puede y debe apreciarse en los individuos que aparecen ante el juicio del criminal porque entonces han cometido una acción tipificada de la ley como delito."

- Enrico Ferri define la peligrosidad como "la potencia ofensiva en orden a la mayor probabilidad en la comisión de delito."

- Exner la considera como "un complejo de - orden interno o de reflejos internos de circunstancias ex-

teriores que se da en un momento sin que sea precisa la tendencia a su estabilización."

- Petrocelli dice que "la peligrosidad es un complejo de condiciones subjetivas bajo la acción de las cuales es probable que un individuo cometa un hecho socialmente dañoso o peligroso."

- El Dr. Rodríguez Devesa afirma que "la peligrosidad consiste en una elevada probabilidad de delin -quir en el futuro y añade que esta puede ser pasajera o permanente pero que ha de ser en cualquier caso, actual."

La peligrosidad, al igual que el estado peligroso ha sido objeto de múltiples polémicas y de las más divergentes opiniones por parte de numerosos autores e investigadores que han estudiado la materia desde diferentes horizon -tes. A la luz de las distintas opiniones sostenidas en torno al concepto de peligrosidad se observa que con uno u o -tro punto de vista general o particular, el pensamiento remite a la idea del delito, apareciendo sin embargo, en todo caso, la peligrosidad distinta de la culpabilidad; "la peligrosidad puede ser muy elevada, sostiene el catedrático, -siendo la gravedad del delito cometido muy pequeña; y viceversa puede ser prácticamente nula a pesar de haber cometi-

do el sujeto un delito muy grave"(1). También ha de distinguirse la peligrosidad de la imputabilidad, pudiendo darse su coexistencia en ciertos casos especiales. La existencia de los presupuestos de culpabilidad e imputabilidad son indispensables para la determinación de la pena, siendo no indispensables para la aplicación de las medidas de seguridad.

Consideramos, a nuestro entender que la peligrosidad es una especial situación del individuo, motivada por causas endógenas y exógenas, que lo convierten en un sujeto probable de futuros actos delictuosos.

b) Elementos de la peligrosidad.-

El desarrollo científico-jurídico-social de la teoría de la peligrosidad y de las medidas de seguridad corresponde a la última parte del siglo XIX; el fenómeno de la marcada y alarmante situación de multireincidencia hace que la pena, por sí sola no sea del todo eficaz ni suficiente.

El Sociólogo Enrique Ferri (2) escribe que es bueno descartar algunas objeciones que los criminalistas clásicos,

---

(1) José María Rodríguez Devesa - Derecho Penal - Parte general. Gráficas Carasa. Madrid 1.971. Página 774.

(2) Enrico Ferri - Ob. cit. Tomo II - Pag. 43.

aún los más recientes, y algunos eclécticos, no cesan de dirigir al principio de defensa y de preservación social considerado como razón absoluta de la función penal, sin mezcla alguna de otros principios por los cuales se pretendiera completar y regular esta función. Erróneamente se llama a tales principios "principios superiores" (de justicia reparadora o distributiva), porque es claro que, hablando humanamente, no existe nada "superior" a las necesidades de la vida humana, sea individual o social; y es ya tiempo de abandonar las distinciones trasnochadas entre lo útil, "arbitrario, se dice, vulgar y variable" y lo justo, "absoluto, noble, eterno"; puesto que ambos no son en el fondo más que una misma cosa. Lo "justo" no es más que lo útil respondiendo definitivamente a las condiciones naturales de la existencia humana en un lugar y tiempo determinados, distinto, por consiguiente, de la utilidad inmediata y transitoria, que no está conforme con estas mismas condiciones, que sólo merece aquellos bajos calificativos, y que nosotros, positivistas, no admitimos nunca como regla de vida.

He aquí estas objeciones.

I. El derecho de castigar no puede ser asimilado al de defensa, porque la defensa tiene en perspectiva un hecho futuro, y la pena un hecho realizado.

II. Esta razón de defensa o de preservación social, considerada como principio único del derecho de castigar, constituye un paso hacia atrás, si se la compara con la razón de tutela o defensa jurídica puesta en primera línea por la escuela italiana clásica contemporánea, sobre todo si se considera que la defensa social puede ligitimar cualquier exceso de poder de parte del Estado en detrimento de los derechos individuales, mientras que la defensa del derecho no admite esta posibilidad.

III. En todo caso no es la defensa social el fundamento y el alma de la justicia penal, sino solamente la de - fensa de la clase dominante."

"La situación de peligrosidad es una realidad que se fundamenta en principios filosóficos distintos a los del delito y la cual, con la evolución de la sociedad, se ha ido expresando en normas jurídicas (1) ; Esta expresión presenta la particularidad de que no incorpora en sí misma, por no ser ello posible, los elementos de antijuridicidad existentes en el concepto, sino que se remite a la realidad social; pues, cuando intenta una captación absorbente de sus principios, se convierte en una mera explicación opinable, sin valor norma-

---

(1) Juan Antonio Xiol Ríos - Elementos (personal y social) que integran la peligrosidad - Anuario de la Escuela Judicial. Madrid 1.971. Pag. 208 y sig.

tivo alguno. La consecuencia lógica de todo esto es la de que mientras el delito es una entidad formalmente antijurídica , contraria a la norma como vehículo expresivo de un precepto jurídico, la peligrosidad es una entidad materialmente antijurídica, contraria a un determinado orden de valores, pero carece de antijuridicidad formal o normativa en sentido estricto. Ese único tipo peligroso que los ordenamientos de defensa social contienen (implícita o explícitamente) no tiene valor como tipificación propiamente dicha, por ser en realidad un tipo en blanco abierto a la realidad social y a sus principios determinantes, siendo estos mismos los elementos que resplandecen en él.

La técnica jurídica, siempre impulsada por la legalidad, no se resigna a aquella apertura incondicional y acude a una serie de subtipificaciones en las que no pretende abarcarse ya la esencia de la peligrosidad y sus elementos integrantes, pero sí el complejo de condiciones que en la cambiante realidad social producen o motivan los estados peligrosos o los hechos que permiten inducir la existencia de la peligrosidad anormal y permanente que constituirá el soporte jurídico de una jurisdiccionalidad de privación o suspensión de derechos para el sujeto. La transcendencia de estas variedades o categorías radica no sólo en que implican un principio de autolimitación de la norma en la detección de situaciones de peli

grosidad, sino también en que a ellas debe adecuarse la clase de medidas de seguridad que se impondrán como medio más procedente de eliminar el estado peligroso. Puede afirmarse, dice, que el tratamiento de la peligrosidad es realizado por la ley con una jerarquización valorativa de hechos y circunstancias en torno de los elementos del estado peligroso que directamente no puede asimilar. Ello autoriza, por lo tanto, a considerar como elementos integrantes de la peligrosidad - tan solo aquellos que en la realidad social posibilitan el concepto y que la ley no transforma; elementos que, se darán siempre en torno al individuo en una actitud permanente y determinada respecto a la sociedad. Al recoger la Ley estos elementos integrantes hace una referencia implícita a los elementos valorativos de aquellos existentes en la realidad, es decir, aquellos que tienen virtualidad eficiente o predispositiva con respecto a la peligrosidad y cuya importancia criminológica adquiere aquí una transcendencia técnico-jurídica evidente al integrarse en el concepto por ser necesarios para la formación de un juicio de la peligrosidad independiente de que los elementos valorativos que explícitamente brinda la ley puedan constituir también cauce obligado para aquella valoración.

Entre los elementos valorativos que aporta la Ley - vinculativa y expresamente pueden citarse, según Olesa, los

índices y las determinantes. Los índices son manifestaciones de la persona que permiten inducir su situación y, por lo tan to, para ser considerados exigen un proceso inductivo; el ín dice es un hecho o manifestación que tiene su causa en el es tado peligroso. Las determinantes son complejos de conducta, manifestaciones de la persona, respecto a las cuales la Ley, al individualizarlas, realiza un juicio pronóstico de la antisocialidad y en los que, en ocasiones, potencialmente la forma legal incluye un elemento psicológico de reproche; la determinante no es el estado peligroso pero tiene virtualidad eficiente o predispositiva con respecto al mismo, por lo que no es mas que un elemento causal o conjunto de elementos causales que la Ley incorpora y describe. Su apreciación exi ge un juicio deductivo."

Deduce el autor, quien como vemos, maneja indistintamente los términos peligrosidad y estado peligroso, que "los elementos que integran el concepto jurídico de peligrosi dad social no son mas que los principios que constituyen y a bonan en la vida social el estado peligroso, valorado según exige su propia naturaleza, destacándose inmediatamente los elementos que la integran: el personal, en cuanto a la peligrosidad surge de una situación de caracter individual y se valora a través de una serie de características o aptitudes personales, y el social, en cuanto esta situación solo adquie



re significado en tanto se refiere a la sociedad, sujeto pasivo y activo al mismo tiempo, pues la peligrosidad se relaciona también causalmente con unos factores sociales. Iluminando estos conceptos y dándoles una potencialidad jurídica figura una idea dinámica de peligro o probabilidad de daño jurídico, que actúa subyacentemente a los elementos personal y social - de la peligrosidad, integrando, antes que un elemento más , la verdadera esencia del concepto, por cuanto lo que se diga de aquellos elementos sólo tendrá valor en tanto confluyan a la creación de una idea de peligro.

Ya para concluir afirma el autor, aclarando antes - el riesgo de equivocarse, que el elemento personal y el social, siempre esenciales, en cuanto integran el concepto jurídico - de peligrosidad, juegan distinto papel en la determinación o valoración de ésta según las distintas categorías o estados - peligrosos. Algunos de estos, se configuran en base a una preponderancia del elemento personal aprovechada por la ley para su detección judicial; son aquellos grados de peligrosidad cuya verdadera explicación radica en la personalidad anormal del individuo, determinada por la concurrencia de defectos de carácter somático, endocrino, constitucional, cerebral o psicológico. El elemento personal de la peligrosidad, concluye, podemos situarlo en una nota de anormalidad en la constitución del individuo, la cual, aparece a veces como un reflejo de fac

tores de carácter social que han influído biológicamente en él. Otras categorías de peligrosidad se apoyan fundamentalmente sobre el elemento social o al menos suponen una valoración específica de este; son aquellos en que se tiene en cuenta la situación familiar o ambiental del sujeto, su incomunicación, su anormal posición económica o moral.

Finaliza afirmando que ambos elementos (personal y social) aparecen en la realidad en tan íntima conexión que no es posible señalar trazos absolutamente definitorios, y que la importancia de los citados elementos radica en que a través de ellos debe polarizarse el juicio de peligrosidad, como juicio valorativo de naturaleza jurídica. "

Siguiendo el pensamiento de Olesa Muñido (1) quien escribe que "la capacidad para delinquir es aptitud causal lo cual es lo mismo que posibilidad", encontramos, que aunque parezca un simple o un refinado juego de palabras esta es una de las diferencias fundamentales entre peligrosidad y estado peligroso; entendiendo por posibilidad la aptitud para obrar; y por probabilidad la facilidad de que acontezca algo.

---

(1) Francisco Felipe Olesa Muñido - Las Medidas de Seguridad. Editorial Bosch. Barcelona 1.951. Página 193.

## II.- El Estado Peligroso.-

### a) Contornos conceptuales.

- Jimenez de Asúa aclara que "dar un concepto cerrado del estado peligroso es muy difícil dada la diversidad de pareceres que existen entre los escritores , y por la vaguedad en que se diluye la idea dada por Garofalo, a la que considera como la más clara y acertada. Y lo define diciendo que el estado peligroso consiste en la probabilidad - de que un individuo cometerá o volverá a cometer un delito , y que este no es otra cosa que la relevante probabilidad de que un hombre ejecute actos antisociales que las leyes han catalogado como delitos."

- Loudel dice que "el sujeto en estado peligroso es aquel que por sus condiciones psíquicas que constituyen o no entidades nosológicas o simples desequilibrios permanentes o transitorios por hábitos adquiridos o impuestos - en la vida colectiva o por otras causas, simples o combinadas se encuentra en la posibilidad transitoria o permanente de reacciones antisociales inmediatas."

- Houchon, en el II Congreso de Criminología de Rennes - 1.971, define el estado peligroso como "un fenómeno psicosocial caracterizado por índices que revelan con gran probabilidad que un individuo cometerá una infracción contra

las personas o contra las cosas".

- Anselmo Von Feuerbach considera el estado peligroso como "aquella calidad de la persona que hace presumir fundamentalmente que violará en efecto el Derecho."

- Olesa Muñido apunta que "en el estado peligroso existe no una posibilidad psíquica sino relevante - constituida por la probabilidad de delito o de hecho de delito aplicada a ciertos individuos o categorías de individuos."

- La Corte de Apelación de Milán en sentencia del 24 de noviembre de 1931 definió al peligroso como "un individuo socialmente peligroso, moralmente malvado, perteneciente a la numerosa categoría de los bajos fondos sociales de donde surgen los candidatos al delito, los predestinados a la cárcel, no los enfermos mentales."

- Van Hamel ha llegado a afirmar que "es desesperante que después de tantos años que existe la Unión , aún no tengamos un concepto claro sobre este asunto."

- Podemos decir que estado peligroso es "la situación crítica en que se encuentra un individuo, potencialmente delincuente, que está a punto de dar el paso al delito."

b) Evolución científica de las apreciaciones sobre el estado peligroso.

Las investigaciones científicas en torno al estado peligroso pueden dividirse en cuatro etapas según Sabater - Tomás (1) quien escribe: en la primera etapa se confunde el estado peligroso con los sujetos multirreincidentes e incorregibles, atribuyéndose la criminalidad y peligrosidad de los mismos a "una influencia moral permanente que actúa sobre su voluntad". Thiry, refiriéndose a ellos, los denomina "sujetos peligrosos por estado". En una segunda etapa se incluyen en el concepto una serie de estados antisociales que estadísticamente son los más numerosos y que implican una cierta filosofía y un sistema de vida más o menos organizado: se trata de los vagos, alcohólicos, prostitutas, toxicómanos, etc. Estos diversos estados exigen la unión de los juristas y los criminólogos, para el establecimiento de medidas de lucha contra su modo de vida. La tercera etapa surge cuando el jurista y el legislador advierten la peligrosidad de ciertos enfermos mentales, para los que ni el asilo

---

(1) Antonio Sabater Tomás - Peligrosidad Social y Delincuencia - Ediciones Nauta, S.A. Página 33.

ni la prisión constituyen establecimientos adecuados. En la última etapa, que es la actual, el estado peligroso se refiere a aquellos individuos peligrosos a causa de una disposición endógena, pero que no manifiestan su peligrosidad si no en situaciones determinadas (teorías de De Greef y Kinberg), y que para la declaración de su estado es obligado a abordar el problema de su diagnóstico y pronóstico.

c) La personalidad del peligroso.

La apreciación de una determinada peligrosidad exige el conocimiento más amplio posible de la personalidad biopsicopatológica del sujeto y de su probabilidad de delin - quir. Esta exigencia requiere un estudio interdisciplinar - de las condiciones biológicas, psíquicas y patológicas del presunto peligroso. Esta apreciación ha de ir más allá del campo jurídico para recurrir a la colaboración del aporte i nestimable que han de proporcionar las ciencias criminológi - cas en sus diversas ramas, consideradas como auxiliares del Derecho Penal, y de las que forzosamente ha de valerse el juez para una mejor administración de justicia, mediante la comprobación de la concurrencia de los elementos de la peli grosidad, sus factores y posibles causas; todo lo cual le a yudara valiosamente en la apreciación de la peligrosidad y en la calificación del estado peligroso del sujeto, para a-

cordar las medidas de seguridad que considere procedente.

La ciencia que se sirve de todas las ciencias para el conocimiento del delito, es la criminología. La personalidad del autor, al tiempo del acto, es siempre una persona con su modo de reaccionar presente escribe Ernesto Seelig - (1); "el modo de reaccionar está a su vez condicionado por la índole relativamente permanente del individuo, lo cual constituye su personalidad; la personalidad de cada individuo determina las posibilidades de su modo de reaccionar y de su comportamiento. Estas posibilidades (capacidades, propiedades, tendencias) son conocidas como disposiciones del hombre; si estas disposiciones son de tal clase que inclinan a la comisión de otros delitos en el futuro, entonces el sujeto es peligroso para la comunidad política.

La personalidad al tiempo del acto, junto a las disposiciones, es el resultado de un complicado proceso. En el momento del nacimiento el hombre posee las llamadas disposiciones congénitas que no son iguales a las disposiciones del adulto, sino que tienen que desarrollarse para convertirse en ellas. Esto se produce de un lado, conforme a las posibi-

---

(1) Ernesto Seelig - Tratado de Criminología - Traducción del Dr. José María Rodríguez Devesa - Página 9 y sig.

lidades de evolución que ya están precedentemente dadas en las disposiciones congénitas mismas (endogenamente) y, de otra parte, por el influjo del mundo circundante que existe siempre durante la vida del sujeto (exogenamente).

Las disposiciones congénitas corresponden a lo especial a la tara hereditaria (disposiciones hereditarias) - transmitidas al individuo por la herencia, aunque pueden modificarse por los influjos eventuales del mundo circundante sobre las células seminales paternas o maternas o sobre huevos fecundados; estos influjos son casi siempre nocivos y se llaman por ellos "traumas germinales" o "trauma del fe - to", según el caso.

A modo de conclusión sostiene el tratadista, que - el delincuente como especie del género humano (tal como lo considero Lombroso ) no existe en el sentido de las ciencias naturales; los actos y sus autores se presentan como una abigarrada pluralidad de fenómenos que no tienen de co - mún sino su antisocialidad, y que sólo pueden delimitarse - externamente en una referencia variable con el respectivo - ordenamiento jurídico; el tipo jurídico penal se dá en cuanto existe un tipo legal del acto y, en su caso, un tipo de autor cuyos caracteres obtenidos por abstracción están fijos jurídicamente.



El estudio constitucional tiende a buscar la determinación de la biotipología de un individuo en particular , para comprenderle mejor, explicar sus actos y posiblemente para preverlos. La trascendencia del estudio constitucional viene determinada por el hecho de que cada persona es fundamentalmente diferente de las demás, aunque todas ellas tengan una estructura común; y esa individualidad manifiesta se debe a la constitución peculiar de cada sujeto, que es la que le moldea, matiza y da carácter.

Para muchos autores esta constitución viene determinada por la herencia; pero, a su vez, esta herencia resulta condicionada por las hormonas, que son los factores que ponen de relieve un conjunto de manifestaciones propias de cada individuo, es decir, es la constitución endocrina la que define las características de cada sujeto en particular, aunque lo cierto es que a estas cualidades individuales hereditarias y hormonales hay que agregar las determinadas por los factores ambientales normales del mundo circundante (no patológicos).

De aquí que aunque sean muy diversas las acepciones del término constitución hay que considerar como más adecuada y aceptable la de mayor amplitud, debiendo entenderse, -

por tanto, por constitución "la suma total de las cualidades individuales heredadas y adquiridas " (Krestschmer y Goldkuhl); y precisamente corresponde a Kretschmer la gloria de haber demostrado de una manera científica las relaciones entre el "genio" o manera de ser psíquica y la "figura" o forma corporal. Después de haber verificado miles de mediciones el citado profesor de Marburgo fijó tres tipos morfológicos o biotipos fundamentales, según las relaciones de sus proporciones corporales, a los que denominó leptosomático (de leptos, estrecho) o asténico (largo y delgado), atlético (corpulento) y pícnico (grueso), cuyas principales características vamos a reseñar brevemente a continuación.

Leptosomático.- Es el que presenta una figura corporal estrecha, alargada, que da la impresión por su delgadez de ser más alto de lo que es en realidad; piel pálida y poco jugosa; hombros estrechos, escurridos; músculos poco desarrollados; brazos y piernas enjutas, rematadas por manos y pies huesudos. El pecho también es alargado, con las costillas bien visibles; el vientre, liso, poco guarnecido de grasa. El contorno de la cara es de forma ovoidea, encontrándose cierta desproporción entre la longitud de la frente y nariz, de larguras excesivas, y el pequeño desa-

rollo de la mandíbula inferior, un poco retraído, lo que da lugar a un perfil anguloso de la cara, que recuerda al del pájaro. El cráneo es pequeño y alto, con pelo abundante, en ocasiones semejante a un gorro de piel, con tendencia a encanecer.

Atlético.- Como su nombre indica, se caracteriza por un intenso desarrollo del esqueleto y musculatura, extremidades (brazos y piernas) más bien alargadas, haciendo prominencia las masas musculares; hombros anchos y caídos; pecho muy amplio y ricamente musculado, quedando las caderas menos desarrolladas, y las piernas, a pesar de su solidez, dan la impresión de delgadas. El cráneo es sólido y más bien alto, así como el óvalo de la cara, que es alargado, pero con un mentón firme y relieves óseos acentuados, pero sin constituir un perfil característico.

Pícnico.- Tiene la figura corporal rechoncha y gruesa; cabeza, pecho y vientre muy desarrollados en sentido transversal; propende a la obesidad y corpulencia; extremidades - cortas redondas; manos anchas y blandas; piel jugosa; cara - amplia, ancha, de contornos pentagonales; cráneo redondo, grande, poco alto; frente amplia abombada, bien desarrollada; fuerte barba y desarrollo del sistema piloso general; propensión a la calvicie.

Aparte de estos tres grupos, que pudiéramos considerar clásicos hay una serie de tipos reducidos y heterogéneos cuyas morfologías corporales se apartan considerablemente del tipo medio habitual. Constituyen los tipos corporales que llamamos raros, deformes, antiestéticos en su totalidad o en sus partes, siendo por estas características a grupados por Kretschmer con la denominación de displásicos.

La mayor importancia de la biotipología de Kretschmer se deriva de haber reforzado la concepción unitaria de la personalidad a que antes aludíamos, con lo que las íntimas relaciones del cuerpo y del espíritu certeramente señaladas por múltiples investigadores han adquirido en la biotipología moderna una explicación científica satisfactoria, demostrándose cómo a determinada forma corporal corresponden ciertas cualidades psicológicas específicas.

Kretschmer formula las siguientes conclusiones:

1) Existe una afinidad biológica clara entre la - constitución mental maníaco-depresiva y el tipo morfológico pícnico.

2) Existe una afinidad biológica clara entre la constitución mental esquizofrénica y los tipos morfológicos leptosómico o asténico y atlético.

Cuestión muy debatida ha sido, y continúa siendo lo de nuestros días, la consideración de la herencia como factor determinante de conductas delictivas y peligrosas. Sabemos que heredar es sacar los hijos las propiedades, elementos e inclinaciones de los padres; la herencia influye en la disposición para la adquisición de ciertas enfermedades, en el parecido de los rasgos corporales y en la disposición para adquirir determinado temperamento, carácter y comportamiento.

Muchos han sido los científicos que han investigado sobre el tema obteniendo sus propias experiencias y sacando sus propias conclusiones. El Dr. Franz Exner al considerar la herencia dentro de la persona del autor escribe (1) : "Se habla frecuentemente, tanto en los círculos científicos como fuera de ellos, de la "disposición delictiva" de un ser humano. Literalmente, sería más justa la palabra disposición de delincuente o disposición para el delito. La expresión es confusa y sólo debe de ser empleada con mucho cuidado. Bajo todas las circunstancias hay que evitar primeramente el error de que ciertas "características delictivas" sean

---

(1) Franz Exner - "Biología Criminal" en sus rasgos fundamentales - Traducción de Don Juan del Rosal. Páginas 205 y sig.

heredadas. Lombroso habló de un delincuente congénito. Tomado literalmente esto es un absurdo, pues no hay ningún niño pequeño delincuente. Se quiere decir, un ser humano que está provisto de propiedades características que le conducen necesariamente al delito. Unicamente hay potencias hereditarias que posiblemente evolucionan en dicha dirección; pero que esta evolución en ningún caso se realiza necesariamente es decir, que la potencia heredada conduce fatalmente al desarrollo de dichas propiedades y que éstas deban conducir ineludiblemente al delito, es algo que no está demostrado y que no es demostrable. Hemos de añadir, dice, que el delito es lo que constantemente hay que tener en cuenta, un concepto jurídico y su contenido se transforma según lugar y tiempo, correspondiendo a las ideas y necesidades de la sociedad; por ello no es posible esperar, de antemano, que nosotros pudiésemos encontrar en la sustancia germinal ningún tipo de disposición preformada que tuviese tendencia a provocar solamente aquel tipo de manifestaciones que son consideradas como delictivas.

Prescindiendo de diferencias jurídicas, el delito es en todo caso, una manifestación tan complicada que la disposición característica de semejante modo de conducta se basa tan pronto en esta como en otras potencias heredadas.

Y como conclusión dice que de todo esto se infiere lo siguiente: existe algo así como una disposición criminogena. Un grado especialmente de esta disposición delictiva lo atribuiríamos a aquella disposición que a pesar de las favorables condiciones vitales externas se desarrolla en el delincuente; por el contrario, un grado bajo de dicha disposición sería el de aquella que bajo condiciones externas normales llega el individuo a ser criminal, es decir, bajo condiciones en que la mayoría de sus compatriotas son capaces de comportarse honradamente; y cuanto más deriven estas circunstancias hacia lo desfavorable para que sean capaz de llevar al individuo al delito tanto más débil es su disposición delincuente, hasta finalmente, como hemos dicho, llega un momento en que no es razonable hablar de una disposición criminal.

Toda la descripción hecha ha sido intencionalmente significada. En realidad, las cosas son mucho más complicadas; pues no solo hay que considerar diferencias graduales en los impulsos, disposiciones sentimentales o inhibiciones determinadas, sino que también, naturalmente, las diferen-cias cualitativas en el conjunto del estado de la disposi-ción. Ante todo, es aquí de gran significación la medida de una disposición conforme a la receptiva del mundo circun-dante: para una influencia intensa del mundo circundante se

producen sucesos que a otros les deja indiferentes y que para el muy sensible son decisivos para lo bueno o para lo malo. En este sentido, puede hablarse de fuerza de acción intensa o débil de la disposición. Habría que atribuir a una personalidad tanta mayor fuerza de acción cuanto más intensamente es capaz de frenarse frente a influjos externos de acción contraria. El ideal de la investigación biológico criminal de la herencia sería aclarar la transmisibilidad de semejantes disposiciones características de tipo criminal."

Hasta los momentos actuales observamos que no ha sido posible el hallazgo de una disposición específica para la tendencia al delito; esta no ha sido localizado somáticamente; la herencia no conduce inexorablemente al delito; esta sólo supone una inclinación, una facilidad para convertirse en delincuente; pero esta inclinación es susceptible de corrección mediante una educación o terapia adecuada. Lo que ha de tenerse en cuenta es que la conducta de un individuo en particular y su peligrosidad está afectada por la reacción de su personalidad, por las tendencias delictivas, por la situación especial del momento y por los factores extrínsecos del mundo circundante.

La herencia pues, no debe ser entendida como un



destino inmodificable, sino como una fuerza de orientación fisiopsíquica que puede convertirse en cualidad útil mediante la aminoración o la destrucción de sus elementos no favorables, pero que también puede llegar a convertirse en cualidad no útil mediante el favorecimiento o acentuación de sus elementos desfavorables.

Ya en 1.650 Descartes afirmó que "el médico en su trabajo de investigación no puede prescindir del dualismo-consistente en el reconocimiento de un núcleo somático y otro psíquico en la persona."

El estudio de la personalidad bio-psico-patológica reviste una extraordinaria importancia pues sólo con su aporte el juez podrá determinar, con relativa exactitud, la personalidad integral del individuo para fijar el índice de su peligrosidad social. La ciencia que concretamente se ocupa de esta materia es la criminología clínica.

Consideramos que la apreciación subjetiva que ha de hacer el juez en el momento trascendental en que se dispone a declarar el estado peligroso del individuo en particular, es muy compleja y difícil; pues ha de tener muy en cuenta, los ineludibles aportes de distintas disciplinas científicas que, de una u otra forma, se relacionan estre -

chamente con la personalidad del sujeto y su mundo circun - dante, canalizados cuidadosamente a través de un pronóstico y diagnóstico específicos que han de conducir al descubri - miento del tratamiento más conveniente para que mediante una adecuada aplicación de la correspondiente medida de segu - ridad, se procure su resocialización y su transformación en sujeto útil a la sociedad.

En el V Congreso Nacional de Estudios de la Unión - de Juristas Católicos celebrada en Roma en 1.954, su S. S. el Papa Pío XII expresó: "en lo que se refiere al lado sub - jetivo de la culpa para un recto juicio, es necesario tener en cuenta no sólo el hecho exterior sino también los influ - jos provenientes del interior y del exterior, que han coope - rado en la resolución del hecho culpable como disposiciones innatas, adquiridas, impulsos e impedimentos, educación irra - diación de las personas y de las cosas, el medio en el que vive factores circunstanciales y, en particular, la habi - tual y actual intensidad de querer, la llama de energía cri - minal que ha contribuído a la realización del hecho punible. El juez humano, que no tiene la omnipresencia ni la omnicien - cia de Dios, tiene el deber de formarse, antes de dictar la sentencia judicial, una certidumbre moral que pueda hacer excluir toda razonable y seria duda acerca del hecho exte -

rior y la interna culpabilidad. No tiene, sin embargo, una inmediata visión del estado interior del acusado, tal como era en el momento de la acción; por el contrario, las más de las veces no está en situación de reconstruirlo, con plena claridad, por los elementos de prueba y, a veces, ni aun por la confesión del culpable. Pero esta falta e imposibilidad no deben ser exageradas, como si fuese de ordinario imposible al juez humano conseguir una seguridad suficiente y, por ello, un sólido fundamento para la sentencia. Según los casos, el juez no dejará de consultar a renombrados especialistas sobre la capacidad y responsabilidad del presunto reo ni de tener en cuenta los resultados de las modernas ciencias psicológicas, psiquiátricas y caracteriológicas".

Arnoldo García Iturbe en la comunicación al VIII - Congreso Internacional de Defensa Social, celebrado en París en noviembre de 1.971, sostiene que "hoy en día no se duda acerca de la necesidad de que la función punitiva se ejerza en forma tal, que a cada sujeto corresponda exactamente la sanción que merece en vista a su peligrosidad social, acorde con su personalidad biosocial y apta para su reeducación y readaptación, y recomienda la conveniencia de realizar un examen integral del sujeto durante el proceso y después de haberse dictado la sentencia."

Don Luis Jimenez de Asúa considera como elementos de valoración básicos para el diagnóstico de estado peligroso: "la personalidad del delincuente en sus aspectos antropológicos, psíquico y moral; la vida anterior al delito o al acto de manifiesto peligro; la conducta postdelictual o relevadora de peligrosidad; la calidad de los motivos y el acto que manifiesta la peligrosidad; expresa el notable penalista que está convencido de que el estado peligroso y los medios de luchar contra el, mediante sistemas asegurativos han de implantarse solo en países de alta cultura y de larga tradición democrática. Recomienda prudencia para los países nuevos esgrimiendo dos razones: 1ª) porque, según él: la falta de medios económicos deja en el papel las instituciones que deberían crearse para redactar a la vida social a los sujetos peligrosos y su inaplicabilidad desacredita las leyes o las desvirtúa. 2ª) porque en muchos países, en que el ansia de dominio político, no reconoce límites en la lucha por el poder, las medidas asegurativas se desfiguran o nacen ya como pantalla de armas del Estado". (1).

Estas afirmaciones las hace el insigne penalista español como conclusiones a las que ha llegado después de haber hecho un estudio exhaustivo del estado peligroso en

---

(1) Don Luis Jimenez de Asúa - El Criminalista- Segunda Serie - Tomo I - Editorial Victor P. De Zavalía - Buenos Aires - 1.955 - Página 303.

algunos códigos iberoamericanos, muchos de los cuales tuvieron la privilegiada oportunidad de beneficiarse con el aporte de la sabiduría de tan esclarecido maestro, encontrándose entre estos, el de nuestra querida República de Venezuela, como veremos más adelante.

Las investigaciones modernas en el campo de la sociología, la medicina y la criminología han avivado la inquietud en torno a la existencia de ciertas relaciones existentes entre el fenómeno del delito y determinados estados individuales o sociales, lo cual exige del Estado la adopción oportuna de todas aquellas medidas que puedan contribuir a evitar o por lo menos a disminuir, la delincuencia, destruyendo o luchando contra las causas que la motivan, bien sean estas endógenas, exógenas, emotivas o psíquicas.

El estado peligroso, como presupuesto de las medidas de seguridad debe ser considerado como una situación jurídica y en este sentido Olesa Muñido (1) escribe que "se debe proscribir la noción de estado peligroso como concepto puro, sin reflejo legislativo; y que resulta imprescindible fijarlo en la ley dotándole de una figura legal". He aquí otra de las diferencias fundamentales entre peligrosidad y estado pe

---

(1) Francisco Olesa Muñido. Obra citada. Pág. 93.

ligroso. Sólo será competencia del órgano jurisdiccional la declaración de estado peligroso, una vez que se haya apre-ciado que concurren las determinantes o índices que expresamente son requeridos por la ley.

Para lograr la aplicación de un tratamiento precoz, individualizado y contínuo, se hace necesario tener un amplio conocimiento de la personalidad del sujeto que permita la exploración del grado de peligrosidad; la capacidad de adaptación social; sus intereses vocacionales; el pronóstico de reincidencia y la madurez emocional en general.

Un equipo técnico de observación y clasificación cumple una función de Criminología Clínica, teniendo como cen-tro del problema, el estudio de la personalidad del delincuente; que ha de ser efectuado en la forma más amplia posible, desde un punto de vista multidisciplinario; en atención a lo cual, el estudio de la personalidad del delincuente habrá de realizarse por un equipo integrado por diferentes especialis-tas con orientación criminológica.

## CAPITULO II

### DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

#### I.- Origen de las medidas de seguridad.

A pesar de que la aparición y, sobre todo, el estudio sistemático de las medidas de seguridad es relativamente reciente, su origen resulta confuso.

1.- Antecedentes remotos.- El notable catedrático - Eugenio Cuello Calón (1) sostiene que ya en la segunda mitad del siglo XVI, las casas destinadas a la reforma de prostitutas y vagabundos, constituyeron verdaderas medidas de seguridad que entre estas casas se destacaron el "Rasphuis" y el "Spinhuis" de Amsterdam; fueron instituciones de seguridad - creadas con la finalidad de corregir a gentes de vida desmoralizada y licenciosa contra los que era preciso proteger la ordenada vida social. Posteriormente, a finales del siglo - XVIII, se establecen en el Derecho Territorial de Prusia (Allgemeine Landrecht, 1.794) para mendigos, vagabundos y holga-

---

(1) Eugenio Cuello Calón - La moderna penología (represión del delito y tratamiento de los delincuentes. Penas y medidas. Su ejecución). Tomo I . Página 83 y sig.

zanes y para ciertos delincuentes. Klein, autor de la parte penal de este cuerpo legal, formuló por primera vez una "teoría de las medidas de seguridad", en la cual establecía la distinción entre la pena, que contenía un mal, y las medidas de seguridad.

En España también existieron desde el siglo XVII - establecimientos llamados "galeras de mujeres" en los que , al igual que en Amsterdam y en otros países eran reclusas prostitutas y mujeres de vida vagabunda y holgazanas, pero, en estos establecimientos, el tratamiento que se le daba a las reclusas no se inspiraba en fines reformativos sino en un duro sentido represivo. En el siglo XVIII, la casa de corrección de San Fernando de Jarama, proporcionaba un verdadero tratamiento de carácter de medida de seguridad reformadora. Por otra parte, "la cláusula de retención" establecida en el mismo siglo, como medio de aseguramiento de criminales peligrosos, constituye una excesiva medida de seguridad.

Pero solo es en el siglo XIX, cuando la denominación técnica de medida de seguridad, aparece en el Derecho Penal por primera vez. Y así puede señalarse en los códigos penales españoles de 1848 y 1870, el internamiento, en manicomios de locos, delincuentes, ordenados por el tribunal que también autorizaba su salida.



En Francia aparece la relegación de reincidentes , establecida por la ley del 27 de mayo de 1885 y el internamiento educativo de vagos y mendigos creado por ley belga, del 27 de noviembre de 1.891; y muy posiblemente, para la misma época, ya existía en muchos países disposiciones inspiradas en el fin de protección social, sin que se conocieran todavía con la denominación de medidas de seguridad por conocerse muy poco.

2.- Antecedentes inmediatos. - Paralelamente al sistema de penas en agrupación sistemática, tal como se encuentran en muchos códigos penales modernos, las medidas de seguridad solo aparecen en el año de 1.893, en el primer anteproyecto del Código Penal Suizo del profesor Carl Stoos (Anteproyecto del Código Suizo - 1.893 "Zur Natur der Sichernden Massnahmen"), El codificador afirmó: "existen particulares grupos de personas inclinadas a cometer delitos a causa de su estado corporal o espiritual; se trata, para el político criminal de eliminar o de mejorar estos graves estados; la pena por regla general no es adecuada para ello pues se determina no con arreglo al estado del agente, sino con arreglo al acto por el ejecutado. Son necesarias otras medidas que consigan lo que las penas no consiguen". Considera, que estas medidas especiales, que no son otras que las medidas de

seguridad, son aplicables a los delincuentes jóvenes, para los sujetos de vida disoluta y refractarios al trabajo, para los anormales mentales, los delincuentes alcoholizados y los criminales habituales. Clasificación esta que, en el fondo, es la misma seguida por las legislaciones modernas y contemporáneas; en su clasificación Carl Stoos, establece una diferenciación radical entre las penas y las medidas de seguridad, afirmando que la pena se impone al culpable como consecuencia de un delito, es medio para causarle un sufrimiento, se determina conforme al valor del bien jurídico atacado, según la gravedad del hecho y la culpabilidad del agente y constituye una reacción estatal contra la lesión o peligro de un bien penalmente protegido. Las medidas de seguridad por el contrario, presentan caracteres muy distintos; tienen por base la estimación de la nocividad o peligrosidad del agente, son un medio de seguridad ligado a una privación de libertad o a una restricción de los derechos de la persona, no tienden a imponer al culpable un sufrimiento penal, su duración se determina por la ley en atención a su fin de seguridad y cuando consisten en un influjo educativo aquella depende del éxito de este; y protegen a la sociedad de daños y peligros provenientes de personas que han cometido un hecho punible.

Podemos observar que los criterios y las opiniones

emitidas por este autor son una clara manifestación de su inconformidad con el sistema política y social vigente en su país y una encomiosa reacción contra el mismo, contribuyendo en mucho a la paternidad de las modernas medidas de seguridad.

Posteriormente, las medidas, aparecen en el Ante proyecto del Código Penal Alemán y del Código Penal Austriaco del año 1.909. Después, y, muy particularmente, en el período comprendido entre las dos guerras mundiales las medidas de seguridad se difunden rápidamente.

Sin embargo, las legislaciones de algunos países no emplean el término técnico " Medidas de Seguridad" pudiendo contarse entre estos a Inglaterra, Francia y Groenlandia, cuya legislación solo emplea la denominación genérica de "Medidas".

La moderna diferenciación radical entre pena y medida de seguridad, introducida por Carl Stoos, es sostenida por la Doctrina Dualista, la cual ha tenido amplia aceptación.

3.- Doctrina dualista.— Olesa Muñido recoge como Doctrinas Dualistas las siguientes (1):

---

(1) Francisco Felipe Olesa Muñido. Obra citada. Pág. 111. y sig.

a) Teoría de Longhi o del cumplimiento del fin en tiempo diverso.

Para Longhi el fin único del Derecho Penal, en el que considera incluido cuanto se refiere a las penas y medidas de seguridad, es la defensa jurisdiccional de la Sociedad contra la delincuencia, quedando sometidos a su esfera de acción cuantos infringen la norma. En este concepto unitario se dan dos tiempos: uno pasado en el que el fin se actualiza en forma represiva y otro futuro, en que lo hace en forma de prevención social. Específicamente son penas los medios coercitivos utilizados en la represión del delito, y medidas de seguridad las que corresponden a una función preventiva. Estas pertenecen al Derecho Penal por su contenido material, ya que responden a exigencias de defensa social y consisten en medios que actúan sobre el delincuente, y en cuanto a su forma porque se aplican por la vía jurisdiccional.

En síntesis: la represión y prevención inmediatas quedan fundidas en un solo ordenamiento jurídico-penal, aunque con distinción neta y clara de penas y medidas de seguridad.

b) Teoría de los suplementos penales de Conti.

Partiendo Conti de la diferencia entre Derecho Penal y actividad de policía, basados respectivamente en las

nociones de delito y peligro social, distingue la pena impuesta por el delito o hecho constitutivo de la infracción y la medida de seguridad que coexistiendo necesariamente - con la pena, se impondría de conformidad con la personalidad del autor del acto incriminado, siendo por lo tanto un "suplemento de la pena" a imponer cuando la peligrosidad lo hiciera necesario.

En su opinión las medidas de seguridad, constitutivas del Derecho Penal de policía, al completar la pena e integrarse en un sistema, forman con aquéllas el contenido del nuevo derecho penal.

El concepto de derecho o actividad jurídico-penal de policía, en opinión de Manzini, tiene un ámbito más vasto, pues incluye formas de obrar extrapenales que turben o amenacen las condiciones de vida social, actuando siempre con los medios que le son propios.

c) Teoría del fin actuante.

La medida de seguridad es para Bonucci, y similar opinión sustenta Tesauro, una restricción coactiva de la esfera jurídica del sujeto dispuesta por la Ley no para actuar como motivación psicológica sino como prevención directa. Con el mismo carácter Valsecchi afirma en ambas la

violación jurídica de un precepto legal aunque la medida de seguridad refiere su acción no a la lesión jurídica sino a su autor.

d) Teoría del concurso de voluntades de Vannini.

Este autor vuelve a la distinción entre Derecho Penal y Derecho de Policía para dar un concepto de las medidas de seguridad.

e) Teoría de la diversa naturaleza jurídica de Rocco y De Mauro.

Parte De Mauro de la noción pena como jurídica consecuencia de un hecho que la Ley prevé como delito, precisando, por lo tanto, la realización presente de un hecho ilícito castigado por la Ley para, de acuerdo con la realización jurídico-penal derivada de la violación del orden establecido, poder imponer jurisdiccionalmente penas. Las medidas de seguridad, por corresponder a hechos no acaecidos y solamente probables, no es jurisdiccional ni penal y sí sólo administrativa con finalidad curativa o correctiva.

Este carácter administrativo es, en la opinión de Rocco, la esencia de las medidas de seguridad derivado de la actividad tutelar del Estado desarrollada frente a las actuaciones que pueden ser perjudiciales para la comunidad,

individualizándose por su carácter de prevención especial que la distingue de las medidas de policía y buen gobierno. No obstante para su calificación de administrativas el hecho de ser aplicadas por los tribunales de justicia, pues en este caso no es el órgano sino la función la que tipifica el carácter.

f) La Doctrina Dualista en España.

La Doctrina Dualista en España se encuentra representada principalmente por tres notables penalistas: Dorado Montero, Rafael Saldaña y el Padre Jerónimo Montes.

A Dorado Montero se le atribuye el haber sido el primero que en España estudió la naturaleza jurídica de las medidas de seguridad. En 1.916 escribió en su obra "El Derecho Protector de los Criminales" que la pena en cuanto tal, y la medida son cosas bien distintas; y la diversidad entre las mismas que presupone una diferencia de finalidades, se proyecta indefectiblemente en la organización mental de los sistemas respectivos. Un sistema de medidas y un sistema de penas han de encontrarse en situación antitética, como angulos opuestos por el vertice. Llega a la conclusión de que penas y medidas son entes totalmente diferentes.

Este autor encuentra que las penas y las medidas de seguridad son radical y diametralmente opuestas; lo cual lo coloca como pionero de la Teoría Dualista en España. Sin embargo encontramos que aunque pena y medida son diferentes, algunas veces pueden confundirse; pues ni la pena es siempre - mera represión, ni la medida de seguridad es exclusivamente un medio de prevención.

Jerónimo Montes otro de los estudiosos del Dere - cho Penal Español de principios de siglo, que abordó el problema de las medidas de seguridad, fué el padre Jerónimo Montes (1) quien escribe que "el derecho de defensa social, que es más extenso que el derecho de penar, se ejerce contra todo ataque o peligro haya o no haya culpa, ya se trate de seres responsables o irresponsables, venga del exterior como en el caso de guerra o venga de dentro, como en una alteración de orden público. La defensa social como la individual, no tiene aquí otros límites que los impuestos por la necesidad de tratar la agresión; pero contra los criminales tiene, además, la sociedad el derecho de penar que es dis - tinto y presupone culpa". El delito es una acción antisocial.

---

(1) Jerónimo Montes - Derecho Penal Español - Parte general. Volumen II - Editorial Núñez Samper - Madrid - 1.917. Página 55.



y una acción antijurídica. Apremiar qué acciones son antisociales y necesitan acción penal, teniendo en cuenta, las necesidades y circunstancias, las condiciones e intereses de la sociedad, es misión propia del legislador, que, valiéndose de la amenaza de la pena y de otros medios, procurará la defensa de la sociedad y de los intereses sociales; al juez sólo le toca apreciar el aspecto antijurídico de la acción, no su aspecto antisocial, so pena de poner en sus manos el poder legislativo. Por consiguiente, la función directa y específica de la pena no es la defensa social sino la defensa del derecho.

La defensa social dice, a diferencia de la individual sólo puede dirigirse contra futuros delitos y futuros delincuentes, esto es, contra el peligro que representa la criminalidad en general y en favor de la sociedad. Corregir no es penal. Corrección y pena son cosas tan distintas que no pueden confundirse sin desnaturalizar completamente la una u la otra. La pena es en sí misma un mal que se impone al delincuente por razón del delito, sin perjuicio de ser un bien bajo otros aspectos, y como mal es aceptada por el delincuente y por todos.

Al contrario, sostiene, la educación moral, la corrección, la protección tutelar es un bien en esencia y

bajo todos sus aspectos y por nadie será ni se recibe como un mal y mucho menos como pena ni obedece a alguna culpa anterior sino al hecho de la necesidad, ni tiene relación alguna con el derecho de penar.

El Padre Montes define las medidas de seguridad diciendo que son los medios de defensa contra un peligro criminal, aquellos medios correctivos que tienden a lo menos principalmente a la defensa de un bien jurídico contra los ataques de que pueda ser objeto por parte de un individuo - peligroso, poniéndole en la imposibilidad de causar el daño temido. Y tienen su fundamento en el peligro que para el derecho o el orden público representa un determinado sujeto , por su modo de vivir o su conducta social, y por sus particulares condiciones en relación con un hecho penal o punible; su fin es la seguridad o la defensa evitando y haciendo desaparecer el peligro; las diferencias entre penas y medidas son radicales y claramente visibles, nadie comprende la significación moral y jurídica de la prisión impuesta como pena a un malhechor, con la significación del encierro de un loco en el manicomio, aunque las dos cosas tengan entre sí y en su materialidad grandes semejanzas.

Establece como diferencias fundamentales entre pe-

nas y medidas de seguridad las siguientes: 1ª) la pena es fundamentalmente represión, y en lo que tiene de prevención, esta se realiza corrigiendo o escarmentando al penado (prevención especial) e intimidando a todos (prevención general). Las medidas de seguridad son de orden puramente preventivo y obedecen sólo a una necesidad. 2ª) La pena se impone por razón de un daño realizado o un peligro voluntario que es también un daño jurídico. Las medidas se adoptan por razón de un peligro material y subjetivo fundado en las condiciones personales del sujeto. 3ª) La pena supone un delito, culpa y condiciones de responsabilidad. Las medidas de seguridad suponen más bien lo contrario. 4ª) La pena debe ser determinada de antemano, relativamente por la ley y en absoluto por el juez. Las medidas de seguridad en cambio, no pueden ser determinadas en cuanto a su duración, porque obedecen a una necesidad cuya duración se desconoce.

Para el profesor Jerónimo Montes, pues, también penas y medidas de seguridad son sustancialmente diferentes; las medidas de seguridad han de reservarse para sujetos irresponsables por anomalías mentales, pudiendo extenderse su aplicación a sujetos que por su comportamiento, constituyan un auténtico peligro para la sociedad y para

el ordenamiento jurídico en general.

Contemporáneamente, Gonzalo Rodríguez Mourullo (1) en un artículo que titula "El Sistema Dualista , una solución de compromiso que puede convertirse en una trampa" hace las siguientes consideraciones: las funciones preventivas que el Derecho penal está llamado a cumplir no pueden , ser confiadas exclusivamente a la pena. Al enajenado que ha cometido un hecho descrito en la ley como delito no se le puede imponer pena alguna porque no actuó culpablemente, pero con su comportamiento es posible que haya revelado una peligrosidad criminal que es preciso conjurar mediante el correspondiente tratamiento. Un hecho de mínima gravedad, sancionado con una pena de corta duración, puede ser, por las circunstancias de su comisión, síntoma de una peligrosidad criminal cuya eliminación requiere un internamiento más prolongado.

A finales del siglo XIX se percibió ya con claridad que la pena, retributiva por naturaleza, no podía satisfacer una serie de necesidades político-criminales a las

---

(1) Gonzalo Rodríguez Mourullo - El sistema dualista, una solución de compromiso que puede convertirse en una trampa, cara y cruz de las sanciones penales - Cuadernos para el diálogo No. XXVIII (Extraordinario).

que urgía atender. Frente a estas necesidades se podían adoptar principalmente dos posiciones: desvirtuar el carácter de la pena, convirtiéndola en un medio puramente preventivo - como venían propugnando los representantes de la escuela positiva italiana y sus adláteres-, o bien respetar la esencia jurídico-criminal con un nuevo recurso desprovisto de contenido retributivo y destinado específicamente a la prevención. Este último fué el camino que siguió Stoos, autor del anteproyecto del Código penal suizo de 1.893. A partir de entonces, el llamado sistema dualista fué ganando cada vez más terreno en la legislación comparada. De acuerdo con este sistema, el Derecho penal desarrolla la lucha contra el delito a través de dos vías: la pena y la medida de seguridad. El ordenamiento penal aparece integrado por 2 sectores: el representado por la relación delito-pena y el basado en la relación peligrosidad criminal-medida preventiva. Algunos aparecen, respectivamente, por referirse a cada uno de estos sectores, de Derecho penal de culpabilidad (la imposición de la pena retributiva presupone la realización culpable del hecho injusto) y de Derecho regulador de medidas.

La solución, que surgió en plena lucha de escuelas con todas las características de un compromiso, puede resul

tar válida y, en cualquier caso, preferible al sistema de la vía única (confusión de culpabilidad y peligrosidad, la pena y medida de seguridad), a continuación de que las medidas de seguridad se justifiquen también, como la pena, éticamente y no solo en atención a meras razones de utilidad. En caso contrario, el sistema dualista puede convertirse en una gran trampa.

En 1.961, Glaser expuso en un simposio dedicado al tema "Estado de Derecho y Medidas de Seguridad" la particular inquietud que le producía el que, en ciertos países, bajo la denominación de medidas de seguridad, se disimulen - no sólo penas en el sentido propio del término (recordemos por ejemplo, que la ley de la URSS el 1º de enero de 1.927 consideró como medidas de seguridad la reclusión, los trabajos forzados, la confiscación total o parcial de bienes y hasta el fusilamiento), sino también instrumentos políticos de los ciudadanos para adaptarlas a la ideología gubernamental.

Se impone, pues, una fundamentación ética de las medidas de seguridad. No basta mostrar su utilidad para deducir ya de ahí su justificado. Importa, sobre todo, que pueda considerarse ético-socialmente admisible la restric-

ción por parte del Estado de la esfera jurídica de los individuos sujetos a las medidas de seguridad. Welzel ha planteado la cuestión con extraordinaria claridad. Al igual que en el ámbito de las penas, se pone de relieve en el campo de las medidas de seguridad que es utilidad o adecuación a fin no ofrece todavía ninguna justificación para la restricción a que es sometido el individuo. En todas las medidas de seguridad, al lado de su adecuación a fin (su exigencia para la seguridad pública), debe encontrarse también su fundamento moral. Todas las medidas de seguridad deben reposar sobre el general pensamiento ético-social de que sólo puede participar plenamente de la vida comunitaria aquel que es capaz de obedecer las normas que regulan la vida misma de la comunidad social. Toda libertad exterior o social -observa Welzel- se justifica sólo en base a la posesión de la correspondiente libertad interior o moral. Quien no posee esa libertad interior, esa capacidad de autodeterminación moral, como sucede en el caso de enfermos mentales, o quien carece por razón de hábitos, inclinaciones o vicios adquiridos, de la fuerza de voluntad suficiente no puede aspirar a una plena libertad social. La medida se justifica éticamente en cuanto aparece como medio dirigido a la recuperación de la plena dignidad humana. Lo que fundamenta la aplicación de la medida de seguridad

dad no es ya tan solo su utilidad para la tranquilidad del mayor número, sino el deber que pesa sobre el Estado de remover los obstáculos que se oponen al pleno desarrollo de la personalidad humana.

Se supera, de este modo, la concepción que pretende fundamentar las medidas de seguridad exclusivamente desde la perspectiva de la defensa social, ya se entienda ésta en términos puramente naturalísticos al estilo de Ferri (la única razón de la medida de seguridad es "la necesidad imprescindible de la propia conservación, que presiona y domina el modo absoluto a los organismos sociales de forma idéntica a como guía a los organismos animales"), ya se interprete en términos culturalistas a la manera de Marc Ancel. La idea de desensa social, apoyada en puros argumentos utilitaristas, está fatalmente llamada a servir de instrumento idóneo para concepciones totalitarias, donde los valores de la persona individual quedan íntegramente ahogados. No se olvide que la escuela positiva, aferrada a la idea de defensa social, representó políticamente en Derecho penal, según acertada expresión de Jiménez de Asúa, la "primera agresión científica contra la libertad".

El fundamento ético que le hemos asignado a las me



didadas de seguridad implica, por el contrario, una sólica guardia para el individuo. Conforme a ese fundamento quedan pros-critas a priori. Todas aquellas intervenciones preventivas que, lejos de operar en pro de la recuperación de la dignidad humana, destruyen componentes esenciales de la personalidad o impiden su pleno desarrollo (superación de vidas sin valor vital, castración, cercenamiento de libertades políticas). Nadie podrá negar, sin embargo, que desenvolviéndose en un plano puramente utilitarista muchas de esas medidas deberían considerarse plenamente justificadas, porque se muestran como instrumentos de inmejorable eficacia para garantizar el bienes - tar de la mayoría.

El delincuente con su comportamiento perturba el orden social; pero no por ello ha de considerarse como un ente ajeno a la sociedad en que se desenvuelve; sino más bien, ha de considerarse como a un ser humano que necesita de ayuda integral que le permita transformarse en sujeto útil, o por lo menos, no perjudicial para sus semejantes.

Se puede observar que la teoría dualista ha sido acogida ampliamente por muchos sistemas penales, lo que no ha ocurrido con la monista, por múltiples razones de orden doc - trinal y sobre todo de orden práctico y legislativo.

4.- Doctrina monista. - Con la Escuela Positiva Ita-

liana aparecen las ciencias criminológicas las cuales representan un cambio en la lucha contra el crimen, fundamentándose en la personalidad del delincuente creándose las medidas de seguridad y negando toda diferencia sustancial entre estas y las penas; señalando solamente algunas diferencias consideradas como secundarias. Para la Doctrina Dualista penas y medidas de seguridad, consisten en una disminución de bienes jurídicos y supone la comisión de un delito cuando se trata de medidas postdelictuales; unas y otras han de ser proporcionales a la peligrosidad del delincuente, debiendo aplicarse por la autoridad jurisdiccional y teniendo como fines la intimidación y la redacción social, es decir, la prevención general y la prevención especial.

Antonio Ocaña Rodríguez (1) escribe que la unificación ha tenido escasa aceptación legislativa pues en ella - solo parece inspirarse el código ruso que sólo establece medidas de defensa social, si bien existen profundas diferencias entre las llamadas de carácter judicial correctivo para imputables y de carácter médico ó médico pedagógico los demás y que merece especial consideración el movimiento de

---

(1) Antonio Ocaña Rodríguez - Las medidas de seguridad como consecuencia del estado peligroso - Anuario de la Escuela Judicial. 1.971. Pág. 29 y sig.

la nueva defensa social cuyo principal inspirador ha sido Marc Ancel quien ha tratado de armonizar el derecho penal con las conclusiones de las más modernas ciencias criminológicas y quien sostiene que la política criminal será o-rientada en su totalidad hacia el tratamiento del delin-cuente, pero que ese mismo tratamiento será parte de una acción general de protección social que materializará la lucha contra la criminalidad y que ello no significa obli-gatoriamente que el delincuente escapará a toda medida de sagradable ni toda intervención sobre su personalidad o de recho; pues se trata de escapar de todo espíritu retribu-cionista y de la idea de una justicia penal absoluta y de reaccionar además contra el crimen como hecho humano indi-vidual y como fenómeno social. Se considera que sería más normal la aplicación de la pena, tratándose de los adul-tos, pero que esta pena puede coexistir naturalmente con una medida de seguridad educativa o de otra clase. Que de-be darse al juez la posibilidad de elegir entre diversas sanciones, unas represivas otras reeducativas, llegándose entonces a un sistema unitario que en la práctica no dis-tingue entre penas y medidas de seguridad.

Se considera el tratamiento de los multireinciden-tes y el de la pena privativa de libertad como casi idén-

ticos, no sólo por la necesidad de un régimen disciplinario, sino por la naturaleza de las cosas; lo único que importa es buscar, sobre la base de un adecuado estudio psicológico y sociológico, la mayor adaptación del tratamiento a la personalidad del delincuente. La distinción entre penas y medidas de seguridad es de inspiración doctrinal, al menos para los delincuentes habituales, debiendo en todo caso las medidas de seguridad ser sustitutiva de la pena.

La teoría monista ha sido duramente criticada por muchos tratadistas, uno de ellos, Sebastián Soler (1) la objeta escribiendo "que adolece de vicios fundamentales incluso ante una legislación de tipo positivista, ya que frente a las sanciones ordinarias conminadas al lado del tipo de delito, proporcionadas a la gravedad del hecho de acuerdo con una valoración político-social de éste, existen las que no dependen ni por su forma ni por su contenido de la gravedad del hecho cometido sino de cierta situación del autor que desplaza la atención del hecho para centrarla en el sujeto.

---

(1) Sebastián Soler - Derecho Penal Argentino - Tercera Edición. Tipografía Editora Argentina . 1.956. Buenos Aires. Página 457.

Mientras se reconozca en los códigos la necesidad de prefijar escalas penales proporcionales a la gravedad de los delitos, afirma, la unificación será verbal tan sólo efectiva con la aceptación de la sentencia indeterminada, a la que se oponen razones de otra naturaleza y tan poderosas que ningún teórico se atreve a propugnarlas como sistema legislativo actual y que, añadimos, dejaría - planteado el problema conceptual de su naturaleza no eliminado por la unificación ni por la creación de un nuevo término que tendría como presupuesto la norma violada, o la peligrosidad post-delictual, conceptos básicos que esencialmente son distintos.

El notable profesor llega a las conclusiones siguientes: 1ª) el empleo de la expresión sanciones para designar a un tiempo penas y medidas de seguridad es incorrecto, porque, en derecho, aquella expresión tiene un sentido técnico, preciso que no corresponde al contenido y a la función de las medidas de seguridad; la pena es una sanción pero no la medida de seguridad. 2ª) las confusiones e incertidumbres derivadas de aquella terminología se ponen de manifiesto cuando se advierte el doble sentido del término pena, expresión indistintamente empleada para referirse a la amenaza conminada por la ley y al in -

ternamiento efectivo que comporta el cumplimiento de algunas penas. 3ª) la comunicación de una pena es una característica imprescindible para que una ley sea reconocible como ley penal y, por lo tanto, para que una conducta sea reconocible como ilícita en grado supremo, esto es delictivo. Obsérvese la relación que guarda este tema con el principio nullum crimen sine lege, pues éste, correctamente entendido, requiere la preexistencia no ya de una ley cualquiera, sino de una ley en la que se contenga una pena. En este sentido es perfectamente ilícito decir nullum crimen sine paena. 4ª) La pena como "ente abstracto", como "amenaza retributiva", es elemento esencial en un ordenamiento jurídico respetuoso de la libertad, porque ese es el medio que sirve para señalar el límite entre lo prometido y lo prohibido."

Vemos pues que se atribuye como una novedad del positivismo la constitución de la primera doctrina de la defensa social, lo cual, lógicamente guarda una estrecha relación con la concepción de las medidas de seguridad, al aspirar la renovación de las Instituciones Penales y Penitenciarias mediante una orientación humanista de una política criminal moderna fundamentada en la consideración de la personalidad del delincuente y en su tratamiento reeducador y reesocializador.

### 5.- Sistemas dentro del dualismo.-

a) Sistema alternativo. Conforme a este sistema el juez, basándose en las exigencias de la defensa social (1) y apreciando las circunstancias del sujeto, queda facultado para escoger entre la imposición de la pena y la de la medida de seguridad; de tal forma que el tratamiento impuesto es único: pena o medida. Este sistema deja en libertad al juez para sustituir la pena por una determinada medida de seguridad cuando ha llegado a concluir que aquella puede resultar ineficaz; pues, siendo el sujeto implegable, pero siendo también superior la importancia de su peligrosidad que la de su culpabilidad, interesa más la vida futura del sujeto, por lo que se considera conveniente sustituir la pena por una medida de seguridad.

Este sistema no ha alcanzado todavía gran difusión en las legislaciones, pero es de gran aceptación en la doctrina, por considerar que guarda más armonía con el sentido de justicia y que está más acorde con los fines asignados a las medidas de seguridad, las cuales para ser aplica

---

(1) Eugenio Cuello Calón - El llamado sistema alternativo. La moderna penología (represión del delito y tratamiento de los delincuentes. Penas y medidas. Su ejecución). Página 108.

das, exigen que el juez considere más que el hecho cometido la personalidad del delincuente y se hace necesario que el sujeto sea considerado peligroso para la vida social; particularmente cuando se trata de criminales habituales, las legislaciones destacan como razón de la imposición de las medidas de seguridad, su peligrosidad. La medida habrá de individualizarse, puesto que se impone en función de la peligrosidad de un delincuente concreto, lo cual exige del juez un examen exhaustivo de su personalidad debiendo solicitar la colaboración de peritos especializados en diferentes ramas relacionadas con el estudio de la personalidad; necesitando en muchos casos, el auxilio de especialistas que le suministren informes completos sobre la personalidad biológica psíquica y social del delincuente (1) . Esta colaboración extrajudicial que se solicita también para la determinación de la pena, posee mayor importancia cuando se trata de la aplicación de medidas de seguridad en las que la estimación del sujeto está por encima de la apreciación del hecho cometido, por lo que es de gran utilidad un examen del individuo realizado por especialistas, antes y después del

---

(1) La resolución adoptada por la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria, del 6 de julio de 1.951, sobre las medidas de seguridad, declara que el juez debe informarse de la personalidad del sujeto y para ello han de suministrársele los concursos técnicos necesarios.



juicio, y durante la ejecución de la medida lo que permite un conocimiento más profundo de su personalidad y facilita un tratamiento adecuado.

b) Sistema complementario o sustitutivo. Dentro - del dualismo se ha considerado otro sistema que es el complementario (1); el cual se basa en la distinción teórica entre pena y medida de seguridad; este sistema sostiene que el delincuente por el mismo hecho de ser imputable, debe sufrir la pena como retribución por el mal causado por el hecho ejecutado y posteriormente una vez cumplida la pena impuesta y restaurado el orden jurídico perturbado, debe hacerse presente la justicia social. En España este sistema es seguido por la ley de vagos y maleantes y por la que ha venido a sustituirla, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

Sus postulados han sido duramente criticados por la doctrina por sacrificar la realidad por principios puramente teóricos, considerando: 1º) que cuando se trata de ciertos delincuentes, como mendigos, vagos, homosexuales, toxicómanos, etc., muy poca eficacia en orden a su rehabilitación puede tener la pena tradicional, incluso la priva

---

(1) Antonio Ocaña Rodríguez - Sistemas dentro del dualismo- Anuario de la Escuela Judicial 1.971. Página 39.

ción de libertad, sobre todo si es impuesta por períodos cortos en atención a la escasa gravedad de los delitos en que suelen incurrir estos sujetos. 2º) por lo que respecta a semienfermos mentales, que se benefician de una atenuante en las legislaciones clásicas, estas personas están necesitadas de urgente tratamiento cuarativo y no deben ser sometidas al régimen penitenciario común; estos sujetos, llegado el tiempo de cumplimiento de la pena, si todavía persiste su peli-grosidad (mayor que la de los delincuentes comunes) pronto volverán a delinquir. Lo primero se subsana mediante la creación de establecimientos especiales que tanto tienen de sanatorio como de prisión; siendo necesario prolongar el internamiento hasta la completa curación del penado.

El eminente penalista Anton Oneca (1) sostiene que añadir a la pena atenuada una medida de seguridad curativa, como lo hace el Código Italiano es una solución que desconoce las realidades prácticas, pues las medidas suelen llegar demasiado tarde. 3º) en relación con los delincuentes habituales también la superposición de las dos sanciones ha sido calificada como artificiosa; apuntando también el ilustre penalista arriba citado, que el hecho de que al cumplir la -

---

(1) José Anton Oneca - Derecho Penal - Tomo I - Gráfica Administrativa - Madrid 1.949. Página 584 y sig.

pena sea trasladado el condenado al establecimiento destinado para el internamiento asegurativo, ha aparecido un mero expediente apto para satisfacer una escrupulosidad teórica, pero sin finalidad práctica; este escrúpulo consiste en suponer que la pena tiene carácter aflictivo y que el de la medida de seguridad es asegurativo; cuando realmente, la indeterminación de la medida tiene una mayor fuerza intimidante que la pena de duración fija; y los delincuentes habituales en prisiones comunes, serán un foco de contagio para los primarios y ocasionales, hasta llegado el momento de la aplicación de la medida de seguridad en establecimientos especiales.

Estos dos sistemas (el alternativo y el complementario o sustitutivo) considerados dentro del dualismo, han sido severamente criticados, por su fundamento teórico y por la dificultad y escasa efectividad de su aplicación práctica.

Al enjuiciar la eficacia de las penas y de las medidas de seguridad en general, el magistrado Walf Middendorff, cuando trata "sobre la mensurabilidad del ser humano en los problemas teóricos de la prognosis criminal" escribe que "sin preocupación alguna por las teorías filosóficas sobre el hombre y su personalidad, se ha sometido en el curso de la

historia constantemente, y con mayor o menor fortuna, al ser humano a "módulos" comprobando la existencia o ausencia de cualidades o hechos para inferir de ella sus aptitudes o su conducta futura; este proceder descansa en la presunción de que el método de las ciencias naturales, es pecialmente la ley de causalidad, rige no sólo en el ámbito de la materia sino también en lo humano; una sencilla confirmación de esto, dice, se halla en el hecho de que aplicamos diariamente, innumerables veces la ley, de la causalidad en cuanto que de nuestras experiencias en determinados campos, deducimos una evolución en el futuro de acuerdo con ellas". Y en otra parte, al objetar el autor - (1) la ley causal y la prognosis, escribe que "se dice que una genuina prognosis es imposible, ya por el mero hecho de que la irrepetibilidad del individuo y la libertad de toda resolución de voluntad impiden predecir su conducta. Hay que preguntarse constantemente, afirma, desde un punto de vista crítico, si los llamados progresos de la ciencia compensan la pérdida, frecuentemente unida a ellos, de libertad humana, el angostamiento de la esfera de la intimidad y la nivelación de la personalidad, y a modo de

---

(1) Walf Middendorff - Teoría y práctica de la prognosis criminal - Traducción de José María Devesa - Editorial Espasa Calpe . S.A. Madrid 1970. Pág. 94 y 113.

conclusión, considera que la conducta humana es en muchos casos inteligible en su causalidad. De los cursos causales, dice, puede inferirse según el grado de conocimiento y comprensión, conclusiones correlativas respecto a la conducta que se seguirá en el futuro; el ser humano es con frecuencia mensurable en relación a su comportamiento anterior y pueden establecerse para su conducta futura en el mismo ámbito prognosis seguras con arreglo a las circunstancias y de acuerdo con la ley de probabilidad; a ello no se oponen en la praxis la irrepetibilidad, que ha de reconocerse teóricamente, y su libertad relativa de voluntad, que igualmente ha de ser reconocida."

Al considerar concretamente la eficacia de las penas y de las medidas el célebre magistrado hace las siguientes afirmaciones: "hasta ahora sabemos muy poco sobre la eficacia de penas y medidas y en la investigación de este problema se opera casi únicamente por presunciones; la investigación estadística tiene que fracasar casi por completo en este ámbito, porque el trabajo con grupos de control es imposible por razones de justicia, pues no cabe con dos grupos de delincuentes, castigar a unos más rigurosamente o de otra manera que a otros, para indagar de este modo los efectos de cada pena en tipos de delincuentes sencible

mente iguales. Apunta que en la criminología actual se discute vivamente en principio, el valor de la pena privativa de libertad, que en Europa sólo tiene unos 150 años de antigüedad, ganando cada vez más terreno la opinión de que la pena privativa de libertad es un mal para el penado, un mal que lo hace peor, más perverso, un mal que lo hace asocial, con más odio y menos amor dentro de sí."

También nosotros, en nuestra ignorancia, observamos, compartiendo el criterio de eminentes sabios, científicos y tratadistas, de los últimos tiempos y de todas las latitudes del globo terraqueo, que son muchos, y muy loables, los esfuerzos que la ciencia ha hecho y continúa haciendo, en un incansable esfuerzo por encontrar las causas verdaderas y concretas que producen el complejo fenómeno antisocial de la criminalidad, para poder así presentarle batalla frente a frente con más efectividad, con armas prácticas y con menos teorías; para de esta forma poder elaborar fórmulas precisas que han de curar a la comunidad social de tan grave como complejo mal.

Sin embargo, hasta hoy, ya casi en el ocaso del siglo XX, en definitiva no se ha logrado mucho; continuando muy viva la llama de la esperanza de que en un futuro, ojalá no lejano, la ciencia arribe a tan ansiada meta para bien de toda la humanidad.

## II.- Contornos conceptuales.

1.- Concepto.- El dar un concepto preciso sobre las medidas de seguridad ha resultado dificultoso, debido quizás, a la complejidad de su origen y a la carencia de una suficiente precisión doctrinal en torno a la materia; - siendo muchos los autores que se han esforzado en obtener sus propios conceptos; así encontramos que:

- Para Franz Von Liszt, medidas de seguridad son "todos aquellos medios por los cuales se trata de obtener la adaptación del individuo a la sociedad, (medidas educadoras o correccionales) o la eliminación de los inadaptables a la sociedad (medidas de protección o de seguridad)".

- Para el profesor Emilio Zürcher las medidas de seguridad son "las reglas que el juez impone cuando ha constatado la culpabilidad de un acusado responsable, tanto accesoriamente a la pena, tanto en lugar de ella, con objeto de prevenir nuevos delitos."

- Bettiol las considera como "un medio preventivo o profiláctico de lucha contra la delincuencia aplicado a personas socialmente peligrosas, con motivo de la comisión de un delito."

- Cuello Calón escribe que las medidas de segu

ridad son "especiales medios privativos o limitativos de bienes jurídicos, impuestos por el Estado a determinados delin-cuentes peligrosos para lograr la readaptación a la vida social, o su separación de la misma, ó aún cuando no aspiren especialmente a las anteriores finalidades, dirigidas tam-bién a la prevención de nuevos delitos".

- Anton Oneca, escribe que "las medidas de se-guridad, al igual que las penas, son privaciones de bienes jurídicos que tienen por finalidad evitar la comisión de deli-tos y que se aplican en función al sujeto peligroso y se or-denar a la prevención especial"

- Sebastián Soler afirma que "las medidas de seguridad propiamente dichas son aquellas cuya acción se e-jerce, sobre todo mediante la prevención específica, remo-viendo en el sujeto las causas que lo llevaron a adelinquir".

- Olesa Muñido las define como "medios de pre-vencción especial aplicables a las personas adultas que, cons-tituyendo un peligro no transitorio, de infracción del or -den jurídico-penal, por su condición psíquica, moral o so-cial, son incapaces de sentir la eficacia preventiva de la pena, o en otros términos a las personas que se hallen en estado peligroso".



Guarda estrecha y directa relación con la problemá tica conceptual, la consideración de la naturaleza de las - medidas de seguridad y sus características.

En cuanto a su naturaleza los autores son de opinio nes controvertidas, basando el problema fundamentalmente en la determinación del campo de aplicación, en sus caracterís ticas, en su relación con la pena y en las semejanzas y di ferencias con estas.

Uno de los principales debates lo plantea la cues tión de la consideración de las medidas predelictuales, a la luz del insoslayable principio de legalidad, según el cual no podrían aplicarse medidas a sujetos que no se en - cuentren incurso en la comisión de un delito determinado, aunque exista fundado temor de que pueda cometerlo en un fu turo próximo o lejano. Este sujeto en tales circunstancias, es considerado por algunos autores como peligroso social, a jeno al campo del derecho penal, siendo objeto potencial de medidas de naturaleza policial, reguladas por el Derecho Ci vil, y más concretamente, por el Derecho Administrativo. Par tidarios de esta doctrina se manifiestan los notables cate- dráticos Cuello Calón, Anton Oneca y Rodríguez Devesa, para quienes sólo son medidas de seguridad propiamente dichas -

las medidas postdelictuales.

Olesa Muñido afirma (1) que la naturaleza de las medidas de seguridad es la de medidas jurídicas escribiendo que "son medios coactivos con los que consigue el ordenamiento jurídico la sujeción de un valor para lograr con ello la tutela de otro".

Siendo misión trascendental del Derecho luchar - contra el delito, unas veces establece sanciones para los delincuentes y otras, se adelanta para evitar que las personas se conviertan en tales. Nos atrevemos a expresar que las medidas de seguridad pueden ser consideradas como medidas jurídicas de defensa social que tienen como factor determinante de aplicación, la declaración previa del estado peligroso, independientemente del presupuesto de imputabilidad, y, en algunos casos, del de culpabilidad; y cuyos objetivos específicos son la corrección y la readaptación social de la persona.

## 2.- Semejanzas y diferencias entre pena y medida de seguridad.-

---

(1) Francisco Felipe Olesa Muñido. Obra citada. Pág. 121 .

a) Semejanzas

- La pena y la medida de seguridad atien  
den igualmente a la idea de justicia aunque respondan a en  
foques diferentes.

- Tanto la pena como la medida de seguri  
dad constituyen, en más o en menos grado, una notable res-  
tricción a la libertad individual y a otros bienes jurídi-  
cos.

- La pena y la medida de seguridad se ma  
terializan en normas específicas que han de ser reguladas  
por la ley.

- Tanto la pena como la medida de seguri  
dad tienen un fin común que es la de la defensa de la so-  
ciedad contra el fenómeno de la criminalidad.

- Cuello Calón (1) escribe que la medida  
de seguridad se impone atendiendo a la peligrosidad del de  
lincente no aspirando a causar un sufrimiento al culpable,  
su determinación tiene base única el fin de seguridad a  
que se aspira y por tanto dependerá del peligro que presen  
te el individuo sobre quien actúa.

---

(1) Eugenio Cuello Calón - Derecho Penal - Tomo I - Barce-  
lona 1.940. Página 552.

b) Diferencias.

- La pena se fundamenta muy especialmente en el principio de retribución. La medida de seguridad nace modernamente como instrumento de defensa social.

- La pena se propone expresamente causar un sufrimiento al delincuente mediante el castigo que se le impone al culpable con lo cual su carácter es aflictivo; la medida de seguridad por el contrario es de carácter curativo y reeducacional.

- La imposición de la pena es determinada por la gravedad del daño causado al bien jurídico lesionado y por el grado de culpabilidad del autor del acto delictuoso; la medida de seguridad se establece en forma indeterminada según el fin asegurador o curativo que se proponga.

- La pena supone la existencia de los presupuestos de imputabilidad y culpabilidad en el delincuente; la medida de seguridad considera como presupuestos previos para su aplicación las situaciones de peligrosidad y estado peligroso.

- La pena es y ha de ser siempre postdelictual, puesto que exige la previa comisión de un delito

concreto; la medida de seguridad puede ser predelictual o posdelictual, pues sólo presupone la existencia de una situación de estado peligroso el cual puede presentarse sin la comisión de un hecho delictuoso.

### III.- Clasificación de las medidas de seguridad.

Son numerosos los tratadistas penales que en su afán de estudiar el alcance de las medidas de seguridad, han propuesto diferentes clasificaciones de las mismas, atendiendo principalmente a los siguientes criterios: su finalidad, el bien jurídico protegido, su fundamento, el destinatario y el tiempo de duración.

Entre las principales clasificaciones se pueden destacar las siguientes:

A) Clasificación dada por Eugenio Cuello Calón.

El renombrado catedrático Cuello Calón hace una clasificación de las medidas de seguridad atendiendo el fin que esta se propone:

1º) Las que procuran la readaptación del delincuente a la vida social (medidas privativas de libertad)

a) Medidas de educación .

b) Medidas de corrección.

c) Medidas de curación.

- Tratamiento de menores y jóvenes delincuentes.

- Tratamiento e internamiento de delincuentes en  
fermos.

- Internamiento de delincuentes alcoholizados y  
toxicómanos.

- Internamiento de vagos y refractarios al trabao  
jo.

- Sumisión a libertad vigilada.

2º) Las que procuran la separación de la -  
vida social: medidas de aseguramiento de delincuentes ina-  
daptables.

- Reclusión de seguridad de delincuentes habitual  
es y peligrosos.

- Internamiento de locos criminales.

3º) Las que procuran prevenir la comisión de nuevos delitos: medidas restrictivas de libertad.

- Caución de no ofender.
- Expulsión de delincuentes extranjeros.
- Prohibición de residir en ciertas localidades.
- Prohibición de frecuentar determinados lugares.
- Obligación de residir en un punto designado.
- Interdicción del ejercicio de señaladas profesiones o actividades (1).

B) Clasificación dada por Francisco Felipe Olesa Muñido.

1º) Medidas de seguridad personales.

1.1. Aplicables a personas físicas: privativas de libertad (predelictuales y postdelictuales). Y restrictivas de libertad: (predelictuales y postdelictuales)

- Libertad vigilada.

---

(1) Eugenio Cuello Calón - Obra citada - Pág. 88.

- Prohibición de residencia.
- Expulsión de extranjeros.
- Prohibición de frecuentar establecimientos don  
de se expedan bebidas alcohólicas.
- Prohibición de ejercer una profesión u oficio.

1.2. Aplicables a personas jurídicas (pre-  
delictuales y posdelictuales) : suspensión y disolución .

2º) Medidas de seguridad patrimoniales (predelict  
tuales y postdelictuales).

- Comiso.
- Caución de conducta.
- Cierre de establecimiento.

3º) Medidas de seguridad personales privativas de  
libertad.

### 3.1. Predelictuales

- Internamiento en manicomio o establecimientos-  
para anormales.
- Internamiento en casa de templanza.
- Internamiento en establecimiento de trabajo.



### 3.2. Postdelictuales

- a) Sustitutivas - Internamiento en manicomio criminal.
  - Internamiento en establecimiento para educación de sordomudos.
- b) Complementarias - Internamiento en establecimiento de custodia.
  - Internamiento en establecimiento para anormales delincuentes.
  - Internamiento en casa de templanza para delincuentes.
  - Internamiento en establecimiento de trabajo para delincentes. (1).

Considera este autor como más importante la clasificación que se refiere a las medidas de seguridad que son aplicables al estado peligroso anterior a la comisión de un acto delictuoso (predelictuales) y las que son no pueden ser aplicables al estado peligroso o a la posterior comisión de un delito (postdelictuales); y hace las siguientes apreciaciones en relación a esta clasificación:

1º) Medidas de seguridad civiles.- Consisten en el internamiento de individuos no delincuentes en manicomios, casas de salud u otros establecimientos similares; ~~los~~

---

(1) Francisco Felipe Olesa Muñido - Obra citada- Pág. 140.

cuales se corresponden con el principio "curator venturis nomine".

2º) Medidas de seguridad sustitutivas y complementarias.- Se refieren a las medidas de seguridad personales cuando la pena es inaplicable, por no tener el delincuente suficiente capacidad, siendo sustituida la pena por la medida de seguridad por ser esta un medio de prevención especial. Cuando la medida de seguridad debe ser aplicada al delincuente por deber de justicia y para cumplir el fin de tutela jurídica, considerándose la pena como insuficiente, la medida es complementaria.

3º) Medidas de seguridad privativas de libertad.

- a) Internamiento en asilos de alienados criminales.
- b) Internamiento en asilos de anormales delincuentes, psíquicos o físicos.
- c) Retención de los reincidentes delincuentes habituales e incorregibles en establecimientos especiales.
- d) Colocación de vagos, mendigos y ociosos - en establecimiento de trabajo obligatorio.
- e) Colocación de menores delincuentes en establecimientos de educación o corrección.

4º) Medidas de seguridad restrictivas y privativas de libertad.- Las medidas restrictivas de libertad ,

son obligaciones que afectan la libertad psíquica y volitiva, restringiendo la esfera de actividad social del hombre, sin que se le segregue del medio ambiente. Las medidas privativas de libertad impiden la convivencia con la sociedad.

5º) Medidas de seguridad aplicables a personas - jurídicas.- El juicio pronóstico sobre el particular estado peligroso, se aplicará, como medio adecuado para combatirlo la eliminación definitiva de la persona jurídica, (disolución) o la disolución temporal (supresión).

6º) Las medidas de seguridad corporales.- Constituyen un medio no adecuado para prevenir la delincuencia, siendo una violación del propio concepto, al conllevar una lesión orgánica que provoca una situación irreparable y antijurídica que no puede justificarse siquiera por - la biología.

C) Clasificación dada por Von Liszt.

1º) Medidas de educación y corrección.

2º) Medidas de protección o de seguridad es - tricto sensu.

D) Clasificación dada por Luis Jimenez de Asúa.

- 1º) Medidas de custodia.
- 2º) Medidas de corrección.
- 3º) Medidas de prevención.

E) Clasificación aprobada por la Conferencia Internacional para la Unificación del Derecho Penal, realizada en Roma en 1.929.

1º) Medidas privativas de libertad: 1. Internamiento en asilos de alienados criminales; 2. Internamiento en asilos de anormales delincuentes, físicos y psíquicos ; 3. Retención de reincidentes, de delincuentes habituales y de incorregibles, en establecimiento especial; 4. Colocación en establecimientos de trabajo obligatorio, con carácter general, y singularmente de vagabundos, mendigos y vagos inveterados; 5. Colocación de menores delincuentes en establecimientos de educación y corrección.

2º) Medidas restrictivas de libertad: 1. Libertad vigilada; 2. Prohibición de domicilio; 3. Prohibición de visitar establecimientos de bebidas alcohólicas; 4. Prohibición de ejercer un oficio o una profesión; 5. Expulsión de extranjeros; 6. Medidas tutelares para menores delincuentes.

3º) Otras medidas: 1. La confiscación especial; 2. La caución de buena conducta; 3. La clausura de establecimientos.

F) Clasificación dada por Antonio Beristain.-

El Sacerdote Antonio Beristain, al igual que Olesa Muñido, sostiene que el criterio más trascendental, para la clasificación de las medidas de seguridad, es el que atiende a su fundamento, a su presupuesto lógico, que es el estado peligroso; y según el cual se puede deducir la gran clasificación de medidas de seguridad predelictuales y medidas de seguridad postdelictuales.

Considera este autor siguiendo al profesor Anton Oneca, que las medidas de seguridad propiamente dichas son sólo las medidas postdelictuales, fundamentando su criterio, en que estas son aplicables al delincuente que sin necesidad de considerársele su imputabilidad y culpabilidad, ha cometido una acción considerada como delito.

Este autor hace las siguientes subclasificaciones de las medidas de seguridad postdelictuales (1):

---

(1) Antonio Beristain - S.J. - Obra citada - Página 65.

- |                              |                               |  |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| 1.- Bien Jurídico.           | a) Libertad                   | - Privativas<br>- Restrictivas                     |
|                              | b) Otros derechos             | - Restrictivas                                     |
|                              | c) Pecunarias                 | - Caución<br>- Multa                               |
| 2.- Destinatario.            | a) Personas<br>(Edad)         | - Adultos<br>- Jóvenes<br>- Menores                |
|                              | b) Persona<br>(Imputabilidad) | - Imputables<br>- Semiimputables<br>- Inimputables |
| 3.- Tiempo.                  | a) Duraderas                  | - Determinadas<br>- Indeterminadas                 |
|                              | b) No duraderas               |  |
| 4.- Finalidad.               | a) Objetiva                   | - Delincuentes<br>- Criminales                     |
|                              | b) Subjetiva                  | - Seguridad<br>- Corrección                        |
| 5.- Relación con la<br>pena. | a) Sustitutivas               |  |
|                              | b) Complementarias            |  |
| 6.- Naturaleza Jurídica      | a) Penales                    |  |
|                              | b) Procesales                 |  |
|                              | c) Administrativas            |  |
|                              | d) Civiles                    |  |

En relación a la anterior clasificación el autor  
hace las siguientes consideraciones:

La diferenciación de las medidas de seguridad, a tendiendo a su fundamento puede considerarse como relativa, pues una acción determinada puede ser considerada como delito por una determinada legislación y por otra no; por lo tanto la concepción de peligrosidad en una legislación puede ser predelictual mientras que en otra, por el contrario, habrá de ser postdelictual.

1.- Atendiendo al bien jurídico afectado, las medidas de seguridad, al igual que las penas, pueden ser : privativas de libertad, por ejemplo, la prohibición de entrar a determinados lugares; privativas o restrictivas de otros hechos por ejemplo, la prohibición de conducir vehículos y pueden ser de naturaleza pecuniaria por ejemplo , la multa o la caución.

2.- Atendiendo al destinatario, las medidas podrán ser personales y no personales (reales para algunos); las primeras corresponden a las personas naturales y las segundas, a las personas jurídicas.

3.- En atención al tiempo de duración de las medidas de seguridad, estas podrán ser duraderas o no duraderas; algunas medidas duraderas plantean graves problemas, pues en ciertos casos y en ciertos sentidos son de

duración indeterminada y tal indeterminación puede violar el principio de legalidad.

4.- Por la finalidad objetiva se consideran medidas criminales o delictuales si se proponen evitar el delito; y medidas sociales si se proponen evitar perturbacio - nes sociales.

Tanto las medidas de seguridad delictuales , como las sociales, pueden ser postdelictuales y predelictuales.. Esta diferenciación es importante porque abre la posibilidad y la conveniencia de establecer una diversificación paralela a la peligrosidad.

5.- Medidas sustitutivas y complementarias.- Las medidas de seguridad sustitutivas reemplazan la pena. Las complementarias colman la pena, prolongando su prevención especial mediante una especial asistencia al delincuente - en procura de su resocialización.

Aunque las diferentes clasificaciones aportadas - en torno a las medidas de seguridad guardan mucho de común, encontramos como una de las más completas, no sólo por su extensión sino más que todo por su precisión, la dada por el penalista Francisco Felipe Olesa Muñido.



### CAPITULO III

#### LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESPAÑA

A España, cuna tradicional de letrados y de hombres preocupados por la ciencia le cabe el alto honor de contar entre sus hijos de todos los tiempos, con esclarecidos estudiosos del Derecho en todas sus ramas; lo cual le ha permitido transmitir y continuar transmitiendo el incalculable tesoro de sus conocimientos, no sólo a sus compatriotas sino a otros pueblos lejanos, muy particularmente a la gran familia que conforma los países Iberoamericanos.

Las medidas de seguridad, como objeto muy importante del Derecho Penal, también han tenido sus dignos representantes entre juristas y tratadistas españoles.

Como dejáramos apuntado más arriba, la Doctrina Dualista de las medidas de seguridad cuenta en España, so lo por citar algunos, nada menos que, con Dorado Montero, Rafael Salillas y Jerónimo Montes. Y modernamente encontra mos que descuellan eminentes catedráticos y tratadistas que en su obra de hombres interesados en la protección de la sociedad y del hombre como razón única de su existen -

cia, se esfuerzan en esclarecer el escabroso tema de las medidas de seguridad.

En el Derecho Positivo Español encontramos que las medidas de seguridad se encuentran recogidas, principalmente, en los siguientes instrumentos legales:

1.- Código Penal Español.

2.- Ley sobre Vagos y Maleantes. Su Reglamento .

3.- Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

Su Reglamento.

4.- Ley de Tribunales Tutelares de Menores, Reglamento para su Ejecución y Estatuto de la Unión Nacional de Dichos Tribunales.

1.- Las medidas de seguridad en los Códigos Penales Españoles.

Pasando una breve revista cronológica a los Códigos Españoles, observamos que:

Código Penal Español de 1.822.- El Código Penal Español promulgado el 9 de julio de 1.822, es fuente de La Legislación Penal española actual, según lo afirma Antón Oneca (1), cuando al referirse a este instrumento le-

---

(1) José Antón Oneca - Derecho Penal - Obra citada. Página 60.

gal, dice que este código se inspiró en el Código de Napoleón, en la ideología de la Ilustración y en la filosofía de Bentham en particular; resultando así una extraña mezcla, muy significativa de la época, de tradición y progreso, de rigor medioeval y aspiración humanitaria y contiene preceptos precursores de instituciones modernas.

El catedrático Sainz Cantero, al enjuiciar este código, dice que el mismo puede ponerse a la altura de los - que el movimiento codificador logró en otros países. (1).

Este código no contiene expresamente medidas que protejan a la sociedad contra las acciones delictivas; pero establece como causas de exención de responsabilidad penal la siguiente consideración: "no delinque el que obra en estado de demencia, delirio o privado de razón por cualquier causa independiente de su voluntad".

Códigos Penales de 1.848 y 1.850.- Los legisladores de 1.848 se inspiraron en el Código Francés de 1.810, en el código de 1.822 en el Código de Brasil de 1.830 y en el código napolitano de 1.819 (2). Este código fué mo

---

(1) José A. Sainz Cantero - La Ciencia del Derecho Penal y su Evolución.

(2) José Antón Oneca- Derecho Penal - Obra citada - Pag. 63.

dificado por Decreto del 30 de junio de 1.850; prevee medidas de protección y de seguridad, distinguiendo según el demente haya cometido una acción u omisión, tipificada como delito como grave o menos grave.

El artículo 458 considera como vagos " a los que no poseen bienes o rentas, ni ejercen habitualmente arte, profesión u oficio, ni tienen empleo, destino, industria, ocupación lícita o algún otro medio legítimo de subsistencia, aún cuando posean domicilio fijo y sean casados". El vago es castigado con pena de privación de libertad y sujeción a la vigilancia de la autoridad . Admite la vagancia sólo en casos excepcionales y autorizados y se considera la reincidencia sólo como agravante.

Código penal de 1.870..- El código de 1.870 introduce un sistema de medidas de seguridad de distintos caracteres y finalidades; sigue el patrón discriminador del código de 1.848 al considerar la mayor o menor gravedad de la infracción que se haya cometido; si la infracción cometida hubiese sido calificada como menos grave , se concede al Tribunal la facultad de internamiento o depósito por los familiares, mediante ciertas condiciones previas. Este código considera la vagancia como una circunstancia agravante.

Código penal de 1.928..- Para el renombrado tratadista Anton Oneca (1) la mayor innovación contenida en el código penal de 1928, fué la aparición, por vez primera, de las medidas de seguridad en el Derecho Español. La trascendencia más destacada era la retención, por tiempo absolutamente indeterminado, de los multireincidentes, que se imponía como complemento a la pena; y como contrapartida, los bonos de cumplimiento de condena, premio a actos extraordinarios de arrepentimiento, permitían adelantar la libertad condicional .

La comisión de códigos, solicita que se le dé en trada en este código a las llamadas medidas de seguridad, no como sustitutivas penales, sino como prevenciones o disposiciones que los tribunales han de adoptar, en unos casos preceptivamente, y potestativamente en otros, como complemento o efectos especiales de las penas; esta es pues, una de las primeras definiciones que se les dá en España a las medidas de seguridad.

Concretamente el artículo 90 establece una serie de medidas de seguridad, a saber:

- La caución de conducta.

---

(1) José Anton Oneca - Derecho Penal - Obra citada- Pág. 66

- La publicación de la sentencia a costa del reo.
- El internamiento en manicomio judicial.
- La expulsión de extranjeros.
- La privación o incapacidad para el ejercicio de alguno o algunos de los derechos civiles.
- La suspensión de cargo, empleo, profesión, arte u oficio.
- La retención en establecimiento especial de los delincuentes habituales o incorregibles.
- El internamiento en asilos de trabajo de los alcohólicos, toxicómanos y de los vagos, simultáneamente con la pena o después de cumplirla.
- El comiso de los instrumentos o efectos del delito o falta.
- La disolución, supresión o suspensión de las entidades o personas jurídicas, sociedades, corporaciones o empresas.
- El cierre temporal o definitivo de los establecimientos que sirvieren de medio para la ejecución de los delitos.
- La prohibición de que el reo, al extinguir la condena, vuelva a residir en el lugar en que cometió el delito, o en que residan la víctima o su familia.
- El sometimiento del delincuente a la vigilancia de la autoridad.

Código penal de 1.932.- Los legisladores de este código no le dieron a las medidas de seguridad la importancia que se les dió en el código anterior; sin embargo en él aparece una nueva medida de seguridad, atendiendo a las legislaciones italianas y alemanas, y es la de considerar la sordomudez como causa de exención de responsabilidad penal. La norma que la recoge considera al sordomudo de nacimiento, o desde la infancia que carezca en absoluto de instrucción, y dispone (la misma norma) el ingreso en un establecimiento para anormales. Esta medida continúa vigente en el código actual.

Código penal de 1.944.- Los artículos 446 y 447 del código penal de 1.944 confieren a la autoridad gubernativa la facultad para depositar en albergue adecuado a las mujeres mayores de 16 años y a las menores de 23, que se hallen en estado de prostitución o corran peligro de prostituirse; debiendo ser acordado el nombramiento de un protutor ; este nombramiento ha de recaer en personas individual o colectiva que inspire la confianza suficiente de que habrá de ejercer celosamente las funciones encomendadas.

Por otra parte el contenido del artículo 565 que

literalmente establece que "toda infracción sancionada en este artículo, cometida con vehículos de motor llevará a parejada la privación de permiso para conducirlos por tiempo de 1 a 5 años", ha originado polémicas entre algunos - autores que consideran la norma como de naturaleza penal y otros que la consideran como medidas de seguridad exclusivamente; pudiendo concluirse que la norma en cuestión , puede tener doble naturaleza, según se atienda al código penal o a la ley de peligrosidad y rehabilitación social.

Anton Oneca (1) escribe que el código penal de 1.944, aunque sigue casi fielmente al de 1.932, introduce importantes reformas, entre las cuales considera como las más importantes las siguientes: la autorización que se le dá a la jurisdicción tutelar del menor para declinar su competencia, excepcionalmente, por entender que en atención al tiempo transcurrido desde la ejecución del hecho , o por razón de la circunstancia del menor, no ha de ser conveniente la adopción de las medidas que pudieran aplicársele. Otra importante innovación considerada es la referida al régimen correccional de menores, que autoriza -

---

(1) José Anton Oneca - Derecho penal - Obra citada - Página 69.



para los mayores de 16 años y los menores de 18, dejando al arbitrio del tribunal, la imposición de la pena atenuada o su sustitución por el internamiento en institución especial de reforma por tiempo indeterminado., hasta conseguir la corrección del culpable.

Código penal de 1.963.- El código penal español de 1.963 es una reestructuración del código penal de 1944. En este sentido escribe el catedrático Rodríguez Devesa- (1) que el texto revisado de 1963, constituye el código penal vigente y afirma que el mismo contiene a lo largo de su articulado, medidas de seguridad de tipo curativo y educativo, las cuales pueden ser clasificadas en: A- medidas curativas: art. 8 , numeral 1 que establece literalmente: "están exentos de responsabilidad penal, el enajenado y el que se halla en situación de trastorno mental transitorio, a no ser que este haya sido buscado a propósito para delinquir", disponiendo que "cuando el enajenado hubiere cometido un hecho que la ley sancionare como delito, el Tribunal decretara su internamiento en uno de los establecimientos destinados a los enfermos de aquella clase, del cual no podrá salir sin previa autorización del mismo Tribunal"; es esta pues, una norma de

---

(1) José María Rodríguez Devesa - Derecho Penal - Obra - citada. Páginas 111 y 798.

fin terapéutico.

Observamos que el Tribunal Supremo, a través de gran número de sentencias, ha definido el trastorno mental transitorio como: "todo aquel de causa inmediata, necesaria y fácilmente evidenciable, de aparición más o menos brusca, de duración en general, no muy extensa, y que termina por la curación sin dejar huella, producido por el choque psíquico de un agente exterior, cualquiera que sea la naturaleza". B- medidas educativas: el artículo 65 en concordancia con el artículo 9, ordinal 3º, establece que "al mayor de 16 años y menor de 18, se aplicará la pena inferior, en uno o dos grados, a la señalada por la ley, pudiendo el tribunal, en atención a las circunstancias del menor y del hecho, sustituir la pena impuesta por internamiento en institución especial de reforma, por tiempo indeterminado hasta la corrección del culpable". Esta norma persigue una clara finalidad educativa.

El código penal contiene además ciertas normas - que el arriba citado catedrático opina que pueden considerarse como medidas de seguridad, y a las que distingue con el nombre genérico, de otras medidas; considerando como tales las siguientes: ciertas inhabilitaciones de extensión específica para facultativos o sanitarios que practiquen el aborto; medida de destierro;

medidas protectoras para menores prostituídos o corrompidos; cierre temporal o definitivo de determinados establecimientos.

Con estas sucintas consideraciones de los códigos penales españoles, las cuales hemos hecho siguiendo especialmente al Ilustre penalista José Anton Oneca y al estudio hecho por Rafael Albiac Guiu (1), hemos podido observar que las medidas de seguridad han sido objeto de señaladas consideraciones, muy especialmente por el código penal de 1928, en cuyo contenido reposa su origen.

## 2.- Ley de vagos y maleantes.-

La consideración de las medidas de seguridad en la legislación española, aparece de manera amplia y concreta, con la ley de vagos y maleantes del 4 de agosto de 1.933, derogada y sustituida por la ley de peligrosidad y rehabilitación social del 4 de agosto de 1.970, actualmente en vigencia.

La ley de vagos y maleantes fué reglamentada el 3 de mayo de 1.935.

---

(1) Rafael Albiac Guiu - Medidas de Seguridad en los Códigos Penales Españoles - Anuario de la Escuela Judicial - 1.971 - Páginas 147 y sigs.

La aparición de este importante cuerpo legal, tuvo una especial significación, al conllevar un cambio trascendental en los principios doctrinales en que se fundamentaba la legislación española de las Escuelas Clásicas y las cuales eran esencialmente represivos.

Con la elaboración y promulgación del conjunto de normas, denominado: "Ley de Vagos y Maleantes", en un momento histórico caracterizado por la efervescencia de ideas políticas, se introduce la significativa innovación de ubicar al lado de las penas las medidas de seguridad pre y postdelictuales.

El parlamentario Gómez de Aranda, en su defensa al Proyecto de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social expresó que la Ley de Vagos y Maleantes supuso un instrumento eficazísimo en el plano de la prevención ante delictus, intentando rescatar a la persona de situaciones de extravío social, con peligro de perderse en el más grave error que el delito significa; y dice, que si siempre es mejor prevenir que curar, tanto más importante será prevenir el delito por sus complejas y negativas consecuencias en todos los órdenes: 1º) con respecto a la persona que sufre directamente, como víctima, el daño del delito, 2º) en relación a la sociedad que padece por la transgresión -

del derecho y 3º) con respecto al propio delincuente, por el trauma moral que para el mismo significa la comisión del delito, por la pena que ha de cumplir y por las secuelas - del delito y de la pena.

Don Juan del Rosal (1) señala como aspectos positivos de este instrumento legal: 1º) el hecho de establecer medidas de seguridad con una doble finalidad: excluir de la vida pública a quienes demuestren no merecer la libertad y corregir, reeducar y readaptar; 2º) dosificar e individualizar las medidas a través de una ponderada valoración judicial de los índices mesuradores de la peligrosidad; 3º) ser congruente con el sentido orgánico del derecho penal y con la garantía jurídica de correcta aplicación, atribuyendo su jurisdiccionalidad a los Jueces de Instrucción o a los especialmente designados; 4º) ajuntar el procedimiento a un sistema de urgencia y simplificación ; 5º) la intervención de los órganos jurisdiccionales en la comprobación de los resultados del procedimiento, para cuya actividad se crean establecimientos especiales. Pero , lo que considera este autor como más importante, es la concepción de un tratamiento de la peligrosidad predelictiva-

---

(1) Juan del Rosal - La Personalidad del Delincuente en la Técnica Penal - Valladolid 1.953 - Página 121 y sigs.

y postdelictiva, en atención a lo cual escribe que la ley viene montada genuinamente en el principio de autor en vez de en el principio de hecho o de acción, constituyendo la expresión legislativa más audaz de realización del derecho penal de autor sobre tipos de carácter criminológico.

Aunque son muchas las críticas de que ha sido objeto la ley de vagos y maleantes, estas no pueden restarle el honor de haber sido instrumento legal especial pionero en la lucha contra el delito atendiendo muy especialmente la peligrosidad y la personalidad del delincuente, estableciendo normas , establecimientos y procedimientos para su tratamiento mediante medidas de seguridad, no solamente en España sino que ha sido y sigue siendo modelo exclusivo para similares legislaciones en muchos países Latinoamericanos, entre los cuales se encuentra Venezuela, con su vigente ley de vagos y maleantes, la cual tiene de común con la española no sólo su denominación sino el haberse inspirado en los mismos principios fundamentales que inspiraron a ésta.

Para la consideración de vagos y maleantes española hemos de seguir muy especialmente al Magistrado Alfonso Rodríguez Dranguet.

Luis Jimenez de Asúa escribe que: "El antecedente

teórico directo de esta construcción se halla en las doctrinas de Hugo Conti, que procura distinguir estos dos conceptos: delito y peligrosidad. El primero - dice - es una violación del orden jurídico, definido por la ley y juzgado según la misma; la segunda es una simple condición personal, que sólo representa una amenaza, y que, como condición personal que es, no puede ser definida por la ley. En consecuencia, Conti afirma que hacen falta dos procedimientos: uno penal y otro administrativo, y dos juicios o procesos: uno relativo al delito definido por la ley y otro para apreciar el estado peligroso resultante de un conjunto de hechos y circunstancias. Si exceptuamos el problema referente a la naturaleza del procedimiento, que para Conti es administrativo, y que para los modernos defensores de esta idea debe ser también penal, la similitud de sus construcciones no puede ser más ostensible. " (1)

En la Gaceta Oficial Española del 25 de abril de 1.933, aparece el proyecto de una ley de vagos y maleantes de carácter eminentemente defensivo escribe Rodríguez Dranguet y al cual le precede un preambulo, en el que se expo-

---

(1) Luis Jimenez de Asúa - El Nuevo Derecho Penal - Editorial Páez - 1.929.

ne que la demora de la reforma penal no ha de afectar a la parcial, y que preocupan la atención social ciertas costum bres antijurídicas ilegítimas, que carecen de determinación clara y precisa en las leyes penales, así como la actividad delictuosa del infractor y el peligro social que ello representa; la vagancia, considerada hasta ha poco como circun stancia agravante, hábitos permanentes, necesidad de atender más al delincuente que a la objetividad misma del delito. Para corregir esto se crean las medidas de seguridad que permitan, después del cumplimiento de la pena, desarrollar una acción social eficaz, compatible con la protección del individuo infractor. (1)

Este instrumento legal consideraba que quedaban su jetos a el : los vagos; los que completasen sus recursos a expensas de personas dedicadas a la prostitución, mendicidad o ejercicio de actividades ilegítimas, reputándose tales las que tienen por objeto actos prohibidos por la ley o contrarios al orden y moral públicos; los que no justificasen, al ser requeridos, la legítima procedencia del dine

---

(1) Alfonso Rodríguez Dranguet - Defensa Social - Tratamiento de los Peligrosos - Legislación de Vagos y Maleantes - Ley y Reglamento - Editorial Góngora - Madrid .  
Página 183 y siguientes.



ro o efectos hallados en su poder; los traficantes de efectos o sustancias de ilícito comercio; los que ocultasen su nombre o disimulasen su personalidad; los que usasen documentos de identidad falsos; los que dejasen de comparecer al llamamiento de las autoridades; los que infringieren reiteradamente leyes y disposiciones de policía y buen gobierno; los que habitualmente infringiesen las disposiciones sanitarias; los extranjeros que quebrantasen - orden de expulsión del territorio nacional.

Y continúa señalando el autor que la ley en su proyecto sujetaba también a los reincidentes o reiterantes - habituales en hechos penados como faltas en el Código y leyes penales, entendiendo por reincidente habitual al que, dentro del término de dos años, hubiese sufrido tres condenas por faltas penadas en el mismo capítulo del libro III del Código penal, y reiterante el que dentro del mismo período haya sido sancionado cuatro veces por hechos constitutivos de faltas.

Se estimaba reincidente el condenado por delito - que luego, por hecho del mismo orden, lo fuese por falta, y viceversa.

Igualmente el proyecto considera a los reinciden-

tes y reiterantes de toda clase de delito y a los criminalmente responsables como autores de delitos contra la Constitución y el orden público, falsedad, salud pública, falso testimonio, juegos y rifas, cohecho, aborto, asesinato, homicidio, lesiones, escándalo público, amenazas y coacciones, robo, hurto, estafa y usura, y de los delitos penados en las leyes especiales, cuando por la forma de su comisión, antecedentes o circunstancias personales del delincuente se revele la existencia habitual de actividad delictuosa.

El Capítulo 2º del proyecto contiene el procedimiento, el cual guarda analogía con el establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que se haga mención de autos de procesamiento ni de recursos; el Juez debería remitir las actuaciones a la Audiencia provincial con un informe en el cual se expresase resumiendo la resultancia de lo actuado, exponiendo los motivos en que funde la propuesta de pena y medida de seguridad o las de estas últimas que proponga al Tribunal. En la Audiencia sólo se celebraría vista cuando lo pidiesen las partes. Contra la sentencia se admitía el recurso de casación.

Cuando se decretase el confinamiento por el Tribunal la Autoridad administrativa competente designaría el

territorio o localidad en que debería tener efecto.

Las medidas de seguridad, de fijación de domicilio, de declararlo, etc., serían ejecutorias provisionalmente - hasta que recayese sentencia o resolución firme. Suspendida la guarda y protección de los hijos, se pondría en concimiento del Tribunal de menores o Juez para que acordasen lo procedente.

Para este autor el mayor defecto de que adolece es te proyecto es el que no penetró en la esencia del estado peligroso; que aspiraba a corregir; abandonó la prevención para crear figuras de delito y regló unas medidas de seguridad tenues y que no habrían de producir efecto por no atender primariamente a la corrección del peligroso ni a la defensa social; sólo se preocupó de un sector delincuente y de la necesidad cierta de cortar un mal; pero arrumbado el procedimiento adecuado. Volvió al concepto de nuestras antiguas leyes de estimar delito la vagancia. Era un proyecto judicial penal modesto, como ya hemos dicho. Sus métodos no hacían preciso al psiquiatra ni antropólogo, un hecho de enjuiciamiento sencillo y una sanción; la misma vigilancia a la autoridad recordaba la de nuestros viejos Códigos; el concepto tutelar es tímido. Su trascendencia jurídica no hubiese sido otra que la de las múltiples leyes

especiales que tenemos sobre explosivos, contrabando, etc. Al reincidente le trata con guante blanco; sólo habrían de declarar su domicilio o fijársele. Ni aun contiene la prohibición de frecuentar establecimientos de bebidas u otros análogos; nada respecto a la conducta que debía observar, apartamiento de focos de vida deletéreos para él. Cuando la reincidencia es ya severamente sancionada en múltiples Códigos y leyes, estimándola como índice de temibilidad, se olvida tal peligrosidad y la precisa eliminación e innocui zación de malvivientes.

El proyecto fué calificado de instrumento político, siendo duramente criticado por varios penalistas, entre los cuales se destacó Luis Jimenez de Asúa, quien, por encargo de una minoría parlamentaria, fué comisionado para que con la colaboración de su auxiliar, Don Manuel López Rey, hiciera un estudio exhaustivo del proyecto en cuestión. En el estudio se criticó el hecho de que se elevase a delito el ser vago y maleante, lo cual era inaceptable; así como tampoco podía aceptarse el hecho de que se considerase maleante al perseguido por la policía por el solo hecho de ocultarse de esta.

Sus críticas fueron oídas por el Gobierno el cual procedió a retirar el proyecto y a someter a discusión el

estudio recién elaborado sobre el mismo, que, de inmediato, fué considerado como un nuevo proyecto, precedido de un interesante preámbulo elaborado por el penalista Ruiz Funes , que, en opinión de Rodríguez Dranguet, resume el contenido de la ley de vagos y maleantes del 4 de agosto de 1.933, al señalar literalmente que: " La Comisión permanente de la - Presidencia del Consejo de Ministros ha examinado con todo detenimiento el proyecto de ley sobre vagos y maleantes, y luego de tomar en consideración la referida propuesta de Gobierno, estima necesarias las consideraciones previas que a continuación se exponen para razonar el criterio por ella adoptado.

Se establecen en este proyecto que ahora se somete a la deliberación y aprobación de las Cortes, varias categorías de estado peligroso: unas, sin delito; otras, derivadas del delito, de la reiteración y de la reincidencia criminales.

El concepto de estado peligroso significa la vehementemente presunción de que una determinada persona quebrantará la ley penal. Valora el delito como síntoma de una personalidad antisocial. Unas veces, producido el síntoma, es decir, el delito, se reacciona no sólo contra él, sino contra la actividad que revela y que sirve de base para creer fun-

dadamente que el delito cometido no es un episodio aislado y que si no se toman ciertas medidas asegurativas habría de repetirse sistemáticamente.

En otros casos se trata de corregir una actividad antisocial, inmoral y dañosa, que es índice seguro de una conducta reveladora de inclinación al delito.

En el primer caso de estado peligroso posterior al delito se sanciona el delito con la medida penal; pero es preciso corregir la actividad antisocial que revela, o poner al peligroso incorregible en condiciones de no dañar; es decir, adaptarlo o innocuizarlo.

En el segundo caso de estado peligroso sin delito es preciso emplear, para corregir el índice de peligrosidad y para prevenir los delitos futuros, iguales medidas de eura, adaptación e innocuización.

A tales propósitos responden las medidas de seguridad, dotadas de una doble eficacia: de índole individual, para convertir al peligroso en un elemento útil, destruyendo sus actividades antisociales, y de orden colectivo, para defender a la sociedad de esas actividades.

El título I de este proyecto de ley define en capítulos separados las categorías de estado peligroso sin de

lito y de los peligrosos criminales, consigna el repertorio de las medidas de seguridad e indica las que concretamente han de aplicarse a cada suerte de sujetos peligrosos.

Sólo alcanzan las disposiciones de la ley a los mayores de dieciocho años. Los menores de esa edad quedan sometidos a la acción correctiva de los Tribunales tutela res.

Las categorías de sujetos peligrosos quedan precisadas a base de actividades antisociales e inmorales y tienen un denominador común: el horror regular al trabajo y la vida parasitaria a costa del esfuerzo ajeno.

Figura en primer lugar en el proyecto la de los vagos habituales, es decir, los sujetos que no trabajan porque no quieren y revelan con su vagancia un índice de temibilidad y de peligrosidad. Junto a ellos se incluyen los que viven del esfuerzo ajeno: como los rufianes y proxenetas que se sustentan del tráfico ilícito de mujeres o de las ganancias que éstas obtienen con la prostitución o de la mendicidad ajena o de la explotación de menores, a los que dedican a profesiones ilícitas, incompatibles con el deber de tutela que la moralidad y cuidado espiritual de los menores exige, o hacen sus ganancias del ilícito

ejercicio de juegos prohibidos.

Junto a estas categorías estrictamente parasitarias, figuran incluídos en el proyecto los ebrios y toxicómanos habituales que se encuentran en un estado patológico, propicio a toda suerte de actividades antisociales y criminales, por causas originariamente voluntarias y cuya situación exige medidas curativas adecuadas. Y junto a ellos los traficantes en drogas y sustancias tóxicas de ilícito comercio, que viven de explotar las tendencias - morbosas e irreprimibles de los primeros y los que comercian en efectos también de ilícito comercio, como las armas, que son los colaboradores, con ánimo de lucro y en el ejercicio de una actividad ilegítima, de la forma más temible de delincuencia, la delincuencia asociada para cometer delitos de terrorismo, contra las personas y las cosas cuyo peligro es evidente.

Hay otras categorías de sujetos peligrosos que encuentran su índice de peligrosidad en las posiciones ilegí<sup>ti</sup>mas que adoptan ante la autoridad constituída, y en cuya conducta se revela un verdadero índice de temibilidad, en el sentido de que muestran síntomas acusadores de su propó<sup>s</sup>ito de quebrantar las leyes. Son los incluídos en los nú<sup>m</sup>meros 3º, 8º y 9º del artículo 2º.



Finalmente habla el número 10 del propio artículo, con claridad que excluye el comentario, de los que observan una conducta reveladora de inclinación al delito, y enumera como síntomas de esa conducta, suficientemente característicos, el trato asiduo con delincuentes y personas de mal vivir, la frecuentación de lugares donde se reúnan maleantes, la sistencia reiterada a casas de juegos prohibidos o la comisión reiterada y frecuente de faltas policiales.

El hecho de cometer contravenciones, que aisladamente carecen de importancia, puede significar, por su contumacia, un verdadero estado de criminalidad, que revele una personalidad antisocial y peligrosa profesionalizada en las actividades ilegítimas.

El artículo 3º trata del estado peligroso posterior al delito y lo concreta en dos categorías: la de los reincidentes (que recaen específicamente en el mismo delito o en los delitos contra un mismo bien jurídico) y la de los reiterantes que cometen delitos de un modo genérico. Pero la simple repetición del delito no basta para declararlos peligrosos; se precisa la presunción de habitualidad criminal.

Es decir, la creencia de que han convertido el delito en una profesión y son incapaces de ordenar su vida a ninguna actividad honesta. Igualmente incluye este artículo entre los peligrosos a aquellos sujetos que por un solo delito revelaron un índice acusado de peligrosidad, cuya declaración queda al arbitrio del Tribunal que los enjuicia. Dicho Tribunal ha de estimar el peligro a base del valor sintomático del delito sometido a su enjuiciamiento.

Las medidas de seguridad del artículo 4º tienden a corregir a los peligrosos internándolos en una casa de trabajo (medida primera) o a curarlos (medida tercera) o a impedir sus actividades antisociales, separándolos del medio propicio a su peligrosidad o situándolos en un medio distinto que favorezca sus hábitos sociales (medida quinta y sexta) o a eliminarlos de la convivencia peligrosa (medida cuarta) o a separarles de la sociedad colocándolos en una situación no dañosa (medida segunda) o a tutelarles y protegerlos por órganos adecuados y aptos de la autoridad, proporcionándoles un trabajo eficaz y correctivo (medida séptima) o a hacer que el patrimonio ilegítimamente adquirido, soporte una disminución legítimamente impuesta (medida octava).

Declara el artículo 5º el principio de la jurisdiccionalidad de las medidas, dando al peligroso la garantía de que le serán impuestas por los Tribunales y sustrayéndolas, por tal declaración, del ámbito más o menos ambiguo de las actividades policíacas. Con ello se salvaguardan las garantías que el peligro pudiera merecer como ciudadano.

Las medidas se aplican en el capítulo II con carácter colectivo y adecuándolas a cada categoría de peligrosos. Como la peligrosidad no es el producto de una singular actividad antisocial, sino de la concurrencia de varias actividades de esta clase, se aplican a cada sujeto peligroso aquel grupo de medidas capaces de destruir sus distintos índices de temibilidad. Estas varias medidas no serían eficaces si no se cumplieran todas, puesto que cooperan a finalidades distintas y por su índole heterogénea, la aplicación sólo puede hacerse sucesivamente. Tales son los principios inspiradores del capítulo 3º.

Se sanciona, asimismo, en este capítulo con una pena igual a la establecida en el Código para el quebrantamiento de la condena penal, análogo quebrantamiento de las medidas asegurativas.

El título II del proyecto trata del procedimiento. Las características de este procedimiento son: la correccionalización de las medidas, entregando su pronunciamiento a los actuales Jueces de instrucción o a aquellos otros especializados que para tales funciones se nombren ; la intervención en el procedimiento del Ministerio fiscal, las garantías del peligroso, permitiéndole aportar toda suerte de pruebas, ser asistido de un Abogado defensor, recurrir en apelación contra la resolución judicial ante la Audiencia correspondiente o ante las Salas que al efecto se designen y reclamar ante el Juez de instrucción de su residencia, contra todo exceso cometido en la ejecución de la medida.

La defensa social, fundada en la eficacia de esta ley, queda garantizada con el carácter sumario del procedimiento, con la brevedad de sus plazos, con la eliminación de la competencia por razón de lugar y con las medidas provisionales que el Juez puede adoptar con el supuesto peligroso, de acuerdo con el artículo 12.

Las medidas de seguridad pueden ser aplicadas de oficio por el Tribunal sentenciador a los reincidentes y reiterantes, presuntos de habitualidad criminal y a los

delincuentes peligrosos; pero como tienen un carácter distinto de la pena, especialmente por lo que atañe a su origen, deberán imponerse en fallo separado.

El proyecto consta de un número reducido de artículos, y se ha procurado conseguir en él la máxima sobriedad. Su eficacia, en definitiva, depende tanto de sus disposiciones como de la preparación y de la conciencia de los órganos que la apliquen. Sin la acción de esos órganos no sería nada. Con su cooperación inteligente y vigilante puede lograrse destruir la corrupción antisocial que germina en los peligrosos, en vez de dejar que se convierta en una corrupción sin esperanza de remedios".

El proyecto elaborado por Jimenez de Asúa y Manuel López Rey, con algunas modificaciones, se convirtió en la Ley de Vagos y Maleantes. Las reformas introducidas fueron fundamentalmente las siguientes: se agregó un párrafo tercero al artículo 1º de la ley, referente a que menores sujetos a las prescripciones de la ley, al cumplir los 18 años, continuarán bajo el régimen tutelar de la legislación de menores, a no ser que incidiesen en la comisión de hechos prohibitivos, en cuyo caso, atendida su mayoría de edad predelictual, queda cancelada la jurisdicción del Tri

bunal de Menores o inaplicable tal legislación, a que venía sometido. El número cuarto del artículo 2º del proyecto no comprendía la mendicidad propia o individual, sino a los que vivan de la mendicidad ajena o exploten menores de edad.

El párrafo cuarto quedó redactado así: los mendigos profesionales y los que vivan de la mendicidad ajena o exploten a menores de edad, a enfermos mentales o lisiados.

Se modificó el artículo 4º del proyecto que fijaba como duración de la medida de seguridad de internado en esta blecimiento de régimen de trabajo, como tiempo máximo, el - de un año, que en la ley se amplía a tres.

Se introdujo en la ley una nueva y acertada medida en el artículo 4º, número noveno consistente en la incauta ción y pérdida, en favor del estado, de dinero o efecto. Se adicionó un segundo párrafo al artículo 7º del proyecto, re ferente a que los penados que deban cumplir medidas de segu ridad no se les aplique el beneficio de la condena condicio nal ni de la libertad provisional

Con estas reformas y con algunas otras, introduci - das por las Cortes el 26 de julio de 1933 la Gaceta Oficial Española del 5 de agosto de 1.933 publica la Ley de Vagos y

Maleantes del 4 de agosto de 1.933.

Este instrumento legal, breve en su exposición , consta de dos títulos, tres capítulos y veintiún artículos.

#### TITULO PRIMERO

Estados Peligrosos y Medidas de Seguridad.

#### CAPITULO PRIMERO

Categorías de Estado Peligroso.

Artículo 1º.-"Quedan sometidos a las prescripciones de la presente ley las personas de ambos sexos, mayores de 18 años, que se enuncian en los artículo 2º y 3º de la misma."

Los menores de edad en quienes concurren las circunstancias previstas en la presente ley serán puestos a disposición del Tribunal tutelar correspondiente, donde se halle constituido, y, en su defecto, a la del Juez de primera instancia, que tomará las medidas de guarda, educación y enmienda previstas en la ley reguladora de dichos Tribunales de menores.

Cuando el menor de 18 años sujeto a acción reformativa por aplicación de la Ley de Protección de menores , llegase a este límite de edad hallándose sometido al correspondiente tratamiento correcional preventivo, continúa

rá bajo dicho régimen tutelar en los términos y modos establecidos por los artículos 18 y 19 y concordantes de la referida ley especial.

Si durante este período de readaptación incidiere después de cumplir los 18 años en algunos de los casos previstos en la presente ley, se entenderán canceladas la jurisdicción del Tribunal de menores y las medidas de corrección adoptadas por éste para quedar sometido a las cauciones y procedimientos determinados en las normas que a continuación se expresan.

En este primer artículo de la ley se determina quienes son las personas que quedan sujetas a ellas. La legislación penal considera como sujetos a la misma a quienes hayan alcanzado la edad de 16 años, pero la Ley de Vagos y Maleantes, amplía su competencia hasta los 18 años, considerando no ya al menor delincuente sino al menor peligroso.

Artículo 2º.-"Podrán ser declarados en estado peligroso, y sometidos a las medidas de seguridad de la presente ley:

Primero. Los vagos habituales.

Segundo. Los rufianes y proxenetas.

Tercero. Los que no justifiquen, cuando legítima-



mente fueren requeridos para ello por las Autoridades y sus Agentes, la posesión o procedencia del dinero o efectos que se hallaren en su poder o que hubieren entregado a otros para su inversión o custodia.

Cuarto. Los mendigos profesionales y los que vivan de la mendicidad ajena o exploten a menores de edad, a enfermos mentales o a lisiados.

Quinto. Los que exploten juegos prohibidos o cooperen con los explotadores a sabiendas de esta actividad ilícita, en cualquier forma.

Sexto. Los ebrios y toxicómanos habituales.

Séptimo. Los que para su consumo inmediato suministren vino o bebidas espirituosas a menores de catorce años en lugares y establecimientos públicos o en instituciones de educación e instrucción y los que de cualquier manera promuevan o favorezcan la embriaguez habitual.

Octavo. Los que ocultaren su verdadero nombre, disimularen su personalidad o falsearen su domicilio, mediante requerimiento legítimo hecho por las Autoridades o sus A - gentes, y los que usaren o tuvieran documentos de identidad falsos u ocultaren los propios.

Noveno. Los extranjeros que quebrantaren una orden de expulsión del territorio nacional.

Décimo. Los que observen conducta reveladora de inclinación al delito, manifestada: por el trato asiduo con delincuentes y maleantes; por la frecuentación de los lugares donde éstos se reúnen habitualmente; por su concurrencia habitual a casas de juegos prohibidos, y por la comisión reiterada y frecuente de contravenciones penales."

Artículo 3º.-"También estarán sometidos a los preceptos de esta ley:

Primero. Los reincidentes y reiterantes de toda clase de delitos en los que sea presumible la habitualidad criminal.

Segundo. Los criminalmente responsables de un delito, cuando el Tribunal sentenciador haga declaración expresa sobre la peligrosidad del agente."

Estos dos artículos son considerados como la columna vertebral de todo el cuerpo legal, pues todos los demás, guardan estrecha relación con estos. Facultan al juez para que determine si el sujeto ha de ser objeto de medidas de seguridad, por encontrarse en situación de estado peligroso

o no; por eso emplea la expresión: " podrán ser declarados"; haciendo una enumeración de las categorías de delincuentes o de presuntos delincuentes considerados por la ley.

## CAPITULO SEGUNDO

### Medidas de Seguridad

Artículo 4º.-"Son medidas de seguridad:

Primera. Internado en un Establecimiento de régimen de trabajo o colonias agrícolas por tiempo indeterminado, que no podrá exceder de tres años.

Segunda. Internado en un establecimiento de custodia por tiempo indeterminado no inferior a un año, y que no podrá exceder de cinco años.

Tercera. Aislamiento curativo en casas de templanza, por tiempo absolutamente indeterminado.

Cuarta. Expulsión de extranjeros del territorio nacional.

Quinta. Obligación de declarar su domicilio o de residir en un lugar determinado por el tiempo que establezcan los Tribunales.

Sexta. Prohibición de residir en el lugar o territorio que el Tribunal designe.

La duración de esta medida será fijada por los Tri  
bunales.

El sujeto prevenido con esta medida queda obligado a declarar el domicilio que escoja y los cambios que experii  
mente.

Séptima. Sumisión a la vigilancia de la autoridad.

La vigilancia será ejercida por Delegados especia-  
les y tendrá carácter tutelar y de protección.

Los Delegados cuidarán de proporcionar trabajo, seg  
ún su aptitud y conducta, a los sujetos a su custodia.

La duración de esta medida será de uno a cinco a-  
ños, y podrá ser reemplazada por caución de conducta.

No podrán ser fiadores los ascendientes, descendientes  
y el cónyuge.

Octava. Multa de 250 a 10.000 pesetas, que se regul  
lará conforme a los preceptos del vigente.Código penal.

Novena. Incautación y pérdida, en favor del Estado,  
de dinero o efectos."

Este artículo establece cuales son las medidas de  
seguridad que han de aplicarse. No se precisa el mínimo de

internamiento en los establecimientos de régimen de trabajo a que se refiere el Ordinal 1º, dejándolo al arbitrio de la Autoridad Judicial; no ocurriendo lo mismo con el internamiento en establecimientos de custodia, pues el Ordinal 2º establece taxativamente que el mismo no será por tiempo inferior al año, ni excederá de los 5 años.

No se hace ninguna referencia al internamiento propio para jóvenes peligrosos que hayan alcanzado una edad superior a los 18 años; ni tampoco para el de mujeres, los cuales, por su condición de tales requieren establecimientos especiales.

Los incisos quinto y sexto de la norma, establecen medidas indeterminadas que los jueces podrán considerar como concluídas cuando lo estimen conveniente. Se acuerda que la vigilancia será ejercida por Delegados Especiales y no por la custodia policial destinada a delincuentes comunes.

Artículo 5º.-"Las medidas de seguridad sólo podrán ser aplicadas por los Tribunales.

Los Tribunales, previo informe del establecimiento sobre la conducta y corrección del vago o maleante, acor

darán poner fin a las medidas de tiempo indeterminado, transcurrido el mínimo legal, si lo tuviera, y antes del máximo que esta ley establece.

Asimismo, teniendo en cuenta los informes de los Decretos y de la Autoridad administrativa, podrán decretar el cese de todas las restantes medidas de seguridad, así como la substitución de unas por otras."

Esta norma establece cuales son las autoridades que han de aplicar las medidas de seguridad, en que presupuestos han de fundamentarse y que procedimientos o decisiones podrán adoptar; estas autoridades, según la ley estarán constituidas exclusivamente por los Tribunales.

### CAPITULO TERCERO

#### Aplicación de las medidas de seguridad.

Artículo 6º.-"Las medidas de seguridad se aplicarán a las categorías de sujetos peligrosos, de la forma siguiente:

1º.- A los vagos habituales se les impondrá, para - que las cumplan todas sucesivamente, las siguientes medidas:

a) Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola.

b) Obligación de declarar su domicilio o residir en un lugar determinado.

c) Sumisión a la vigilancia de Delegados.

2º.- A los rufianes y proxenetas, a los mendigos - profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos mentales o lisiados, se les aplicarán, para que las cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes:

a) Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola.

b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio, y obligación de declarar su domicilio.

c) Sumisión a la vigilancia de Delegados.

3º.- A los que no justifiquen la posesión legítima de dinero o efectos, se les aplicarán simultáneamente las dos primeras siguientes medidas y, sucesivamente, las dos restantes.

a) Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola.-

b) Pérdida del dinero y efectos incautados.

c) Obligación de declarar su domicilio o de residir en un lugar determinado.

d) Sumisión a la vigilancia de Delegados.

4º.- A los que exploten juegos prohibidos o cooperen con los explotadores, a sabiendas de esta actividad ilícita, en cualquiera forma, se les impondrá, para su cumplimiento simultáneo, las tres primeras medidas siguientes, y, sucesivamente, todas las restantes:

a) Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola.

b) Pérdida de dinero y efectos incautados.

c) Multa de 250 a 10.000 pesetas.

d) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio, y obligación de declarar su domicilio.

e) Sumisión a la vigilancia de Delegados.

5º.- A los ebrios y toxicómanos habituales se les impondrá el aislamiento curativo en casas de templanza.

6º.- A los que sin estar autorizados legalmente traficaren en efectos o sustancias de ilícito comercio, se les aplicarán las siguientes medidas de seguridad, para que las cumplan simultáneamente:

a) Prohibición de residir en lugar o territorio determinado, con obligación de declarar su domicilio.

b) Pérdida de efectos incautados.



c) Multa de 2.500 a 10.000 pesetas.

d) Prohibición para el ejercicio de determinada industria, comercio o profesión.

e) Sumisión a la vigilancia de Delegados.

Cuando se trate de traficantes de armas o de personas que comercien en objetos peligrosos, se les impondrá primeramente el internamiento de custodia y las prevenciones - b) y c) de este número, y, sucesivamente, las restantes."

7º.- A los que ocultaren su verdadero nombre, disimularen su personalidad o falsearen su domicilio, mediante requerimiento legítimo, y a los que usaren o tuvieran documentos de identidad falsos u ocultaren los propios, se les impondrán las medidas siguientes, para que las cumplan to - das sucesivamente.

a) Obligación de declarar su domicilio o de resi - dir en un lugar determinado.

b) Multa de 250 a 10.000 pesetas.

c) Sumisión a la vigilancia de Delegados.

Cuando la ocultación del nombre, disimulo de la personalidad, el falseamiento del domicilio, el uso o tenencia de documentos de identidad falsos o la ocultación de los proprios tuviesen por objeto enmascarar una actividad peligrosa

o criminal, se impondrá, además de las anteriores medidas de seguridad, y sin perjuicio de las penas que por delito específico le correspondan, el internamiento en establecimiento de custodia."

8º.- A los que observen conducta reveladora de inclinación al delito, manifestada por los síntomas peligrosos q' define el apartado 10 del artículo 2º de la presente ley, se les impondrán las siguientes medidas, para su cumplimiento - sucesivo:

- a) Internado en un establecimiento de trabajo o en un establecimiento de custodia, a elección del Tribunal.
- b) Prohibición de residir en un lugar o territorio.
- c) Sumisión a la vigilancia de Delegados.

9º.- Los extranjeros peligrosos serán expulsados del territorio nacional, y cuando quebrantaren la orden de expulsión serán internados en un establecimiento de custodia - por un año.

Artículo 7º.- "Los reiterantes, reincidentes y delincuentes peligrosos serán internados en un establecimiento de custodia, después de cumplir la pena que les fuere impuesta por sentencia judicial.

Las medidas de seguridad que los Tribunales impongan, a tenor de lo prevenido en este artículo y el 3º de la presente ley, habrán de cumplirse por el reo inmediatamente después de extinguir las penas aplicadas por el delito o de litos sancionados. Por ningún motivo se concederán los bene ficios de la condena condicional y de la libertad provisio-  
nal cuando se hubiere declarado el estado peligroso del cul pable y en tanto no se revoque totalmente la medida de segu ridad impuesta, cualquiera que sea su naturaleza."

Artículo 8º.-"El quebrantamiento de la obligación de declarar el domicilio o de residir en un lugar determina do, de la prohibición de vivir en un sitio o territorio y - de la sumisión a la vigilancia de la Autoridad, será casti-  
gado con la pena de arresto mayor."

En forma metódica y sistemática, estos artículos, establecen cuales son las medidas aplicables a cada cate-  
goría de sujetos peligrosos.

## TITULO SEGUNDO

### Procedimiento.

Artículo 9º.-"Cuando un Tribunal dicte sentencia-  
por delito contra un reincidente o reiterante en el que sea presumible la habitualidad criminal o contra un reo que es-

time peligroso, aplicará de oficio la medida o medidas de seguridad correspondientes, haciéndolas constar en fallo separado.

Cuando el estado de peligrosidad haya de ser declarado por consecuencia de la comisión de un delito, en cualquiera de los casos que previene al artículo 3º de esta ley. los Tribunales cuidarán de considerar el hecho, los antecedentes penales del reo, los motivos del acto ejecutado y las circunstancias modificativas y cualificativas del delito.

Podrán estimarse también como síntomas de peligrosidad los hechos reguladores de actividad antisocial, aunque no estuvieren sancionados como delictivos en el momento de su ejecución.

Los hechos que no constituyen delito por inidoneidad del medio, inexistencia del objeto, no aceptación de mandato o desistimiento de la acción emprendida, podrán ser asimismo susceptibles de examen y consideración a los efectos de declarar el estado peligroso y la consiguiente aplicación de las medidas de seguridad, aunque en razón de ellos se hubiese dictado auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria.

En los juicios criminales vistos ante el Tribunal del Jurado, la declaración del estado de peligrosidad y co -

responsable imposición de las medidas asegurativas es de la exclusiva competencia de los Jueces de Derecho."

Artículo 10º.-"Serán competentes para declarar el estado peligroso de los sujetos comprendidos en el artículo 2º de esta ley y para aplicar las respectivas medidas de seguridad los actuales Jueces de instrucción o los que especialmente sean designados para estas funciones."

Artículo 11º.-"La competencia no se atribuye por rázón del lugar, sino por la presentación de denuncia de las Autoridades. Se exceptúa el caso de denuncia presentada por los particulares, para cuyo conocimiento será competente el Juez del lugar en donde se suponga que el denunciado ejerce sus actividades reputadas peligrosas"

Artículo 12º.-"Recibida la denuncia, el Juez oírál al presunto peligroso sobre los hechos que la motiven, sobre su identidad personal, estado, profesión, antecedentes y manera de vivir durante los cinco años anteriores, consignándose circunstancialmente las respuestas que diere, y reclamación de los informes y antecedentes de conducta.

Si dejase de comparecer sin probar justa causa, será declarado rebelde y se decretará su prisión provisional.

También podrá decretarse su detención si no pudiese ser citado o si careciese de residencia habitual.

En estos casos, así como en todos aquellos que revelen un estado de inminente peligrosidad, el Juez podrá decretar la prisión preventiva.

Todas estas diligencias, en las que será parte el Ministerio fiscal desde su iniciación, habrán de ser practicadas en el término de diez días.

Cuando se siga el procedimiento ante un Juzgado de instrucción criminal de distrito que no radique en capital de provincia, el Juez participará por telégrafo su incoación al Presidente y al Fiscal de la Audiencia provincial respectiva, dentro de las veinticuatro horas después de la admisión de la denuncia o de la apertura de oficio, con exposición precisa del asunto.

El Fiscal notificado podrá intervenir personalmente o por sus auxiliares delegados, así como también mediante escritos.

En ningún caso se paralizará el procedimiento, aunque no actúe el Ministerio público, y el Juez practicará de oficio las diligencias necesarias, dentro de los plazos

previstos, hasta que se termine el expediente por resolución motivada."

Artículo 13.-" Recibidos los antecedentes e informes reclamados y aquellos que la Policía facilite de oficio y practicadas las demás comprobaciones que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio fiscal, estime procedentes, se dará vista de todo lo actuado al presunto peligroso, quien podrá, dentro del término de cinco días, proponer las pruebas que estime conducente a su descargo y que ~~son~~ pertinentes.

Desde este momento procesal el peligroso podrá hacer designación de Procurador que le represente y Letrado que lo defienda o pedir al Juez que los nombre de oficio.

El Ministerio fiscal, dentro de este segundo plazo, podrá proponer las pruebas complementarias determinadas por las excusatorias del imputado.

También el Juez puede acordarlas de oficio.

Las pruebas admisibles sólo podrán tener por objeto:

Primero. La demostración de que el denunciado ha vivido, durante los cinco años anteriores, de un trabajo o medio de subsistencia legítimo.

Segundo. La inexactitud de los hechos que consten en el expediente y la tacha de los testigos que la hayan aducido."

Artículo 14.-"El Juez, practicadas las pruebas , oirá al Ministerio fiscal y al presunto peligroso en un plazo improrrogable de diez días comunes, durante el cual producirán por escrito las alegaciones procedentes, que se unirán al expediente.

Si ambas partes o cualquiera de ellas dejare de utilizar este trámite, se le tendrá por decaído en su derecho y el expediente seguirá el curso debido.

Transcurrido dicho término, y dentro de los tres días siguientes, el Juez dictará resolución en forma de sentencia, en la cual, después de consignar los hechos probados, definirá la categoría peligrosa del sujeto y la medida o medidas de seguridad que le sean aplicables, o en la que declare no haber lugar a ellas por falta de condiciones determinantes del estado de peligrosidad o por ser infundada la denuncia.

La resolución del Juez se notificará al declarado peligroso y al Ministerio fiscal al siguiente día de dictada.



Nadie podrá ser parte en esta clase de procedimientos, ni el mismo denunciante.

Cuando se rehace la denuncia por infundada, podrá el Tribunal ordenar se proceda de oficio o a instancia del supuesto peligroso contra el particular que la hubiere presentado, caso de ser aquélla constitutiva de delito."

Artículo 15.-"Contra la resolución final del Juez-sólo procederá recurso de apelación ante la Audiencia provincial correspondiente o ante las Salas que al efecto se designen.

El recurso podrá ser ejercitado por el Ministerio fiscal y por el interesado y en el plazo de tres días, a contar desde la notificación.

El Juez emplazará a las partes que comparezcan en el Tribunal Superior dentro del quinto día."

Artículo 16.-"Las partes podrán proponer al Tribunal y éste decretar, si lo estima pertinente, que se reitere ante el mismo el examen de alguno de los testigos y la ampliación de las diligencias practicadas por el Juez.

La Sala, además, podrá decretar de oficio las diligencias que estime procedentes y nueva audiencia del peli -

groso ante el Tribunal.

Las diligencias acordadas se practicarán con o sin intervención de las partes, según el Tribunal determine.

Contra el acuerdo del Tribunal no se dará recurso alguno.

Todas estas diligencias se actuarán en el término de diez días, y dentro de los cinco siguientes se celebrará vista oral, a puerta cerrada, con o sin la presencia del interesado, si éste renunciare a ello o por cualquiera otra causa dejare de asistir.

La resolución, en forma de sentencia, se dictará - dentro de tercero día, y contra ella no procederá recurso alguno, salvo el juicio de revisión para la confirmación, revocación, transformación o cese de todas o algunas de las medidas de seguridad, a tenor del procedimiento que establece en los artículos siguientes.

La ejecución de las medidas de seguridad corresponde al Tribunal que las hubiere decretado, y serán de aplicación las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento criminal y demás complementarias sobre la ejecución de sentencias firmes, en todo lo que especialmente no se halle modificado por la presente Ley y Reglamento que para su debido cumplimiento se dicte."

Artículo 17.- "La revisión de los juicios de asignación asegurativa corresponde al Tribunal de Apelación que hubiere decretado las medidas de seguridad. El Ministerio fiscal será siempre parte en esta clase de procedimientos de revisión.

Los Jefes o Directores de los establecimientos de custodia, trabajo, colonias agrícolas, asilos de curación, así como las Autoridades y sus Delegados especiales que tuviesen a su cargo las obligaciones correspondientes al tratamiento y vigilancia de los peligrosos, informarán periódicamente al Tribunal de mérito, en los plazos y de la manera que dispongan los respectivos Reglamentos sobre los efectos de las medidas de seguridad en cada uno de los sujetos peligrosos sometidos a ellas.

El Tribunal podrá comprobar por sí mismo, en la forma que considere más conveniente y eficaz, los resultados progresivos del tratamiento.

Mediante el juicio de revisión, corresponde al Tribunal revocar, confirmar, substituir o prolongar las medidas de seguridad que hubiere acordado.

La revisión tendrá lugar de oficio o a instan -

cia de parte, pero nunca podrá iniciarse antes del año, a contar desde que hubieren comenzado a cumplirse aquéllas.

Cuando el límite de la medida no exceda de un año, el Tribunal, de oficio, examinará, tres meses antes del vencimiento del término los antecedentes de cada expediente particular, para acordar, si procediere, la prórroga de la misma, que en ningún caso podrá exceder del límite máximo legalmente prevenido.

Una instancia de revisión no será admitida a examen ni se iniciará de oficio en tanto no transcurra un año desde la deliberación precedente.

La acción de revisión corresponde al Ministerio fiscal y al presunto peligroso o sus representantes legales.

La resolución que recaiga en estos incidentes de ejecución adoptará la forma de un auto motivado, que se notificará a las partes.

Todas las medidas de seguridad, de tracto continuo, que a tenor del artículo 6º de esta ley correspondan a cada tipo de peligrosidad y hayan de cumplirse sucesivamente, son susceptibles de ser revisadas dentro de

su respectivo período de duración, según las reglas y plazos que el presente artículo establece.

Los sujetos peligrosos sometidos a vigilancia de la Autoridad estarán obligados a cumplir las disposiciones que los Delegados adopten, en uso de sus atribuciones tutelares.

Si las desobedeciesen reiteradamente o demostraren con sus actos la ineficacia de la medida, el Tribunal la revisará y podrá sustituirla por la de internamiento en cualquiera de sus modalidades. En este caso, el tiempo transcurrido en la sumisión a la vigilancia de los Delegados no se computará en el de la duración de la medida transformada.

La misma norma regirá cuando se quebrantare la prohibición de residir en determinado lugar o territorio, o se hiciera falsa declaración de domicilio."

Artículo 18." El sujeto a medidas de seguridad podrá recurrir ante el Juez de instrucción de su residencia de todo exceso o abuso que respecto del mismo se cometiese en la ejecución de la medida acordada.

El Juez podrá, previo informe de la Autoridad

encargada de cumplimentarla, y oído el Fiscal, acordar las disposiciones oportunas para corregirlos, sin perjuicio, en su caso, de las sanciones que procedan, a cuyo fin se pondrán los hechos en conocimiento de la Autoridad superior, y si resultase la existencia del delito, se procederá a la instrucción del correspondiente sumario."

Artículo 19.-" Las medidas de seguridad prescribirán:

a) A los diez años, si se trata de internamiento en Establecimiento de custodia, de trabajo o en colonias agrícolas.

b) A los cinco años, si se trata de internamiento en Asilos curativos de templanza para bebedores y toxicómanos, o de sumisión a la vigilancia de Delegados.

c) A los tres años, en cualquier caso.

El término de prescripción comienza a contarse desde el día en que quedó firme la resolución que se impuso o desde aquel en que se hubiere interrumpido irregularmente la ejecución de la medida.

Si ésta fuere consecutiva de una pena, se computará el término desde la extinción de la condena.

Antes de expirar el término de prescripción pue de acordar el Tribunal, ya de oficio o a instancia del Ministerio fiscal o de parte legítima, una nueva medida que substituya a la incumplida.

En todo caso, los plazos de prescripción esta - blecidos en el presente artículo quedan interrumpidos si el peligroso fuese condenado por razón de delito.

La amnistía, el indulto o el perdón de la parte ofendida no afectarán al cumplimiento y extinción de las medidas de seguridad, salvo que la ley en que la amnis- tía se conceda dispusiere especialmente lo contrario."

Artículo 20.-" Se establecerá en el Ministerio de Justicia, en las capitales de Audiencia territorial y - en la Dirección General de Seguridad y Centros que ésta designe los registros especiales que sean necesarios - con arreglo al Reglamento que se dicte"

Artículo 21.-"Los Ministerios de Justicia y Go- bernación quedan autorizados para dictar las disposiciones complementarias precisas para el cumplimiento de esta ley."

El cuerpo legal le consagra 13 artículos a la

consideración del aspecto procedimental que han de seguir las autoridades judiciales para la aplicación de las medidas; el cual es debidamente complementado con su correspondiente Reglamento.

La garantía del peligroso la constituye el propio Juez, a quien se puede dirigir aquel en caso de considerar o de estimar que no es objeto de un adecuado tratamiento, para lo cual la autoridad judicial habría de tener muy en cuenta su condición tutelar y regeneradora .

La ley acoge el principio de regeneración del peligroso, realizada por el mismo, una vez que haya transcurrido cierto tiempo sin incidir en sus hábitos delictuosos, lo que hace presumible que la intervención del Estado sea ya innecesaria.

La Ley de Vagos y Maleantes de 1.933 fue objeto de modificaciones y reformas el 23 de noviembre de 1935, el 4 de mayo de 1.948, el 15 de julio de 1.954 , el 24 de abril de 1.958 y en el año 1.963.

Reglamento del 3 de mayo de 1.935.-

Para regular la aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes, en la Gaceta Oficial del 5 de mayo de 1.935,



aparece el "Reglamento para la Aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1.933", el cual consta de 2 títulos, 7 capítulos y 128 artículos.

Rodríguez Dranguet, en las consideraciones que califica como "Juicio Sintético" hace los siguientes comentarios en relación con este Reglamento:

" El artículo 1º se limita a reforzar los conceptos de rufián y proxeneta: A) Tenedor de dinero sin justificación. B) Determina cuándo el ebrio y toxicómano es peligroso. C) Y el que suministra bebida a menores. D) Subsana la omisión de la ley de no haber incluido en la enumeración del artículo 2º, como peligrosos, a los traficantes de objetos o sustancias de ilícito comercio, con lo que esta figura queda ya delineada en su categoría y sanción, e incluye como nuevos peligrosos, en el inciso F) , a los que facilitan la emigración e inmigración clandestina e introducción o exportación de cosas prohibidas, con fines ilícitos o atentatorios a la seguridad del Estado - contrabandistas, explotadores de emigrantes, gentes que viven de estos manejos.

Expone que no es vago el que no trabaja por causas independientes de su voluntad, concepto negativo re-

forzador del positivo jurisprudencial.

En el artículo 2º establece cortapisa al arbitrio de los Tribunales, determinando que los autores de hechos inidóneos que no aceptaron el mandato o desistieron de la acción, para ser declarados peligrosos deben haber intervenido con anterioridad, en dos ocasiones, por dos veces, en hechos como los relacionados en el expediente que se siga contra ellos. Tal precepto viene, en realidad, a anular el de la ley - párrafo penúltimo del artículo 9º-, - por la dificultad de contrastar la comisión del acto anterior inidóneo en el medio, en el objeto, etc., ya que de ellos, por no ser constitutivos de delito y consiguiente absolución o sobreseimiento, no queda constancia en ningún registro; únicamente en algún caso excepcional obrarán antecedentes en los policíacos, pero sólo indicativos, no expresando con dud debidos detalles la acción anterior y surgirá la dificultad que haga se pueda apreciar esta reiteración nueva.

El Reglamento previene que el personal de los establecimientos se seleccione entre funcionarios que acrediten cursos de especialización en la Escuela de Criminología, Instituto de Estudios Penales o conocimientos peda

gógicos. Igualmente, el de vigilancia y custodia ha de tener en cuenta el procedimiento tuitivo, que ha de observarse con los internos en todo momento; por tanto, las sanciones que se les impongan han de ser de carácter moral. Se establecerán anexos psiquiátricos, que observarán biológicamente a los internos, reconstituyendo su personalidad pasada y orientando juicios sobre la futura.

Los sujetos a medidas restrictivas de libertad referentes a residencia, deben siempre presentarse a la Autoridad judicial del lugar donde hayan de fijar el domicilio, y también al Delegado, si existiere. Entonces comienza la acción tutelar de las Autoridades en esta esfera de vigilancia discreta y de protección en todo caso, moral y física. Este período es acaso de mayor importancia definitiva, moralmente, que el anterior de internamiento, pues en libertad el ya casi ex peligroso, es cuando, regenerado, se convierte en ser útil social. Aquellos que fueron delincuentes: malvivientes, vagos, ebrios habituales, predispuestos, anormales, defectuosos mentales - según distingue Garcon a los peligrosos-, ya se desenvuelven normalmente; mas como existe el temor del contagio o de que surjan los malos impulsos, por hallarse sólo adormecidos, ha de velarse sobre él acuciosamente,

guiándole, empleando su actividad para que reciba la debida compensación lucrativa y pueda vivir satisfecho, sin que la necesidad le impulse al vivio o al delito.

El artículo 40 del Reglamento dispone que los Jueces darán cuenta de la estancia del peligroso al Delegado de Vagos, si lo hubiere; en su defecto, a la Autoridad gubernativa o a su Delegado (evidentemente ha debido decir o a sus agentes, porque se trata de los dependientes de la Autoridad, evitando confusionismo en la redacción), a los que la Autoridad judicial ha de dirigirse para que le informen de la conducta que observe el peligroso en libertad.

El artículo 70 del Reglamento crea el cargo de Comisario general, perteneciente al personal técnico de Prisiones, que tendrá la alta inspección de Delegados, establecimientos y servicios, y el siguiente previene que los Delegados técnicos serán funcionarios pertenecientes a las Carreras judicial o fiscal o al Cuerpo técnico de Prisiones. Estos Delegados, salvando el respeto a ambos Cuerpos, no darán resultado ni procederán con la eficacia debida. Los judiciales tienen bastante con que atender a cumplir su difícil y absorbente función, y el Juez

no tendrá tiempo de inquirir, investigar, buscar ocupación al peligroso, etc.

El funcionario de Prisiones, si presta servicios oficiales, se enfrentará con el mismo problema. No le faltará aptitud; pero, por sobrado de energías que se halle, no encontrará las adecuadas para el difícil cometido que se le asigna.

Creemos, dice, que el artículo 117 debió simplificar el problema que plantea, referente al caso de tercera persona perjudicada por actos del peligroso, pues entendemos que el Juez apto para acordar lo oportuno debe ser el que tramita el expediente contra el peligroso; cierto que el artículo menciona que lo pondrá en conocimiento de la Autoridad judicial correspondiente si por dichos hechos se siguiere procedimiento criminal. La aclaración holgada, pues todo responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente, y, a tenor de los pertinentes artículos del Código penal y Ley de Enjuiciamiento criminal, en el sumario han de asegurarse las responsabilidades de todo orden, las que se afianzan en el ramo separado correspondiente. La interpretación sencilla es que el Juez de vagos posee facultades

para adoptar las medidas oportunas garantizando los derechos de todos, pudiendo peticionar el Fiscal, y que únicamente si se tramitase causa criminal, al Juez de instrucción competente se le remitirán los antecedentes, para que en dicho procedimiento se adopten las medidas oportunas.

En cuanto al capítulo referente al Registro, entendemos que el artículo 125 no debió establecer la excepción que verifica del carácter secreto de los antecedentes de vagos y maleantes, en cuanto establece que también se suministrarán antecedentes "a particulares - interesados que soliciten certificación, cuando fuese - procedente"; para nadie debe ser ello procedente, pues ni al mismo vago le interesa la constancia de su historial peligroso, y la no constancia es un hecho negativo, cuyo uso puede instituir abusivas costumbres."

Principales objeciones hechas a la Ley de Vagos y Maleantes de 1.933 y a su Reglamento.

Las principales críticas que se le han hecho a estos instrumentos legales pueden concretarse en los siguientes aspectos:

1.- Inadecuada denominación.- Gran número de autores coinciden en considerar que la calificación de "Ley de Vagos y Maleantes" es incorrecta e inadecuada por las siguientes razones: porque resulta clara su ambigüedad, pareciendo implicar un concepto peyorativo, no acorde con sus finalidades educativas y resocializadoras (1); y porque la ley comprende una serie de estados o conductas que no pueden y deben subsumirse dentro del concepto a que apunta la denominación de la ley; Olesa Muñido (2) escribe que tal denominación no responde al alcance de la ley como cuerpo sistemático que regula las medidas de seguridad pre y postdelictuales.

2.- Carencia de una suficiente claridad en la consideración del estado peligroso.- Se considera insuficiente la sola inclusión del comportamiento individual en los índices de estados peligrosos establecidos en la ley, considerándose necesario que el juez concrete la peligrosidad particular del sujeto; lo cual requiere una preci -

---

(1) Alfonso Calvo en su obra "Bases para la Ejecución de la mal llamada Ley de Vagos y Maleantes" la considera como un estigma de humillación que nuestra actual estructura social estereotipa, sin indulto ni remisión posible.

(2) Francisco Felipe Olesa Muñido - Obra citada- Pág. 329

sión tal que permita evitar cualquier riesgo de interpretación.

3.- Riesgo para el principio de legalidad.- El artículo 1º del Reglamento, al declarar que se consideran comprendidas en el artículo 2º de la Ley "todas aquellas personas que, por su forma de vida habitual, dedicada a actividades inmorales, demuestren un estado de peligrosidad por analogía con lo dispuesto en la Ley", conculcaba palmariamente el principio de legalidad, que exige un mismo nivel de garantía jurídica para las medidas de seguridad que el establecido para las penas, y ello ante el temor a una agresión social que pondría en peligro las libertades individuales.

4.- Superposición de tipos delictivos.- Se consideran algunas conductas peligrosas ya consideradas previamente por el Código penal lo cual representa una clara duplicidad de penas y medidas de seguridad como consecuencia de la realización de un mismo hecho considerado como delictivo en 2 instrumentos legales diferentes.

5.- Dificultades para su aplicación.- La Ley no contaba con medios adecuados para una aplicación eficaz ; pues la inexistencia de suficientes y adecuados estableci



mientos, y la carencia de medios técnicos y de personal especializado no permitían el cumplimiento de las delicadas finalidades que se proponía alcanzar. En este sentido Don Juan Del Rosal (1) la enjuició escribiendo que "resulta una obra legislativa más, por desgracia, que se dicta a la comunidad española sin contar con los establecimientos oportunos y adecuados.

6.- Para el Profesor Jimenez de Asúa uno de los principales defectos de la Ley de Vagos y Maleantes (2) es el tinte defensivo del orden público que arrastra, como lo demuestra alguna de las categorías de peligro que incluye, lo cual se contrapone al carácter biológico-jurídico que los autores querían que se les otorgara.

Sabater Tomás escribe (3) que aún cuando se le pueden atribuir defectos y errores desde el punto de vista técnico a este instrumento legal, el análisis dogmático de su recomposición sintética, constituyó una acertada política criminal.

---

(1) Juan Del Rosal - Obra citada -

(2) Luis Jimenez de Asúa - La Ley de Vagos y Maleantes- Un Ensayo Legislativo sobre la Peligrosidad sin Delito . (Revista General de Legislación y Jurisprudencia) 1933

(3) Antonio Sabater Tomás - Obra citada - Página 103.

3.- Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social  
de 4 de agosto de 1.970.

La incontenible cadena de los años, fué demos -  
trando paulatinamente que si bien era verdad, que La Ley  
de Vagos y Maleantes de 1.933 constituyó en su oportuni-  
dad un instrumento legal de gran valor en la lucha con -  
tra el crimen y en la defensa de la sociedad, no era me -  
nos cierto que este cuerpo legal, además de que adolecía  
de ciertas fallas y deficiencias de orden técnico, rápi-  
damente se iba haciendo anacrónica en virtud de que los  
avances y las transformaciones que con el correr de los  
años, vá sufriendo la humanidad en todas sus facetas in-  
volucraba, de manera muy especial, la evolución del modus  
vivendi y el perfeccionamiento en las formas de delin -  
quir.

Se hacía pues necesaria la elaboración y promul -  
gación de una nueva Ley adaptada a las exigencias socia-  
les contemporáneas de la población española que siguiera  
el mismo derrotero científico y que se propusiera los  
mismos fines de la Ley de Vagos y Maleantes de 1.933, pe -  
ro superando las deficiencias de ésta.

El propio preámbulo de la Ley de Peligrosidad y

Rehabilitación Social de 4 de agosto de 1.970 expresa que: "Los cambios acaecidos en las estructuras sociales, la mutación de costumbres que impone el avance tecnológico, su repercusión sobre los valores morales, las modificaciones operadas en las ideas normativas del buen comportamiento social y la aparición de algunos estados de peligrosidad-característicos de los países desarrollados que no pudo - contemplar el ordenamiento de 1.933 han determinado que la Ley referida, a pesar de los retoques parciales, introducidos por disposiciones posteriores, aparezca hoy, al menos en parte, un tanto inactual e incapaz de cumplir íntegramente los objetivos que en su día se le asignaron" , con lo cual se sintetiza la razón de ser y los criterios que habrán de informar la nueva Ley.

El parlamentario Gómez Aranda, cuando con motivo de la defensa del dictamen de la Comisión de Justicia ante las Cortes, manifiesta que los propósitos de perfec - ción de la Ley se cumplen en las siguientes direcciones - sustanciales: 1º. En una definición de lo que sea la de - claración del estado peligroso, lo que, sin lugar a dudas, representa el "eje" de toda la Ley y, una notable progre - sión con respecto a la Ley de Vagos. 2º. En la descrip - ción de los índices de peligrosidad, materia en la que se

han realizado las más importantes innovaciones en relación con la normativa anterior. 3º. En la fijación y atribución respectiva de las medidas de seguridad, campo donde se ha verificado un esfuerzo muy notable por conseguir alejar cualesquiera afinidades sustantivas entre las medidas de seguridad y las penas. 4º. En el procedimiento, o sea en el Derecho procesal que ha de regir en la primera instancia y en el recurso. 5º. En las previsiones para la rehabilitación de los peligrosos.

El Gobierno presentó a las Cortes Españolas un proyecto de Ley denominado "De Peligrosidad Social" que con algunas modificaciones, introducidas por la Comisión de Justicia, fué aprobado el 4 de agosto de 1.970 como Ley 16/1970 "De Peligrosidad y Rehabilitación Social" la cual fué publicada en el B.O.E. del 6 de agosto de 1.970 con la expresa disposición de que la misma no entraría en vigencia hasta después de 6 meses; plazo que fué prorrogado hasta 10 meses, en espera de un nuevo Reglamento y del acondicionamiento de establecimientos adecuados para el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la Ley.

Como su propio preámbulo lo manifiesta, la Ley tiene una denominación "Más en Línea con la Moderna Terminología

nología y Más Fielmente Expresiva del Fundamento y del Fin de la Norma". El Profesor Serrano Gómez (1) al enjuiciar esta denominación escribe que: "el nombre dado a la Ley no es afortunado, ya que peligrosidad social pueden ofrecer determinadas personas cuya situación o conducta nunca terminará en el delito, pensemos, por ejemplo, en un enfermo contagioso que desconoce su enfermedad y, por supuesto , no tiene el menor interés de transmitirla. Supone un riesgo para la comunidad de no tomarse las medidas sanitarias pertinentes.

Tampoco parece acertada la segunda parte de su título, "Rehabilitación Social", pues rehabilitar supone: "habilitar de nuevo o restituir una persona o cosa a su antiguo estado", o sea, volver a habilitar. Equivale, por tanto, a conseguir que el sujeto vuelva a la habilitación social que tuvo y perdió, y cuya nueva situación supone un riesgo para la sociedad desde el punto de vista criminal. Esto, que en efecto sucede en algunas ocasiones, en otras no se da, ya que el sujeto nunca estuvo habilitado

---

(1) Alfonso Serrano Gómez - Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Separata - Instituto Nacional de Estudios Jurídicos - Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales - Madrid 1.974. Página 222.

para hacer vida en comunidad por lo que no precisa de rehabilitación, sino de una primera habilitación. Esto es frecuente en el terreno de la juventud, unas veces porque todavía no alcanzó la edad de madurez y, otras, porque no llevó el ritmo normal de incorporación a la sociedad.

Considera que quizás, le quedaría mejor el título de "Ley de Peligrosidad Criminal y Habilitación Social".

Con el propósito de considerar algunas de las innovaciones introducidas en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, actualmente vigente en España, trataremos de hacer un estudio comparativo entre ésta y su antecesora, la Ley de Vagos y Maleantes de 1.933, siguiendo principalmente los estudios realizados por la Fiscalía del Tribunal Supremo, publicados como "Circulares relacionadas con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social", (1), la Compilación de las disertaciones hechas en la Universidad de Valencia en noviembre de 1.972, con motivo del inicio del curso académico del Instituto de Criminolog

---

(1) Fiscalía del Tribunal Supremo - Circulares relacionadas con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social- (Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 4 de agosto de 1970 y Reglamento para su Aplicación, de 13 de mayo de 1.971) - Publicaciones Abella - Madrid 1.972.

gía, recogidas bajo el título "Peligrosidad Social y Medidas de Seguridad" (1), y muy especialmente los trabajos publicados en relación a la materia en el Anuario de la Escuela Judicial correspondiente al año 1.971.

La Ley está estructurada en 5 títulos, 6 capítulos y 35 artículos.

#### TITULO PRIMERO

De los estados de peligrosidad, de las medidas de seguridad y de su aplicación.

#### CAPITULO PRIMERO

De los estados de peligrosidad

Artículo 1º.-" Quedan sometidos a las prescripciones de la presente Ley los mayores de dieciséis años que se encuentren comprendidos en sus arts. 2º, 3º y 4º.

Los menores de dicha edad que puedan considerarse incluídos en los dos primeros preceptos citados, serán

---

(1) Peligrosidad Social y Medidas de Seguridad - (La Ley de peligrosidad y rehabilitación social de 4 de agosto de 1.970). Universidad de Valencia - Colección de Estudios - Instituto de Criminología y Departamento - de Derecho Penal- 1.974.

puestas a disposición de los Tribunales Tutelares de Menores!"

Determina este primer artículo, quienes quedan sujetos al instrumento legal; escribiendo al respecto Beltrán Ballester (1) que puede a primera vista parecer la Ley del 70 peor que la del 33, ya que donde la derogada decía "Podrán ser declarados" la actual dice "Quedan sometidos". Ello así sería de no haber introducido la Comisión de Justicia de las Cortes Españolas en el artículo 2 el párrafo B), con lo que ahora quedan imperativamente sometidos a la Ley los sujetos en quienes el Juez aprecie peligrosidad, que viene a ser lo mismo que lo que la anterior ley establecía, ya que la facultad de dilucidar quien puede ser declarado peligroso reside en el mismo organismo que ha de apreciar la peligrosidad.

Artículo 2º.-"Serán declarados en estado peligroso y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación , quienes :

---

(1) Enrique Beltrán Ballester - Los Comportamientos Sexuales en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 4 de agosto de 1.970 - Peligrosidad Social y Medidas de Seguridad - Universidad de Valencia - 1.974.-  
Página 20.



A) Resulten probadamente incluídos en alguno de los supuestos de este artículo, y

B) Se aprecie en ellos una peligrosidad social

Son supuestos del estado peligroso los siguientes:

Primero. Los vagos habituales.

Segundo. Los rufianes y proxenetas.

Tercero. Los que realicen actos de homosecualidad.

Cuarto. Los que habitualmente ejerzan la prostitución.

Quinto. Los que promuevan o fomenten el tráfico, comercio o exhibición de cualquier material pornográfico o hagan su apología.

Sexto. Los mendigos habituales y los que vivieren de la mendicidad ajena o exploten con tal fin a menores, enfermos, lisiados o ancianos.

Séptimo. Los ebrios habituales y los toxicómanos.

Octavo. Los que promuevan o realicen el ilícito tráfico o fomenten el consumo de drogas tóxicas, estupeficientes o fármacos que produzcan análogos efectos; y los dueños o encargados de locales o establecimientos en los que, con su conocimiento, se permita o favorezca dicho tráfico o consumo, así como los que ilegítimamente posean las sustancias indicadas.

Noveno. Los que, con notorio menosprecio de las normas de convivencia social y buenas costumbres o del respeto debido a personas o lugares, se comportaren de modo insolente, brutal o cínico, con perjuicio para la comunidad o daño de los animales, las plantas o las cosas.

Décimo. Los que integrándose en bandas o pandillas manifestaren, por el objeto y actividades de aquéllas, evidente predisposición delictiva.

Undécimo. Los que sin justificación lleven consigo armas u objetos que, por su naturaleza y características, denoten indudablemente su presumible utilización como instrumento de agresión.

Duodécimo. Los que de modo habitual o lucrativo - faciliten la entrada en el país o la salida de él a quienes no se hallen autorizados para ello.

Decimotercero. Los autores de inexcusables contravenciones de circulación por conducción peligrosa.

Decimocuarto. Los menores de veintiún años abandonados por la familia o rebeldes a ella, que se hallaren moralmente prevertidos.

Decimoquinto. Los que, por su trato asiduo con de

lincentes o maleantes y por la asistencia a las reuniones que celebren o por la reiterada comisión de faltas penales atendidos el número y la entidad de éstas, revelen inclinación delictiva."

Las categorías que enumera este artículo son solo indicios de peligrosidad; por lo que se hace necesario que se compruebe previamente la probabilidad de que un sujeto determinado resulte incluido en algunos de estos supuestos, debiéndose, así mismo, apreciar el peligro concreto que es te representa para la sociedad.

Las mayores reformas e innovaciones parece que se concretan en la descripción de los índices de peligrosidad. Gómez Aranda en su defensa ante las Cortes manifestó que: "se trataba de ofrecer al juzgador unas categorías de esta do peligroso establecidas con fines garantizadores y que - al juez le sirven de primera orientación para que, sobre - sujetos comprendidos en esas conductas y sólo sobre ellos, examine en cada caso si concurren elementos de peligro sub jetivo". En la nueva Ley han desaparecido aquellas catego rías que según su propio Preámbulo "resultan hoy anacróni- cos e inútiles, por ofrecer duda de suficiente peligrosi- dad, así como los que representan una innecesaria superpo-

sición al delito, con la consiguiente duplicidad de pena y medida de seguridad". Para la modificación de otros estadados de peligrosidad se han atendido especialmente dos criterios, la eliminación de la ambigüedad en la descripción de los mismos y una apreciación más amplia.

Una importante introducción está representada por la inclusión de la consideración del estado de prostitución el cual no era contemplado en la Ley de Vagos y Maleantes aunque este se consideraba en su Reglamento (Artículo 1º, letra C). Sobre todo representa una gran importancia la inclusión de la prostitución masculina representada especialmente por el ofrecimiento, a cambio de dinero a personas de otro sexo.

Otra de las innovaciones importantes la encontramos en la introducción de la consideración del tráfico de estupefacientes. El Reglamento de la Ley de 1.933 consideraba a aquellos que traficasen con objetos o sustancias de ilícito comercio, lo cual representaba una descripción genérica y no un planteamiento específico de tan delicada cuestión; no se comprendía en el Reglamento algunas conductas que requerían un adecuado tratamiento como el fomento o invitación al consumo de drogas, la ilegítima posición -

así como la posibilidad de proceder contra propietarios , administradores y encargados de establecimientos donde se consuma drogas o se trafique con ellas.

Artículo 3º.-"Serán de aplicación los preceptos de esta Ley a los enfermos y deficientes mentales que, por su abandono o por la carencia de tratamiento adecuado, signifiquen un riesgo para la comunidad."

Se considera por separado la situación de los enfermos y deficientes mentales en concordancia con el preámbulo de la Ley que expresa que "parece oportuno incluir en la relación de peligrosidad social a quienes, como los enfermos mentales cuando estuvieren abandonados y sin adecuado tratamiento, constituyen, por desgracia y sin ninguna voluntariedad por su parte, un riesgo efectivo para la comunidad, por lo que tanto en interés social como en su propio bien deben ser objeto de un régimen preventivo que permita lograr su curación y poner remedio a su potencial peligrosidad'."

## CAPITULO II

### De las medidas de seguridad

Artículo 5º.-"Son medidas de seguridad:

Primera. Internamiento en un establecimiento de custodia o trabajo adecuado a la personalidad del sujeto-peligroso dentro del cuadro de clasificación que reglamentariamente se establezca, por tiempo no inferior a cuatro meses ni superior a tres años, cuando se trate de internamiento en establecimiento de custodia, y por el tiempo mínimo que fije la sentencia o el auto de revisión y máximo de tres años, cuando se imponga internamiento en establecimiento de trabajo.

Segunda. Internamiento en un establecimiento de reeducación por tiempo no inferior a cuatro meses ni superior a tres años.

Tercera. Internamiento en un establecimiento de preservación hasta su curación o hasta que, en su defecto, cese el estado de peligrosidad social.

Cuarta. Arresto de cuatro a diez fines de semana.

Quinta. Aislamiento curativo en casas de templanza hasta su curación.

Sexta. Sumisión obligatoria a tratamiento ambulatorio en centros médicos adecuados hasta su curación.

Séptima. Privación del permiso de conducción de vehículos de motor o prohibición de obtenerlo por tiempo no inferior a un mes ni superior a dos años.

Octava. Clausura del establecimiento de un mes a un año. Esta clausura no afectará a la relación laboral - del personal que preste servicios en el establecimiento .

Novena. Obligación de declarar el domicilio o de residir en un lugar determinado por tiempo no superior a cinco años.

Décima. Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe. La duración de esta medida será fijada con el límite máximo de cinco años.

El sujeto prevenido quedará obligado a declarar el domicilio que escoja y los cambios que se produzcan.

Undécima. Prohibición de visitar establecimientos de bebidas alcohólicas y los lugares donde se hayan desarrollado las actividades peligrosas, durante el tiempo que se fije no superior a cinco años.

Duodécima. Expulsión del territorio nacional cuando se trate de extranjeros. El sujeto a esta medida de se-

guridad no podrá volver a entrar en España durante el plazo de cinco años.

Decimotercera. Reprensión judicial.-

Decimocuarta. Sumisión a la vigilancia de la autoridad.

Esta vigilancia será ejercida por delegados especiales y tendrá el carácter de tutelar y de protección.

Los delegados cuidarán de proporcionar trabajo, según su aptitud y conducta, a los sujetos a su vigilancia.

La duración de esta medida será de uno a cinco años y podrá ser reemplazada por caución de conducta.

Decimoquinta. Multa de mil a cincuenta mil pesetas.

Decimosexta. Incautación, en favor del Estado, del dinero, efectos e instrumentos que procedan."

Consagra la Ley todo un capítulo al artículo 5º para fijar con él, en forma amplia y minuciosa, cuales han de ser las medidas de seguridad que habrán de aplicarse siguiendo una orientación similar a la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, con algunas importantes innovaciones tales como la reducción del internamiento en establecimientos de custodia desde un tiempo no inferior a un año, ni superior a cinco años; atendiendo a la elevación del costo de la vida se ac-



tualizan las multas estableciendo para ellas mil y cincuenta mil pesetas; así mismo se amplían las medidas de seguridad al incluirse el internamiento en establecimientos de reeducación y preservación, los arrestos de fin de semana, la privación del permiso para conducir vehículos a motor o la prohibición para obtenerlo, la prohibición de visitar establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas y otros similares, la clausura de locales y la reprensión judicial.

Dentro de las medidas de seguridad privativas de libertad se introduce el internamiento en establecimientos de reeducación y preservación y los arrestos de fin de semana.

En cuanto a las medidas de seguridad restrictivas de libertad se introducen la sumisión obligatoria a tratamiento ambulatorio y la prohibición de visitar establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas así como la de otros similares.

Dentro de las medidas económicas se introducen algunas que afectan la privación de diferentes derechos, tales como la privación del permiso de conducir vehículos de motor, prohibición de obtenerlos, clausura de estableci -

mientos y represión judicial. Las medidas económicas propia mente dichas siguen siendo la multa y la incautación en favor del estado, de dinero, efectos e instrumentos.

### CAPITULO TERCERO

De la aplicación de las medidas de seguridad.

Artículo 6º."Las medidas de seguridad se aplicarán a los sujetos declarados en estado peligroso de la forma siguiente:

Primero.- A los vagos habituales se les impondrán, para que las cumplan sucesivamente, las siguientes medidas:

- a) Internamiento en un establecimiento de trabajo.
- b) Obligación de declarar su domicilio o de residir en un lugar determinado y sumisión a la vigilancia de los delegados.

Segundo. A los rufianes y proxenetas, a los mendigos habituales y a los que vivan de la mendicidad ajena o exploten menores, enfermos, lisiados o ancianos se les aplicarán, para que las cumplan sucesivamente, las siguientes medidas:

- a) Internamiento en un establecimiento de custodia o de trabajo, adecuado a las condiciones personales del su

jeto y, en su caso, incautación del dinero.

b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados.

A los proxenetas se les clausurará además el establecimiento donde hubieren tenido lugar sus actividades.

Tercero. A los que realicen actos de homosexualidad y a las que habitualmente ejerzan la prostitución se les impondrán, para su cumplimiento sucesivo, las siguientes medidas:

a) Internamiento en un establecimiento de reeducación.

b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares o establecimientos públicos, y sumisión a la vigilancia de los delegados.

Cuando los peligrosos del número cuarto del artículo segundo sean del sexo masculino, se les impondrá para su cumplimiento sucesivo:

a) Internamiento en establecimiento de trabajo y multa, y

b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados.

Cuarto. A los que promuevan o fomenten el tráfico, comercio o exhibición de cualquier material pornográfico o hagan su apología se les impondrá, para su cumplimiento sucesivo, las siguientes medidas:

a) Internamiento en un establecimiento de trabajo, multa e incautación del dinero y efectos procedentes.

b) Sumisión a la vigilancia de los delegados.

Quinto. A los ebrios habituales y toxicómanos se les aplicarán, para su cumplimiento simultáneo o sucesivo, según proceda, alguna o algunas de las siguientes medidas:

a) Aislamiento curativo en casas de templanza.

b) Tratamiento ambulatorio.

c) Privación del permiso de conducción de vehículos de motor o prohibición de obtenerlo.

d) Obligación de declarar el domicilio o de residir en un lugar determinado y sumisión a la vigilancia de los delegados.

e) Además, a los toxicómanos, incautación de los efectos ocupados, y a los ebrios habituales, prohibición de visitar establecimientos de bebidas.

Sexto. A los relacionados en el número octavo del artículo segundo se les impondrán simultáneamente las tres medidas siguientes:

a) Internamiento en un establecimiento de trabajo.

b) Incautación del dinero y efectos procedentes .

c) Multa.

d) Sucesivamente se les aplicará la prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados.

e) Además, a los dueños de los establecimientos se les clausurará, en su caso, el local.

Séptimo. A los comprendidos en los números noveno, décimo y undécimo del artículo segundo se les aplicarán, si simultánea o sucesivamente, todas o algunas de las siguientes medidas:

a) Internamiento en un establecimiento de reedución o de trabajo.

b) Arresto de fines de semana.

c) Multa.

d) Reprensión judicial.

e) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares públicos.

f) Sumisión a la vigilancia de los delegados.

g) Incautación de los efectos e instrumentos procedentes.

A los comprendidos en los números noveno y décimo se les podrá imponer, además, para su cumplimiento posterior al internamiento, la privación del permiso de conducción de vehículos de motor o la prohibición de obtenerlo .

Octavo. A los comprendidos en el número duodécimo del artículo segundo se les impondrán, para su cumplimiento sucesivo, las siguientes medidas.

a) Internamiento en un establecimiento de trabajo, multa e incautación del dinero y efectos procedentes.

b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados, y, además, privación del permiso de conducción de vehículos de motor o prohibición de obtenerlo.

Noveno. A los comprendidos en el número trece del artículo segundo se les impondrá la privación del permiso de conducción de vehículos de motor o la prohibición de obtenerlo.

Décimo. A los menores de veintiún años a que se refiere el número catorce del artículo segundo se les aplicarán, simultánea o sucesivamente, todas o algunas de las siguientes medidas:

a) Internamiento en un establecimiento de reeducación.

b) Arresto de fines de semana.

c) Reprensión judicial.

d) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares públicos .

e) Sumisión a la vigilancia de los delegados.

Undécimo. A los que observaren la conducta reveladora de inclinación al delito definida en el número quince del artículo segundo se les impondrán, para su cumplimiento simultáneo o sucesivo, alguna o algunas de las siguientes medidas:

a) Internamiento en un establecimiento de custodia o trabajo.

b) Arresto de fines de semana.

c) Privación del permiso de conducción de vehículos de motor o prohibición de obtenerlo.

d) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados.

Duodécimo. A los enfermos y deficientes mentales que se encuentren en la situación a que se refiere el artículo tercero se les aplicarán, para su cumplimiento sucesivo, las siguientes medidas:

a) Internamiento en un establecimiento de preservación hasta que sea necesario.

b) Sumisión a la vigilancia de los delegados.

Decimotercero. A los declarados peligrosos conforme al artículo cuarto se les aplicarán, para su cumplimiento simultáneo o sucesivo, alguna o algunas de las siguientes medidas:

a) Internamiento en un establecimiento de custodia o de trabajo.

b) Privación del permiso de conducción de vehículos de motor o prohibición de obtenerlo.

c) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados"

Artículo 7º."Si los declarados peligrosos fueren extranjeros, el Juez podrá imponerles las medidas del artículo precedente que correspondan o la de expulsión del territorio nacional, sin perjuicio de aplicarles, además, las que sean compatibles con dicha expulsión y figuren en cada supuesto de peligrosidad."

Considera la Fiscalía del Tribunal Supremo que las medidas aplicables y su forma de cumplimiento las establecen los artículos 6º y 7º de la siguiente manera:



Las medidas previstas para los estados peligrosos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 del artículo 2º y para los enfermos y deficientes mentales (art. 3º), ofrecen la particularidad de que el Juez queda vinculado a su aplicación de modo absoluto, pues, debe imponer todas para que se cumplan sucesivamente. Así se dispone en el art. 6º, núms. 1, 2, 3, 4, 8 y 12.

Algunas de las medidas correspondientes a los traficantes de drogas (art. 6º, 6º, a, b, c) se imponen simultáneamente, en tanto que otras (art. 6, 6º, d) son de aplicación sucesiva.

Las medidas que se recogen en los núms. 7 y 10 del art. 6º son de cumplimiento simultáneo o sucesivo, y en cuanto al número pueden aplicarse todas o algunas que de modo discrecional puede imponer el Juez.

Las relacionadas en los núms. 5. 11 y 13, han de cumplirse simultánea o sucesivamente alguna o algunas de ellas. Dada la redacción de estos preceptos, es cuestiona - ble la posibilidad de que se imponga sólo una de las medidas previstas. Por una parte, la expresión de "alguna o algunas" parece indicar que es correcta jurídicamente la sentencia que imponga una medida de entre las varias posibles;

pero, por otro lado, nos hallamos con que el cumplimiento es simultáneo o sucesivo, y ambos conceptos son indicativos de pluralidad, porque si de determinadas medidas se dice que han de cumplirse en cualquiera de esas formas es porque habrá de imponerse más de una, pues, si se impone sólo alguna no hay posibilidad de cumplimiento simultáneo ni sucesivo; ello unido al argumento gramatical de que los verbos se hallan en plural ("se les aplicarán", "se les impondrán") y al lógico, pues, de otro modo sería suficiente la medida de privación del carnet, por ejemplo, para los toxicómanos, conduce a concluir que deberá aplicarse siempre más de una medida de seguridad.

La medida de clausura del establecimiento (art. 5 , 8ª) es aplicable en el caso de proxenetismo cuando se hubieren realizado en él sus actividades (art. 6, 2ª párrafo último) y a los dueños de locales que permitan en ellos el tráfico o consumo de drogas (art. 6, 6ª, e); esta última tiene un marcado paralelismo cualitativo y cuantitativo con la comprendida en el art. 344 del Código Penal, pues, sus diferencias serían que la medida de seguridad de clausura nacida del estado peligroso es revisable (art. 30 de la Ley), en tanto q' la impuesta en el Código Penal ha de cumplirse íntegramente, y la derivada de su distinta naturaleza pues, según antes vi

mos una es complementaria de la pena y otra de carácter preventivo.

Las medidas aplicables a quienes habitualmente e-jerzan o promuevan la prostitución, y en particular el in - ternamiento, son distintas según el sexo de los que se dedi - can a ese modo de vivir; a las prostitutas les corresponde internamiento en establecimientos de reeducación (arts. 6, 3º, párrafo primero a) de la Ley y artículo 33 del Reglamento) mientras que los varones han de ser internados en un es - tablecimiento de trabajo (arts. 6, 3º, párrafo segundo, a ) de la Ley y 30 y 31 c) del Reglamento).

La sumisión a vigilancia de la autoridad, medida - que se ejerce por delegados especiales (art. 5, 14º), se extiende a la casi totalidad de los estados peligrosos (repre - senta le excepción el del número 13 del art. 2º), si bien unas veces es medida autónoma de cumplimiento sucesivo (art. 6º, núms, 4 y 12) o simultáneo o sucesivo (art. 6, núms. 1 y 5), con la prohibición de residir en el lugar o territo - rio que se designe (art. 6º, núms. 2, 3, 6, 8, 11 y 13) o con la prohibición de visitar establecimientos de bebidas - alcohólicas y los lugares donde se han desarrollado las ac - tividades peligrosas (art. 6º, núm. 3).

El artículo 7 de la Ley trata de la aplicación de las medidas de seguridad a los extranjeros y atribuye al Juez una facultad alternativa: o imponer las medidas previstas para los españoles según el estado peligroso que corresponda o la expulsión del territorio nacional, sin perjuicio de aplicar en este caso las que sean compatibles con la expulsión.

#### PROCEDIMIENTO

El aspecto procedimental lo recoge la Ley en sus Títulos II y III, pudiendo considerarse, para su estudio, las cuatro etapas siguientes: 1) la jurisdicción y la competencia; 2) el procedimiento propiamente dicho; 3) los recursos y 4) la ejecución de las medidas de seguridad.

1) Jurisdicción y competencia.- Los artículos 8º, 9º y 10º (título 2º - capítulo 1º) recogen lo relativo a la jurisdicción y a la competencia.

Artículo 8º.-"La facultad de declarar el estado - peligroso e imponer las respectivas medidas de seguridad - corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria a través de los Jueces de Instrucción. Deberá existir uno al menos por cada provincia, con cometido único cuando así se establezca, o simultáneo con el que le está signado en el

orden jurisdiccional penañ.

En todo caso, los Juzgados de cabeza de partido realizarán las actuaciones precisas en orden a esta Ley , por delegación o en funciones de prevención, y remitirán las diligencias que ante ellos se inicien al Juzgado que corresponda, conforme a lo que en este artículo se establece.

La competencia territorial se determinará por el lugar en que de modo principal se haya manifestado la presunta peligrosidad.

El nombramiento de los Jueces con cometido único se realizará según las normas que rigen el de los restantes Jueces de Instrucción, y será título preferente para su designación la especialización que se acredite en la forma que reglamentariamente se determine."

Artículo 9º.-"Para conocer de los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los Jueces a quienes se encomienda la aplicación de la presente Ley existirán salas especiales en las Audiencias que al efecto se designen, integradas por tres Magistrados , con o sin relevación de sus otras funciones, cuya sede y competencia territorial se establecerá por el Gobierno."

El nombramiento de los Magistrados de estas Salas, cuando tengan cometido único, se realizará según las normas que rigen la designación de los Magistrados, siendo título preferente el mencionado en el párrafo cuarto del artículo anterior.

Estas Salas, dentro del ámbito territorial de su competencia, serán órgano superior de los Juzgados dedicados a aplicar esta Ley.

Artículo 10º.-"Los Juzgados cuyo único cometido sea la aplicación de esta Ley tendrán adscritos permanentemente los funcionarios del Ministerio Fiscal que se precisen. En los demás, el servicio se atenderá por los funcionarios de la plantilla de la Fiscalía de la Audiencia correspondiente.

A las Salas de Apelación se adscribirán los funcionarios del Ministerio Fiscal que se juzgue necesario. Estos nombramientos se realizarán conforme a sus normas orgánicas".

Artículo 11º.-"Con arreglo a las normas orgánicas de los Cuerpos respectivos se efectuarán los nombramientos de Secretarios de los Juzgados y Salas de Apelación, así como del restante personal facultativo, auxiliar y subalterno."

Una de las innovaciones más importantes introducida en la nueva Ley en relación con el aspecto procedimental es la supresión de la facultad que la Ley de Vagos y Maleantes confería a los Tribunales Penales para la aplicación de ciertas medidas de seguridad en la sentencia contra un sujeto reincidente en la comisión de delitos o considerado como individuo peligroso. Esta innovación se fundamenta en la necesidad de evitar duplicidad de sentencias.

En relación a la jurisdicción y competencia la Fiscalía de Tribunal Supremo aprecia que la facultad de declarar el estado peligroso e imponer las respectivas medidas de seguridad, corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria a través de los Jueces de Instrucción que desempeñan los Juzgados de Peligrosidad y Rehabilitación Social, y de las correspondientes Salas de Apelación (arts. 8º de la Ley y 66 del Reglamento), y que el nombramiento de los Jueces con dedicación exclusiva a la jurisdicción de peligrosidad, está presidido por el criterio de la especialidad, pues es "título preferente para su designación la especialización" (art. 8, párrafo último de la Ley) en la forma determinada en el art. 69, 2º del Reglamento; y si es cierto que ahora son muy limi

tados los Juzgados de cometido único (art. 68, 1º del Reglamento), está previsto que cuando el número de expedientes que cualquier Juzgado tramite lo justifique, el Ministerio de Justicia podrá disponer que sea servido también en régimen de exclusividad (art. 68, 3º del Reglamento).

El sistema de la simultaneidad o de acumulación de funciones, rige para la generalidad de los Juzgados de Peligrosidad Social (art. 67 del Reglamento).

En todo caso, cualquier Juzgado de Instrucción, puede llevar a cabo, por delegación o en funciones de prevención, las actuaciones precisas para impedir la desaparición de los medios de comprobación y del presunto peligroso, remitiendo las diligencias y los efectos ocupados al Juzgado de Peligrosidad que corresponda, sin perjuicio de que al iniciar las diligencias comunicarán su incoación al Juzgado competente (art. 8, párrafo 2º de la Ley y 79 del Reglamento).

Las Salas de Apelación, órgano superior jerárquico de los Juzgados de Peligrosidad que conocen de los recursos interpuestos contra las resoluciones de los Jue



ces, se rigen en su esfera personal por principios semejantes a los de los Juzgados, estando previsto que los Magistrados que las formen se integren en ellas, con o sin relevación de sus otras funciones (art. 9, párrafo 1º de la Ley), siendo esta última la norma (art. 71, 2º del Reglamento), pero tanto si tuvieren cometido único (art. 9, párrafo 2º de la Ley) como múltiple (art. 72, 1º del Reglamento), la especialización será título preferente para la designación de los Magistrados.

La competencia territorial de los Juzgados de Peligrosidad, de los cuales deberán existir al menos uno en cada Provincia (arts. 8, 1º de la Ley y 67 del Reglamento) "se determinará por el lugar en que de modo principal se haya manifestado la presunta peligrosidad" (art. 8, párrafo 3º de la Ley). La Ley derogada distinguía (art. 11) según que la denuncia emanara de autoridades o de particulares; en el primer caso era decisivo el lugar de presentación de la denuncia; en el segundo, el Juez del lugar en donde se suponga que el denunciado ejerce sus actividades reputadas peligrosas.

El elemento de concreción de la Ley, al estar formado por datos indeterminados, contribuirá a que en muchas ocasiones la potencial peligrosidad pueda localizar-

se en más de un espacio geográfico; en efecto, tanto la expresión "de modo principal", que es cuantitativa, como la frase referida al lugar en que "se haya manifestado - la presunta peligrosidad", no permiten por si solas adscribir muchos estados peligrosos incondicionadamente a un lugar, y ello porque del comienzo de la peligrosidad, que es una conducta y no un acto, es difícil decir cuándo se ha manifestado de modo principal; y además porque si las actividades presuntamente peligrosas se han desenvuelto en distintas localidades, tampoco es fácil precisar en cuál de los varios lugares se manifestó principalmente.

Si la actividad reiterada e igualmente intensa se ha manifestado en momentos y espacios diferentes, el criterio determinante de la competencia será variable, y conforme a los fueros subsidiarios del art. 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, unas veces será el domicilio del peligroso presunto (aunque no en todos los estados - podrá individualizarse) y otras el lugar del descubrimiento de las pruebas o el de la aprehensión.

## 2) Procedimiento propiamente dicho.

Artículo 12º.-"El procedimiento para la declara-

ción del estado de peligrosidad y aplicación de las medidas de seguridad podrá promoverse a petición del Ministerio Fiscal o de oficio; en este caso, bien por ciencia - propia o por denuncia de la Policía Judicial o de parti-culares.

Se seguirá expediente individual para cada denunciado o presunto peligroso, sin posibilidad de acumula - ción a otros."

Artículo 13º.-"Cuando un Tribunal o Juzgado que entienda de un proceso penal conozca, por razón del mis - mo, de alguna conducta que pueda estar incurso en alguno de los estados de peligrosidad que definen los artículos segundo, tercero y cuarto de la presente Ley remitirá testimonio de los antecedentes necesarios al Juzgado a quien compete la tramitación del expediente de peligrosidad.

Los Juzgados encargados de la aplicación de es - ta Ley y las Salas especiales que establece el artículo noveno remitirán asimismo a los Juzgados competentes testimonio de actuaciones de las que puedan resultar u comisión de hechos delictivos o la participación de los en - cartados en ellos."

Artículo 14º.-"Los Fiscales promoverán, y la Po-

licia judicial practicará, las diligencias de investigación de conducta que puedan determinar la incoación de expedientes de peligrosidad social, o constituir elementos de juicio que deban ser tenidos en cuenta en los mismos".

Artículo 15.- " Iniciado el expediente se pondrá en conocimiento del Presidente y del Fiscal de la Sala de Apelación que corresponda.

Las actuaciones comenzarán por una fase de averiguación en la que intervendrá el Ministerio Fiscal."

Artículo 16." En dicha fase, el Juez oirá a la persona afectada sobre los extremos que motiven el expediente, su identidad personal, estado, si tiene hijos o menores sometidos a tutela y sus edades, profesión u oficio , domicilio o residencia, y manera de vivir durante los cinco años anteriores, consignándose circunstanciadamente las respuestas que diere. También reclamará informes de conducta y antecedentes penales y policiales de la misma, a sí como cuanto sea preciso para corroborar su edad e identidad personal, reseñando o uniendo los documentos que aquélla pueda presentar al propio fin.

Acordará, asimismo, el Juez la investigación an-

tropológica, psíquica y patológica del sujeto a expediente, mediante dictamen pericial médico; y cuando estuviere especialmente indicado, recabará información sobre sus factores familiares y sociales a técnicos o instituciones idóneas y llevará a cabo las restantes diligencias de comprobación que estime necesarias»

Artículo 17.º Las diligencias a que se refiere el artículo anterior habrán de practicarse en el plazo improrrogable de quince días, transcurrido el cual o una vez recibidos los informes reclamados y realizadas las demás comprobaciones que el Juez haya acordado de oficio o a instancia del Fiscal, oído éste, acordará el archivo del expediente o dará vista de lo actuado al presunto peligroso, quien, desde este momento o desde que el Juez decida adoptar alguna medida cautelar, será instruido de sus derechos y podrá intervenir en el expediente, designando Procurador que le represente y Letrado que le defienda, los que, en otro caso, se le nombrarán en la forma prevenida en el artículo 788 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el supuesto de dársele vista, el presunto peligroso podrá proponer en el plazo de cinco días los me-

dios de prueba, admisibles en derecho, que a su descargo convengan."

Artículo 18." Contra el auto que acuerde el archivo de las actuaciones podrá recurrir en apelación el Fiscal, siendo observable, en la interposición y sustanciación del recurso, en cuanto sean aplicables, las disposiciones de los artículos veintidos y veintitres de la presente Ley."

Artículo 19."-El Juez podrá adoptar las siguientes medidas cautelares con relación al presunto peligroso:

Primera. La detención, si no pudiera ser citado o careciere de domicilio conocido.

Segunda. Declararle rebelde, si dejare de comparecer sin justa causa al llamamiento judicial, acordando su internamiento preventivo.

Tercera. El internamiento preventivo, en caso de estado de evidente indicio de peligrosidad y si las circunstancias lo hicieren necesario.

El internamiento se realizará, en cuanto sea posible, en los establecimientos que correspondan al supueso

to de peligrosidad por el que se siga el expediente.

El auto de internamiento no necesitará ser ratificado y contra él procederá el recurso de reforma."

Artículo 20.-" El Juez resolverá sobre la admisión de las pruebas con arreglo a derecho.

Las pruebas admitidas se practicarán contradictoriamente en el plazo de doce días, si han de tener lugar en la sede del Juzgado, y de veinte, si hubieran de practicarse fuera de la misma."

Artículo 21.-" El Juez, practicadas las pruebas, oirá al Fiscal y al Abogado del presunto peligroso en un plazo sucesivo de cinco días, durante el cual producirán por escrito las alegaciones procedentes, que se unirán al expediente.

Si la parte dejare de utilizar este trámite, se le tendrá por decaído en su derecho y el expediente seguirá el curso debido.

Transcurrido dicho plazo, el Juez, dentro de los tres días siguientes, dictará resolución en forma de sentencia que habrá de contener uno de los dos pronunciamientos siguientes:

a) Declarar probada la peligrosidad social de su jeto a expediente y su inclusión en alguno de los supuestos de los artículo segundo, tercero y cuarto, consignando los hechos que lo acrediten y señalando las medidas de seguridad aplicables.

b) Declarar que no ha lugar a la adopción de medidas de seguridad por no darse las condiciones del estado de peligrosidad o por ser infundada la denuncia.

La sentencia se notificará al Fiscal y al sujeto a expediente en el siguiente día.

Cuando se rechace la denuncia por infundada podrá el denunciado, previa autorización del Juez, ejercitar las acciones penales que procedan contra el denunciante."

Artículo 22.-"El Fiscal y el interesado podrán interponer recurso de apelación contra la sentencia del Juez en el plazo de tres días, a contar desde la notificación. El Juez acordará emplazar al Ministerio Fiscal y a la parte para que comparezcan ante la Sala especial que corresponda dentro del décimo día."

A diferencia de la Ley de Vagos y Maleantes para la iniciación del proceso se establece en forma explícita



que "podrá promoverse a petición del Ministerio Fiscal o de oficio; bien por ciencia propia o por denuncia de la Policía Judicial o de particulares". En el procedimiento de averiguación la Ley de Rehabilitación Social sigue a la de Vagos y Maleantes en lo relacionado al hecho de que el Juez oirá a la persona afectada, extendiendo el requerimiento de información en lo atinente a si esta tiene hijos menores sujetos a tutela y sus respectivas edades, asi como su domicilio o residencia. La nueva Ley extiende a 15 días el plazo para estas actuaciones o diligencias - que en la de Vagos y Maleantes era solo de 10.

El Juez está facultado para adoptar las siguientes medidas cautelares: detención, en caso de no poderse citar al sujeto o que este no tuviere domicilio conocido; si el sujeto dejare de comparecer, sin causa justificada - podrá ser declarado rebelde, acordándosele su internamiento preventivo; así mismo el Juez podrá acordar el internamiento privativo del sujeto en caso de estado de evidente indicio de peligrosidad y si las circunstancias lo hicieren necesario.

Para la realización de la prueba , la Ley establece el plazo de 12 o 20 días, según esta tenga lugar en

el propio Juzgado o fuera de él; lo cual la hace más explícita que su antecesora que no establecía término alguno.

La Ley de Peligrosidad Social establece que el denunciado solo podrá ejercitar las acciones penales que procedan contra el denunciante, previa autorización del Juez, en caso de que se rechace la denuncia por infundada; lo cual introduce una modificación con respecto a la Ley de Vagos y Maleantes la cual ordenaba proceder de oficio contra el particular que hubiere presentado denuncia infundada.

### 3) Recursos.

Artículo 23.-"La Sala designará, cuando sea preciso, Abogado y Procurador al presunto peligroso en la forma prevenida en esta Ley.

El Fiscal y el sujeto a expediente podrán proponer a la Sala, al personarse, y ésta acordar, si lo estima pertinente, que se reitere ante la misma el examen de los testigos y la ampliación de las diligencias practicadas por el Juez, así como la práctica de las pruebas que, propuestas ante el Juzgado, fueron indebidamente denegadas y de las que, admitidas, no se llevaron a cabo por causas no imputables a las partes.

El Tribunal, además podrá acordar de oficio las diligencias que estime oportunas y nueva audiencia del interesado.

Las diligencias de prueba acordadas se practicarán con intervención Fiscal y de la parte.

Las pruebas se practicarán en el plazo de doce días, y, previa instrucción sucesiva de las partes, con entrega del expediente por tres días a cada una, se celebrará la vista oral dentro de los diez días siguientes, sin la presencia del sujeto a expediente, a menos que éste lo solicitase y la Sala lo estimara conveniente.

La sentencia se dictará dentro del tercer día, y contra ella no procederá recurso alguno, salvo el juicio de revisión para la cancelación, confirmación, sustitución, reducción o prolongación de todas o algunas de las medidas de seguridad a tenor de lo establecido en el capítulo IV de este título y lo dispuesto sobre ejecución de medidas de seguridad en el artículo veintiseis."

Contra la sentencia solo procederá recurso de apelación el cual se interpondrá por ante la Sala Especial de la Audiencia Territorial de Madrid que conocerá de todos los recursos que se interpongan con motivo de

la aplicación de esta Ley. Como innovación se observa la ampliación del plazo de 10 días que se acuerda para el emplazamiento de las partes, mayor que el que se acordaba en la Ley de Vagos y Maleantes que era de 5 días.

#### 4) Ejecución.

### CAPITULO III

#### De la ejecución de las medidas de seguridad

Artículo 24.-"La ejecución de las medidas de seguridad corresponderá a los Juzgados encargados de la aplicación de esta Ley."

Artículo 25.-"Firme la sentencia o el auto de revisión, el Juez cuidará del cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas y del tratamiento eficaz del peligroso, con el fin de que se observe cuanto la Ley y el Reglamento preceptúen sobre el particular.

Si concurriere con las medidas de seguridad impuestas alguna pena total o parcialmente pendiente de ejecutar, y aquéllas y ésta no fueren susceptibles de cumplimiento simultáneo, se ejecutará preferentemente la pena."

Artículo 26.-"El Juez, previo informe de la Junta de Tratamiento, cuya composición y funciones se fijarán re-

glamentariamente, o, en su defecto, del delegado que tenga a su cargo la vigilancia del peligroso social o de quien - proceda recabarlo, podrá acordar, con audiencia del Fiscal, el cese de la medida impuesta que corresponda y la sustitución, en su caso, por la sucesiva, según vaya cumpliéndose el mínimo de las mismas, y en las que no tengan mínimo, cuando transcurra, por lo menos, la tercera parte de su dura - ción. Se acordará siempre, sin más trámites, cuando se cumpla el máximo o se alcance, en las de internamiento por tiempo indeterminado, la condición fijada para ello en la Ley, en la sentencia o en el auto de revisión, o cuando se considere que ha cesado el estado peligroso.

También acordará el Juez la cancelación definitiva del expediente por cumplimiento de la medida, cuando fuere única, o por extinción de la última en las de aplicación - sucesiva."

La Ley consagra todo un capítulo a la ejecución de las medidas de seguridad, a diferencia de la Ley de Vagos y Maleantes de 1.933 que sólo hacía referencia a este as - pecto en el último párrafo del artículo 16. La ejecución - corresponde a los Juzgados encargados de la aplicación de la Ley y el Juez cuidará del cumplimiento de su imposición

y de la eficacia del tratamiento, teniendo preferencia la pena en caso de que esta concorra con una determinada medida de seguridad, no siendo susceptibles de cumplimiento simultáneo.

#### CAPITULO IV

##### Del juicio de revisión

Artículo 27.-"Mediante el juicio de revisión puede el Juzgado cancelar, confirmar, sustituir, reducir o prolongar las medidas de seguridad que se hubieren acordado".

Artículo 28.-"La revisión de las medidas de seguridad corresponde al Juzgado que hubiere conocido del expediente en que se impusieron aquéllas.

Si la resolución se hubiere dictado por la Sala correspondiente, y no fuera totalmente confirmatoria de la sentencia o auto de primera instancia, el Juzgado elevará propuesta de revisión a aquélla para su aprobación."

Artículo 29.-"El Fiscal y el declarado peligroso podrán promover el juicio de revisión en el caso del número primero del artículo siguiente. En los de los números segundo y tercero del propio artículo, el juicio podrá iniciarse por el Fiscal, o de oficio cuando el Juez tuviere

ticia, por ciencia propia o por denuncia de la Policía o de particulares de que concurren aquellas circunstancias."

Artículo 30." Procederá el juicio de revisión:

Primero. Por modificación del grado de peligrosidad social o por la terminación de este estado.

En el primer supuesto, el declarado peligroso no podrá promover el juicio de revisión hasta que haya transcurrido el mínimo señalado en la Ley, en la sentencia o en el auto de revisión para la medida que se pretenda revisar; en las que no tengan mínimo, hasta que transcurra la tercera parte de su duración a partir de la iniciación de su cumplimiento, salvo si fuere la de obligación o prohibición de residir en un lugar o territorio determinado, que podrá promoverse en cualquier momento posterior al comienzo de su ejecución, y en las de internamiento por tiempo indeterminado, hasta que transcurran cuatro meses desde el principio del mismo.

Segundo. Por haber quebrantado el peligroso cualquiera de las medidas a que hubiere sido sometido.

Tercero. Cuando por su conducta posterior a la sentencia o al auto de revisión, y anterior a la extinción de todas las medidas impuestas, incurriere nuevamente en cual

quiera de los estados de peligrosidad de los artículos segundo, tercero y cuarto de esta Ley."

Artículo 31.-"Iniciado el juicio de revisión, el Juez oirá al declarado peligroso social sobre el hecho que lo motive, así como sobre su ocupación o manera de vivir si hubiere permanecido en libertad, y ordenará que dentro del plazo de doce días se practiquen las investigaciones, informaciones y comprobaciones que estime necesarias o útiles de las previstas en el artículo dieciseis, incluso a instancia del Fiscal o del peligroso, siendo éste asistido por el Abogado y el Procurador que hubieran asumido su defensa y representación en el expediente, o por los que designe o previamente se le nombren de acuerdo con lo dispuesto en el artículo diecisiete. También podrá el Juez adoptar, si procediere, las medidas del artículo diecinueve.

Seguidamente dará vista de lo actuado al Fiscal y al declarado peligroso por plazo sucesivo de tres días, para que, por escrito, el primero informe y el segundo haga las alegaciones de descargo que le convinieren.

Evacuados tales trámites, el Juez dictará auto dentro del tercer día, en el que acordará la revisión o declarará no haber lugar a ella. Este auto se notificará al Fiscal y a la parte."



Artículo 32.-"En el plazo de tres días el de  
clarado peligroso social podrá interponer, contra el auto de re  
visión, recurso de apelación, si las medidas acordadas ex  
cedieran del tiempo máximo por el que se impusieron en la  
sentencia o en el anterior auto de revisión, o se sustituyeran por otras, o las nuevas impuestas fueran de distinta naturaleza; y sin ninguna limitación si el juicio de revisión lo hubiera promovido él, en el supuesto del número uno del artículo treinta. El Fiscal podrá recurrir, en el mismo plazo, cualquiera que sea el auto dictado.

El Juez acordará emplazar al Fiscal y a la parte para que comparezcan ante la Sala de Apelación correspondiente dentro del quinto día. La apelación se tramitará en la forma prevenida en el artículo veintitres."

El juicio de revisión constituye un juicio distin  
to e independiente del que motiva la imposición de la medi  
da de seguridad, tiene carácter extraordinario, fundándose solamente en los motivos que taxativamente señala la Ley . Desaparece la impresión de la Ley de Vagos y Maleantes , la cual se limitaba a señalar el deber de velar por el cum  
plimiento de la medida y de informar periódicamente al Tribunal.

## TITULO TERCERO

## Del recurso de abuso.

Artículo 33.-"El sujeto a medida de seguridad podrá recurrir ante el Juez de Instrucción de su residencia o ante el encargado de la aplicación de esta Ley en su territorio, de todo exceso o abuso que pudiera haberse cometido en la ejecución de la medida acordada.

En el primer caso, el Juez de Instrucción remitirá los antecedentes al competente para su aplicación de esta Ley. Este previa la práctica de las diligencias que estime convenientes y oídos el Fiscal y la parte, podrá acordar las disposiciones pertinentes para corregir el exceso o abuso comprobado, sin perjuicio de lo demás que proceda. De esta resolución se dará cuenta en todo caso a la Sala de Apelación correspondiente.

La resolución se notificará al interesado, quién podrá recurrir contra la misma, ante dicha Sala, asistido de Abogado y Procurador."

Al sujeto sometido a las medidas de seguridad le asiste el derecho de recurrir ante el Juez o ante el encargado de la aplicación de la medida para denunciar todo exceso o abuso que se hubiese cometido en la ejecución de la

misma; el Juez competente procederá a practicar las diligencias concernientes y una vez oídos el Fiscal y la parte podrá acordar la corrección de la ejecución de la medida y lo que considere procedente. La Ley de Peligrosidad Social a diferencia de la Ley de Vagos y Maleantes que solo le destinaba un artículo a este recurso, le consagra todo el Título III.

#### TITULO IV

##### NORMAS SUPLETORIAS

Artículo 34.-" En todo lo referente al procedimiento y ejecución de medidas de seguridad serán supletoriamente aplicables, en primer término, las disposiciones del título III del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su defecto, los demás preceptos de la misma, salvo en cuanto a recursos, que no se admitirán otros que los expresamente establecidos en la presente Ley. "

#### TITULO V

De la prescripción de las medidas de seguridad.

Artículo 35.-" Las medidas de seguridad prescribirán:

a) A los diez años, si se trata de internamiento en establecimiento de custodia o de trabajo.

b) A los cinco años, si se trata de internamiento en asilos curativos de templanza o en establecimientos de preservación y reeducación, o de sumisión a la vigilancia de los delegados.

c) A los tres años, en cualquier otro caso.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que quedó firme la resolución en que se impuso la correspondiente medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse la que se trate, o desde aquel en que se hubiera interrumpido irregularmente su ejecución.

Si la medida de seguridad fuera en su cumplimiento posterior al de una pena, se computará el plazo desde la extinción de tal condena.

En todo caso, los plazos de prescripción establecidos en el presente artículo quedan interrumpidos si el peligroso fuera condenado por razón de delito."

El Profesor Serrano Gómez (1) al enjuiciar la prescripción de esta Ley escribe que "el artículo 35 de la Ley —

---

(1) Alfonso Serrano Gómez - Obra citada - Páginas 229 y 250.

establece un plazo de prescripción de las medidas de seguridad, que va de un mínimo de tres a un máximo de diez años . Los límites en las penas, según el artículo 115 del Código penal, son un mínimo de un año, con un máximo de treinta y cinco.

Parece poco acertado el criterio que sigue la Ley de establecer, para algunos supuestos, períodos más largos para la prescripción de una medida que para la prescripción de la pena, así: Según el apartado a) del artículo 35 de la Ley, la medida prescribe a los diez años, cuando el internamiento es un establecimiento de custodia o trabajo; conforme a lo dispuesto en el número 1º del artículo 5º de la misma, la duración de la medida para esos casos tiene un límite mínimo de cuatro meses y un máximo de tres años. Se equipara aquí, en relación a la prescripción de la pena, conforme al artículo 115 del Código penal, a las penas comprendidas entre uno y seis años. La duración del período de prescripción es el mismo, mientras la duración de la medida es tres veces menor en el límite mínimo (cuatro meses, por un año en la pena) y la mitad en el límite máximo (tres años en la medida y seis en la pena).

Puede argumentarse en favor de ese desfase: que solamente se suele cumplir la mitad de la pena, debido al be-

beneficio de la redención de penas por el trabajo y libertad condicional (sin tener en cuenta la amnistía o indulto). Sin embargo, aunque eso es lo normal, hay excepciones: a) Que el sujeto no quiera redimir; b) Que pierda tal beneficio, por intento de evasión, por comisión de falta grave o muy grave y c) No concedérsele la libertad condicional, por no reunir los requisitos necesarios.

Puede suceder que antes de que termine el período - de prescripción el sujeto cambie de comportamiento, dejando de ser peligroso. En tal supuesto ya no tienen objeto hacerle cumplir la medida que le fue impuesta. No tiene las medidas fin expiatorio como pena, sino que se imponen en función de la peligrosidad, y desaparecida ésta ya no tiene razón de ser. Puede resolverse este problema mediante el juicio de revisión.

Debía reducirse el período de prescripción de las medidas en el sentido de que, por lo menos, en ningún caso sean superiores a las penas, teniendo en cuenta la duración de unas y otras."

#### Disposiciones Adicionales

Primera. La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su promulgación.

Segunda. Las medidas de seguridad aplicables a los peligrosos sociales se regirán, en cuanto a su efecto retroactivo, por lo establecido en los artículos veintitres y -veinticuatro del Código Penal.

Tercera. Antes de la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio de Justicia habilitará los establecimientos adecuados a los que dotará de personal idóneo para la aplicación de las medidas de seguridad y rehabilitación, y someterá al Gobierno el proyecto del Reglamento que desarrolle el contenido de la presente Ley.

Por orden del 1º de junio de 1.971 se habilitan una serie de establecimientos penitenciarios destinados al cumplimiento de medidas de seguridad y por Ley de 22 de diciembre de 1.970 se crea Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, compuesto por 170 funcionarios, a cubrir en once años. Deberán poseer título de Enseñanza Superior Universitaria o Técnica y acreditar conocimientos especiales - sobre Criminología, Psicología, Pedagogía, Psiquiatría Endocrinología, Sociología y Moral, por lo que se crean otras tantas especialidades.

Cuarta. Se autoriza al Gobierno para proceder a la enajenación de los inmuebles que se desafecten del Servicio

de Instituciones Penitenciarias, aun cuando su valor exceda del límite señalado en el artículo sesenta y dos de la Ley del Patrimonio del Estado, siempre que su importe vaya a ser reinvertido en la modernización, mejore o nueva instalación de dependencias adscritas al citado Servicio. En estas reinversiones se concederán preferencia en lo posible, a los establecimientos que deberán habilitarse para la ejecución de las medidas de seguridad previstas en esta Ley.

Quinta. Se establecerán en el Ministerio de Justicia, en las Salas Especiales de Apelación, en la Dirección General de Seguridad, o en los Centros que ésta designe, y la Jefatura Central de Tráfico, los registros especiales que sean necesarios con arreglo al Reglamento que se dicte.

Sexta. Se autoriza al Gobierno para revisar, en la medida indispensable, las plantillas de destinos del personal de la Administración de Justicia para que puede dotar convenientemente los Juzgados y Tribunales encargados de la aplicación de esta Ley.

Séptima. Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta de la Presidencia, adapte por Decreto las normas contenidas en la presente Ley a la jurisdicción militar en los casos en que pudiera ser competente, conforme al capítulo -



II, título I, Tratado Primero del Código de Justicia Militar, de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.

### Disposiciones Finales

Primera. Se deroga la Ley de Vagos y Maleantes, de cuatro de agosto de mil novecientos treinta y tres, y sus complementarias o modificativas de veintitres de noviembre de mil novecientos treinta y cinco, cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro y veinticuatro de abril de mil novecientos cincuenta y ocho.

Segunda. El Gobierno, antes de la entrada en vigor de esta Ley y por Decreto, a propuesta de los Ministerios de Justicia y de Gobernación, adaptará los preceptos del Código de la Circulación que resulten afectados a lo dispuesto en la presente Ley.

Por Decreto 1.180 - 1.970 de 14 de mayo, se modifican los artículos 264, 289, 290 y 291 del Código de la Circulación (Ver anexo No. 1).

### Reformas

La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social ha

sido objeto de una importante reforma que afecta practicamente la mitad de su articulado, el 28 de noviembre de 1.974 , por Ley 43 - 1.974, publicada en el B.O.E. No. 287 del 30 de noviembre de 1.974 (Ver anexo No. 2).

Esta reforma se refiere especialmente a los siguientes aspectos:

1º) Introducción de nuevas conductas consideradas - como reveladoras de peligrosidad social y cuya constante repetición necesitan que se le sometan a medidas de seguridad preventivas y rehabilitadoras.

2º) Actualización del monto fijado para las multas aplicables, tomando en cuenta el nivel de vida y el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Se amplía el tiempo de internamiento en establecimientos de trabajo, dando un margen mayor a la indeterminación de las medidas aplicables.

3º) Se considera que la facultad para declarar el estado peligroso y para la aplicación de las correspondientes medidas de seguridad, dentro de la jurisdicción ordinaria, pudiendo comprender esta una o más provincias, corresponde a los Jueces de peligrosidad y rehabilitación social, los cuales habrán de seleccionarse atendiendo a su especialización y

4º) Modificación de la normativa relacionada con el procedimiento de revisión para ampliar su ámbito y determinar

el contenido del auto resolutorio del juicio, conforme evolucione la peligrosidad del sujeto tratado.

Reglamento de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

Por Decreto No. 1144/1971 de 13 de mayo de 1.970, publicado en el B.O.E. de 3 de junio de 1.971, se aprueba el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Peligrosidad y Regabililitación Social.

El Decreto dice literalmente lo siguiente:

" La disposición adicional tercera de la Ley dieciséis/mil novecientos setenta, de cuatro de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social, dispuso que el Ministerio de Justicia habría de someter al Gobierno, antes de la entrada en vigor de la misma, el proyecto de Reglamento que desarrolle su contenido. A esta finalidad responde el presente texto, que respeta la sistemática de la Ley y se divide en XII capítulos, adicionados con cuatro disposiciones finales y una transitoria.

Por consiguiente, el Reglamento que ahora se aprueba desarrolla los preceptos de la Ley y regula aquellas materias específicamente reglamentarias que son precisas para una correcta y eficaz aplicación de aquélla. Al hacerlo

así, se han tenido en cuenta los objetivos proclamados por el legislador al promulgar el texto legislativo, y, especialmente, su carácter humano y social, que no se limita a una pragmática defensa de la sociedad, sino que aspira a obtener la reintegración a la vida ordenada y normal de aquellas personas que, por una u otra razón, han quedado marginadas de ella. De ahí la importancia que se confiere a la ejecución de las medidas de seguridad, especialmente cuando implican una restricción de la libertad del individuo impuesta por las exigencias de defensa de la comunidad y por el interés del sujeto afectado, que ha de ser sometido al tratamiento adecuado para conseguir su reinserción social, ya que una limitación de la ejecución a las exigencias defensivas, quebrantaría uno de los designios fundamentales de la Ley, a los que este Reglamento ha de servir.

En esta línea, era inexcusable dedicar una minuciosa regulación a los establecimientos de cumplimiento de ciertas medidas de seguridad y al personal encargado de hacerlas cumplir. Es evidente que estos dos elementos, el personal y los establecimientos adecuados, son las piezas claves de la ejecución de las medidas que requieren su auxilio, ya que hay otras en la Ley, cuya problemática de ejecución, además de ser más sencilla porque el aspecto reeducador o

preventivo queda embebido en la medida misma, no requiere el internamiento del sujeto peligroso.

En este punto, y aun siendo la creación y sostenimiento de establecimientos especiales en todo caso, la meta ideal de una acción administrativa de apoyo a la ejecución, que tiene siempre carácter judicial, un criterio realista ha presidido la solución adoptada, puesto que si bien se crearán aquellos establecimientos especiales que resultan necesarios, también se aprovecharán las posibilidades asistenciales ya existentes. De ahí el que ciertas medidas, internamiento en casas de templanza o centros de preservación, puedan llevarse a efecto incluso en centros privados con las debidas cautelas y garantías. Otras, como las referentes a mujeres menores de 25 años, se ejecutarán contando con los servicios y la experiencia del Patronato de Protección a la Mujer.

En cuanto a los demás centros, tanto de custodia como de trabajo o reeducación, razones de economía y la necesidad de aprovechar la experiencia y los elementos de utilización común de que dispone, han aconsejado su adscripción administrativa a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Ello no significa que se desconozca, en modo alguno, la especialidad del tratamiento que exigen las medidas y la

conveniencia de separar a los sujetos a ellas del sistema penitenciario general.

Por el contrario, es preocupación constante del Reglamento el mantener siempre una estricta separación entre - los establecimientos de cumplimiento de las medidas y los centros penitenciarios y, donde ello no sea posible, entre los sometidos a medidas y penas. Esta preocupación, además - de la especialización del personal que atenderá estós centros y la presencia directa del Juez en todas las decisiones importantes de la ejecución que, sin embargo, no impide el consejo o la propuesta de los especialistas integrados en la junta de tratamiento, conseguirá que las medidas de internamiento sólo puedan ser contempladas desde el aspecto de la mera segregación social, cuando el sujeto resulte absolutamente irrecuperable.

El Reglamento contiene precisiones de cierta transcendencia en orden a la ejecución de algunas otras medidas que no implican internamiento. Así sucede con el arresto de fines de semana, que se regula en forma que nunca pueda interferirse con el trabajo normal del individuo. Lo mismo ocurrer con la ejecución de la privación del permiso de conducción de vehículos de motor o la prohibición de obtenerlo, que

recibe la atención que merece una medida, aunque constituye una innovación de la Ley, se refiere a un moderno aspecto de la peligrosidad social, cuya importancia y trascendencia - es innecesaria destacar ahora.

Para el cumplimiento de la medida de sumisión a la vigilancia, se instrumentan los elementos personales necesarios.

Los delegados serán especialistas, donde pueda contarse con ello, y, en todo caso, constituirán el lazo de unión del sometido a la medida con el Juez, así como el apoyo más eficaz con que aquel podrá contar en su recuperación social. El elemento vocacional, fundamental para que esta labor sea efectiva, se conseguirá a través de la especialización del delegado y de las aportaciones voluntarias de aquellas personas que han de actuar como auxiliares.

Las disposiciones orgánicas que el Reglamento dedica a los Juzgados y Salas de Apelación, de conformidad con la autorización de la Ley, han intentado conjugar en principio de especialización, con un montaje lo menos honeroso posible. De ahí la regla general de la compatibilidad de estas funciones con la de otro cargo judicial, que, sin embargo, se altera para los Juzgados de Madrid y Barcelona, con la po

sibilidad de que, si el número de asuntos lo justifica, se extienda a algún otro e incluso a alguna Sala de Apelación.

Disposiciones complementarias, en cierto sentido , son las que organizan los registros que la Ley impone. De manera especial, se contempla el "Registro Central de Peligrosos Sociales" que se enclava dentro del de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia. Pero todos ellos se organizan bajo el principio de que sus anotaciones son reservadas, ya que, en otro caso, podrían perjudicar a la rehabilitación social que persigue la Ley. El destino normal de sus anotaciones serán los órganos judiciales interesados en conocer la personalidad del sujeto."

El Decreto expresa clara y ampliamente la filosofía y la finalidad del Reglamento, el cual está estructurado en 12 capítulos, y 111 artículos. El capítulo 1º contiene Disposiciones Generales; el capítulo 2º trata de la Ejecución de las medidas de seguridad; el capítulo 3º De los centros preventivos; capítulo 4º De los establecimientos de cumplimiento de las medidas de seguridad.

Se subdivide en cuatro secciones, las cuales trata la primera de normas generales; la segunda De los establecimientos de custodia; la tercera De los establecimientos de



trabajo y la cuarta De los establecimientos de reeducación , preservación y templanza. Capítulo quinto Del tratamiento de los sometidos a medidas de seguridad en establecimientos de rehabilitación. Capítulo sexto De la sumisión a la vigencia de la autoridad. Capítulo séptimo De la Policía Judicial. Capítulo Octavo De los Juzgados y Tribunales. Capítulo Noveno Del procedimiento. Capítulo décimo De los libros de los Juzgados y Salas de Apelación. Capítulo undécimo Registros. Capítulo duodécimo Inspección.

Del Reglamento de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social el Magistrado Pastor López (1) escribe que este "ha venido a concretar los preceptos de la Ley, en sentido negativo, al establecer el principio general, contrario a la especialización, de que "el Juez de Instrucción de cada capital de provincia desempeñará las funciones atribuidas por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, extendiendo su competencia territorial a toda la provincia", y que "en las capitales de provincia en donde haya más de un Juzgado de Instrucción, las funciones señaladas en el número anterior - corresponderán al Juez del Juzgado número uno, que será el ~~de~~

---

(1) Miguel Pastor López - Aspectos Orgánicos y Funcionales de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social - Peligrosidad Social y Medidas de Seguridad - Universidad de Valencia - 1.974 - Página 313.

Peligrosidad y Rehabilitación Social" (Artículo 67).

Los inconvenientes de este criterio son notables, no sólo desde el punto de vista teórico sino también en el aspecto práctico. No parece haberse tenido en cuenta dos factores muy importantes que empecen al debido desarrollo de esta función jurisdiccional, a saber: De un lado, que entre grandes capitales del tipo de Valencia, Sevilla, Zaragoza o Bilbao y otras pequeñas como Soria, Teruel o Huesca hay tales diferencias demográficas así como sociológicas de toda índole, que el régimen orgánico de los respectivos Juzgados de Peligrosidad, como también de los órganos administrativos y establecimientos complementarios de esta función, han de ser muy diferentes, resultando absurdo que actualmente sean idénticos; de otra parte, la función jurisdiccional que nos ocupa ha sido encomendada a unos Magistrados cuya tarea, cuando se trata de los Decanos de grandes ciudades, está ya muy sobrecargada, toda vez que han de atender a sus respectivos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, con todo su diverso contenido civil y penal, a más del Decanato respectivo; cometido que en su conjunto sobrepasa las posibilidades humanas; si ha de ser desempeñado debidamente.

El artículo 68 del Reglamento consagra el régimen especial y el cometido único de los Juzgados de Madrid y Barce-

lona, así como el de simultaneidad de funciones de los restantes Juzgados, recogién dose también la posibilidad de que cuando el número de expedientes que se tramite lo justifique, podrá el Ministerio de Justicia disponer de algún otro Juzgado que sea servido en régimen de exclusividad.

La provisión de los Juzgados de Peligrosidad ordinarios dice, no puede tener en cuenta especialización personal alguna, puesto que es una función ajena al cargo de Juez de Instrucción número uno de cada capital.

El artículo 9º de la Ley establece que, para conocer de los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los Jueces de Instrucción, existirán Salas Especiales en determinadas Audiencias, integradas por 3 Magistrados, con o sin relevación de sus otras funciones (otra vez el sistema de trato dualista), mientras que el artículo 71 del Reglamento parece haber desvirtuado este precepto al crear una sola Sala Especial en la Audiencia Territorial de Madrid, cuya competencia se extenderá a todo el territorio nacional. Los Magistrados que la integran desempeñarán su cometido al mismo tiempo que el que tengan asignado por razón de su destino en la respectiva Audiencia; también se prevé la posible creación de otras Salas especiales.

El artículo 74 del Reglamento hace posible la especialización del funcionario de la Carrera Fiscal que se adscriba a la plantilla de los Juzgados con cometido único.

Y dice el autor, que cabe mantener que la Administración, concretamente el Ministerio de Justicia, deberá agotar las posibilidades que ofrece la vigente legislación, hasta tanto se modifique a fin de conseguir una acentuación progresiva del principio de especialización funcional, sobre todo en los Juzgados de Peligrosidad que radiquen en todas las grandes capitales y zonas de apreciables densidades de población, por razones de desarrollo industrial, turístico, etc., en donde el problema de la peligrosidad social se presenta con caracteres más agudos."

Uno de los comentarios más concretos hechos a este Reglamento se debe al Profesor Fairen Guillen (1) quien hace un estudio profundo, primero del proyecto y posteriormente del Reglamento vigente llegando a las siguientes conclusiones que él califica como resumen de su valiosa obra;

---

(1) Victor Fairen Guillen - Problemas del Proceso por Peligrosidad sin Delito - Editorial Tecnos - 1.972 - Página 229 .-

El Reglamento español contiene aciertos y desaciertos; un elenco de establecimientos que se prevén para el cumplimiento de un amplio abanico de medidas de seguridad -que esperamos nunca se apliquen por razones políticas, máximo - peligro de las leyes de este tipo- al menos en el papel; tan bién parece correcta -salvo especialidades que no son de nuestra competencia- la delineación de los tratamientos.

Fundamental papel han de desempeñar los peritos de diversa especie en los tratamientos -los equipos, las Juntas de Tratamiento-; recordemos que su intervención es tras cendental como garantía frente a los peligros que para la libertad individual supone la ejecución de una sentencia re lativamente indeterminada, como lo es la de declaración de estado peligroso; son ellos quienes suministran, ponen al alcance del Juez, las máximas de la ciencia que éste ha de transferir a la sentencia. Por ello, debemos pretender que estos peritos -los previstos en el Reglamento-, aun siendo funcionarios administrativos -y, por tanto, expuestos a recibir "ordenes de servicio", etc., de sus superiores- deban actuar en el desempeño de sus funciones, protegidos, no solamente por las garantías que las leyes administrativas les conceden como tales funcionarios, sino aún más allá, por la

independencia total; su sumisión debe serlo tan sólo a su propia ciencia y, a la Ley, que el Juez representa en cada caso. Sin colocarlos a la altura de los Jueces -como por algunos se ha querido-, sin embargo, las garantías de la independencia de éstos les deberían ser aplicables.

Frente a aciertos, el Reglamento incurre en desa-ciertos. Su apertura a "establecimientos privados" no nos place en absoluto, aunque no desconozcamos que posiblemente ha influido en esta "apertura" hacia lo privatístico, un razonamiento económico; por este "criterio realista", y pese a las precauciones que se toman, se pasa a utilizar centros penitenciarios -si bien con separación absoluta de delin -cuentes y peligrosos- para el cumplimiento de las medidas de seguridad; en cuanto a las necesidades de personal especia-lizado con mentalidad no penitenciaria, también se parte de una base estrecha; muchos esfuerzos habrán de hacerse para que el Reglamento se cumpla literalmente.

Ponemos fin a este apartado recordando una vez más que "la falta de medios económicos deja en el papel las instituciones que deberían crearse para readaptar a la vida social a los sujetos peligrosos, y su inaplicabilidad desacredita las leyes o las desvirtúa; esto es, o las leyes de pe-

ligrosidad no se aplican, o las medidas de seguridad se transforman en penas.

Comparando el Reglamento de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social con el de la Ley de Vagos y Maleantes - de 1.933 observamos que el presente es mucho más científico - por su considerable contenido criminológico. Así vemos que el propio Preámbulo del Reglamento dice literalmente: "De ahí la importancia que se confiere a la ejecución de las medidas de seguridad, especialmente cuando implican una restriccción de la libertad del individuo impuesta por las exigencias de de - fensa de la comunidad y por el interés del sujeto afectado , que ha de ser sometido al tratamiento adecuado para conseguir su reinserción social, ya que una limitación de la ejecución a las exigencias defensivas, quebrantaría uno de los desig - nios fundamentales de la Ley, a los que este Reglamento ha de servir", y que "Para el cumplimiento de la medida de sumisión a la vigilancia, se instrumentan los elementos personales necesarios. Los delegados serán especialistas, donde pueda con - tarse con ellos, y, en todo caso, constituirán el lazo de u - nión del sometido a la medida con el Juez, así como el apoyo más eficaz con que aquél podrá contar en su recuperación so - cial. El elemento vocacional, fundamental para que esta labor sea efectiva, se conseguirá a través de la especialización del delegado y de las aportaciones voluntarias de aquellas perso -

nas que han de actuar como auxiliares." Este hecho aparece también demostrado en los artículos siguientes:

Artículo 36.- "El tratamiento de los sometidos a medidas de seguridad que impliquen internamiento en los establecimientos de custodia, trabajo y reeducación, se ajustarán a los siguientes principios:

1º.- Será de carácter continuo y dinámico, y siempre dependiente de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno.

2º.- Estará basado en el estudio científico de la constitución, temperamento, carácter, tendencias y condicionamientos ambientales del sujeto, con la variable utilización de los adecuados métodos psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales."

Artículo 47.- "Serán misiones de la Junta:

1º. Investigar la personalidad de cada sujeto a internamiento y las vicisitudes de su peligrosidad social.

2º. Individualizar, dentro de las líneas generales señaladas en este Reglamento, el tratamiento aplicable al interno, en todo lo que no haya de ser objeto de resolución judicial."



Artículo 83. " 1. La investigación antropológica, psí quica y patológica del sujeto se llevará a cabo mediante dic tamen pericial médico emitido en función de su supuesta pelii grosidad.

2. La investigación antropológica tendra a lograr el diagnóstico biotipológico y cuantos datos de dicha naturale - za se consideren útiles.

3. La psíquica, además de la descripción del carác - ter y temperamento del individuo, procurará describir cual - quier trastorno de esta índole. Cuando exista, se precisará - su influencia sobre la conducta social del sujeto y la posible conveniencia de ingresarlo en un establecimiento de preserva - ción.

4. En la exploración patológica, que tendrá por objeto el descubrimiento de cualquier enfermedad orgánica, se uti lizarán las técnicas habituales con el auxilio de los medios y pruebas que el caso específicamente requiera. "

Artículo 85. " 1. Además de las condiciones generales señaladas en la investigación de la personalidad, se tendrán en cuenta las particularidades siguientes:

a) Vagos y prostitutas: Se pondrá especial atención en el examen psíquico, complementándolo, a ser posible, con

la aplicación de métodos psicométricos.

b) Rufianes: Se estudiará su personalidad psicopática y eventual degeneración ética debida al alcoholismo - drogas u otras causas.

c) Homosexuales: Convendrá distinguir entre las homosexualidades causadas por procesos patológicos o circunstancias de diversa índole y las motivadas por perturbaciones en la biología del sujeto. Se intentará comprobar la existencia de anomalías cromosómicas en cuanto aparezcan presunciones clínicas.

d) Enfermos mentales: Se efectuará un diagnóstico - provisional de la enfermedad, indicando el grado y la forma de peligrosidad del individuo.

e) Ebrios: Se considerará la posible existencia de un alcoholismo sintomático y el grado de deterioro psíquico y somático producido por el alcohol.

f) Toxicómanos: Se hará constar la dependencia al tóxico y a los efectos psíquicos y somáticos que éste haya producido, así como las causas determinantes de la toxicomanía."

#### 4.- Ley de Tribunales Tutelares de Menores.-

Uno de los aspectos más delicados dentro del campo de la delincuencia lo constituye la consideración de los menores delincuentes; pues aunque propiamente hablando, de conformidad con el Derecho Penal, los actos cometidos por menores de edad no son punibles, criminológicamente tienen una importancia trascendental y su estudio es de gran interés.

Las Naciones Unidas han considerado que "el término menor delincuente, escapa a una definición puramente jurídica, los principios legales que determinan la aplicación de medidas de protección y readaptación no pueden tener la objetiva severidad de los principios en virtud de los cuales se castigan los delitos cometidos por adultos. Aquellos principios deben referirse tanto a delitos definidos como al comportamiento anormal que, al revelar un estado de inadaptación, constituye un aviso de probables delitos futuros y exige una pronta acción". En el mismo sentido se pronunció el Seminario Latinoamericano sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en la ciudad de Rio de Janeiro en el año de 1.953, llegando a las siguientes conclusiones:

- 1) Es técnicamente inadecuada la expresión "delin-

cuencia juvenil", por no reunirse los elementos esenciales del concepto doctrinal del delito.

2) Aunque el término se presta para diversas acepciones, debe tomarse la más precisa, aunque sea la más estrecha, que es la relativa a las conductas tipificadas en las leyes penales.

3) Que aunque el término "delincuente" es inadecuado, no hay otro con que sustituirlo y que sea tan preciso como él, por lo que debe continuarse utilizándolo.

Sobre la legislación de menores en España el Sacerdote Antonio Beristain (1) escribe que en este país el primer Tribunal Tutelar de Menores se llamó Tribunal para Niños el cual empezó a actuar en Bilbao el 8 de mayo de 1920, presidido por Don Gabriel María de Ibarra y de la Revilla, y que actualmente funciona Tribunales de Menores, en todas y cada una de las capitales de provincia, dependiendo del Ministerio de Justicia a través del Consejo Superior de Protección de Menores.

Actualmente la legislación sobre menores en España

---

(1) Antonio Beristain S.J. - Obra citada - Página 134.

se materializa especialmente por la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, Reglamento para su Ejecución y Estatuto de la Unión Nacional de dichos Tribunales; legislación que aparece recogida en el "Compendio de Legislación editado por el Consejo Superior de Protección de Menores" en el año 1969.

El Decreto de 11 de junio de 1.948, aparecido en el B.O.E. No. 201 de 19 de julio, contiene el texto refundido - de la Legislación sobre Tribunales Tutelares de Menores, Ley, Reglamento para su Ejecución y Estatuto de la Unión Nacional de dichos Tribunales. Su Preámbulo dice literalmente: " La diversidad de disposiciones que en la actualidad regulan el funcionamiento de los organismos jurisdiccionales encargados de enjuiciar y sancionar las infracciones punibles cometidas por los menores de 16 años, recomiendan proceder a su sistematización, al propio tiempo que a armonizar dicha legislación especial con los preceptos del nuevo Código Penal del año 1.944 que castiga las faltas cometidas contra los menores. Respondiendo esta conveniencia, se ha elaborado el presente texto, en el que manteniéndose en lo sustancial los preceptos de la Ley Orgánica de T.T. de M. y Reglamento para su aplicación, actualmente vigente se refunden aquéllos y se incorporan a los mismos las normas que se han estimado precisas para el mejor cumplimiento de la misión que les está en-

comendada.

En mérito de lo expuesto, a propuesta del Ministro de Justicia de conformidad en lo sustancial con el dictamen del Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, se aprueba el texto refundido de la Ley de T.T.M., Reglamento para su Ejecución y Estatuto de la Unión Nacional de dicho Tribunal."

En el aspecto concreto de las medidas de seguridad al examinar las medidas relativas a menores de edad el Dr. Rodríguez Devesa (1) escribe que "el artículo 9 de la L.L.T. M., faculta para el conocimiento de faltas cometidas por mayores de 16 años, establecidas en el artículo 584 del Código Penal;" lo que el considera como "una añadición de medidas represivas recomendando la conveniencia de notar que respecto a los hechos calificados de delitos o faltas por el Código Penal o en leyes especiales, los Tribunales Tutelares tienen una razonada libertad de criterio, debiendo valorarlos en directa relación con las condiciones morales y sociales de los menores que las haya ejecutado y prescindiendo en absoluto el concepto jurídico y del alcance con que, a los efectos de la respectiva responsabilidad, se califican en

---

(1) José María Rodríguez Devesa - Derecho Penal- Obra citada - Página 835.

las leyes penales; puntualiza que las medidas que pueda adoptar el T.T.M. en uso de su facultad reformadora son: amonestación o breve internamiento; dejar al menor en situación de libertad vigilada; colocarlo bajo la custodia de otra persona, familia o de una sociedad tutelar; ingresarlo en un establecimiento oficial o privado de observación, de educación, de reforma de tipo educativo, de tipo correctivo o de semilibertad; ingreso en establecimiento especial para menores anormales; salvo en el primer caso, el Tribunal ha de acordar que un Delegado se encargue de la vigilancia del menor y de la persona, familia, sociedad o establecimiento a cuya custodia se haya confiado. Seguidamente aclara el autor que el internamiento de tipo correctivo no puede ser acordado más que cuando los medios establecidos en las demás instituciones reformadoras, auxiliares de tribunales, resulten ineficaces dadas sus condiciones personales especiales; dice que la vida afectiva del menor tiene una importancia tan grande en cualquier medida que se tome, que se debe, en cuanto sea posible, mantenerlo dentro del contorno familiar, tratando de que los padres mediante una acción ejercida sobre ellos y no sobre el menor, cooperen a los fines de recuperación de éste.

El artículo 20 de la L.T.T.M., 1.948, en concordancia con el artículo 8 del Código Penal, establece que en ca-

so de que sea puesto a disposición del Tribunal un mayor de 16 años por infracciones legales antes de llegar a esta edad, y se considere que no ha de ser conveniente la adopción de medidas procedentes, este queda facultado para declinar su competencia confiando el menor a la Autoridad Gubernativa para que adopte las medidas de seguridad que la Legislación autorice; lo cual considera el catedrático como una manifestación de la incoherencia de la reforma, pues a su juicio , aunque el artículo 20 de la L.T.T.M., disponga otra cosa debió aplicarse, si procedía la Ley de Vagos y Maleantes de 1.933, sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1.970 . Afirma que la L.T.T.M., retiene para los Tribunales Tutelares de Menores solamente los menores de 16 años prostituídos, licensiosos, vagos y vagabundos, siempre que esté indicado ejercer sobre ellos la facultad reformadora, pero que hay una evidente discordancia entre esta norma (artículo 9) y el artículo 1º de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1.970 que dispone que los menores de 16 años que puedan considerarse incluídos en los artículos 2º y 3º, sean puestos a disposición de los Tribunales Tutelares de Menores."

La L.T.T.M., clasifica las medidas de seguridad atendiendo a su mayor o menor importancia. Uno de los más pro



fundos estudiosos de esta materia, Antonio Beristain (1), considera conveniente "sistematizarlas para su estudio en forma similar a las medidas de seguridad contenidas en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, es decir, atendiendo especialmente al bien jurídico afectado; para ello hace las si - guientes clasificaciones:

1.- Medidas privativas de libertad.-

A) Breve internamiento.

B) Internamiento en un establecimiento oficial o privado, de observación, de educación, de reforma de tipo educativo, de reforma de tipo correctivo o de semilibertad.

C) Internamiento en un establecimiento especial para menores anormales.

A) Breve internamiento.

El sometido a esta medida ingresa en alguno de los - establecimientos de menores durante breve tiempo (uno o va - rios días), hasta que el Presidente del Tribunal acuerde la salida.

---

(1) Antonio Beristain S.J. - Obra citada - Páginas 151 y si - guientes.

La única regulación legal acerca del breve internamiento se encuentra en el artículo 125, párrafo 3º, del Reglamento para la ejecución de la LTTM, según el cual, "las medidas de breve internamiento y los internamientos provisionales se cumplirán en la forma y lugar que el Presidente del Tribunal estime conveniente". Esta imprecisión parece excesiva, pero tiene la ventaja de resultar cómoda para los Tribunales (por eso, aplican el breve internamiento con bastante frecuencia: durante el año 1968, en 1.098 casos; durante 1969, en 1.180; durante 1970, en 1.110; durante 1971, en 1.243), y, además, permite actualizar esta medida aplicándola de modo semejante a los modernos arrestos de fines de semana. Estos pueden y deben introducirse ya en las medidas de los TTM (sin necesidad de innovaciones legales), imitando y mejorando la legislación y la práctica de esta institución originaria del Derecho Penal de adultos.

B) Internamiento en un establecimiento oficial o privado, de observación, de educación, de reforma de tipo educativo, de reforma de tipo correctivo, o de semilibertad.

El internamiento de observación se lleva a cabo en las Casas de Observación. En estas Casas, según el artículo 126 del Reglamento, se procurará establecer laboratorios psi

cológicos y, en su caso, psiquiátricos, con el concurso de técnicas competentes, para lograr el conocimiento básico de la personalidad de los menores con miras a su posterior clasificación y tratamiento. Después de estudiar -con más o menos medios- a cada menor, se elabora una ficha que constituye el elemento básico para seleccionar las medidas más apropiadas.

La observación debe realizarse por un equipo de especialistas, para conocer metódicamente las peculiaridades mentales, psíquicas y caracteriológicas del sujeto, así como su cociente de inteligencia, su nivel escolar y profesional, su conducta habitual, su adaptabilidad social, - sus tendencias, sus aptitudes y también sus circunstancias familiares. Puede llevarse a cabo en régimen de internado, de semiinternado o abierto. Su duración debe oscilar entre uno a tres meses. Esta duración debería fijarse en el Acuerdo, pues su prolongación excesiva perjudica seriamente al menor.

Según el Reglamento (art. 162), debe haber una Casa para el servicio de cada Tribunal. Técnica y económicamente convendría más dotar con abundantes medios materiales y personales algunas pocas Casas de Observación cientí

fica para los menores más difíciles de varios Tribunales de cada región, y mantener junto a cada Tribunal una sencilla Casa de Observación de internamiento provisional, para conocer al menor en la vida diaria.

La Ley habla de estos centros en el artículo 17, a apartado A), número 4º, pero el Reglamento no determina nada especial respecto a ellos.

El internamiento de reforma de tipo educativo se lleva a cabo en los antiguamente llamados Reformatorios, de máxima importancia entre las medidas privativas de libertad. Sin esta institución, decía Gabriel M. de Ybarra, no pueden funcionar nuestros Tribunales. Su finalidad, añadía, es la reforma protectora de niños delincuentes, corrompidos o indisciplinados. Para lograrlo se clasifica a los internos en tres secciones o períodos progresivos. El personal que haya de ejercer funciones directivas en estos centros deberá recibir preparación científica adecuada, a tenor de lo establecido en el artículo 135 del Reglamento.

El Internamiento en centros de reforma de tipo correctivo. Según el párrafo 3º del artículo 17 de la LTTM , en los centros de reforma de tipo correctivo únicamente podrá ser internado el menor cuando los medios empleados en

las demás instituciones reformadoras auxiliares del Tribunal resulten ineficaces, dadas sus condiciones personales de desmoralización o rebeldía.

De hecho, no hay centros de este tipo. Si en algunos casos fuese necesario, los Reformatorios pueden organizar secciones especiales de tratamiento apropiado para menores inadaptados (art. 129 del Reglamento).

El internamiento de régimen de semilibertad. Para el cumplimiento de esta medida existen veinte Casas de Familia (distintas de los modernos Hogares de semilibertad). A ellas se envían los menores que hubieren terminado el tratamiento en los establecimientos de régimen cerrado, y necesiten un puente con el mundo exterior (art. 128 del Reglamento).

C) Internamiento en un establecimiento especial - para menores anormales.

Desde hace años, existía en Santurce (Vizcaya) un centro para menores anormales, con capacidad para cincuenta y cinco plazas. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo no había establecimientos especiales para anormales tal y como los regula el artículo 130 del Reglamento.

Medidas restrictivas de derechos.

Las medidas restrictivas de derechos son dos:

A) Colocación bajo la custodia de otra persona, fa  
milia o de una sociedad tutelar; y

B) Libertad vigilada.

A) La colocación bajo la custodia de otra persona, familia o sociedad separa al menor, evidentemente, de la potestad de sus padres, tutores o guardadores de hecho. Esta medida pretende brindar al menor la asistencia que necesita mediante personas que ofrecen garantías de sustituir a sus padres o tutores indignos de serlo o que carecen de las cualidades indispensables.

Pertenece a la exclusiva competencia del respectivo Tribunal la elección de las personas, familias, sociedades tutelares o Establecimientos a quienes los menores sean confiados (art. 123 del Reglamento).

B) Libertad vigilada. La regulación de esta medida ofrece muchos puntos de similitud con la sumisión a la vigi-lancia de la autoridad en la LPRS. Los TTM gozan de más am-plitud de movimientos que los Jueces de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, pues pueden acordar, además, las medidas o restricciones complementarias que estimen favorables.<sup>11</sup>

CAPITULO IVLAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA REPUBLICADE VENEZUELA

El fenómeno de la delincuencia que azota a la sociedad no es un problema de los últimos tiempos, pues este ha existido desde el origen mismo de la humanidad, subsistiendo siempre en todas las épocas, en todos los países y bajo todos los sistemas de organización política; porque según escribe el Dr. García Iturbe (1) "No es la pobreza, ni el hambre, ni el frío, ni el analfabetismo lo que delinque. Quien delinque es el hombre, y este delinque con frío o con calor, con hambre y sin ella, instruido o inculto, pobre o rico".

Todos sabemos que la delincuencia es un fenómeno universal, que ha evolucionado como todas las cosas, agravándose en los últimos tiempos en el mundo entero.

Por lo tanto, encontramos lógico, que al igual que cualquier otro fenómeno, el de la delincuencia, por razones múltiples, se deje sentir más en unos países que en otros.

---

(1) Arnoldo García Iturbe - "La Delincuencia y el Delincuente"  
Ediciones Monte Avila - Caracas - 1.973 - Página 33

España, afortunadamente, continúa ocupando primerísimos puestos entre los países previlegiados, en los que por motivos y razones muy peculiares, el monstruo de la delincuencia apenas a cobrado terreno. Otro, desgraciadamente, es el caso de Venezuela.

Venezuela es un gran país, situado en plena zona tropical, en la costa septentrional de la América del Sur, puerta de América del Sur, como España lo es de la Europa Occidental; su aventajada situación le permite el ejercicio de un dinámico y rentable comercio exterior.

La benignidad de su clima tropical le depara una eterna primavera con flora y fauna exuberantes, que armonizan con la belleza de sus variados paisajes de montañas, valles, playas y verdes praderas.

La Divina Providencia se ha dignado dotarla de excepcionales riquezas naturales; la fertilidad de sus tierras favorecida por envidiables factores climatológicos le permiten contar con una agricultura que le abastece de gran número de artículos de primera necesidad para sus propios habitantes y para la exportación hacia sus países vecinos; dentro de los productos agrícolas más importantes podemos citar el café, el cacao, el plátano, la yuca, y una gran variedad de cereales, frutas y hortalizas.



La riqueza minera representada especialmente por el petróleo, el hierro, las piedras preciosas y el acero, convierten a la Venezuela de hoy, en pleno desarrollo económico, en un país pujante y floreciente; constituyendo un verdadero símbolo de un crecimiento con estabilidad y de un desarrollo en paz y libertad.

El hecho de ocupar primerísimos puestos entre los países productores de oro negro y el de ser el primer exportador de América Latina, hoy cuando la economía mundial se encuentra bajo el signo de cambios fundamentales, que ocurren con motivo de la llamada crisis energética, Venezuela ha acrecentado su ya reconocido valor internacional. Una prueba de ello lo constituye el hecho de haber sido declarado su territorio "Area de Gran Interés Económico" por la VII Conferencia Geológica del Caribe, realizada en Guadalupe en junio de 1.974, a la cual asistieron más de 200 delegados en representación de los países interesados en la llamada "Placa del Caribe"; he aquí una de sus conclusiones: "Es evidente que particularmente en el caso de Venezuela, lo geo-económico tiene excepcional importancia; en lo cual juega un rol determinante la investigación llevada incluso a la zona marítima, cuya extensión no se limita, bajo el punto de vista de sobe-

ranía nacional, a la plataforma continental, a las 12 millas de mar territorial, sino a las 200 millas del mar patrimonial o económico".

Por otra parte, su Gobierno, consciente de que el desarrollo no puede basarse en la tradicional producción primaria, se preocupa actualmente por el desarrollo diversificado de su economía, propiciando el auge de su industrializa - ción; en igual forma se preocupa por adelantar una política de desarrollo integral que le permita la inversión de sus ganancias en obras educacionales y sociales que tanta falta le hacen.

Las pródigas riquezas naturales y el hecho de con - tar con una fuerte unidad monetaria: el bolívar, aproximada - mente equivalente a 13 pesetas (4,30 por dólar) , convierten al país en uno de los más atractivos del mundo. Venezuela es un país rico y prometedor.

Sin embargo, la interrelación de un complejo conjunto de factores psico-socio-económicos y culturales, muy par - ticulares desencadenan una grave y compleja fenomenología criminal en el estado venezolano.

Su alto crecimiento demográfico, la deformación cualitativa socio-cultural originada por la desigualdad en la

distribución de la riqueza, el acinamiento, la promiscuidad y la proliferación de barrios, las migraciones del campo a la ciudad, el resquebrajamiento de la estabilidad familiar, son causas para que las conductas desviadas arranquen desde la más tierna infancia al no recibir el niño el calor y el afecto paternal, espiritual y moral de un hogar bien conformado; el ausentismo de los centros de enseñanza, el tráfico y uso indebido de estupefacientes, aunado a la maternidad - de la mujer joven o muy joven que sin estar capacitada para ser verdadera madre condena a sus hijos a una lamentable de formación psicológica; el abandono de la niñez, que acarrea muchas veces la formación de personalidades psicopáticas , que desencadenan conductas desviadas delincuentes con raíces de agresividad negativa y de violencia intensa; a las cuales creemos que coopera muy significativamente como factor determinante de la estática criminal venezolana, la pro pia naturaleza con sus condiciones climáticas de país tropi cal, donde el calor predomina la mayor parte del año; esto, si atendemos a una de las importantes conclusiones de Lombrosio sobre la Ecología Criminal, según la cual parece demostrado por la estadística y la fisiología humana que: "El calor produce exceso de libertinaje, superstición excesiva, absolutismo tiránico y anarquía desenfrenada".

Así mismo su situación geográfica que le permite el ejercicio de una comunicación ágil con el exterior y que a la vez que le permite exportar sus materias primas, propicia también la importación de cosas buenas y malas; entre estas últimas podemos señalar principalmente las modernas formas - de delincuencia extranjera, la pornografía y el tráfico de estupefacientes.

Estos factores, entre otros y el hecho de carecer - de servicios estadísticos especializados en materia criminal y de suficientes medidas profilácticas específicas, especialmente en lo concerniente a medidas de seguridad, las cuales como veremos más adelante, además de anacrónica, no se amoldan a la realidad social del país; estas podrían ser algunas de las causas de la criminogénesis y de la criminodinámica - venezolanas, muy particularmente en la población joven, la más numerosa del país, pues en Venezuela aproximadamente las  $\frac{3}{4}$  partes de su población está representada por niños y adolescentes, y sólo  $\frac{1}{4}$  parte por adulto, lo cual representa en cierto modo una inversión de la población en relación con España y con la mayoría de los países desarrollados.

El problema que vive la juventud venezolana es similar, en cierta forma al problema de la juventud en general ,

que es causa de gran preocupación y de inquietud en todos los países.

El notable penalista venezolano José Rafael Mendoza Troconis al prologar la obra "La Delincuencia en Caracas" (1) de otro de los profundos estudiosos del problema delincual en Venezuela, el Dr. Elio Gómez Grillo, escribe: "En cada país los fenómenos sociales influyen poderosamente sobre la criminalidad. Las condiciones de vida, su economía, sus costumbres, su religión, el progreso técnico, caracterizan la dinámica individual, porque en virtud de esta dinámica la conducta constituye una acción en oposición a las normas de cultura. Los métodos usados para concretar el ritmo de la delincuencia indican que en los países desarrollados han señalado que "de la angustia del mundo moderno nace la decadencia de los valores morales tradicionales, frente a la tolerancia de ciertas formas de criminalidad o vecinas a ella, como los juegos de azar, la prostitución, la libertad sexual, el tráfico de drogas". Las muertes y las lesiones por imprudencia en accidentes múltiples de trabajo y de vehículos. Los nuevos delitos de cuello blanco, de gangsterismo, de rackete

---

(1) José Rafael Mendoza Troconis - Prólogo a "Delincuencia en Caracas" del Dr. Elio Gómez Grillo - Ediciones Amon C.A. Caracas - 1.973 - Página 19.

rismo, aparecen en países como los Estados Unidos. La delincuencia juvenil se caracteriza por la formación de bandas y pandillas juveniles de Blouson Noirs, Teddy Boys, etc.

Dice que mucho se ha escrito acerca de la investigación de los factores de la criminalidad, afirmando que estos consisten en la interdependencia de los fenómenos sociales. Que los principales entre ellos son los del medio físico o geográfico, los económicos, los culturales y los políticos."

Y el propio Gómez Grillo (1) en otra de sus obras - "La Delincuencia en Venezuela" después de un estudio exhaustivo del fenómeno delincuencial en el país al referirse a la universalidad del problema concluye escribiendo: "En la faena preventiva se conserva la llave que guarda los secretos de los mejores logros en la lucha contra el crimen. Pero no se piense en la desaparición final de éste. Ya Durkheim enseñaba hace medio siglo que tan anormal era una sociedad con exceso delictivo como lo sería con ausencia del delito. Ferri sostuvo siempre que lo grave es la sobresaturación criminal. Pero que la saturación criminal es normal en los organismos sociales contemporáneos. Lo que resulta necesario es lograr-

---

(1) Elio Gómez Grillo - "La Delincuencia en Venezuela" - Editorial Monte Avila - Caracas - 1.973 - Página 68.

su control, reduciéndole a los límites estrictamente normales y disminuyéndola hasta donde sea posible.

A fin de cuentas, en el mejor de los mundos posibles, el delito seguirá al hombre, como la sombra sigue al cuerpo".

Consideramos que para adelantar una eficaz prevención del delito, se requiere desarrollar una política criminal ágil y dinámica dirigida a las realidades sociales, económicas y culturales; fundamentada en una amplia interpretación de la problemática delictiva, pues esta, más que biológica, ecológica o económica, es esencialmente humana. A lo cual podría ayudar en mucho, en Venezuela una profunda reforma del vigente sistema de las medidas de seguridad.

El panorama es alentador, pues los gobiernos de los últimos tiempos han venido demostrando una gran preocupación por el problema delincuencial en el país. Prueba de ello es la implantación de un Sistema Penitenciario Progresivo, la reciente creación de una Dirección de Prevención del Delito, la existencia de un proyecto de Ley de Peligrosidad adaptada al espíritu de la Constitución Nacional, la reciente presentación al Congreso Nacional, por el Ministerio de Justicia, de un Proyecto de Ley de Suspensión de Procesos y Suspensión

de la Pena, la reciente designación de un Ministro de Estado para La Juventud, La Ciencia y La Cultura; el actual Gobierno Constitucional anunció en fecha reciente que el Ministerio de Justicia se denominará en un futuro próximo "Ministerio de la Defensa Social" para lo cual será objeto de una amplia reestructuración en todos sus niveles, con miras, no sólo a combatir la delincuencia, sino a prever el delito atacando sus causas.

Sin embargo, siendo el problema de la delincuencia una situación compleja para su afrentamiento ha de requerirse de la cooperación de todos los venezolanos sin que pueda pensarse que esta es tarea exclusiva de determinadas instituciones en particular o exclusivamente del Estado por lo que se hace indispensable despertar e incentivar en la comunidad en general el sentido de solidaridad social y de una sincera confraternidad basadas en un sentimiento de responsabilidad ciudadana, que ayude eficazmente a la consecución del bien común, mediante la formulación de planes de integración que procuren comprometer, en lo posible, a todos los estratos de la sociedad, involucrando en una forma u otra, a todas las profesiones, muy especialmente a aquellas que guarden relación con la política criminal y con las ciencias criminológicas.



## I - Las Medidas de Seguridad en el Derecho Positivo Venezolano.

### 1.- Código Penal Venezolano.

El Código Penal Venezolano tiene su modelo directo en el Código Penal Italiano de 1.889, no teniéndolo en la legislación penal española por razones históricas de todos conocidas; sin embargo su influencia, ha sido muy notable en todas sus reformas y en todos los proyectos de códigos posteriores.

Refiriéndose a la cambiante historia de la codificación penal en Venezuela anterior al código vigente, Quintano Ripolles (1) escribe que "entre el año 1.863, en que vió la luz el primer Código Penal de Venezuela y el de 1.926 en que se promulgó el actualmente en vigor, son 7 los códigos que se han sucedido, con lo cual ha batido las marcas de esa inestabilidad legislativa tan típica de la América Hispana, y generalmente tan perniciosa para la fijación de una doctrina viva y jurisprudencial. Afirma el autor que España misma ha adolecido también de este defecto, si bien en un espacio

---

(1) Antonio Quintano Ripolles - Códigos de Visibles Influencia Española sobre Estructuras Extrañas - La Influencia de El Derecho Penal Español en las Legislaciones Hispanoamericanas - Madrid 1.953. Página 154.

mucho mayor de tiempo; desde 1.822 ha conocido solamente 6 códigos, contando las meras refundiciones de los años 1.932 y 1.944, es decir uno menos que Venezuela en medio siglo. - Los primeros Códigos Penales Venezolanos de 1.863 y 1.873 , fueron los más íntimamente pegados a los modelos españoles de 1.848 y 1870 respectivamente; en el de 1.897 aparece, en cambio, la desde entonces decisiva influencia italiana de momento la del código Zanardelli, que tanta competencia, a menudo ruinoso ha venido haciendo a la española con el Continente Americano. Tras una fugaz vuelta a lo hispánico en el Código Penal de 1.904, la italiana retorna definitivamente a instalarse en los venezolanos de 1.912, 1.915 y en el vigente, de 6 de julio de 1.926. En fin dice, obra en gran parte de la ciencia jurídico penal española, por la colaboración del Profesor Jimenez de Asúa, con los venezolanos - Méndez y Mendoza es el llamado anteproyecto de Código Penal fechado en 1.948, réplica al italianizante de la Comisión - Gubernamental del año precedente, y que cuenta como uno de los mejor logrados de nuestra época, gloria, a la vez, de la técnica penal española y de la venezolana!"

El Código Penal Venezolano vigente es vetusto y a nacrónico, pues ya con casi medio siglo de vigencia datando desde el 6 de julio de 1.926; no adaptándose a la dinámica-

del Derecho ni a las exigencias de la realidad cambiante de la sociedad venezolana. Este Código ha sido objeto de 2 importantes reformas parciales, la del 4 de octubre de 1958 y la del 27 de junio de 1.964.

En la legislación venezolana vigente la orientación de la política criminal del estado se fundamenta en forma explícita en su propia Constitucional Nacional con 2 finalidades específicas; por una parte procurar impedir que el sujeto peligroso cause daños a la sociedad, y por la otra, preservar o cuidar al mismo individuo, readaptándolo y corrigiéndolo en beneficio y garantía del orden social. Tal se desprende el contenido del artículo 60, ordinal 10º que expresa: " las medidas de interés social sobre sujetos en estado de peligrosidad sólo podrán ser tomadas mediante el cumplimiento de las condiciones y formalidades que establezca la Ley. Dichas medidas se orientarán en todo caso a la readaptación del sujeto para los fines de la convivencia social".

El Código Penal Venezolano vigente contiene una serie de medidas de seguridad, que si bien, aparecen como penas, no vienen a ser otra cosa que medidas dispersas en su articulado y sin que guarden una ordenada relación, refe

ridas especialmente a delincuentes normales.

Estas medidas de seguridad se recogen, a nuestro en tender, en los artículos siguientes:

Artículo 9º.- "Las penas corporales, que también se denominan restrictivas de la libertad, son las siguientes :

1º.- Presidio.

2º.- Prisión.

3º.- Arresto.

4º.- Relegación a una Colonia Penal.

5º.- Confinamiento.

6º.- Expulsión del territorio de la República."

Este artículo establece como "penas corporales" una serie de sanciones; sin embargo, observamos que entre ellas se recogen claramente dos medidas de seguridad; concretamente la 4º: Relegación a una Colonia Penal y la 6º: Expulsión del territorio de la República.

Artículo 10º.- "Las penas no corporales son:

1º.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad pública.

2º.- Interdicción civil por condena penal.

3º.- Inhabilitación política.

4º.- Inhabilitación para ejercer alguna profesión, industria o cargo.

5º.- Destitución de empleo.

6º.- Suspensión del mismo.

7º.- Multa.

8º.- Caución de no ofender o dañar.

9º.- Amonestación o apercibimiento.

10.- Pérdida de los instrumentos o armas con que se cometió el hecho punible y de los efectos que de él provengan.

11.- Pago de las costas procesales."

Al igual que en la anterior, en esta norma se establecen como penas no corporales, varias sanciones que constituyen verdaderas medidas de seguridad a saber: la 1ª. Sujeción a la vigilancia de la autoridad pública; la 8ª. Caución de no ofender o dañar; la 9ª. Amonestación o apercibimiento y la 10. Pérdida de los instrumentos o armas con que se cometió el hecho punible y de los efectos que de él provengan.

Las medidas de seguridad contempladas en los artículos 9 y 10, antes considerados, han sido recogidas posteriormente como medidas de seguridad propiamente dichas, en algunos proyectos posteriores de Códigos Penales.

Artículo 58.- Cuando el delincuente cayere en locu

cura o imbecilidad después de recaída sentencia firme condenatoria, se procederá como lo dispone el Artículo 62 en su aparte final, y si recobrare la razón, cumplirá el tiempo de pena que aun estuviere pendiente, descontando el de la - enfermedad.

Artículo 62.-" No es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos.

Sin embargo, cuando el loco o demente hubiere ejecutado un hecho que equivalga en un cuerdo a delito grave , el Tribunal decretará la reclusión en uno de los hospitales o establecimientos destinados a esta clase de enfermos, del cual no podrá salir sin previa autorización del mismo Tribunal. Si el delito no fuere grave o si no es el establecimiento adecuado, será entregado a su familia, bajo fianza de custodia, a menos que ella no quiera recibirlo."

En estrecha concordancia estos 2 artículos consideran la mayor o menor peligrosidad del delincuente, la cual ha de medirse por la gravedad del hecho delictuoso en que se haya incurrido; se acuerda la reclusión del sujeto hasta - tanto haya recuperado su normalidad, lo cual no es otra coo

sa que la reclusión por tiempo indeterminado; es decir una me  
dida de seguridad.

Artículo 64.-"Si el estado de perturbación mental del encausado en el momento del delito, proviniera de embriaguez, se seguirán las reglas siguientes:

1ª.- Si se probare que con el fin de facilitarse la perpetración del delito, o preparar una excusa, el acusado ha  
bía hecho uso del licor, se aumentará la pena que debiera aplicársele de un quinto a un tercio, con tal que la totalidad no exceda del máximun fijado por la ley a este género de pena. Si la pena que debiere imponérsele fuere la de presidio , se mantendrá ésta.

2ª.- Si resultare probado que el procesado sabía y era notorio entre sus relaciones que la embriaguez le hacía provocador y pendenciero, se le aplicarán sin atenuación las penas que para el delito cometido establece este Código.

3ª.- Si no probada ninguna de las dos circunstancias de los dos números anteriores resultare demostrada la perturbación mental por causa de la embriaguez, las penas se reducirán a los dos tercios, sustituyéndose la prisión al pre  
sidio.

4ª.- Si la embriaguez fuere habitual, la pena corpo

ral que deba sufrirse, podrá mandarse cumplir en un estable-  
cimiento especial de corrección.

5º.- Si la embriaguez fuere enteramente causal o excepcional, que no tenga precedente, las penas en que haya incurrido el encausado se reducirán de la mitad a un cuarto, en su duración, sustituyéndose la pena de presidio con la de prisión."

Se prevee en este artículo el cumplimiento de medidas de seguridad en determinados establecimientos, destinados especialmente para la corrección del sujeto peligroso. - cuando señala su ordinal 4º que Si la embriaguez fuere habitual, la pena corporal que deba sufrirse, podrá mandarse cumplir en un establecimiento especial de corrección.

Artículo 69.-" No es punible: el menor de doce a - ños, en ningún caso, ni el mayor de doce y menor de quince a ños, a menos que aparezca que obró con discernimiento.

El Tribunal tomará las medidas que considere oportunas respecto a la educación del menor irresponsable, el cual será mantenido en adecuado establecimiento de educación o en casa de familia de responsabilidad."

El Código Penal Venezolano vigente establece expre



samente, en este artículo, medidas de seguridad educadoras para el menor de edad; estas medidas podrán cumplirse, según la misma norma en establecimientos adecuados o en casas de determinadas familias.

Artículo 72.- "No se procederá en ningún caso contra el sordomudo que al cometer el hecho punible no hubiere cumplido los quince años, pero si fuere mayor de esta edad y menor de dieciocho años, se aplicarán las disposiciones del artículo anterior, si obró con discernimiento: si no, se le declarará irresponsable, pero el Tribunal dictará las medidas que estime conducentes respecto a su educación hasta que cumpla los veintiún años."

Una similar previsión a la del artículo anterior se establece en este, para el menor de edad sordomudo.

Las dos últimas normas consideradas han sido derogadas por el Estatuto de Menores vigente, que como veremos más adelante regula lo relacionado con la conducta de los menores de 18 años.

Las medidas de seguridad en algunos proyectos posteriores de Códigos Penales.

- Proyecto de Código Penal de 1.938. El Proyecto de

Código Penal de 1.938 se le atribuye casi exclusivamente al Dr. Tulio Chiossonę distinguido hombre de leyes preocupado por la Política Criminal de Venezuela, quien lo publicó en su obra "Anotaciones del Código Penal Venezolano".

Movido por el fenómeno de la delincuencia y muy especialmente por el de la reincidencia en el país, presta especial atención a las medidas de seguridad, a las cuales le consagra todo el capítulo 2º del título 4º del Proyecto; clasificándolas en preventivas y curativas. Las medidas de seguridad preventivas son: internado en una Colonia correccional de trabajo, internado en una casa de salud para los toxicómanos y en caución de buena conducta, y se aplicarían a aquellos individuos que, sin haber cometido un delito, constituyen con su vida y su conducta desorganizada un verdadero peligro para la sociedad. Las curativas: la reclusión en un manicomio criminal, reclusión en una Colonia-hogar y destinación a Colonia penitenciaria agrícola, y se impondrían a los irresponsables o semirresponsables, y también a los menores.

- Proyecto de Código Penal de 1.940. Este proyecto, obra del Dr. Victor M. Alvarez, está estructurado en dos partes: la primera contiene lo que el proyecto considera como reformas a los títulos I al III, del Libro I del Código Penal ;

la segunda parte, en forma similar a la primera, contiene la reforma sobre los delitos contra las personas. Aunque en forma menos sistemática que en Proyecto anterior, éste incluye - también un conjunto de medidas de seguridad, según apunta el Dr. Hernández Ibarra (1).

- Proyecto de Código Penal de 1.941. Desde el punto de vista del tema que nos ocupa, este Proyecto es de gran importancia y se debe al insigne penalista José Rafael Mendoza - Troconis; su orientación es marcadamente positivista, consagrando todo un título a la consideración del delincuente, dentro del cual se considera el delincuente loco, el delincuente menor de edad, el delincuente sordomudo y el delincuente indígena, quienes, según el proyecto, no podrán ser sancionados con penas, sino que en atención a su especial personalidad, habrán de ser sometidos a determinadas medidas de seguridad, entre las cuales considera: el internamiento en un manicomio judicial para los enajenados, intoxicados crónicos, menores enajenados y sordomudos: internamiento en una colonia agrícola - especial para los que sufran de grave anomalía psíquica; el trabajo obligatorio y la prohibición de concurrir a determinada

---

(1) Enrique Hernández Ibarra - Revista de la Facultad de Derecho de LUZ. Maracaibo. Enero-Abril 1.963. Página 103.

dos lugares, para los intoxicados y ebrios o toxicómanos habituales; la libertad vigilada: y la caución de buena conducta.

- Proyecto de Código Penal de 1.948. Fué redactado este Proyecto por una Comisión Especial designada por el Ministerio de Relaciones Interiores, integrada por los Dres. José Rafael Mendoza Troconis, José Agustín Méndez y Luis Jiménez de Asúa, este último con el carácter de Asesor Técnico. Este Proyecto es considerado como el más completo de todos los Proyectos y como uno de los más importantes de los Proyectos de Código Penal de Hispanoamérica, no sólo por su amplio contenido sino más que todo por el tecnicismo y por la adaptación a las situaciones del momento. Contiene en su articulado un sistema completo de medidas de seguridad.

- Proyecto de 1.954. Es elaborado por el "Instituto de Codificación y Jurisprudencia de la República" (1); suplenente es nuevamente el Dr. Chiossone de quien escribe Jiménez de Asúa que estuvo muy interesado en la materia del transtorno mental transitorio pensando en dividir esa eximente, según

- 
- (1) Instituto de Codificación y Jurisprudencia de la República. Depende del Ministerio de Justicia, creado por Decreto No. 401 de 22-5-52; deroga la Ley de la Comisión Codificadora Nacional.
- (2) Luis Jiménez de Asúa - "El Criminalista" - Segunda serie ; Tomo II - Buenos Aires - 1.958 - Página 64.

tenga base patológica o no la precise, siguiendo el texto del Profesor José Peco redactó en 1.941 para la Argentina.

Es este, en cuanto a medidas de seguridad se refiere el Proyecto más importante. Consagra todo el título 8º de la Parte General a la sistematización de las medidas de seguridad, cuya incorporación a un futuro Código Penal Venezolano, se consideraba necesario e imprescindible.

Este título se divide en dos capítulos; el capítulo primero, contiene las Disposiciones Generales; el capítulo se fundo se subdivide en dos Secciones y contiene la Parte Especial del Proyecto, clasifica las medidas de seguridad y establece el procedimiento para su aplicación y ejecución.

El contenido del título octavo de este Proyecto es el siguiente:

TITULO VIII  
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD  
CAPITULO I

Artículo 133.-"Las medidas de seguridad se regirán por la ley vigente para el momento de su aplicación: pero si esa ley cambiare, se regirán por la que esté vigente en el mo mento de su ejecución.

Las medidas de seguridad se aplicarán a todas las

personas que se encuentren en el territorio nacional: y si se tratare de un extranjero, las medidas de seguridad que se hubieren adoptado no impedirán su expulsión de acuerdo con la ley."

Artículo 134." Sólo en los casos siguientes el Juez podrá aplicar las medidas de seguridad prevista en el presente título:

1º.- A los delincuentes habituales y profesionâles-  
definidos en los artículos 33 y 60 de este Código.

2º.- A las personas absueltas conforme al artículo 37: a los intoxicados crónicos por alcohol o sustancias estupefacientes absueltas por carecer de capacidad de comprender o de querer: y a los casos previstos en los artículos 42 y 43 de este Código.

3º.- En el caso de responsabilidad disminuída a que se refiere el artículo 38, cuando a juicio del Juez y dictamen de expertos sea aconsejable una medida de seguridad en vez de la pena disminuída.

4º.- En el caso establecido en el ordinal 2º del artículo 39, y en la forma que se indica en el propio artículo.

5º.- En el caso de delito imposible.

6º.- Cuando la eficacia de la pena pueda estimarse -

nula por la viciosa conducta del agente, sus hábitos de vagancia y otros índices que pudieran comprobar que el régimen penitenciario al que el delincuente había sido sometido no alcanzó el fin propuesto.

7º.- En el caso de la letra c) del artículo 6º de este Código.

8º.- Cuando la extradición solicitada no pueda concederse en virtud de la prohibición contenida en el segundo a parte del artículo 7º de este mismo Código.

9º.- En cualquier otro caso que la ley expresamente determine."

Artículo 135.-" La medida de seguridad podrá ser revocada sólo si la persona sometida a ella ha cesado de ser socialmente peligrosa.

La revocación no podrá ser acordada si no ha transcurrido el tiempo correspondiente a la duración mínima establecida por la ley para cada medida de seguridad. "

Artículo 136.-" Transcurrido el tiempo mínimo de la medida de seguridad, el Juez considerará de nuevo las condiciones de la persona sometida a ella para establecer si todavía es socialmente peligrosa. Cuando la persona resultare aún peligrosa, el Juez fijará un nuevo término para su examen ulterior."

Artículo 137.-" Si concurrieren, por diversos motivos de peligrosidad, dos o más medidas de seguridad, el Juez decidirá cuál debe ser impuesta, atendiendo a la causa predominante del peligro social que represente el sujeto."

Artículo 138.-" Las medidas de seguridad aquí establecidas se aplicarán por los Jueces competentes mediante sentencia.

También podrán ser ordenadas como providencias posteriores a la sentencia: 1º. En el caso de condena, durante la ejecución de la pena o durante el tiempo en que el condenado se sustrae voluntariamente a la ejecución de la pena. 2º. En el caso de absolución, cuando la cualidad de personal socialmente peligrosa se presume y no haya transcurrido el tiempo correspondiente a la duración mínima de la respectiva medida de seguridad: 3º.- En todo tiempo, en los casos establecidos por la ley."

Artículo 139.-" Las medidas de seguridad no se extinguen ni por la amnistía ni por el indulto, y tan sólo cesan al cumplirse el término prefijado para ellas o al desaparecer el estado de peligrosidad que las ha originado. "

## CAPITULO II

### DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SU DIVISION

Artículo 140.-"Las medidas de seguridad se dividen -



en personales y patrimoniales."

## SECCION 1ª

### De las medidas personales

Artículo 141.-"Las medidas personales pueden ser privativas de la libertad, o sea, cuando requieren internación, y de simple protección o custodia cuando no la requieren.

Son de la primera clase:

1º.- La relegación con fines de colonización.

2º.- La internación en hospital psiquiátrico o establecimiento para tratamiento especial o educativo.

3º.- La internación en cada de trabajo.

Son de la segunda clase:

1º.- La libertad vigilada.

2º.- La prohibición de residir en los Estados, Distritos, Municipios o Parroquias que se señalen.

3º.- El envío al lugar de origen del sujeto peligroso o a otro que el Juez juzgue conveniente de acuerdo con las circunstancias.

4º.- La prohibición de frecuentar determinados lugares, como expendios de bebidas alcohólicas, u otros donde se presume se agrave la peligrosidad del sujeto.

5º.- La expulsión de extranjeros."

Artículo 142.-"La relegación consiste en el envío de los delincuentes sujetos a esta medida de seguridad a territorios adecuados, donde serán constreñidos a trabajos de colonización. El régimen de labores, reposo, salario y peculio se regulará por ley especial.

Serán sometidos a relegación colonizadora los delincuentes habituales y profesionales.

El mínimo de tiempo de esta medida no bajará del término inferior de la pena que hubiere correspondido imponer a los delincuentes declarados habituales y profesionales, y para los sujetos a que se refiere el inciso 8º del artículo 134 , no podrá ser menor de diez años"

Artículo 143." Los enfermos mentales, toxicómanos habituales, bebedores consuetudinarios, indígenas inadaptados a la cultura y sujetos de responsabilidad disminuída, se destinarán al hospital psiquiátrico o a los establecimientos de tratamiento especial y educativo.

La duración será absolutamente indeterminada y sólo cesará cuando se logre la curación o la adaptación, o cuando - desaparezca la peligrosidad del agente."

Artículo 144.-"La casa de trabajo será regulada, en

cuanto al régimen de vida, labores, salarios y peculios de los internados en ella, por la ley especial de la materia.

Serán internados en estos establecimientos los delincuentes de que se ocupa el inciso 6º del artículo 134. También podrán ser destinados a estas casas de trabajo los autores de delitos imposibles, cuando el Juez estime que por su peligrosidad no es suficiente someterlos a libertad vigilada.

El término mínimo de esta medida no podrá ser infe - rior a un año."

Artículo 145." La libertad vigilada se ordenará en el caso de suspensión condicional de la pena, durante el período de libertad condicional, e inmediatamente después decumpli - da la condena de presidio o de prisión, o de haber cesado la - medida para los que fueron internados en las colonias y esta - blecimientos de que se trata en los artículos precedentes.

La vigilancia es medida de protección y su ejecución estará preferentemente a cargo de funcionarios especializados - en el servicio social.

El sometido a ella se obliga a mantener conducta la - boriosa y honrada, y durará hasta tanto se asegure el buen comportamiento del libertado."

Artículo 146." El Juez impondrá cuando lo exijan las circunstancias, al término de una pena o de una medida de seguridad, la prohibición de residir en lugares determinados durante un año como mínimo. Asimismo, podrá enviar al sujeto peligroso a la población o aldea de su origen, donde el medio - puede ser propicio a su regeneración."

Artículo 147." El Juez impondrá la prohibición de frecuentar determinados lugares, tales como expendios de bebidas alcohólicas, u otros donde se presume se agrava la peligrosidad del sujeto, que determinará expresamente en su decisión, como una medida de seguridad complementaria en todas las hipótesis previstas para la aplicación de la libertad vigilada, y durante todo el tiempo que abarque ésta."

Artículo 148." La expulsión de extranjeros del territorio nacional se decretará por el Juez en los casos en que - la ley la imponga expresamente.

También podrá acordarla como complemento de una pena privativa de libertad o de una medida de seguridad. "

Artículo 149." Las medidas educativas y correccionales que han de aplicarse a los delincuentes menores de dieciocho años, se regularán en el Código de Menores."

## SECCION 2ª

## Medidas patrimoniales .

Artículo 150.-"Las medidas de seguridad patrimoniales son:

1º.- La caución de buena conducta.

2º.- El comiso."

Artículo 151.-" La caución de buena conducta, durante el tiempo que establezca la sentencia, por un período de prueba que no será menor de un año ni excederá de cinco consiste en la garantía prendaria o hipotecaria prestada por el propio sujeto peligroso o por un tercero, o bien en la garantía personal prestada por aquél con la fianza solidaria de este último, a satisfacción del Juez.

Si durante este período de prueba el delincuente - violare su promesa, la caución se hará efectiva a favor del Fisco Nacional. Terminando dicho período, y habiendo cumplido el sujeto las obligaciones de la caución, será cancelada la garantía."

Artículo 152.-" Toda pena que se impusiere por un hecho punible, llevará consigo, como medida de seguridad, la pérdida de los efectos que de él provengan y de los instrumenen

tos con que se hubiere ejecutado."

Observamos que en Venezuela existe una marcada tendencia a incorporar las medidas de seguridad al Código Penal, sin que se preste suficiente atención a la consideración de la gran diferencia que existe entre las medidas predelictuales y las postdelictuales. Insistimos en considerar nuevamente que para que las medidas de seguridad puedan ser objeto del Código Penal han de fundamentarse en la existencia de un delito punible.

## 2.- Ley sobre Vagos y Maleantes.

Si el Código Penal Venezolano no se inspiró directamente en la Legislación Penal Española, la Ley sobre Vagos y Maleantes de Venezuela si tuvo su modelo directo en la Ley de Vagos y Maleantes Española de 1.933, fundamentándose en las teorías del estado peligroso que estuvieron en auge por primera vez, en el IV Congreso Internacional de Derecho Penal de 1.937. La primera Ley Venezolana sobre Vagos y Maleantes fué sancionada por las Cámaras Legislativas el 14 de agosto de 1.939, siendo reformada parcialmente el 15 de junio de 1.943.

Quintano Ripolles (1) escribe que la Ley Española de Vagos y Maleantes inspiró directamente el Proyecto de la Vene

---

(1) Antonio Quintano Ripolles - Obra citada - Página 155.

zolana en que intervino Jimenez de Asúa, inspirador de la Española, como Asesor.

Hasta el año 1.939 Venezuela contaba solamente con un instrumento legal para sancionar los hechos delictuosos cometidos; este no era otro que el Código Penal de 1.926, aún vigente.

Con la Ley sobre Vagos y Maleantes se introduce por primera vez en Venezuela un verdadero catálogo de medidas de seguridad sistematizado en Ley Especial que regula conductas totales que a juicio del legislador colocan a las personas en estado de peligrosidad, el cual justifica la intervención del Estado, para la aplicación de un tratamiento preventivo como medio de corrección y de Defensa Social.

Practicamente todas las medidas de seguridad de la Ley sobre Vagos y Maleantes vigentes que es la del 23 de julio de 1.956, provienen de aquélla; pues la llamada nueva Ley, obedece a un nuevo sistema de gobierno, introduciendo escasas reformas, cuyos aspectos más significativos son: a) la creación del primer establecimiento destinado para la reclusión de los sujetos considerados como Vagos y Maleantes: la colonia de trabajo de "El Dorado"; b) aumentar la duración de las medidas privativas de libertad; c) tendencia a hacer más más á-

gil su aplicación.

Sobre la justificación de la Ley el Dr. Hernández Ron (1) escribe: "La existencia en nuestro país de la mencionada - Ley especial está justificada por motivos de orden público y de seguridad del Estado, y ella facilitará a nuestras autoridades tomar las medidas requeridas contra ese numeroso grupo de individuos que se hallan en estado de predisposición a la delincuencia (vagos habituales, rufianes y proxenetas, mendigos profesionales, petardistas, brujos o hechiceros, ebrios y toxicómanos habituales, contrabandistas, etc.) y que, por tanto, constituyen un peligro social".

La Ley aparece estructurada en cuatro capítulos y 33 artículos.

## CAPITULO I

### Disposiciones Generales

Artículo 1º.-"Los vagos y maleantes, para su corrección y como medida de defensa social, serán sometidos al régimen de seguridad pautado en la presente Ley.

---

(1) J. M. Hernández Ron - Tratado Elemental de Derecho Administrativo - Tomo II - Editorial Las Novedades C.A. - Caracas 1.944 - Página 98



En este primer artículo se expresa la finalidad de la Ley que es la de regular la conducta de los sujetos peligrosos y promover el tratamiento preventivo ante el estado de peligro sidad que representan estos sujetos; la Ley Venezolana no regu la todo estado peligroso, pues además de ser aplicable a perso nas mayores de 18 años, comprende sólo 2 categorías de sujetos peligrosos los vagos y los maleantes, en las cuales se englo ban conductas no siempre ajustadas a estas categorías."

Artículo 2º.-"Se consideran vagos:

a) Los que habitualmente y sin causa justificada no ejerzan profesión u oficio lícitos y que por tanto constituyen una amenaza para la sociedad.

b) Los que aún ejerciendo profesión, destino u oficio o poseyendo bienes o rentas, viviesen o completasen sus recursos personales a expensas de personas dedicadas a la prostitución, o por el ejercicio de actividades ilegítimas, entendiéndose como tales, a los efectos de esta Ley, las que tienen por objeto actos generalmente considerados como atentatorios de la moral o de las buenas costumbres.

c) Los timadores y petardistas de oficio.

d) Los que habitualmente transiten por calles o caminos promoviendo y fomentando la ociosidad y otros vicios.

e) Los que habitualmente pidan limosnas para imágenes, santuarios y otros fines religiosos, sin la licencia eclesiástica y el visado de las autoridades de policía; y los que con pretexto benéfico y filantrópico especulen con la buena fé del público levantando contribuciones.

f) Los que habitualmente induzcan o manden a sus hijos, parientes o subordinados que sean menores de edad a mendigar públicamente y los que en general se valgan de menores para el mismo fin o exploten igualmente a enfermos mentales o lisiados.

g) Los que fingieren enfermedad o defectos orgánicos para dedicarse a la mendicidad."

Artículo 3º." Se consideran maleantes:

a) Los rufianes y proxenetas.

b) Los que hacen de los juegos prohibidos su profesión habitual y los que exploten estos juegos o cooperen con los explotadores en cualquier forma, a sabiendas, de esa actividad ilícita.

c) Los que habitualmente, sin llenar los requisitos legales, comercien con armas, drogas, bebidas embriagantes y otros efectos de uso o consumo reglamentado o prohibido por -

la Ley, o de manera ilícita los fabriquen, importen o faciliten.

d) Los que suministren para su consumo inmediato aguardientes, vinos o en general bebidas espirituosas a menores de dieciocho años en lugares o establecimientos públicos o en Institutos de educación o instrucción, o los que a sabiendas promuevan o favorezcan la embriaguez de menores.

e) Los que ejerzan de brujos o hechiceros, los adivinadores y todos los que por medio de esas artes ilícitas exploten la ignorancia o la superstición ajena.

f) Los que habitualmente ocurran a la amenaza de algún daño inmediato contra las personas o sus bienes con el objeto de obtener algún provecho, utilidad o beneficio.

g) Los condenados dos o más veces por delito contra la propiedad.

h) Los sindicados dos o más veces por delitos contra la propiedad, en cuyo poder se encuentren llaves falsas o deformadas para abrir o forzar cerraduras o descerrajar puertas o ventanas cuando no justificaren su procedencia y destino legítimo.

i) Los que comercien con objetos pornográficos o los

exhiban en público, y los que ofendan el pudor de la mujer y la irrespeten en la vía y lugares públicos con persecuciones y palabras que constituyan ofensa a su delicadeza y sean un desacato al respeto y a la moral.

j) Los que conocida y habitualmente hagan profesión de testificar en juicios.

k) Los pederastas debidamente evidenciados que de ordinario frecuenten las reuniones de menores.

l) Los que habitualmente se dediquen al contrabando.

m) Los que habitualmente sean hallados en las vías y lugares públicos en estado de embriaguez y que sean además , provocadores de riñas.

n) Los que observen conducta reveladora de inclinación al delito manifestada por reiterada amenaza de causar daño a las personas; por el trato asiduo y sin causa justificada con delincuentes y sujetos conocidos como peligrosos; por la asistencia a los lugares donde éstos se reúnen habitualmente y por la comisión reiterada y frecuente de faltas o contravenciones policiales.

o) Los que habitualmente detenten, compren, vendan , marquen, señalen o conduzcan ganado o cueros sin llenar los

requisitos legales y reglamentarios, cuando tales actos sean preparatorios o constitutivos de despojo.

p) Los curanderos reincidentes en el ejercicio de alguna de las profesiones médicas, siempre que por su persistencia en la explotación de la credulidad ajena, constituyan peligro para la vida o la salud de las personas.

q) Los merodeadores. A los efectos de esta Ley se entienden como tales aquellos que habitualmente vagan por el -campo viviendo de lo que hurten o se apropien.

En estas normas se definen y se consideran por sepa-rado cuales son los sujetos que la Ley considera como "Vagos" y cuales como "Maleantes".

Son reflejo directo del artículo 2º de la Ley de Vagos y Maleantes Española de 1.933, el cual establecía: "Po -drán ser declarados en estado peligroso y sometidos a medidas de seguridad: 1º) los vagos habituales; 2º) los rufianes y proxenetas".

La Ley Venezolana es más genérica, pues la Española hace hincapié en el concepto de vago, al expresar que para aplicársele las medidas el sujeto ha de ser habitual. Nos parcializamos por el criterio de Rodríguez Dranguet al conside -

rar el concepto de vago, atendiendo más a su reincidencia que a su habitualidad, que es lo que le interesa al Estado."

## CAPITULO II

### De las medidas correccionales

Artículo 4º.-" Para corregir o poner a recaudo los vagos y maleantes a que se ~~contrae~~ la presente Ley, las autoridades competentes dictarán y aplicarán en la forma establecida en los artículos siguientes, las medidas que a continuación se expresan:

a) Amonestación, con la obtención de la promesa, por parte del amonestado, de corregirse y dedicarse al trabajo.

b) Envío bajo custodia, en los casos que lo requie - ran, a la ciudad o pueblo de origen, con previo aviso a la autoridad respectiva para su vigilancia.

c) Internación en una casa de reeducación y trabajo.

d) Obligación o prohibición de residir por tiempo - conveniente en un lugar y parte determinado del territorio ~~del~~ Estado, Distrito Federal o Territorio Federal en donde se hu - biere tramitado el procedimiento.

e) Internación en una Colonia Agrícola Correccional fija o movable.

f) Internación en una Colonia de Trabajo, fija o mo  
vible.

g) Sumisión a la vigilancia de la autoridad. La vi  
gilancia tendrá carácter tutelar y de protección y será  ejer  
cida por las autoridades designadas al efecto. Esta medida -  
podrá ser reemplazada por caución de conducta, pero no podrán  
ser fiadores sus ascendientes, descendientes y el cónyuge.

h) Confinamiento. Esta medida consiste en la  obliga  
ción de residir, por un tiempo que no excederá de tres años,  
en lugar determinado, bajo la vigilancia de la autoridad que  
indique el Ministro de Justicia, y podrá aplicarse como  acce  
sorias de las medidas previstas en las letras c), e) y f) de  
este artículo, después de cumplidas éstas.

Al Ministerio de Justicia compete determinar el  tiem  
po y lugar del confinamiento dentro de los tres meses ante -  
riores a la fecha en la cual se cumpla la medida principal  im  
puesta.

Unico. La acción educativa para la readaptación  so  
cial de aquellos individuos que requieran especial tratamiento  
to, se hará siempre bajo las indicaciones de la técnica  médi  
co-social y en sitios debidamente acondicionados."

Artículo 5º.-"Las medidas correccionales determina-

das en las letras c), e) y f) del artículo anterior, se aplicarán a los vagos y maleantes por un tiempo hasta de cinco años según el caso, y se cumplirán de conformidad con las disposiciones previstas en el Capítulo IV de la presente Ley. Las restantes medidas comprendidas en el artículo anterior se aplicarán dentro del indicado límite de tiempo, según cada caso.

A quienes ya hubiesen cumplido una o más de las medidas comprendidas en este artículo y den motivo de nueva medida correccional, ésta les será aplicada del término medio al máximo.

Unico. Cuando las medidas a que se refieren las letras c) y f) del mismo artículo anterior no fueren mayor de tres meses, se cumplirán en el Establecimiento local de carácter penal, mientras no haya sido creada la correspondiente Colonia, de conformidad con el único aparte del Artículado 8º de esta Ley."

Artículo 6º. " Si un ciudadano conocidamente laborioso quisiere tomar a su cargo, para darle ocupación, a cualquiera persona sometida a las medidas b) o c) del Artículo 4º, podrá ser autorizado para ello bajo las condiciones siguientes:

Consignar en una caja de ahorro o en poder de una persona de responsabilidad, en la oportunidad en que ha de efec-



tuarse cada pago, la tercera parte del sueldo o jornal que de venga la persona sometida a la medida.

Informar cada quince días a la autoridad de policía del lugar acerca de la conducta que dicha persona observe y presentarla cuando se lo ordene la citada autoridad."

Artículo 7º.-" A los individuos internados en Colonias Agrícolas Correccionales, en Casas de Corrección o de Trabajo o en Colonias de Trabajo, tan luego como hayan adquirido hábitos de disciplina y de trabajo y se dediquen a éste de buen agrado, podrá la autoridad de quien dependen fijar - les una retribución de acuerdo con lo que se disponga en los Reglamentos. "

Artículo 8º.-"Para el debido cumplimiento de la presente Ley, el Gobierno Nacional creará las Casas de Corrección y de Trabajo, las Colonias Agrícolas Correccionales o las Colonias de Trabajo que fueren necesarias, y a su sostenimiento con tribuirán los Gobiernos de los Estados, Distrito Federal y Territorios Federales, en la forma que convengan con el Ejecutivo Nacional.

Los Gobiernos de los Estados, Distrito Federal y de los Territorios Federales y las Municipalidades, podrán crear Casas de Corrección y de Trabajo y también Colonias Agrícolas-

Correccionales o Colonias de Trabajo, cuando lo consideren conveniente, pero siempre con la aprobación del Ejecutivo Nacional."

Artículo 9º.-" En las Colonias Agrícolas Correccionales los internados serán ocupados en los distintos cultivos de la tierra que permita la región, y en el aprendizaje técnico, en lo posible, de la agricultura. También se enseñará a los que revelen aptitudes especiales, las artes y oficios que tengan más inmediata relación con la industria agrícola.

Además, en cada Colonia Correccional funcionarán las escuelas nocturnas que fueren necesarias para dar enseñanza primaria a los internados que carezcan de ella."

Artículo 10.-" En las Casas de Corrección y de Trabajo se dará ocupación en oficios e industrias a todos los internados, aun a los parcialmente inhábiles para el trabajo.

En todo caso, en dichas Casas se dará enseñanza primaria a los internados que carezcan de ella."

Artículo 11.-" Los Establecimientos para la reclusión de los vagos y maleantes tendrán sus respectivos Reglamentos Internos, donde se indicarán los sistemas y métodos a seguir para la reforma moral de aquéllos, de acuerdo con los principios establecidos en la presente Ley.

Los reglamentos de los Establecimientos serán dictados por el Ejecutivo Nacional o por el Gobierno de la Entidad que los hubiere creado, pero en este último caso, deberán ser sometidos previamente a la aprobación del Ejecutivo Nacional."

Artículo 12.-" Si transcurriere el tiempo de internamiento sin haberse obtenido la corrección del recluso, el Ministerio de Justicia podrá prorrogar la medida hasta por un tiempo igual al de la originaria.

Con tal fin el Director del Establecimiento remitirá al Ministerio de Justicia, tres meses antes de la fecha en que finalice la medida impuesta, informe circunstanciado del Tribunal de Conducta sobre el recluso que se encuentre en tal situación; a quien no pondrá en libertad hasta que reciba la orden correspondiente.

Si quince días antes de la fecha en que finalice la medida no se hubiere recibido orden del Ministro de Justicia - que prorrogue la internación o disponga la libertad del recluso, el Director notificará el caso a aquél funcionario por la vía más rápida. "

Artículo 13.- "Los individuos a quienes se apliquen las medidas correccionales determinadas en la presente Ley, que no

se corrijan efectivamente o que después de algún tiempo reincidan en la vagancia o se dediquen a la misma actividad, en razón de la cual se les calificó de maleantes, serán sometidos a cualquiera de las otras medidas correccionales establecidas en este Capítulo."

Artículo 14." Las medidas disciplinarias que para la conservación y resguardo del orden se establezcan en los Reglamentos de las Casas de Corrección y Trabajo, en las Colonias Agrícolas Correccionales y en las Colonias de Trabajo , consistirán en amonestaciones, rebajas moderadas en los salarios durante cierto tiempo, no mayor de un mes; aislamiento , fuera de las horas de trabajo, que no exceda de ocho días, pri vación de diversiones permitidas; y para casos graves, arresto hasta de quince (15) días.

En consecuencia, nunca y por ningún motivo, podrá la corrección disciplinaria consistir en maltratos ni en otras medidas o actos depresivos y ofensivos a la dignidad personal del internado."

Artículo 15.-"Los funcionarios de policía y los empleados de las Casas de Corrección y de Trabajo, de las Colonias Agrícolas Correccionales o de las Colonias de Trabajo , que violen la presente Ley, los Decretos Ejecutivos que la re

glamenten o los Reglamentos Internos de esos Institutos, o que de cualquier modo faltaren a su deber, serán castigados por el superior inmediato, previa averiguación con multa hasta de un mil bolívares (Bs. 1.000,00) o arresto proporcional, y en los casos graves, con la destitución, independientemente de las sanciones previstas en el Código Penal."

Artículo 16."- Ninguna de las medidas de que trata este Capítulo podrán ser aplicadas sino por las autoridades competentes conforme a la presente Ley y previas las formalidades que en ella se determinan. "

El Capítulo II está consagrado a las medidas de seguridad predelictuales aplicables a los sujetos considerados como vagos y maleantes. Se conserva incluso hasta el número del capítulo de la Ley Española cambiándose la denominación de medidas de seguridad por medidas correccionales e incluyéndose en él, normas para la aplicación de las medidas, que en la Ley modelo aparecían recogidas en capítulo aparte (capítulo III - aplicación de las medidas de seguridad).

El artículo 4º enumera las medidas de seguridad aplicables, de las cuales examinaremos aquellas que a nuestro juicio pueden resultar ineficaces en la práctica a saber:

- "Amonestación, con la obtención de la promesa, por parte del amonestado, de corregirse y dedicarse al trabajo " . Amonestar significa advertir a una persona que ha cometido un hecho reprehensible, con la finalidad de que esta se enmiende; - por lo que la amonestación tiene por objeto hacerle ver al amonestado la improcedencia de su conducta haciéndolo reflexionar acerca de la conveniencia de corregirse. Esta medida se ha convertido en un modelo que se repite en todos los casos y cuyo efecto suele ser nulo; pues el amonestado, después de escuchar la recriminación que se le hace, cuyo significado muchas veces ni siquiera entiende, firma la caución de buena conducta, marchándose tranquilamente e incurriendo casi siempre en los mismos hechos por los cuales se ha amonestado.

- "Envío bajo custodia en los casos que lo requieran, a la ciudad o pueblo de origen, con previo aviso a la autoridad respectiva para su vigilancia"..En la práctica esta medida, tal como aparece planteada, no garantiza una verdadera eficacia ya que el sujeto, casi siempre cargado de una gran indiferencia afectiva, muchas veces lo que hace es cambiar de escenario para sus tradicionales actuaciones.

- "Obligación o prohibición de residir por tiempo conveniente en un lugar o parte determinado del territorio del Estado, Distrito Federal o Territorio Federal en donde se hubie-

re tramitado el procedimiento". Al aplicar esta medida es necesario tomar en cuenta la profesión u oficio que desempeña el sujeto y la necesidad de que alguna persona u organismo le preste la vida necesaria para orientarlo y facilitar su adaptación.

- Confinamiento. La medida de confinamiento para su ejecución ha de tomarse en cuenta el oficio, la profesión o empleo del sujeto; con el fin de que este pueda adaptarse fácilmente al ambiente del nuevo lugar a donde ha sido destinado, facilitándole la obtención de un trabajo honrado acorde con sus habilidades, lo cual ayudará considerablemente a su corrección.

### CAPITULO III

#### Del Procedimiento

Artículo 17.-" La averiguación prevista en esta Ley , y su decisión en Primera Instancia, corresponde a la Primera Autoridad Civil de los Distritos en los Estados y de los Departamentos del Distrito Federal, y de los Territorios Federales. Sin embargo, en las capitales de tales entidades políticas donde hubiere Oficina del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, corresponderá al respectivo Jefe el conocimiento del asunto en Primera Instancia. La averiguación procederá de ofi

cio o por denuncia. A tal efecto, los funcionarios de policía o de policía judicial procederán a detener al indiciado, y, en el término de la distancia, lo pondrán a disposición de las autoridades que deban conocer del asunto, a quienes harán saber el motivo de la detención, y les anunciarán o presentarán las pruebas pertinentes."

Artículo 18." Acordada la instrucción del juicio, o recibida la denuncia, se hará comparecer al indiciado en el término de la distancia, se le impondrá del motivo de su detención y se le interrogará sobre los hechos que la fundamenten, sobre su identidad personal, lugar de nacimiento, estado, profesión u oficio, antecedentes y manera de vivir durante los tres años anteriores, bienes que posea y casa que habita. También se le interrogará sobre cualquier otro hecho o circunstancia que directa o indirectamente contribuya a la averiguación que se practica y se examinarán en el propio acto los documentos relativos a la identidad personal del declarante.

Si el indiciado acepta el cargo y se conforma con él, la autoridad libraré inmediatamente su resolución, que fundamentará en las pruebas presentadas y se dejará constancia de ella en acta en que, se especifiquen tales circunstancias y la notificación al indiciado. Esta acta será firmada por el funcionario y su Secretario; y por los testigos y el interesado, si su



piere y pudiese hacerlo. Si el indiciado no quiere declarar no podrá ser obligado a ello."

Artículo 19." Si el indiciado rechaza los cargos, la autoridad le oirá cuanto tenga que manifestar en su defensa . Si guarda silencio, se entenderá que los ha rechazado. Tanto en uno como en otro caso, se concederá al indiciado un lapso de tres (3) días hábiles para la promoción y evacuación de to das las pruebas que crea necesarias a su defensa. Durante este mismo lapso, la autoridad, ya de oficio, ya a instancia de la parte denunciante, practicará todas las diligencias que - crea pertinentes. El examen de los testigos puede extenderse en acta separada, o en una sola, en que se extracte lo que sus tancialmente diga cada uno.

Las actas serán firmadas por el funcionario y su Secretario; y por los testigos y el interesado, si supieren y pudieren hacerlo.

Para la evacuación de la prueba fuera del lugar del juicio, se darán las comisiones necesarias con el término de distancia.

Durante el curso del juicio el indiciado permanecerá bajo detención preventiva."

Artículo 20.- Dentro de las cuarenta y ocho horas de terminado el lapso probatorio, la autoridad dictará la decisión correspondiente, en la cual, después de establecer los hechos probados, determinará la medida o medidas aplicables al indiciado, o declarará no haber lugar a ella.

Unico.- Tanto en el caso de conformarse el indiciado con los cargos que se le hagan, como en el de abrirse el juicio a pruebas, el vago o maleante será sometido a un examen médico-legal, si se sospechase que padece de perturbación de sus facultades o de alguna enfermedad contagiosa que pueda propagarse entre los otros reclusos."

Artículo 21.-" De la decisión dictada podrá apelar el indiciado dentro de las veinticuatro horas después de notificado, para ante el Gobernador del respectivo Estado, ante el Gobernador del Distrito Federal, o ante el Gobernador del Territorio Federal, según el caso. El Gobernador respectivo revisará el expediente y confirmará, revocará o reformará la determinación del inferior, dentro de tres (3) días después de recibirlo aquél. Haya o no apelación, toda decisión de primera instancia deberá consultarse con el superior."

Artículo 22.-" El Gobernador respectivo, en cada caso, pedirá necesariamente dictamen sobre lo actuado al Defen-

sor Público de Presos correspondiente, resolviendo en definitiva con vista de este dictamen.

El dictamen lo entregará al Defensor Público de Presos dentro de tres (3) días después de recibido el expediente y se concretará sólo a los siguientes puntos:

1º.- Si en la instrucción y curso del juicio se observó cuanto al respecto preceptúa la presente Ley.

2º.- Si entiende probada la situación del indiciado, objeto de las averiguaciones y juicio practicado.

3º.- Si considera ajustada al caso la decisión dictada en Primera Instancia."

Artículo 23.-"Los Gobernadores de los Estados, el Gobernador del Distrito Federal y los Gobernadores de los Territorios Federales, una vez hayan sentenciado el asunto, gestionarán lo necesario para el traslado del vago o maleante, cuando la sentencia fuere de internamiento en una Casa de Corrección o de Trabajo, en Colonia Agrícola Correccional o de Colonia de Trabajo dependiente del Ejecutivo Nacional.

Cuando la medida impuesta por el Gobernador respectivo excediere de seis meses, el expediente pasará a la conside

ración del Ministro de Justicia, quien aprobará el procedimiento si no encontrare objeción que hacer. En caso contrario, decidirá en definitiva lo conducente.

El Ministro dictará su decisión en un lapso no mayor de quince días a contar del recibo del expediente. Contra esta última decisión no habrá recurso alguno.

En todo caso, el Gobernador que conozca del recurso , enviará copia del expediente al Ministro de Justicia, dentro - de los quince días siguientes a la fecha en la cual hubiere de cidido. "

Artículo 24.-" A los Directores de Casas de Corrección y de Trabajo, de Colonias Agrícolas Correccionales y de Colonias de Trabajo, se les enviará, junto con las personas que han de permanecer en ellas, copia certificada de la decisión e jecutoriada que imponga el internamiento."

Artículo 25.-" Las prescripciones de la presente Ley - se aplicarán solamente a personas mayores de 18 años; y en con secuencia, cuando las autoridades, en aplicación de esta Ley , se encontraren con personas menores de 18 años que puedan ser considerados vagos o maleantes, deberán remitirlos a los Jue - ces de Menores respectivos para que sean juzgados conforme al Estatuto de Menores. "

Artículo 26.-"Los Jueces Penales, cuando observen, al acordar la libertad plena de un procesado, que éste se encuentra en cualquiera de las situaciones previstas en los artículos segundo y tercero de esta Ley, lo notificarán a las autoridades competentes para el conocimiento del asunto en la primera instancia e indicarán en la misma notificación las pruebas pertinentes."

Artículo 27.-"El procedimiento establecido en la presente Ley y la aplicación de las medidas correccionales que el mismo fija en las letras c) e) y f) del Artículo 4º, continuarán aun cuando el sujeto, presunto peligroso o declarado tal cometiere algún hecho punible durante el procedimiento o la aplicación de la medida correccional.

El Juez, a quien competa el conocimiento del hecho punible abrirá la averiguación sumarial correspondiente y suspenderá la causa en el estado de hacer cargos al reo para continuarla cuando se declare no haber lugar a la medida correccional o cuando la que se haya impuesto termine de cumplirse conforme a esta Ley. "

Artículo 28.-"Los Directores de los Establecimientos de que trata la presente Ley son funcionarios de instruc

ción en los casos de delito cometidos por reclusos, con todas las atribuciones y deberes que señala a estos funcionarios el Código de Enjuiciamiento Criminal.

Al cometerse por dichos reclusos algún delito de los que merecen pena corporal, el Director respectivo instruirá el sumario hasta su terminación, y lo remitirá al Juez competente en la jurisdicción ante quien continuará la causa al vencimiento del término de la medida correccional.

La Ley consagra 22 artículos al aspecto procedimental.

El artículo 17 somete a la primera Autoridad Civil de los Distritos, el conocimiento en las etapas de averiguación y de primera instancia, de la peligrosidad de los sujetos considerados como vagos y maleantes; se hace la salve-dad de que este conocimiento es competencia del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial en las capitales de los Estados, Departamentos o Territorios Federales, donde existiere este Organismo. Anteriormente esta función era ejercida por un Cuerpo Policial creado exclusivamente para la seguridad del Estado, lo cual en la práctica, representaba el riesgo de que las medidas de seguridad no constituyeran medios para prevenir la delincuencia, sino más bien para extender formas represivas a las conductas no peligrosas.

El aparte único del artículo 20, se propone darle a la Ley un carácter científico de cierto contenido criminológico, al establecer que "Tanto en el caso de conformarse el indiciado con los cargos que se le hagan, como en el de abrirse el juicio a pruebas, el vago o maleante será sometido a un examen médico-legal, si se sospechase que padece de perturbación de sus facultades o de alguna enfermedad contagiosa que pueda propagarse entre los otros reclusos, pero la forma como aparece planteado no permite que esta loable aspiración pueda cumplirse en la práctica, pues se le concede al funcionario encargado de instruir el procedimiento la facultad de determinar por sí solo y a simple vista la sospecha de que pueda resistir una perturbación de las facultades o de alguna enfermedad contagiosa que pueda propagarse; pero el funcionario en la mayoría de los casos no es un perito, careciendo de los conocimientos científicos suficientes que le permitan expresar un juicio de esta índole. Las conclusiones del examen médico legal no pueden llenar a cabalidad su verdadero objetivo, pues sólo se limita a determinar si existe alguna anormalidad física o enfermedad infecto-contagiosa; es decir, se limita a un examen médico legal solamente, sin atender el estudio de la personalidad del sujeto la cual habrá de servir para establecer los modos y formas para la a

plicación de las medidas de seguridad; por lo que el prescindir de él, pueda conllevar el riesgo de que se apliquen medidas injustas.

El artículo 22 convierte al instrumento legal en una Ley carente de jurisdiccionalidad, al dejar en manos del Ejecutivo la instrucción y decisión del proceso, exigiendo solamente la intervención del defensor público de presos, cuando el expediente por apelación o consulta, sube a consulta del respectivo Gobernador de Estado. Se requiere la creación de Tribunales Especiales de Vagos y Maleantes como los que existen en España y en otros países.

El artículo 27 plantea conflictos en su aplicación, propiciando injusticias ya que con el se le confiere a la Ley un carácter preferencial lo que en la práctica constituye una verdadera prelación en la aplicación de la misma con respecto a las leyes penales.

Por otra parte, como consecuencias de la forma en que se establece su procedimiento, la Ley de Vagos y Maleantes puede dar pie para que se presenten las siguientes situaciones:

1º.- La autoridad competente, para la aplicación de esta Ley, puede verse fácilmente expuesta a influencias sub-



jetivas, cuando sentencie, por dos razones:

a) No se especifican los criterios que deben tomarse en cuenta para adecuar el tipo de sanción a los diversos tipos de vagos y maleantes, a excepción del reincidente, y,

b) Por no existir ninguna norma que oriente en relación al tiempo necesario para la corrección del sujeto atendiendo al grado de peligrosidad.

2º.- La aplicación de esta Ley, por vía administrativa, tiende a aumentar la posibilidad de la imposición de sanciones equivocadas."

#### CAPITULO IV

##### Del Tribunal de Conducta y la libertad condicional

Artículo 29.-"En los establecimientos de que trata la presente Ley funcionará un Tribunal de Conducta que tendrá las atribuciones y deberes señalados en este Capítulo y los que fije el respectivo Reglamento.

Dicho Tribunal estará integrado por el Director , quien lo presidirá; el Sub-Director, quien actuará como Secretario, con voz pero sin voto; y el médico, el capellán , un maestro de Educación Primaria y el Primer Alcalde, quie-

nes ejercerán de Vocales con voz y voto. "

Artículo 30.- "El Tribunal de Conducta estudiará periódicamente el comportamiento general de cada recluso, su laboriosidad efectiva y las pruebas evidentes y constantes de su corrección, y, a los efectos de la libertad condicional, abonará a éste tres días de tiempo cumplido por cada dos días de intachable y laborioso proceder.

Asimismo el Tribunal de Conducta estudiará y dispondrá todo lo referente a las labores asignadas a los reclusos, debiendo fiscalizar el desarrollo y modalidad de éstas y de los diversos servicios del establecimiento y adoptar al efecto las medidas que procedan dentro de sus atribuciones".

Artículo 31.-"Los reclusos sujetos a medida correccional podrán obtener la libertad condicional como premio a un constante proceder intachable y laborioso, siempre que hayan cumplido en la forma pautada en la presente Ley, las 3-quintas partes del tiempo de la medida impuesta y reúnan, además, las condiciones establecidas en el mismo y en el respectivo Reglamento.

La libertad condicional la acordará y podrá revocarla el Tribunal de Conducta, notificando la decisión a la autoridad que dictó la medida y al Ministerio de quien dependa

el establecimiento por órgano del Director."

Artículo 32.-" La libertad condicional la disfrutará el recluso en el lugar que fije el Tribunal de Conducta, bajo la tutela y directa vigilancia de las autoridades del Establecimiento respectivo, mientras haga vida honesta y de trabajo. En caso contrario, le será revocado este beneficio y se le reintegrará al régimen ordinario del Instituto.

En su último capítulo la Ley regula dos aspectos: la conducta y la libertad condicional; los cuales se plantean - siguiendo los criterios del Sistema Penitenciario Progresivo."

Principales críticas hechas a la Ley Venezolana sobre Vagos y Maleantes

1.- La Ley no responde a las causas históricas que motivaron su aparición en España, es decir, a la necesidad de implantar nuevas fórmulas legales para detener el auge delictivo; pues en Venezuela, para esa época no se habían producido cambios cualitativos profundos en la estructura social de su población, que incidiesen en un aumento sustancial y alarmante de la criminalidad.

2.- Se plantea la posibilidad de que la Ley pueda constituir un medio para extender medidas represivas a sujetos que no manifiesten comportamientos sancionables por algu

na Ley. Esta consideración se basa en el hecho de que sujetos que son detenidos en redadas (1) por sospecha o averiguación, pueden ser enjuiciados por la Ley si presentan antecedentes policiales o si han sido condenados por delitos diferentes.

3.- La vaguedad de algunas tipificaciones especialmente las relacionadas con "redada" y "averiguación" que no son propiamente conductas sino más bien procedimientos policiales y jurídicos. Así mismo los "antecedentes" no constituyen conducta propiamente dicha, sino conductas sancionadas - policial o penalmente, recogidas en un prontuario policial - que sirve como prueba de ella.

4.- La aplicación de la Ley sobre Vagos y Maleantes representa para quien fue sometido a ella un estado que perdura más allá del cumplimiento de la medida correccional y constituye título suficiente para ser un eterno perseguido - por las autoridades policiales y sujeto posible de nuevas medidas correccionales, motivadas por la simple circunstancia de encontrarlo en una esquina o sin empleo estable, sin considerar los oficios u ocupaciones estacionarias.

---

(1) Redada :: Pesca masiva de presuntos delincuentes, hecha, en forma esporádica, por Autoridades Policiales.

### 3.- Medidas de Seguridad en el Estatuto de Menores.

En principal instrumento legal que regula lo relativo a las medidas de seguridad aplicables a menores en la Legislación Venezolana, es el "Estatuto de Menores".

En Venezuela, además del Estatuto de Menores, se ocupan también de la protección de la infancia las siguientes Leyes: Constitución Nacional, Código Civil, Código Penal, Código de Enjuiciamiento Criminal, Ley del Trabajo, Ley de Seguro Social, Ley de Protección Familiar, Ley de Violación de los Derechos Alimentarios del Menor y Ley de Adopción.

El Estatuto de Menores vigente data del 30 de diciembre de 1.949, el cual derogó el Código de Menores de 10 de enero de 1.939, según el cual el menor antisocial continuaba sometido al Código Penal, siendo objeto de pena. El Estatuto de Menores vigente sustrae al menor antisocial de la esfera del Derecho Penal, disponiendo que no se le considere como delincuente, y que en vez de penas se le apliquen medidas reeducativas. Prevé que sus disposiciones rijan para todos los menores de diez y ocho años y se apliquen con preferencia a las de otras leyes.

Es un cuerpo esquematizado que consta de 164 artículos.

los. En relación a la materia que nos ocupa, observamos que consagra el "Libro Cuarto" a las "Disposiciones de Protección Correccional" señalando la clase y naturaleza de las medidas de seguridad que pueden aplicarse a los menores considerados en situación irregular, en la siguiente forma:

#### LIBRO CUARTO

##### Disposiciones de protección correccional

##### TÍTULO I

##### De los menores en situación irregular

Art. 110.-"Podrá considerarse en estado de abandono moral o material:

- 1º) A quienes no tengan habitación cierta.
- 2º) A quienes carezcan de medios de subsistencia .
- 3º) A quienes sin causa justificada se impida su educación.
- 4º) A quienes se prive frecuentemente de alimentos o de las atenciones que requiera su salud.
- 5º) A quienes se emplee en ocupaciones prohibidas, contrarias a la moral y a las buenas costumbres o que pongan en peligro su salud o su vida.
- 6º) A quienes frecuenten la compañía de malvivientes o vivan con ellos."

Art. 111.-" Podrán considerarse en situación de peligro:

1º) Los que incurran en cualquier hecho sancionado por las leyes penales y ordenanzas policiales.

2º) Los que encuentren en cualquiera de las situaciones previstas por la Ley de Vagos y Maleantes, no comprendidas en el artículo anterior. "

Art. 112.-" El Juez de Menores podrá tomar en cuenta, a los fines de apreciar el abandono o el riesgo, el caso del menor cuyo padre o madre sea enjuiciado por el delito de conyugicidio."

## TITUTO II

### Medidas Aplicables

#### CAPITULO I

##### Clase y naturaleza de estas medidas

Art. 113.-" Las medidas que el Juez de menores puede acordar, son:

1º) Libertad vigilada.

2º) Internamiento en un Instituto curativo.

3º) Colocación en familia.

4º) Internamiento en una Institución reeducativa. "

Art. 114.-" La libertad vigilada supone la entrega -

del menor a sus padres o representantes legales, con la obligación de someterse a la vigilancia, indicaciones y auxilio del Consejo Venezolano del Niño, por el tiempo que el Tribunal determine."

Art. 115.-"La internación en un instituto curativo se acordará por el Tribunal cuando el estado físico o psí - quico del menor lo requiera, donde se le someterá al adecudo tratamiento médico, hasta que se le declare definitiva - mente curado o readaptado a la vida social si la anomalía - fuere permanente."

Art. 116.-"La colocación en familia podrá acordar - se por el Juez de Menores, en hogar ajeno, cuando el niño o adolescente carezcan de él o el de sus padres no diere las suficientes garantías de custodia o corrección, si se trata de un menor que ha incurrido en infracción punible o que se conduce de un modo antisocial o contrario al orden de la sociudad.

Las disposiciones del Título V del Libro Segundo - serán aplicadas por el Juez en cuanto no contradigan la índole de esta medida protectora."

Art. 117.-"El Juez de Menores decretará la internaga



ción del menor en uno de los institutos de reeducación dependientes del Consejo Venezolano del Niño, y la aplicación de la medida quedará a cargo de dicho Consejo."

Art. 118."- Se nombrará tutor interino a los menores cuyo padre o madre se encuentren en la situación prevista en el artículo 112. Esta tutela tendrá las funciones previstas por el artículo 313 del Código Civil, pero el tutor será de libre nombramiento del Juez y durará en el cargo hasta que en la causa seguida al padre o a la madre se dicte sentencia firme."

Art. 119." Si la medida adoptada por el Juez de Menores fuere la de internación en un establecimiento que no exista en el lugar, podrá ser enviado al menor al que hubiere en el sitio más próximo.

El aspecto procedimental, objeto del Capítulo IV recoge una norma de gran contenido criminológico que es el Artículo 145 según el cual: "El Juez deberá esclarecer:

- a) La personalidad antropológica, psíquica o patológica del menor.
- b) Los factores familiares y sociales.
- c) La naturaleza de su conducta y las circunstancias que en ella concurrieren..."

Dentro del Estatuto de Menores (1) y en estrecha relación con las medidas de seguridad, merece especial mención "El Consejo Venezolano del Niño" (2) que es un Organismo técnico-administrativo encargado de la aplicación de las medidas previstas en el artículo 113, más arriba recogido y de cuya colaboración depende en gran parte la eficacia de la aplicación de medidas correccionales a menores con trastornos de conducta.

El Consejo Venezolano del Niño trabaja actualmente en la revisión, reforma y ampliación de algunas medidas de -seguridad del Estatuto de Menores con el objeto de adaptarlas a los requerimientos de la actual realidad social venezolana.

La Legislación sobre menores, por su trascendental-importancia, tiende internacionalmente a constituirse en una rama autónoma del Derecho, con objeto, finalidad y filosofía propios.

---

(1) Estatuto de Menores - Ediciones del Consejo Venezolano del Niño - Oficina de Información y Relaciones Públicas - Segunda Edición - Caracas - 1.973.

(2) El Consejo Venezolano del Niño - Oficina de Coordinación y Planificación - Departamento de Metas Generales - Caracas. 1.972.

## CONCLUSIONES

### I

La Política Criminal Contemporánea se orienta, en general, hacia una actitud de prevención frente al fenómeno de la delincuencia y de protección a la persona del sujeto considerado como delincuente o como potencialmente delincuente; en pro, no solamente de pretensiones de una justicia social relativamente absoluta sino más bien en un sentido humanitario y altruista, Para lo cual se hace necesario el desarrollo de una labor jurídico-social dinámica e integral, de contenido y alcance realista, en procura de metas concretas de reeducación y de resocialización, previniendo en forma eficaz la reincidencia y la multireincidencia mediante un tratamiento adecuado, dentro de un sistema de medidas de seguridad científicamente elaborado y técnicamente ejecutado, que tienda a la corrección cabal de todos los factores psíco-socio-económicos y culturales que hayan determinado o propiciado el paso al acto delictivo.

### II

El mundo de hoy se agita en una efervescente fiebre de evoluciones y de reformas en todos los aspectos so -

ciales, tecnológicos y de las ciencias tradicionales, a la que no sólo no escapan las Ciencias Penales, las Instituciones Penitenciarias y las de Prevención Criminal, sino que las afectan muy directamente, porque la evolución ha de ser un proceso cuyo fin sea el hombre y sus valores superiores, concretados en la dignidad de la persona humana y en su inextinguible libertad.

Por eso, la planificación de un desarrollo integral, amerita la adopción de medidas de Defensa Social de carácter preventivo; y este sólo ha de ser ejecutado para procurar el bien común, cuyo verdadero fin es servir al hombre como a un semejante. El desarrollo pues no ha de tener como meta exclusiva la expansión de la producción, sino una evolución amplia e integral.

Dentro de este orden de ideas las medidas de seguridad son objeto de especial consideración por parte de las Instituciones jurídico-penales en las cuales se han ido introduciendo, quizás, no con mucha sistematización y eficacia, pero sí con gran entusiasmo y afán innovador, no concretándose a un movimiento de ideas positivistas exclusivo de la Europa Occidental.

## III

El problema de la delincuencia es una situación compleja que afecta a la sociedad en general, ameritando, por lo tanto, la cooperación de todos y de cada uno de sus miembros, sin que pueda pensarse que ha de ser preocupación exclusiva del Estado o de determinadas Instituciones en particular; por lo que se hace necesario despertar e incentivar en la comunidad el sentido de solidaridad social y de responsabilidad - ciudadana, que ayuden a la consecución del bien común y de la Defensa Social mediante la formulación de planes de integración que procuren, en lo posible, integrar a todos los estratos de la sociedad y a todas las profesiones, muy espe - cialmente a aquellas que, más estrechamente se relacionan con la Política Criminal y con la Criminología; procurando un cambio de actitudes entre la opinión pública acerca de la ima - gen del sujeto, que por una u otra causa, ha sido sometido al cumplimiento de determinadas medidas de seguridad, en procura de su corrección, para que no se le considere en adelante como un ente extraño a la sociedad, lo cual obstaculiza los fines de corrección y de reeducación de las medidas, lo cual, muchas veces es causa de un resentimiento hacia aquella, propiciando la comisión de futuros hechos delictivos.

## IV

El Derecho Penal en la Epoca Contemporánea se inclina hacia el establecimiento de sistemas de medidas de - seguridad, ya como complemento, ya como sustitución de las penas.

Sin embargo las medidas de seguridad propiamente - dichas son las predelictuales, pues para poder considerarse como objeto de aquel, se hace necesaria la existencia de un hecho punible para evitar el grave riesgo de lesionar - el ineludible principio de legalidad de "nullum poena, nullum crimen, sine lege", principio general y garantizador de la seguridad jurídica.

## V

Los especialistas no han logrado todavía superar los principales problemas de las medidas de seguridad, existiendo actualmente un verdadero movimiento encaminado - al enjuiciar su naturaleza jurídica, sus clases, su denominación y sobre todo su justificación y la eficacia de sus efectos por la dificultad de contar con adecuados establecimientos y con suficiente personal especializado.

Las medidas de seguridad han sido calificadas de

artificiosas y carentes de realismo, causante de conflictos de leyes. Las principales críticas se fundamentan en la gravedad del riesgo que se corre al pronosticar la conducta futura de una persona a la que se le señala como posible delincente, pretendiendo conocer de antemano cuál ha de ser su comportamiento sin atender a lo trascendental de sus consecuencias.

## VI

Siendo el hombre, centro y fin de toda política, todo sistema de medidas de seguridad, ha de atender a la ética y a los derechos humanos; pues toda persona humana tiene una eminente dignidad y una gama de derechos individuales y colectivos que ninguna sociedad puede desconocer, y en los cuales ha de fundamentarse la planificación y la ejecución de toda política criminal.

Las medidas de seguridad no han de violar los derechos humanos fundamentales, cuya raíz está en la dignidad y en el valor de la persona humana y según los cuales, todas las personas son esencialmente libres, dignas y respetables mereciendo la protección del Estado y de toda la sociedad . Dentro de los derechos humanos, el derecho a la libertad, o

cupa sitio de honor, por lo que las medidas de seguridad han de respetar en lo posible este inalienable; teniendo por finalidad, en todo caso, la de procurar adaptar o readaptar al delincuente a la vida social en libertad. Una vez en libertad, el sujeto ha de recibir suficiente colaboración, que le ayude a lograr la convivencia social, la consecución de un trabajo digno, procurando proporcionársele además, ayuda material y espiritual, como medidas de una profilaxis efectiva.

## VII

La diferencia fundamental entre penas y medidas de seguridad, radica en el tratamiento.

Para que las medidas de seguridad cumplan eficazmente su finalidad, ha de contarse con la necesaria especialización del Juez, de los peritos que le asistan, de los cuerpos de asistencia social, de instrucción, de reeducación y de vigilancia. Su ejecución ha de cumplirse en establecimientos e instituciones adecuados que cuenten con equipos técnicos con suficientes conocimientos criminológicos y psiquiátricos, especialmente en lo relacionado a los modernos procedimientos de diagnóstico, tratamiento y reeducación.



Los frutos pues estarán en relación directa con el correcto o incorrecto tratamiento que se aplique al sujeto - delincuente .

#### VIII

Las medidas de seguridad se diferencian de las providencias contenidas en el Derecho Civil, en que aquellas tienen por finalidad la prevención del delito, la adaptación, - readaptación y resocialización del delincuente; mientras que las providencias que son objeto del Derecho Civil y, dentro de este, del Derecho Administrativo no atienden a la peligrosidad del sujeto considerado como delincuente o como poten-cialmente delincuente.

#### IX

En el Derecho Positivo Español las medidas de seguridad se reducen principalmente a dos instrumentos legales: la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y la Ley de Tribunales Tutelares de Menores; aunque en forma dispersa aparecen algunas medidas de seguridad, en el Código Penal, en el Código de Justicia Militar, en la Ley de Navegación Aérea y en la Ley de Caza de 1.970.

El principal instrumento legal lo constituye la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, de reciente creación; sin embargo hay quienes se pronuncian por la necesidad de una Reforma sustancial.

La escasa efectividad en la aplicación de estas leyes, es atribuída principalmente a la carencia de suficientes Instituciones adecuadas para el cumplimiento de las medidas y al insuficiente personal especializado para el cumplimiento de tan delicadas funciones.

X

En el Derecho Positivo Venezolano las medidas de seguridad se fundamentan en La Constitución Nacional, y se recogen especialmente en la Ley sobre Vagos y Maleantes y en el Estatuto de Menores; encontrándose algunas medidas de seguridad dispersas y sin que guarden relación entre sí en el Código Penal, en el Código de Justicia Militar y en la Ley de Protección Familiar , así como en algunas otras.

El principal instrumento legal lo constituye la Ley sobre Vagos y Maleantes a la cual como causa principal de su ineficacia se le atribuye la falta de jurisdiccionalidad y la escases de suficientes medios materiales y humanos pa-

ra una eficiente aplicación de las medidas de seguridad.

## XI

Tanto en la Legislación Penal Española como en la Venezolana se encuentran medidas de seguridad que se consideran como penas; siendo en realidad verdaderas medidas de seguridad, pues atienden fundamentalmente a los presupuestos de peligrosidad y de estado peligroso . Tal es el caso de una serie de normas contenidas dentro del articulado de los Códigos Penales.

## XII

En ninguno de los instrumentos legales del Derecho Positivo Español ni del Venezolano definen en forma concreta el concepto de peligrosidad. Este es considerado a través de otros conceptos psicológicos, sociológicos o criminológicos, (actitud hacia el delito, capacidad criminal, inadaptación - social, predisposición delictiva, inclinación delictiva, habitualidad criminal, etc.) que aluden a la personalidad del delincuente; es decir a la peligrosidad y al estado peligroso, pero que no precisan su conceptualización, atendiendo a una realidad social determinada.

## XIII

Para prevenir y combatir la delincuencia es necesario contar con suficientes sistemas estadísticos que permitan, en primer lugar, conocer a cabalidad las verdaderas dimensiones del fenómeno delincuencial y sus principales causas y características.

Así mismo se requieren también Registros adecuados que permitan seguir de cerca la actuación del presunto-resocializado y observar a aquellos que por su conducta y comportamiento se muestren refractarios a los esfuerzos hechos para su reeducación y resocialización.

## XIV

Uno de los caracteres de las medidas de seguridad ha de ser la jurisdiccionalidad que permita la actuación imparcial de los Tribunales.

Es este uno de los mayores defectos de que adolece la Ley Venezolana sobre Vagos y Maleantes, pues su procedimiento deja en manos del Ejecutivo la instrucción y decisión del proceso, exigiendo solamente la intervención del Defensor Público de Presos, cuando el expediente por apelación o consulta, sube a consulta del Gobernador del Estado.

Se requiere pues, autonomía jurisdiccional para e vitar la arbitraria aplicación de las medidas de seguridad. Para lo cual es indispensable la creación de Tribunales de Vagos y Maleantes similares a los que existen en España y - en otros países.

## XV

El ordenamiento jurídico penal venezolano requiere de una Reforma de la Ley Penal Sustantiva y de la Ley - Procesal Penal, para adecuarlas a la realidad social del país, la cual para su conocimiento ha de estudiarse a través de dinámicos estudios científicos, donde además del Derecho, participen otras disciplinas relacionadas con la vida psico-socio-económica y cultural de Venezuela.

Muy especialmente se requiere con urgencia la sus titución de la actual Ley sobre Vagos y Maleantes por otra que le permita hacer frente a las nuevas modalidades de delinquir, propias de un país en plena etapa de desarrollo; o al menos ha de hacerse una reforma profunda a las Leyes vigentes.

BIBLIOGRAFIA

- ANCEL, Marc
- Penas y Medidas de Seguridad en el Derecho Penal Comparado. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid. Sept-Dic. 1.956.
  - La Nueva Defensa Social. Editorial La Ley. Buenos Aires. 1.961.
- ANTON ONECA, José
- Derecho Penal - Tomo I - Gráfica Administrativa - Madrid 1.949.
  - La Prevención General y la Prevención Especial en la Teoría de la Pena. Salamanca - 1.944.
  - El Nuevo Código Penal Español . Barcelona - 1.929.
  - La Teoría de la Pena en los Correccionalistas Españoles. Estudio en Homenaje a Legaz y Lacambra. Santiago de Compostela. 1.960.
  - Los Fines de la Pena según los Penalistas de la Ilustración. - 1.964.
  - La Utopía Penal de Dorado Montero. Salamanca - 1.951.
- ALBIAC GUIU, Rafael
- Medidas de Seguridad en los Códigos Penales Españoles. A.E.J. - 1.971.
- BECCARIA, Cesare
- De Los Delitos y De Las Penas. Aguilar S,A. de Ediciones. Madrid 1.969.

- BELTRAN BALLESTER, E. - Los Comportamientos Sexuales en La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social del 4 de agosto de 1970 Universidad de Valencia - 1.974 .-
- BERISTAIN, Antonio S.J. - Medidas Penales en Derecho Contemporáneo (Teoría, Legislación Positiva y Realización Práctica) Editorial Reus. Madrid - 1.974.
- Fines de la Pena. Importancia, Dificultad y Actualidad del Tema - Editorial Reus - Madrid - 1.961.
- Delincuencia de Tráfico y Delincuencia Juvenil. Editorial Reus . Madrid - 1.965.
- BOLIVAR LEON, Delia - Derecho de Menores. Procedimiento en Materia Correccional. Caracas. 1.972.
- BUENO ARUS, Francisco - La Peligrosidad Social y La Legislación Española. Revista "Razón y Fé", No. 880. Mayo - 1.971.
- CALVO, Alfonso - Bases para la ejecución de la mal llamada Ley de Vagos y Maleantes.
- CARRILLO BATALLA, Tomás - Población y Desarrollo Económico . Artegrafía C.A. Caracas, 1.967 .-
- COBO, Manuel - Atenuante de Minoría de Edad y sustitución de la Pena por Medida en el Artículo 65 del Código Penal Español.
- Prevención y Peligrosidad Social - en la Ley del 4-8-70.
- CUELLO CALON, Eugenio - Las Medidas de Seguridad. ADP 1956.
- La Moderna Penología (Represión del Delito y Tratamiento de los Delinquentes. Penas y Medidas. Su Ejecución). Tomo I.

- Derecho Penal. Tomo I. Barcelona , 1.940.
  - Criminalidad Infantil. Sus causas. Régimen Jurídico. Editorial Bosch. Barcelona - 1.934.
- CHIOSSONE, Tulio
- Anotaciones del Código Penal Venezolano - Parte General - Caracas. 1.938.
  - Temas Sociales Venezolanos. Tipo - grafía Americana. Caracas - 1.950.
- DEL ROSAL, Juan
- Política Criminal. Editorial Bosch Barcelona - 1.944.
  - La Personalidad del Delincuente en la Técnica Penal. Segunda Edición. Valladolid - 1.953.
  - Introducción Sociológica al Problema del Estado de Peligrosidad. ADP. Sept-Dic. 1.961.
  - Derecho Penal Español (Lecciones).
  - Tratamiento de la Delincuencia Adulta. ADP - Mayo-Agosto 1.965.
- DORADO MONTERO, Pedro
- El Derecho Protector de los Criminales. Madrid - 1.915.
  - Estudio de Derecho Penal Preventivo. Madrid - 1.901.
  - Bases para un Nuevo Derecho Penal. Barcelona 1.923.
- ECHEVERRIA, Juan M.
- La Aplicación de Medidas Diferenciadas en La Lucha Contra el Crimen. Empresa El Cojo. Caracas, 1974.
- ESCOVAR SALOM, Ramón
- La Justicia y La Acción. Editorial Arte. Caracas - 1.966.



- EXNER, Franz - Biología Criminal. Traducción de Juan Del Rosal. Editorial Bosch . Barcelona.
- FAIREN GUILLEN, Víctor - Problemas del Proceso por Peligrosidad sin Delito. Editorial Tec - nos. Madrid - 1.972.
- FERNANDEZ PUGA, N. - Estudio y Clasificación de los Estados de Peligrosidad Social. A. E.J. 1.971.
- FERRI, Enrico - Sociología Criminal. Tomo II. Editorial Góngora. Madrid.
- FRIAS PONCE, Emilio - Las Medidas de Seguridad en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social del 4 de agosto de 1.970. A.E.J. 1.971.
- GARCIA ITURBE, Arnoldo - La Delincuencia y El Delincuente. Editorial Monte Avila. Caracas . 1.973.
- Las Medidas de Seguridad. Ensayo de una Teoría General basada en el Derecho Comparado. Caracas 1967.
- GAROFALO, Rafael - La Criminología. Traducción de Pedro Dorado Montero. Madrid 1929 .
- GOMEZ GRILLO, Elio - La Delincuencia en Venezuela. Editorial Monte Avila. Caracas 1973.
- La Delincuencia en Caracas. Ediciones Amon C.A. Caracas, 1.973 .
- GRAMATICA, Filippo - Principios de Defensa Social. Editorial Monte Corvo. S.A.
- HERNANDEZ IBARRA, E. - Las Medidas de Seguridad en el Derecho Penal Venezolano. Revista de la Facultad de Derecho de L.U.Z Maracaibo, 1.963.

HERNANDEZ RON, J.M.

- Tratado Elemental de Derecho Administrativo. Editorial Las Novedades C.A. Caracas, 1.944.

JIMENEZ DE ASUA, Luis

- La Sentencia Indeterminada. Editorial Hijos de Reus, Madrid 1913 .
- El Estado Peligroso del Delincuente y sus consecuencias en el Derecho Penal Moderno. Editorial Reus Madrid - 1.920.
- El Estado Peligroso; Nueva Fórmula para el Tratamiento Penal y Preventivo. Madrid - 1.922.
- La Peligrosidad. Nuevo Criterio para el Tratamiento Represivo y Preventivo. 1.923.
- Tratado de Derecho Penal. Editorial Losada S.A. Buenos Aires. 1950
- El Criminalista - Segunda Serie . Tomo I - Editorial Victor P. De Zavalia. Buenos Aires - 1.955.
- El Criminalista. Segunda Serie. Tomo II. Buenos Aires - 1.958.
- El Nuevo Derecho Penal. Editorial Páez, 1.929.
- La Ley de Vagos y Maleantes. Un - Ensayo Legislativo sobre la Peligrosidad sin Delito. Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Noviembre 1.933.

LOMBROSIO, Cesare

- L' Uomo Delinquente - Torino.

LOPEZ, Miguel

- Aspectos Orgánicos y Funcionales de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y Medidas de Seguridad. Universidad de Valencia. 1.974.

- LOPEZ RIOCEREZO, José M. - Problemática Mundial del Gamberismo y sus posibles soluciones. Ediciones Studium. Madrid - 1.970.
- MENDOZA TROCONIS, J. R. - Estudio sobre el Estado Peligroso antes del Delito o ensayo de la interpretación de la Ley de Vagos y Maleantes del 14 de agosto de 1939 Caracas - 1.948.
- Curso de Derecho Penal Venezolano. Empresa El Cojo. S.A. Caracas 1958
- MONTES, Jerónimo - Derecho Penal Español. Parte General - Volumen II. Editorial Núñez Samper - Madrid - 1.917.
- OCAÑA RODRIGUEZ, A. - Las Medidas de Seguridad en la Doctrina. A.E.J. 1.971.
- OLESA MUÑIDO, Francisco - Las Medidas de Seguridad. Editorial Bosch. Barcelona. 1.951.
- PECES BARBA, Gregorio - Persona, Sociedad, Estado (Pensamiento Social y Político de Martain). Cuadernos para el Diálogo. Madrid - 1.972.
- Derechos Fundamentales. Teoría General. Biblioteca Universitaria - Guadiana. Madrid - 1.972.
- PECES MORATE, Jesús E. - Las Medidas de Seguridad en el Derecho Comparado. A.E.J. 1.971.
- PINATEL, Jean - La Criminologie - Editorial SPES. Paris - 1.960.
- PRINS, Adolfo - La Defensa Social y la Transformación del Derecho Penal. Traducción de Federico Castejón y Martínez De Anzola - Editorial Reus. Madrid - 1.972.

- QUINTANO RIPOLLES, A. - La Influencia del Derecho Penal Español en las Legislaciones Hispanoamericanas. Códigos de Visible Influencia Española sobre Estructuras Extrañas. Cuadernos de Monografías. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid - 1.953.
- QUINTERO MORENO, Rafael - Ciencia Penitenciaria - Apuntes - Dirección de Prisiones - Ministerio de Justicia - Caracas - 1972 .
- RODRIGUEZ DEVESA, J.M. - Derecho Penal Español - Parte General - Primera Edición - Ediciones Castilla - Madrid - 1.970.
- Derecho Penal Español - Parte General. Segunda Edición. Gráficas Carasa - Madrid - 1.971.
- Derecho Penal Español - Parte General - Cuarta Edición - Gráficas Carasa - Madrid 1.974.
- Algunas cuestiones jurídicas en relación con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Peligrosidad Social y Medidas de Seguridad. Universidad de Valencia - 1.974.
- RODRIGUEZ DRANGUET, A. - Defensa Social. Legislación sobre Vagos y Maleantes - Editorial Góngora - Madrid 1.935.
- RODRIGUEZ MOURULLO, G. - Cara y Cruz de las Sanciones Penales. Delito y Sociedad. Cuadernos para el Diálogo No. XXVIII. (Extraordinario). Diciembre 1.971.
- RUIZ FUNES, Mariano - La Personalidad del Delincuente en el Juicio Penal. Revista de Derecho Penal. Buenos Aires - 1.951.
- SABATER TOMAS, Antonio - Peligrosidad Social y Delincuencia. Ediciones Nauta S.A. Barcelona - 1.972.

- Gamberros, Homosexuales, Vagos y Maleantes. Editorial Hispano Europea. Barcelona, 1.962.
- SAINZ CANTERO, José A.

- La Ciencia del Derecho Penal y su Evolución. Editorial Bosch. Barcelona.
- SALDAÑA, Quintiliano

- Orígenes de la Criminología. Madrid - 1.914.
  - La Reforma del Código Penal. Editorial Reus. Madrid - 1.920.
- SANCHEZ PLAZA, Miguel A.

- La Personalidad Bio-Psico-Patológica del Peligroso. A.E.J. 1.971.
- SEELIG, Ernest

- Tratado de Criminología. Traducción de José María Rodríguez Devesa. Instituto de Estudios Políticos. Madrid - 1.958.
- SERRANO GOMEZ, Alfonso

- La Criminología en los Primeros Autores Clásicos - Separata - Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Madrid - 1.973.
  - Delincuencia Juvenil en España. Madrid - 1.972.
  - Criminalidad de la Juventud Española. R.E.P. Diciembre 1.969.
  - Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Madrid - 1.974.
- SILVELA, Luis

- El Derecho Penal Español estudiado en los principios y en La Legislación Vigente en España. Madrid - 1.903.
- SOLER, Sebastián

- Derecho Penal Argentino. Tipografía Editora Argentina. Buenos Aires - 1.956.

- TERUEL CARRALERO, D. - Comentarios a la Ley de Vagos y Ma  
leantes. Madrid - 1.948.
- TRUYOL Y SERRA, Antonio - Los Derechos Humanos. Editorial -  
Tecnos S.A. Madrid - 1.968.
- VIANNA, Edgar - Las Medidas de Seguranca en Mate -  
ria Criminal. Belém - Para - Bra -  
sil - 1.961.
- WOLF, Middendorff - Teoría y Práctica de La Prognosis  
Criminal - Traducción de José Ma -  
ría Rodríguez Devesa. Editorial Es -  
pasa Calpe, S.A. Madrid - 1.970 .
- XIOL RIOS, Juan A. - Elementos Personal y Social que in -  
tegran la Personalidad. A.E.J. -  
1.971.

- Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid.
- Anuario del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas. Facultad de Derecho. Universidad Central de Venezuela. Caracas.
- Circulares Relacionadas con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Fiscalía del Tribunal Supremo. Publicaciones Abella. Madrid 1.972.
- Código Penal - Ley de Reforma Parcial del Código Penal. Imprenta Nacional - Caracas - 1.962.
- El Consejo Venezolano del Niño. Caracas-Venezuela. 1.972.
- Instituto de Codificación y Jurisprudencia. Libro Primero del Proyecto de Código Penal Venezolano y Exposición de Motivos. San Juan de Los Morros. Venezuela. 1.955.
- La Aplicación de Medidas Diferenciadas en La Lucha Contra - el Crimen. Cuerpo Técnico de la Policía Judicial. Venezuela.
- Memoria Elevada al Gobierno Nacional en la Soberana Apertura de los Tribunales por el Fiscal del Tribunal Supremo . Madrid. Años: 1.969 a 1.974.

- Peligrosidad Social y Medidas de Seguridad (La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 4 de agosto de 1.970 ).  
Universidad de Valencia. 1.974.
- Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y Recomendaciones Relacionadas - Naciones Unidas - New York -1958.
- Relación Criminológica. Primeras Jornadas de Criminología - en Venezuela. Valencia. 1.974.
- Textos Básicos sobre Derechos Humanos. Sección de Publicaciones e Intercambios. Facultad de Derecho. Universidad de Madrid - 1.973.

### LEYES

- Código Penal Español, con jurisprudencia, concordancia y comentarios. Juan Del Rosal. M. Cobo. G.R. Mourullo y B. F .  
Castro. (Silverio Aguirre Torre). Madrid 1.964.
- Código Penal Venezolano - Editorial La Torre - Caracas 1964.
- Constitución de la República de Venezuela (con disposiciones transitorias y enmienda No. 1 de la Constitución). Distribuidora Paz - Pérez C.A. Caracas. 1.961.



- Estatuto de Menores - Segunda Edición - Ediciones del Consejo Venezolano del Niño. Caracas - 1.973.
- Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 4 de agosto de 1.970 y Reglamento para su Aplicación de 13 de mayo de 1.971. (Circulares relacionadas con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social). Fiscalía del Tribunal Supremo. Publicaciones Abella . Madrid 1.972.
- Ley de Tribunales Tutelares de Menores. Compendio de Legislación. Consejo Superior de Protección de Menores ( Texto Refundido de la Legislación sobre Protección de Menores. Texto Refundido de la Legislación sobre Tribunales Tutelares - de Menores. Ley de Entidades Estatales Autónomas). Madrid 1.969.
- Ley de Vagos y Maleantes. Aprobada por las Cortes Constituyentes y publicada en la "Gaceta" de 4 de agosto de 1.933, Segunda Edición. Madrid 1.933.
- Ley sobre Vagos y Maleantes. Editorial La Torre. Caracas . 1.956.
- Reglamento de la Ley de Vagos y Maleantes de 3 de mayo de 1.935. Defensa Social (Legislación de Vagos y Maleantes) A. R. Dranguet. Ediciones Góngora. 1.935.

A N E X O S

- No. 1.- Decreto 1.180/1971, de 14 de mayo, por el que se modifican los Artículos 264, 289, 290 y 291 del Código de la Circulación.
- No. 2.- Ley 43/1974 de 28 de noviembre, sobre modificación de determinados artículos de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

**ANEXO No. 1**

**DECRETO 1.180/1971, DE 14 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 264, 289, 290 Y 291 DEL CODIGO DE LA CIRCULACION**

La disposición final segunda de la Ley 16/1970 de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, ordenó que antes de la entrada en vigor de la misma y mediante Decreto se adaptaran a lo en ella establecido los preceptos del Código de la Circulación que resultaran afectados.

Se estima preciso, en consecuencia, dar cumplimiento al referido mandato legal y, respetando las facultades sancionadoras de la Administración, hacer compatible su ejercicio con la aplicación en la vía judicial, cuando proceda, de las oportunas medidas de seguridad.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y de la Gobernación, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de mayo de 1971, dispongo:

Artículo 1.º El apartado c) del artículo 264 del Código de la Circulación quedará redactado en la siguiente forma:

«c) No estar inhabilitado por resolución judicial para su obtención ni incurso en el artículo 290 de este Código.»

Art. 2.º Al artículo 289 del citado Código se le adicionará el apartado IV siguiente:

«IV. Cuando las infracciones a los preceptos citados en el apartado 1 de este artículo denoten un posible estado de peligrosidad del infractor, sin perjuicio de imponer las sanciones administrativas que puedan corresponder, se remitirá testimonio de particulares y antecedentes del infractor al Juzgado competente, conforme a lo dispuesto en la Ley 16/1970, de 4 de agosto, por si fuera de aplicación alguna de las medidas de seguridad previstas en la misma.»

Art. 3.º El capítulo XVIII del referido Código se denominará en lo sucesivo «Actuaciones complementarias» y sus artícu-

los 290 y 291 quedarán redactados en la forma siguiente:

«Art. 290. Si la documentación presentada con la solicitud del permiso para conducir permitiera suponer que la concesión de éste puede favorecer la peligrosidad social del aspirante a conductor, la Jefatura Provincial de Tráfico dejará en suspenso la tramitación del expediente y remitirá al Juez de peligrosidad y rehabilitación social competente los documentos a que se refieren los incisos b) y c) del apartado II del artículo 265 para que resuelva lo procedente.»

«Art. 291. I. Los Jefes provinciales de Tráfico, previos los informes y asesoramiento que estimen pertinentes, podrán ordenar la intervención inmediata de los permisos o licencias de conducción cuando haya indicios que racional y fundadamente induzcan a apreciar que su titular carece o ha perdido el conocimiento de las normas esenciales para la seguridad de la circulación o las aptitudes físicas, psíquicas o técnicas para conducir a que aluden los incisos d) y f) del artículo 264 de este Código, o concurren las circunstancias previstas en el artículo 290.

II. El expediente que a los indicados efectos se instruya, deberá iniciarse con una relación detallada de los hechos que induzcan a estimar existentes las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior. Si el Jefe provincial de Tráfico, en vista de esta relación y de los informes complementarios que estime pertinentes, apreciar racional y fundadamente la existencia de alguna o algunas de las citadas circunstancias, dictará resolución fundada acordando la intervención del permiso o licencia, la cual se notificará al interesado al mismo tiempo que se procede a la ocupación de aquéllos.

III. La Jefatura Provincial que acordase la intervención, hará saber al interesado que para que pueda dejarse ésta sin efecto será preciso que supere las pruebas o reconocimientos pertinentes en la Jefatura Provincial de Tráfico o en la Jefatura Provincial de Sanidad o Instituto de Psicología Aplicada y Psicotecnica, según los casos. Tales pruebas o reconocimientos, que serán siempre gratuitos, deberán ser practicados por los Organismos competentes en cada caso cuando los interesados los soliciten y hayan transcurrido, al menos, veinticuatro horas desde la fecha de la ocupación. Si el resultado fuese desfavorable podrán repetirse las pruebas o reconocimientos otras dos veces, en las fechas que el propio interesado crea conveniente, si bien, entre tanto, continuará intervenido el permiso o licencia.

Quando el resultado de alguna de estas pruebas o reconocimientos fuese favorable, el Jefe provincial de Tráfico dejará sin efecto la intervención y acordará la devolución inmediata del permiso o licencia.

Si el resultado del tercer reconocimiento o prueba fuese desfavorable, o en alguno

de los anteriores se comprobare efecto psíquico, anatómico o fisiológico irreversible, decretará la revocación del permiso o licencia, sin que en esta titular pueda obtener otro para exigir poseer las condiciones de que

IV. Si la causa de la intervención es la presunta peligrosidad social, la Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de la jornada y dos horas siguientes a la fecha de ocupación del permiso, remitirá el expediente al Jefe de peligrosidad y rehabilitación social competente, continuando el intervenido hasta que la Autoridad competente resuelva lo procedente.»

#### DISPOSICION FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día que la Ley 16/1970, de 1 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social.

Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid, a 14 de mayo de 1970.  
FRANCISCO FRANCO.—El Vicepresidente del Gobierno, *Luis Carrero Blanco*.

## ANEXO No. 2

4310

LEY 43/1974, de 28 de noviembre, sobre modificación de determinados artículos de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

La aplicación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, de cuatro de agosto de mil novecientos setenta, complementada por su Reglamento de trece de mayo de mil novecientos setenta y uno, en el que de manera sistemática se regulan los establecimientos e instituciones para la ejecución de las medidas de seguridad y que van a ser inmediata realidad, ha demostrado los aciertos de la sustancial reforma de la legislación anterior en esta materia; pero también la experiencia obtenida en el tiempo transcurrido ha evidenciado su insuficiencia en la descripción de ciertos supuestos de peligrosidad; en la falta de respuesta idónea a la exigencia de especialización de los Organos encargados de aplicarla; en la parquedad de la regulación del procedimiento, y en cuanto a la necesidad de nuevos establecimientos especializados donde se cumplan las medidas de seguridad con métodos de efectiva reeducación y personal idóneo que garanticen la reforma y rehabilitación social del peligroso, manteniéndose la intervención activa e indispensable de la autoridad judicial cualificada.

Esta realidad hace necesaria la revisión de la Ley de mil novecientos setenta, introduciendo modificaciones que afecten únicamente a los siguientes extremos:

Primero. La inclusión en su articulado de nuevas conductas reveladoras de peligrosidad social que se manifiestan en la realización de hechos que de modo alarmante proliferan en nuestros días, poniendo en peligro la convivencia social; hechos que por su repetición exigen se adopten medidas de seguridad con fines exclusivamente preventivos y rehabilitadores.

Segundo. La actualización del importe de las multas en consonancia con la elevación del nivel de vida y la ampliación del tiempo máximo de internamiento en establecimientos de trabajo fin de dar mayor margen a la indeterminación de las medidas de seguridad que se impongan; exigencia necesaria para lograr aspiración correctora de las mismas.

Tercero. La declaración del estado peligroso y la aplicación de las correspondientes medidas de seguridad se confía, dentro de la jurisdicción ordinaria, a los Jueces de Peligrosidad y Rehabilitación Social con este único cometido y con un ámbito territorial que puede abarcar a una o mas provincias, seleccionándose aquellos conforme a un criterio de especialización.

Cuarto. La acentuación dentro del procedimiento de su inculpativo, lo que conduce a una intervención más destacada del Ministerio Fiscal, al tiempo que se establece una calificación provisional y otra definitiva de la conducta peligrosa; determinándose asimismo las causas y efectos tanto del archivo de los expedientes como de la reclusión del presunto peligroso.

Finalmente, se modifican las normas que regulan el juicio de revisión ampliando su ámbito y determinando el contenido del auto resolutorio de dicho juicio, de acuerdo con la evolución de la peligrosidad declarada.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:

Artículo primero.—Se modifican los artículos segundo, cuarto, quinto y sexto de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que quedarán reestructurados en la forma siguiente:

•Artículo segundo.—Serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación, quienes:

A) Resulten probadamente incluidos en alguno de los supuestos de este artículo; y

B) Se aprecie en ellos una peligrosidad social.

Son supuestos de estado peligroso los siguientes:

Primero. Los vagos habituales.

Segundo. Los rufianes y proxenetas.

Tercero. Los que realicen actos de homosexualidad.

Cuarto. Los que habitualmente ejerzan, promuevan, favorezcan o faciliten la prostitución, así como los dueños, empresarios, gerentes, administradores o encargados de locales o establecimientos, abiertos o no al público, en los que, con su conocimiento, se realicen las indicadas actividades.

Quinto. Los que promuevan, favorezcan o faciliten la producción, tráfico, comercio o exhibición de cualquier material pornográfico o hagan su apología, así como los que realicen actos de exhibicionismo que atentan a la moral, y los dueños, empresarios, gerentes, administradores o encargados de locales o establecimientos, abiertos o no al público, en los que, con su conocimiento, tengan lugar las actividades expresadas.

Sexto. Los mendigos habituales y los que vivieron de la mendicidad ajena o explotaren con tal fin a menores, enfermos, lisiados o ancianos.

Séptimo. Los ebrios habituales y los toxicómanos.

Octavo. Los que promuevan o realicen el ilícito tráfico, fomenten el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o fármacos que produzcan análogos efectos, y los dueños, empresarios, gerentes, administradores o encargados de locales o establecimientos, abiertos o no al público, en los que, con su conocimiento, se permita o favorezca dicho tráfico o consumo, así como los que ilegalmente posean las sustancias indicadas.

Noveno. Los que, con menosprecio de las normas de convivencia social o del respeto debido a las personas, ejecuten actos caracterizados por su insolencia, brutalidad o cinismo, y los que con iguales características impidan o perturben el uso pacífico de lugares públicos o privados o la normal utilización de servicios de esa índole, maltraten a los animales o causen daño a las plantas o cosas.

Décimo. Los que, integrándose en bandas o pandillas, manifiesten por el objeto y actividades de aquéllas evidente predisposición delictiva.

Once. Los que, sin justificación, lleven consigo armas u objetos que por su naturaleza y características denoten su presumible utilización como instrumento de intimidación, coacción o agresión.

Doce. Los que de modo habitual o lucrativo faciliten la entrada en el país o la salida de él a quienes no se hallan autorizados para ello.

Trece. Los que habitualmente utilicen de modo ilegítimo vehículos ajenos y los que, por la repetida comisión de infracciones de tráfico, dado su número y grave entidad, denoten su peligrosidad para la circulación.

Catorce. Los menores de veintiún años abandonados por la familia o rebeldes a ella que se hallaren moralmente pervertidos.

Quince. Los que, por su trato asiduo con delinquentes o peligrosos sociales, por la frecuentación de los lugares donde se reúnan habitualmente o por la comisión de faltas penales, atendidos su número o su entidad, revelen inclinación delictiva.

•Artículo cuarto. También podrán ser sometidos a los preceptos de esta Ley los condenados por delitos en quienes, por las demás circunstancias que concurren en ellos, sea presumible la habitualidad criminal, previa expresa declaración de su peligrosidad social.

•Artículo quinto. Son medidas de seguridad y rehabilitación social:

Primera. Internamiento en un establecimiento de custodia o trabajo adecuado a la personalidad del sujeto peligroso dentro del cuadro de clasificación que reglamentariamente se estable-

por tiempo no inferior a seis meses ni superior a cinco años, cuando se trate de internamiento en establecimientos de custodia y por el tiempo mínimo que fije la sentencia o el auto de revisión, y máximo de cinco años cuando se imponga internamiento en establecimientos de trabajo.

Segunda. Internamiento en un establecimiento de reeducación por tiempo no inferior a seis meses ni superior a cinco años.

Tercera. Internamiento en un establecimiento de preservación hasta su curación o hasta que, en su defecto, cese el estado de peligrosidad social.

Cuarta. Arresto de cuatro a doce fines de semana.

Quinta. Aislamiento curativo en casas de templanza hasta su curación.

Sexta. Sumisión obligatoria a tratamiento ambulatorio en centros médicos adecuados hasta la curación.

Septima. Privación del permiso de conducción de vehículos o motor o prohibición de obtenerlo por tiempo no inferior a seis meses ni superior a cinco años.

Octava. Clausura del local o establecimiento de un mes a un año. Esta clausura no afectará a las obligaciones laborales y a la empresa con el personal que preste servicios en el establecimiento.

Novena. Obligación de declarar el domicilio o de residir en un lugar determinado por tiempo no superior a cinco años.

Decima. Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe. La duración de esta medida será fijada por el límite máximo de cinco años.

El sujeto prevenido quedará obligado a declarar el domicilio y los cambios que se produzcan.

Undécima. Prohibición de visitar establecimientos de bebidas alcohólicas y los lugares donde se hayan desarrollado las actividades peligrosas durante el tiempo que se fije, no superior a cinco años.

Duodécima. Expulsión del territorio nacional cuando se trate de extranjeros. El sujeto a esta medida de seguridad no podrá volver a entrar en España durante el plazo de tres años.

Decimotercera. Represión judicial.

Decimocuarta. Sumisión a la vigilancia de la autoridad.

Esta vigilancia será ejercida por delegados especiales y tendrá el carácter de tutelar y de protección.

Los delegados cuidarán de proporcionar trabajo, según su titutud y conducta, a los sujetos a su vigilancia.

La duración de esta medida será de uno a cinco años y podrá ser reemplazada por caución de conducta.

Decimoquinta. Multa de 5.000 a 100.000 pesetas.

Decimosexta. Incautación en favor del Estado del dinero, efectos e instrumentos que procedan.

•Artículo sexto. Las medidas de seguridad se aplicarán a los sujetos declarados en estado peligroso, atendidas las circunstancias que en cada uno de ellos concurran, de la forma siguiente:

Primero. A los vagos habituales se les impondrán, para que cumplan sucesivamente, las siguientes medidas:

a) Internamiento en un establecimiento de trabajo.  
b) Obligación de declarar su domicilio o de residir en un lugar determinado y sumisión a la vigilancia de los delegados.

Segundo. A los rufianes y proxenetas, a los mendigos habituales y a los que vivan de la mendicidad ajena o exploten enfermos, lisiados o ancianos se les aplicarán para que cumplan sucesivamente las siguientes medidas:

a) Internamiento en un establecimiento de custodia o de bajo adecuado a las condiciones personales del sujeto y, en su caso, incautación del dinero.  
b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados.

A los proxenetas se les clausurará además el establecimiento de haber tenido lugar sus actividades.

Tercero. A los comprendidos en el número tercero y a los que ejerzan la prostitución, incluidos en el número cuarto del artículo segundo, se les impondrán, para su cumplimiento sucesivo:

a) Internamiento en un establecimiento de reeducación.  
b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares o establecimientos públicos y sumisión a la vigilancia de los delegados.

los restantes peligrosos incluidos en el número cuarto del artículo segundo, se les impondrá, para su cumplimiento sucesivo:

a) Internamiento en establecimiento de trabajo y multa.  
b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados.

En todo caso se clausurará el establecimiento o local donde hayan tenido lugar las actividades que originen la aplicación de la Ley.

Cuarto. A los comprendidos en el número quinto del artículo segundo se les impondrán, para su cumplimiento sucesivo, las siguientes medidas:

a) Internamiento en un establecimiento de trabajo, multa e incautación del dinero y efectos procedentes.  
b) Sumisión a la vigilancia de los delegados.

Asimismo se procederá a la clausura del establecimiento o local donde se hayan producido las actividades.

Quinto. A los ebrios habituales y toxicómanos se les aplicarán, para su cumplimiento simultáneo o sucesivo, según proceda, alguna o algunas de las siguientes medidas:

a) Aislamiento curativo en casas de templanza.  
b) Tratamiento ambulatorio.  
c) Privación del permiso de conducción de vehículos de motor o prohibición de obtenerlo.  
d) Obligación de declarar el domicilio o de residir en un lugar determinado y sumisión a la vigilancia de los delegados.  
e) Además, a los toxicómanos, incautación de los efectos ocupados, y a los ebrios habituales, prohibición de visitar establecimientos de bebidas.

Sexto. A los relacionados en el número octavo del artículo segundo se les impondrán simultáneamente las tres medidas siguientes:

a) Internamiento en un establecimiento de reeducación o de trabajo.  
b) Incautación del dinero y efectos procedentes.  
c) Multa.

Sucesivamente se les aplicará la prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados.

Además, se decretará la clausura del establecimiento o local.

Septimo. A los comprendidos en los números noveno, décimo y undécimo del artículo segundo se les aplicarán, simultánea o sucesivamente, todas o algunas de las siguientes medidas:

a) Internamiento en un establecimiento de reeducación o de trabajo.  
b) Arresto de fines de semana.  
c) Multa.  
d) Represión judicial.  
e) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares públicos.  
f) Obligación de declarar el domicilio o de residir en un lugar determinado.  
g) Sumisión a la vigilancia de los delegados.  
h) Incautación de los efectos e instrumentos procedentes.

A los comprendidos en los números noveno y décimo se les podrá imponer, además, para su cumplimiento posterior al internamiento, la privación del permiso de conducción de vehículos de motor o la prohibición de obtenerlo.

Octavo. A los comprendidos en el número doce del artículo segundo se les impondrán, para su cumplimiento sucesivo, las siguientes medidas:

a) Internamiento en un establecimiento de trabajo, multa e incautación del dinero y efectos procedentes.  
b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados y, además, privación del permiso de conducción de vehículos de motor o prohibición de obtenerlo.

Noveno. A los que habitualmente utilicen de modo ilegítimo vehículos ajenos se les impondrá, para su cumplimiento sucesivo, las medidas siguientes:

a) Internamiento en un establecimiento de reeducación o de trabajo.  
b) Obligación de declarar el domicilio o de residir en un lugar determinado y sumisión a la vigilancia de los delegados. Además, la privación del permiso de conducción de vehículos de motor o prohibición de obtenerlo.

A los autores de repetidas infracciones de tráfico reveladoras de conducción peligrosa se les impondrá la privación del permiso

so de conducción de vehículos de motor o la prohibición de obtenerlo.

Diez. A los menores de veinticin años a que se refiere el número catorce del artículo segundo se les aplicarán, simultánea o sucesivamente, todas o algunas de las siguientes medidas:

- a) Internamiento en un establecimiento de reeducación.
- b) Arresto de fines de semana.
- c) Reprensión judicial.
- d) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares públicos.
- e) Sumisión a la vigilancia de los delegados.

Once. A los que observaren la conducta reveladora de inclinación al delito definida en el número dieciséis del artículo segundo se les impondrá, para su cumplimiento simultáneo o sucesivo, alguna o algunas de las siguientes medidas:

- a) Internamiento en un establecimiento de custodia o trabajo.
- b) Arresto de fines de semana.
- c) Privación del permiso de conducción de vehículos de motor o prohibición de obtenerlo.
- d) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados.

Doce. A los enfermos y deficientes mentales que se encuentren en la situación a que se refiere el artículo tercero se les aplicarán para su cumplimiento sucesivo las siguientes medidas:

- a) Internamiento en un establecimiento de preservación hasta que sea necesario.
- b) Sumisión a la vigilancia de los delegados.

Trece. A los declarados peligrosos conforme al artículo cuarto se les aplicará, para su cumplimiento simultáneo o sucesivo, alguna de las siguientes medidas:

- a) Internamiento en un establecimiento de custodia o de trabajo.
- b) Privación del permiso de conducción de vehículos de motor o prohibición de obtenerlo.
- c) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados.

Artículo segundo.—En el Capítulo primero del Título II de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, se modifican los artículos octavo y décimo, que quedarán redactados en la forma siguiente.

•Artículo octavo.—La facultad de declarar el estado peligroso imponer las respectivas medidas de seguridad corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria a través de los Juzgados de Peligrosidad y Rehabilitación Social, de cometido único, con sede y el ámbito territorial que se establezcan.

En todo caso, los Juzgados de Instrucción realizarán las actuaciones precisas en orden a esta Ley, por delegación o en uniones de prevención, y remitirán las diligencias que ante ellos se inicien al Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social que corresponda.

La competencia territorial se determinará por el lugar en que de modo principal se haya manifestado la presunta peligrosidad.

El nombramiento de los Jueces de Peligrosidad y Rehabilitación Social se realizará entre funcionarios de la Carrera Judicial con cinco años al menos de ejercicio profesional y será todo preferente para su designación la especialización que se acredite en la forma que reglamentariamente se determine.

•Artículo décimo.—Los Juzgados de Peligrosidad y Rehabilitación Social y Salas de apelación tendrán adscritos permanentemente los funcionarios del Ministerio Fiscal que precisen.

Artículo tercero.—Los artículos trece, dieciséis, diecisiete, diecho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintitres, veintisiete, treinta y treinta y uno de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social quedarán modificados con la redacción siguiente:

•Artículo trece.—Cuando un Tribunal o Juzgado que entienda un proceso penal conozca, por razón del mismo, de alguna conducta que pueda estar incurso en alguno de los estados de peligrosidad que definen los artículos segundo, tercero y cuarto de la presente Ley, deberá remitir testimonio de los antecedentes necesarios al Juzgado a quien compete la tramitación del expediente de peligrosidad, poniendo en todo caso a su disposición el presunto peligroso.

Los Juzgados encargados de la aplicación de esta Ley y las Salas especiales que establece el artículo noveno remitirán, asimismo, a los Juzgados competentes testimonio de actuaciones de las que puedan resultar la comisión de hechos delictivos o la participación de los encausados en ellos.

Artículo dieciséis.—En dicha fase, el Juez oirá a la persona afectada sobre los extremos que motiven el expediente, su identidad personal, estado, personas sobre los que ejerza la patria potestad o tutela y sus edades, profesión u oficio, domicilio o residencia y manera de vivir durante los cinco años anteriores, consignándose circunstanciadamente las respuestas que diere. También reclamará informes de conducta y antecedentes penales, de peligrosidad social y policiales de la misma, así como cuanto sea preciso para corroborar su edad o identidad personal, reseñando o uniéndolo los documentos que aquella pueda presentar al propio fin.

Acordará asimismo el Juez la investigación antropológica, psíquica y patológica del sujeto a expediente mediante dictamen pericial médico; y cuando estuviese especialmente indicado, recabará información sobre sus factores familiares y sociales a técnicos o instituciones idóneas y llevará a cabo las restantes diligencias de comprobación que estime necesarias.

Igualmente se unirá el expediente archivado que se hubiera seguido a la misma persona, reclamándolo, en su caso, del Juzgado correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo octavo en cuanto a la competencia territorial.

Artículo diecisiete.—Practicadas las diligencias a que se refiere el artículo anterior, se pasará el expediente al Ministerio Fiscal, quien podrá solicitar que se practiquen nuevas diligencias de averiguación, comprobación o información o estimar que aquél está completo, interesando, en este segundo caso, bien la continuación del trámite o su archivo provisional.

Procederá el archivo provisional del expediente de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal:

Primero. Cuando no resulte acreditada una conducta peligrosa o no este incluida la enjuiciada en alguno de los supuestos de peligrosidad previstos en esta Ley.

Segundo. Cuando no se aprecie en el expedientado una peligrosidad social.

La petición de archivo formulada por el Ministerio Fiscal impedirá la continuación del expediente.

Cuando el Juez acordare el archivo del expediente o su solicite por el Ministerio Fiscal, aquél dictará auto acordándolo con suspensión del procedimiento, dejará sin efecto las medidas cautelares adoptadas y, si estimare que la denuncia era infundada, podrá ordenar que se proceda contra el particular que la hubiese presentado o autorizar a la persona afectada para que ejercite las acciones que procedan contra el denunciante.

Contra el auto que acuerde de oficio el archivo de las actuaciones podrá recurrir en apelación el Fiscal, siendo observable en la interposición y sustanciación del recurso, en cuanto sean aplicables, las disposiciones de los artículos veintidos y veintitres de la presente Ley.

Si el Ministerio Fiscal estima que debe continuar el trámite, al devolver el expediente formulará escrito de calificación provisional, que comprenderá:

Primero. Una exposición circunstanciada de los hechos integrantes de la conducta enjuiciada.

Segundo. La determinación precisa del supuesto de peligrosidad en que debe ser incluido el presunto peligroso.

Tercero. Las medidas de seguridad que le sean aplicables.

Devuelto el expediente por el Ministerio Fiscal, dictará auto el Juez ordenando que se dé vista de lo actuado al presunto peligroso, instruyéndole de sus derechos, requiriéndole para que designe Procurador que lo represente y Abogado que lo defienda, los que, en otro caso, los serán nombrados en la forma prevenida en el artículo setecientos ochenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el mismo auto, el Juez adoptará las providencias cautelares necesarias tanto para la efectividad de las medidas de seguridad que pudieran aplicarse como para el pago de las costas.

Personado en forma el presunto peligroso, se hará entrega de las actuaciones a su Procurador para que en el plazo de cinco días proponga las pruebas que estima conducentes al esclarecimiento de los hechos o de la personalidad del expedientado y las que, admisibles en derecho, convengan en descargo de éste.

Artículo dieciocho.—Si el presunto peligroso dejare de comparecer sin justa causa al llamamiento judicial, se acordará su internamiento preventivo y se le declarará rebelde, suscitándose el curso del procedimiento.

•Artículo diecinueve.—El Juez podrá adoptar las siguientes medidas cautelares en relación al presunto peligroso:

Primera. La detención, si no pudiera ser citado o capturado en su domicilio conocido.

Segunda. El internamiento preventivo cuando existiesen indicios de peligrosidad o las circunstancias lo hicieren necesario.

También podrán adoptarse las providencias cautelares encaminadas a la efectividad de las medidas de seguridad que puedan imponerse, que se regirán por las normas de la Ley de Internamiento Criminal.

Desde el momento en que se adopte alguna de estas medidas, el presunto peligroso será instruido de sus derechos y podrá formular pretensiones, personándose en forma en el expediente.

El auto por el que se adopten medidas cautelares no necesita ser ratificado, y contra él procederá el recurso de reforma.

El internamiento se realizará, en cuanto sea posible, en los establecimientos que correspondan al supuesto de peligrosidad por el que se siga el expediente.

•Artículo veinte.—El Juez resolverá sobre la admisión de las pruebas con arreglo a derecho.

Las pruebas admitidas se practicarán contradictoriamente en el plazo de doce días si han de tener lugar en la sede del Juzgado o veinte si hubieran de practicarse fuera de la misma.

A la vista de las pruebas practicadas, podrá el Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal o de oficio, acordar la práctica de pruebas complementarias, si lo estima necesario, para el esclarecimiento de los hechos integradores de la conducta o para el conocimiento de la personalidad del presunto peligroso o que descargo del mismo convengan.

•Artículo veintiuno.—El Juez, practicadas las pruebas, oírán previamente por plazo de cinco días al Ministerio Fiscal, quien podrá modificar su calificación provisional o elevarla a definitiva, y al Abogado del presunto peligroso, quien producirá por escrito las alegaciones que considere procedentes.

Si el Ministerio Fiscal estimase que no se han probado hechos graves de la conducta peligrosa o no apreciase peligrosidad social en el expedientado, se archivará el expediente.

Si la parte dejara de utilizar este trámite, se la tendrá por alido en su derecho y el expediente seguirá el curso debido. Transcurrido dicho plazo, el Juez, dentro de los tres días siguientes, dictará resolución en forma de sentencia, que habrá de contener uno de los pronunciamientos siguientes:

a) Declarar probada la peligrosidad social del sujeto a expediente y su inclusión en alguno de los supuestos de los artículos segundo, tercero y cuarto, consignando los hechos que acrediten y señalando las medidas de seguridad aplicables, imponiéndole las costas del procedimiento.

b) Declarar que no ha lugar a la adopción de medidas de seguridad por no darse las condiciones del estado de peligrosidad o por ser infundada la denuncia, declarándose de oficio las costas.

La sentencia se notificará al Fiscal y al sujeto a expediente el siguiente día.

Cuando se rechace la denuncia por infundada, podrá el demandado, previa autorización del Juez, ejercitar las acciones legales que procedan contra el denunciante.

Artículo veintidós.—La Sala designará, cuando sea preciso, Jefe y Procurador al presunto peligroso en la forma prevenida en esta Ley.

El Fiscal y el sujeto a expediente podrán proponer a la Sala personeros, y ésta acordará si lo estima conveniente, que se compare ante la misma el examen de los testigos y la ampliación de diligencias practicadas por el Juez, así como la práctica de pruebas que, propuestas ante el Juzgado, fueron indebidamente denegadas y de las que, admitidas, no se llevaron a cabo causas no imputables a las partes.

Tribunal, además, podrá acordar de oficio las diligencias que estime oportunas y nueva audiencia del interesado.

Las diligencias de prueba acordadas se practicarán con intervención del Fiscal y de la parte.

Las pruebas se practicarán en el plazo de doce días y previa audiencia sucesiva de las partes, con entrega del expediente por días a cada una, se celebrará la vista oral dentro de los tres días siguientes, sin la presencia del sujeto a expediente, pero que éste lo solicite y la Sala lo estimara conveniente. La sentencia se dictará dentro del tercer día y contra ella

no procederá recurso alguno, salvo el juicio de revisión, a tenor de lo establecido en el Capítulo IV de este Título y lo dispuesto sobre ejecución de medidas de seguridad en el artículo veintidós.

•Artículo veintisiete.—Mediante el juicio de revisión puede el Juzgado examinar la evolución de la peligrosidad declarada y, con sujeción a lo dispuesto en este capítulo, resolver sobre las medidas de seguridad que se hubieren acordado.

•Artículo treinta.—Procederá el juicio de revisión:

Primero. Por evolución favorable de la peligrosidad social declarada o por la terminación de este estado.

En el primer supuesto, el declarado peligroso no podrá promover el juicio de revisión hasta que haya transcurrido el mínimo señalado en la Ley, en la sentencia o en el auto de revisión para la medida que se pretenda revisar; en las que no tengan mínimo, hasta que transcurra la tercera parte de su duración a partir de la iniciación de su cumplimiento, salvo si fuere la de obligación o prohibición de residir en un lugar o territorio determinado, que podrá promoverse en cualquier momento posterior al comienzo de su ejecución, y en las de internamiento por tiempo indeterminado, hasta que transcurran cuatro meses desde el principio del mismo.

Segundo. Por haber quebrantado el peligroso cualesquiera de las medidas a que hubiere sido sometido.

Tercero. Cuando durante el cumplimiento de las medidas de seguridad adoptadas en la sentencia o auto de revisión, el prevenido realizase actos que revelen una evolución desfavorable de la peligrosidad declarada o incurriera nuevamente en cualquiera de los estados de peligrosidad previstos en esta Ley.

•Artículo treinta y uno.—Iniciado el juicio de revisión, el Juez oírán al declarado peligroso social sobre el hecho que lo motive, así como su ocupación o manera de vivir si hubiere permanecido en libertad, y ordenará que dentro del plazo de doce días se practiquen las investigaciones, informaciones y comprobaciones que estime necesarias o útiles de las previstas en el artículo dieciséis que tuvieren por objeto el esclarecimiento de los hechos que motiven el juicio de revisión, incluso a instancia del Fiscal o del peligroso, siendo éste asistido por el Abogado y el Procurador que hubieran asumido su defensa y representación en el expediente, o por los que designe o previamente se le nombre de acuerdo con lo dispuesto en el artículo dieciséis. También podrá el Juez adoptar, si procediere, las medidas del artículo diecinueve.

Practicadas las pruebas, se dará vista de lo actuado al Fiscal, quien en el plazo de tres días formulará escrito de conclusiones exponiendo los hechos determinantes de la revisión, el supuesto legal de la misma y las consecuencias jurídicas que deban declararse en el auto. Seguidamente se oírán al Abogado del declarado peligroso para que, por escrito, haga las alegaciones que estime pertinentes, con la prevención de que si no las hiciera en el plazo de tres días se lo tendrá por decaído de su derecho.

Evacuados tales trámites, el Juez dictará auto dentro del tercer día, que contendrá alguno de los pronunciamientos siguientes:

Primero. Confirmar las medidas de seguridad adoptadas en la anterior sentencia o auto de revisión por no haberse probado el supuesto de la misma.

Segundo. Acordar la cancelación de las medidas de seguridad adoptadas por terminación del estado de peligrosidad.

Tercero. Reducir la duración de la medida de seguridad que se estuviera cumpliendo o sustituirla, si procediera, por la sucesiva en el caso de evolución favorable de la peligrosidad declarada.

Cuarto. Acordar de nuevo el internamiento o las demás medidas correspondientes al estado de peligrosidad declarado o prolongar la duración de esas medidas hasta el máximo fijado en la Ley en los casos de quebrantamiento de las medidas impuestas o de evolución desfavorable de la peligrosidad del prevenido.

Quinto. Imponer las medidas de seguridad correspondientes al nuevo estado de peligrosidad en que hubiere incidido el peligroso o prolongar las anteriormente impuestas hasta el máximo fijado en esta Ley.

En los tres primeros pronunciamientos se declararán de oficio las costas causadas y en los dos últimos se impondrán al declarado peligroso, si su insolvencia no estuviere acreditada.

Este auto se notificará al Fiscal y a la parte.